



NACIONES UNIDAS  
*Oficina contra la Droga y el Delito*

# CRIMEN Y DESARROLLO EN CENTROAMÉRICA



**Atrapados en una Encrucijada**

Para efectos de este Reporte, Centroamérica comprende las siete naciones de Centroamérica (Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá - excluyendo México).

Este estudio fue llevado a cabo por la Sección de Investigación y Análisis de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen en el marco del proyecto "Estudio de Mercado Ilícitos" (GLO/H93). El investigador principal y autor es Theodore Leggett. El financiamiento de este estudio fue proporcionado por el gobierno de Francia.

La traducción de este documento fue asistida por la oficina regional de ONUDD para México y América Central. La descripción y clasificación de países y territorios en esta publicación y la disposición del material no implican que se exprese opinión alguna por parte del Secretariado de las Naciones Unidas concerniente al estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o de sus autoridades, o que concierne la delimitación de sus fronteras o límites territoriales. Este documento ha sido reproducido sin tener una edición o traducción formal.

كيفية الحصول على منشورات الأمم المتحدة  
يمكن الحصول على منشورات الأمم المتحدة من المكتبات ودور التوزيع في جميع أنحاء العالم. استعلم  
عنها من المكتبة التي تتعامل معها أو اكتب إلى: الأمم المتحدة، قسم البيع في نيويورك أو في جنيف.

如何取得联合国出版物

联合国出版物在全世界各地的书店和经售处均有发售。 请向书店询问或写信到纽约或日内瓦的联合国销售处。

#### HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.

#### COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à: Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.

#### КАК ПОЛУЧИТЬ ИЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Издания Организации Объединенных Наций можно купить в книжных магазинах и агентствах во всех районах мира. Найдите справки об изданиях в вашем книжном магазине или пишите по адресу: Организация Объединенных Наций, Секция по продаже изданий, Нью-Йорк или Женева.

#### CÓMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o dirijase a: Naciones Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.

# Mapa







# Indice

Gráficas y tablas .....	5
Prefacio .....	9
Resumen ejecutivo .....	11

---

## **CAPÍTULO 1: EL PORQUÉ CENTRO AMÉRICA ES VULNERABLE AL CRIMEN ... 27**

1.1 Vulnerabilidad geográfica .....	27
1.2 Vulnerabilidades demográficas, sociales y económicas .....	28
1.3 Capacidad limitada de justicia penal .....	32
1.4 Una historia de conflicto y autoritarismo .....	37
1.5 Desplazamiento y deportación .....	42

## **CAPÍTULO 2: UN DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DEL CRIMEN EN LA REGIÓN ... 49**

2.1 Tráfico de drogas .....	49
2.2 Homicidio .....	56
2.3 Pandillas juveniles .....	62
2.4 Violencia en contra de mujeres y niños .....	71
2.5 Tráfico de armas de fuego .....	73
2.6 Secuestro .....	75
2.7 Lavada de dinero .....	75
2.8 Corrupción .....	76

## **CAPÍTULO 3: CÓMO EL CRIMEN ESTA IMPIDIENDO EL DESARROLLO ..... 81**

3.1 El impacto del crimen en la sociedad .....	81
3.2 El impacto del crimen en la economía .....	83
3.3 El impacto del crimen en la gobernabilidad .....	87

## **CAPÍTULO 4: CONCLUSIÓN ..... 95**

## **REFERENCIAS ..... 99**

---



# Lista de abreviaciones

<b>ARQ</b>	Cuestionario de los Reportes Anuales de la Organización de las Naciones Unidas ( <i>"United Nations Annual Reports Questionnaire"</i> )
<b>CARICOM</b>	Comunidad del Caribe y Mercado Común ( <i>"Caribbean Community and Common Market"</i> )
<b>CEJA</b>	Centro de Estudios de Justicia de las Americas
<b>CPI</b>	Índice Internacional de las Opiniones de la Corrupción de la Transparencia ( <i>"Transparency International Corruption Perceptions Index"</i> )
<b>ETC</b>	Encuestas de las Naciones Unidas sobre tendencias del crimen y operaciones de los sistemas criminales de la justicia ( <i>"United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems"</i> )
<b>ECLAC</b>	Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe ( <i>"Economic Commission for Latin America and Caribbean"</i> )
<b>PIB</b>	Producto Interno Bruto
<b>HDR</b>	PNUD Informe sobre Desarrollo Humano
<b>ICVS</b>	Encuesta Internacional sobre las Víctimas del Crimen ( <i>"International Crime Victims Survey"</i> )
<b>ILO</b>	Organización Internacional del Trabajo ( <i>"International Labour Organisation"</i> )
<b>LAPOP</b>	Proyecto Latinoamericano de Opinión Pública
<b>PPP</b>	Paridad del Poder Adquisitivo
<b>TI</b>	Transparencia Internacional ( <i>"Transparency International"</i> )
<b>UNODC</b>	Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen ( <i>"United Nations Office on Drugs and Crime"</i> )
<b>UNDP</b>	Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas ( <i>"United Nations Development Programme"</i> )
<b>WDR</b>	Informe Mundial de Desarrollo del Banco Mundial ( <i>"World Bank World Development Report"</i> )
<b>WHO</b>	Organización Mundial de la Salud ( <i>"World Health Organization"</i> )



# Gráficas y tablas

<b>Gráfica 1:</b> Población en millones, 2005 .....	27
<b>Gráfica 2:</b> PIB de Centroamérica (en billones de dólares) en contra del valor de reventa del flujo de cocaína a los Estados Unidos en el 2004 .....	28
<b>Gráfica 3:</b> Porcentaje de hombres jóvenes (15-24) en la población, en el 2007 (proyección) .....	28
<b>Gráfica 4:</b> Ubicación en el Índice de Rangos del UNDP Desarrollo Humano (en orden del más al menos desarrollado) .....	29
<b>Gráfica 5:</b> Índice de Gini .....	29
<b>Gráfica 6:</b> Porcentaje de descendientes africanos e indígenas en Centroamérica .....	30
<b>Gráfica 7:</b> Porcentaje de población que vive con menos de EUA\$2 al día per capita en ingreso de un hogar .....	30
<b>Gráfica 8:</b> Cuál es el problema más importante que enfrenta tu país? .....	30
<b>Gráfica 9:</b> Tasa de desempleo de hombres jóvenes (entre 15-24 años) en el 2000 ó 2002 ..	31
<b>Gráfica 10:</b> En los últimos 12 meses, ha habido algún adulto en tu hogar que haya estado desempleado? .....	31
<b>Gráfica 11:</b> Porcentaje de estudiantes de edad secundaria inscritos en el colegio .....	31
<b>Gráfica 12:</b> Porcentaje de personas que responden que su gobierno está ganando la guerra contra el crimen .....	32
<b>Gráfica 13:</b> Porcentaje de personas que afirman que es posible sobornar a un agente del policía en su país .....	33
<b>Gráfica 14:</b> Policía por cada 100,000 ciudadanos (varios años) .....	34
<b>Gráfica 15:</b> Numero de homicidios resueltos (varios años) .....	34
<b>Gráfica 16:</b> Personas que consideran posible sobornar a un juez para obtener una sentencia reducida en su país .....	35
<b>Gráfica 17:</b> Jueces por cada 100,000 ciudadanos .....	35
<b>Gráfica 18:</b> Población en prisiones .....	35
<b>Gráfica 19:</b> Prisioneros por cada 100,000 en Centroamérica .....	35
<b>Gráfica 20:</b> Porcentaje de prisioneros esperando juicio .....	36
<b>Gráfica 21:</b> Porcentaje de literas ocupados en prisiones .....	36
<b>Gráfica 22:</b> Número de prisioneros por funcionarios de prisiones .....	36

<b>Tabla 1:</b> Guerras en Centroamérica	38
<b>Gráfica 23:</b> Personas nacidas en El Salvador y residentes en los Estados Unidos (miles)	43
<b>Gráfica 24:</b> Estimaciones oficiales de los cuatro mayores contribuyentes de Centroamérica en la población de Estados Unidos (miles)	43
<b>Gráfica 25:</b> Número total de criminales deportados a Centroamérica y el Caribe	44
<b>Gráfica 26:</b> Los tres destinos principales en Centroamérica para deportación de criminales en los Estados Unidos	45
<b>Gráfica 27:</b> Deportaciones por cada 100,000 de población expatriados de los Estados Unidos en el 2005 (basados en los datos de Censo de población del 2000)	45
<b>Gráfica 28:</b> Deportados recibidos por cada 100,000 ciudadanos en el 2005	46
<b>Gráfica 29:</b> Porcentaje de cocaína que fluye a los Estados Unidos a través de corredores de transporte	50
<b>Gráfica 30:</b> Número de toneladas de cocaína embargados en los países de Centroamérica (redondeado)	52
<b>Gráfica 31:</b> Kilogramos de cocaína embargados por cada 100,000 ciudadanos	52
<b>Tabla 2:</b> Algunos decomisos transnacionales recientes que involucran a centroamericanos	53
<b>Tabla 3:</b> Remanente estimado de cocaína en algunos países de tránsito	53
<b>Gráfica 32:</b> Porcentaje de adultos que utilizaron cocaína en el último año	54
<b>Gráfica 33:</b> Origen de heroína decomisada en los Estados Unidos	54
<b>Gráfica 34:</b> Kilos de heroína decomisada en cuatro países centroamericanos, 1998-2003	54
<b>Gráfica 35:</b> Porcentaje de centroamericanos (15-64) que utilizaron cannabis en el último año	55
<b>Gráfica 36:</b> Ultimos tasas de homicidio CTS en la región	55
<b>Gráfica 37:</b> Tasa recientes de CTS comparados	57
<b>Gráfica 38:</b> Los principales 10 tasas de homicidio basados en datos de salud pública en el 2002	57
<b>Gráfica 39:</b> Muertes de guerra y homicidio en El Salvador comparados	58
<b>Gráfica 40:</b> Tasas de homicidio en El Salvador - datos de salud pública	58
<b>Gráfica 41:</b> Tasa de homicidio provinciales en El Salvador en 2003 y 2005	59
<b>Gráfica 42:</b> Tasa de homicidio en Guatemala - datos de policía	59
<b>Gráfica 43:</b> Tasa de homicidio en Guatemala por provincia en el 2004	60
<b>Gráfica 44:</b> Instrumentos de homicidio en Guatemala	60
<b>Gráfica 45:</b> Violencia con armas de fuego registrado por la Policía en Guatemala	61
<b>Gráfica 46:</b> Tasa de homicidio en Belice - datos de salud pública	61
<b>Gráfica 47:</b> Tasa de homicidio en Panamá - datos de policía	61
<b>Gráfica 48:</b> Tasa de homicidio en Nicaragua - datos de policía	62
<b>Gráfica 49:</b> Ubicación de homicidios en Nicaragua en 2005	62

<b>Tabla 4:</b> Estimados de membresía en pandillas centroamericanas .....	65
<b>Gráfica 50:</b> Miembros de pandilla por cada 100,000 de población .....	66
<b>Gráfica 51:</b> Porcentaje estimado de población que utiliza cocaína anualmente .....	68
<b>Gráfica 52:</b> Porcentaje de miembros de pandillas a usuarios crónicos de cocaína .....	68
<b>Gráfica 53:</b> Número de centroamericanos arrestados por tráfico de drogas en los Estados Unidos en 2004 .....	69
<b>Gráfica 54:</b> Porcentaje de mujeres que reportan experiencias de violencia doméstica .....	71
<b>Gráfica 55:</b> Estrangulaciones en Guatemala .....	72
<b>Gráfica 56:</b> Armas de fuego legalmente registradas en Centroamérica en 2000 .....	74
<b>Gráfica 57:</b> Armas de fuego legalmente registradas en Centroamérica por cada 100,000 de población en 2000 .....	74
<b>Gráfica 58:</b> Remesas como porcentaje de PIB en 2004 .....	75
<b>Tabla 5:</b> Cambios en lavado de dinero, clasificación del Departamento de Estado de EUA .....	76
<b>Gráfica 59:</b> Porcentaje de personas que experimentaron corrupción en los últimos 12 meses .....	77
<b>Gráfica 60:</b> Porcentaje de personas que experimentaron corrupción los últimos 12 meses .....	77
<b>Gráfica 61:</b> Porcentaje de encuestados que pagaron un soborno en los últimos 12 meses ..	77
<b>Gráfica 62:</b> Proporción de servidores civiles que se perciben como corruptos .....	77
<b>Gráfica 63:</b> Proporción de servidores públicos que se perciben como corruptos .....	78
<b>Gráfica 64:</b> Porcentaje de personas que declaran que la corrupción nunca va a ser resuelta ..	78
<b>Gráfica 65:</b> Personas que consideran que no ha habido mucho progreso con respecto a la lucha contra la corrupción 2004-2005 .....	78
<b>Gráfica 66:</b> Porcentaje total de población total preparada que emigra .....	83
<b>Gráfica 67:</b> Promedio de tasas de crecimiento del PIB en 1996-2005 .....	84
<b>Gráfica 68:</b> Porcentaje de firmas que reportan que los factores son 'limitaciones importantes' en los negocios .....	85
<b>Gráfica 69:</b> IED neto en países de Centroamérica 1990-2004 .....	86
<b>Gráfica 70:</b> Bajo ninguna circunstancia apoyaría un gobierno militar .....	88
<b>Gráfica 71:</b> Linchamientos en Guatemala .....	90
<b>Gráfica 72:</b> Tamaños relativos de policía y seguridad privada en Centroamérica en 2002 ..	90
<b>Gráfica 73:</b> Guardias de seguridad por cada 100,000 de población .....	91
<b>Gráfica 74:</b> Porcentaje de buscadores de servicios que se enfrentaron con la corrupción en 2004 .....	91
<b>Gráfica 75:</b> Porcentaje de economía sumergida (informal) sobre el GDP total 2002/2003 .....	92
<b>Gráfica 76:</b> Porcentaje de empleo total que es informal .....	93



# Prefacio

Los países de Centroamérica son diferentes. Pero tienen una cosa en común. Todos están afectados - en distintos grados- por las drogas, el crimen y el subdesarrollo.

Varios países de la región son vulnerables debido a factores socio-económicos resultado de ingresos inequitativos, urbanización caótica, pobreza masiva, una proporción muy alta de juventud, fácil acceso a una gran cantidad de armas, y un ambiente inestable post-conflicto.

Estos factores sociales agravan, asustan a los inversionistas y promueven la fuga de capital doméstico y de grandes cerebros. Mientras muchos turistas sueñan con visitar Centroamérica, el sueño de muchas personas en esta región es de abandonar este lugar.

Mientras que el crimen y la corrupción reinan y el dinero de drogas pervierte la economía, el Estado ha perdido el monopolio sobre el uso de la fuerza y los ciudadanos no confían mas en sus líderes y en las instituciones públicas. Como resultado, el contrato social se desmorona y la gente toma la ley por sus propias manos, tanto para protegerse como para cometer delitos.

Los signos de advertencia son muy evidentes en este reporte - crímenes con arma de fuego, violencia de pandillas, secuestros, la proliferación de compañías de seguridad privada. Pero estos problemas no son inherentes a la región. Estos se pueden vencer.

Para romper el círculo vicioso, los países necesitan desarrollo, justicia, buen gobierno y seguridad. Como prioridad, los Estados deben fortalecer su sistema judicial para desterrar la corrupción y restaurar la confianza pública en un estado de derecho. Esto crearía un ambiente fértil para el crecimiento económico y atraería inversión extranjera, y se promovería el desarrollo.

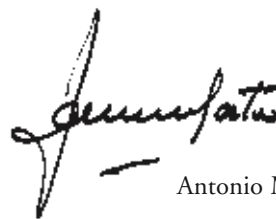
El desmantelamiento de las pandillas por sí mismo no va a resolver el problema subyacente. De hecho, puede exacerbarlos. La cultura de pandillas es un síntoma de un malestar social más profundo que no puede ser resuelto poniendo a los niños de la calle tras las rejas. El futuro de Centroamérica depende en considerar a la juventud como un activo y no como una responsabilidad pasiva.

Varios de los problemas de la región pueden ser resueltos únicamente desde afuera, particularmente mediante la reducción de la oferta y la demanda de drogas. Otros requieren de liderazgos políticos locales más fuertes. La cooperación y el apoyo financiero son vitales. Los problemas son demasiado grandes, demasiado vinculados, demasiado costosos y demasiado peligrosos para que se deje a los estados actuar individualmente.

Con el objetivo de revertir las tendencias señaladas en este reporte, es tiempo ahora de llevar a cabo un programa de acción concreto, realista y manejable para reducir el impacto de drogas y crimen en el desarrollo de Centroamérica. Propongo a todos los estados de la región, así como aquéllos que tienen un interés en su estabilidad y prosperidad, para que acordemos un marco estratégico y operacional, así como en su subyacente integración de recursos.

Por ejemplo, los gobiernos nacionales deben implementar estrategias holísticas de prevención de crimen. Agencias de desarrollo, socios de financiamiento y donantes multilaterales deben incorporar la justicia emergente y aspectos de seguridad en sus plataforma operacionales de asistencia. La reforma a la justicia penal, prevención de crimen y políticas comunitarias democráticas son esenciales y requieren de apoyo técnico internacional. Es esencial referirnos a las raíces del problema, mediante el desarrollo socio-económico a largo plazo y al estado de derecho en lugar de que únicamente se confronten los síntomas mediante una exigibilidad de la ley a corto plazo.

Tenemos una responsabilidad compartida y un interés común en ayudar a los países de Centroamérica a sobrellevar las presiones externas y fortalecer su resistencia interna de los efectos dañinos que producen las drogas y el crimen. Vamos a trabajar juntos para liberar la potencialidad de esta región.



Antonio Maria Costa

Director Ejecutivo

Oficina de las Naciones Unidas contra Drogas y Crimen





# Resumen ejecutivo

*.. no tendremos desarrollo sin seguridad, no tendremos seguridad sin desarrollo y no tendremos ni seguridad ni desarrollo si no se respetan los derechos humanos. Si no se promueven todas esas causas, ninguna de ellas podrá triunfar.*

- Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas (2005) - *Un concepto más amplio de la libertad*

El mundo está llegando a reconocer la interdependencia de los aspectos de seguridad y desarrollo. Al margen de imperativos morales, la pobreza ya no resulta aceptable simplemente por razones de seguridad común. La tecnología y la globalización han hecho posible que hasta los grupos más marginados constituyan una amenaza para los más poderosos. Las zonas cuya situación se deteriora hasta llegar al desorden social sirven de refugio a la delincuencia organizada y la militancia política. La seguridad global requiere de desarrollo global.

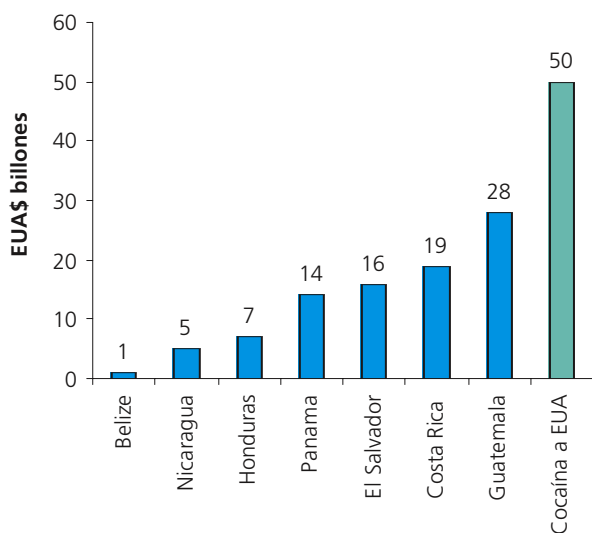
El problema es que lo contrario también es cierto: el desarrollo requiere seguridad. Los inversionistas no colocan su dinero en países en donde el estado de derecho no es lo que prevalece. Los trabajadores preparados no residen en países en donde la seguridad personal se encuentra en riesgo. La delincuencia y la corrupción están frustrando los intentos por eliminar la polarización global de la riqueza, ya que la gente decide invertir su vida o su capital en donde se siente segura. Para los que siguen siendo pobres, la amenaza que plantea la delincuencia obstaculiza sus esfuerzos por prosperar, ya que sus actividades se estructuran en torno a sus esfuerzos por evitar ser objeto de actos de victimización. La confianza entre los ciudadanos de los países se ha perdido, y con ello va la cohesión social. El cinismo sobre la habilidad para tener éxito legalmente aumenta la inseguridad, y todas las regiones se pueden encontrar a sí mismas envueltas en una espiral decreciente de victimización y disminución en la inversión social.

Además, la delincuencia y la corrupción socavan la democracia. El Estado tiene la responsabilidad primordial de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y cuando no logra establecer un orden interno básico, la gente deja de confiar en él. Cuando servidores públicos y los representantes elegidos popularmente comienzan a ser vistos como parte del problema de la delincuencia, los ciudadanos repudian a sus gobiernos. Ellos se convierten en sujetos, en lugar de ciudadanos. Sea cual sea la función que el Estado pudiera desempeñar en el desarrollo, ésta se ve gravemente amenazada por la pérdida de apoyo popular.

Por consiguiente, es imperativo tratar la cuestión de la delincuencia como un factor fundamental que frena el desarrollo. Mientras las amenazas a la vida y los bienes no se reduzcan a niveles aceptables, los países en desarrollo con serios problemas de delincuencia tendrán que afanarse por conseguir la confianza pública necesaria para fomentar el progreso. Es preciso establecer un nivel de orden básico para poder alcanzar objetivos de desarrollo.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha examinado estas cuestiones en una publicación anterior, titulada *El crimen y el desarrollo en África* (2005). En esta ocasión, la Oficina centra su atención en otra región, misma que no se ha desarrollado con la rapidez que muchos habrían esperado: Centroamérica. Aunque por diversas razones esa región tiene mejor situación respecto de África, también acusa altos niveles de delincuencia y violencia. Además, como indicó el Banco Mundial en 1997, la delincuencia y la violencia se han convertido en los últimos años en importantes obstáculos para el logro de los objetivos de desarrollo en América Latina y el Caribe. Desde entonces, la situación relativa a la delincuencia parece haber empeorado en muchos sentidos.

**El PIB en países de Centroamérica y del valor de mercado del flujo de cocaína a Estados Unidos (en billones de dólares de los Estados Unidos) en 2004**



Fuente: UNDP HDR 2006, UNODC WDR 2006

Debido a su ubicación geográfica entre el proveedor mundial de cocaína y sus principales consumidores, Centroamérica se ha visto expuesta a presiones exógenas de la delincuencia organizada que habrían sido muy difíciles de soportar para países mucho más grandes. Lamentablemente, la región es muy vulnerable a las incursiones de la delincuencia organizada, debido a una serie de factores internos, algunos de los cuales son analizados al inicio del presente informe, en particular las presiones sociales y económicas, la falta de capacidad para hacer cumplir la ley y los antecedentes en materia de conflictos y gobiernos autoritarios. A continuación se analiza más detalladamente la naturaleza de la delincuencia organizada y la violencia en la región. Por último, se examina la manera en que el problema de la delincuencia está socavando las iniciativas de desarrollo.

### Punto de vulnerabilidad: La geografía

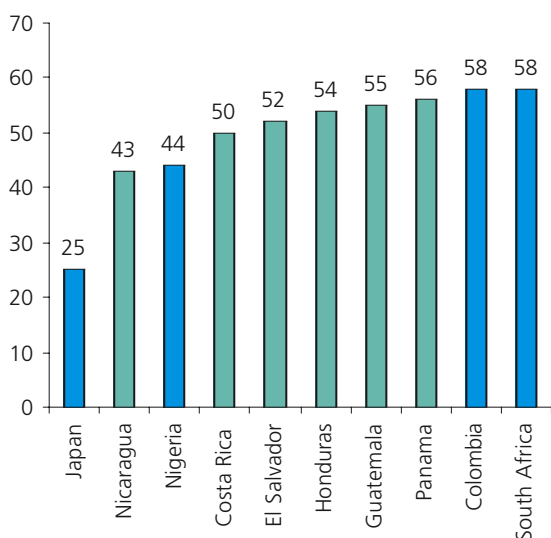
La posición geográfica en la que se encuentra Centroamérica, la ha dejado literalmente "acorralada en el cruce de fuego" o en el tráfico de drogas. Las guerras civiles expusieron a la región a la penetración profunda de las organizaciones de narcotráfico,

debido a que las drogas eran una fuente de ingresos para el conflicto. Actualmente se considera que Centroamérica es la zona de tránsito mediante la cual pasa el 88% de la cocaína que se destina a los Estados Unidos. Mientras más investigación se requiere para entender la manera en la que este flujo afecta a las sociedades locales, su valor excede por mucho los recursos de los estados a través de los cuales transita.

### Punto de vulnerabilidad: Subdesarrollo

El subdesarrollo no provoca delincuencia ni las naciones más pobres ni los individuos, mas pobres son siempre los más propensos a ella. En Centroamérica, los países más seguros son discutiblemente los más ricos (Costa Rica) y los más pobres (Nicaragua). Sin embargo existen diversos aspectos sobre el subdesarrollo, mismos que en la ausencia de medidas de resistencia hacen que un país tenga más posibilidades de enfrentar altos índices de delincuencia. Sin embargo, muchas de estas vulnerabilidades existen en Centroamérica.

**Índice Gini sobre la desigualdad del ingreso (0 significa igualdad, 100 significa desigualdad perfecta)**

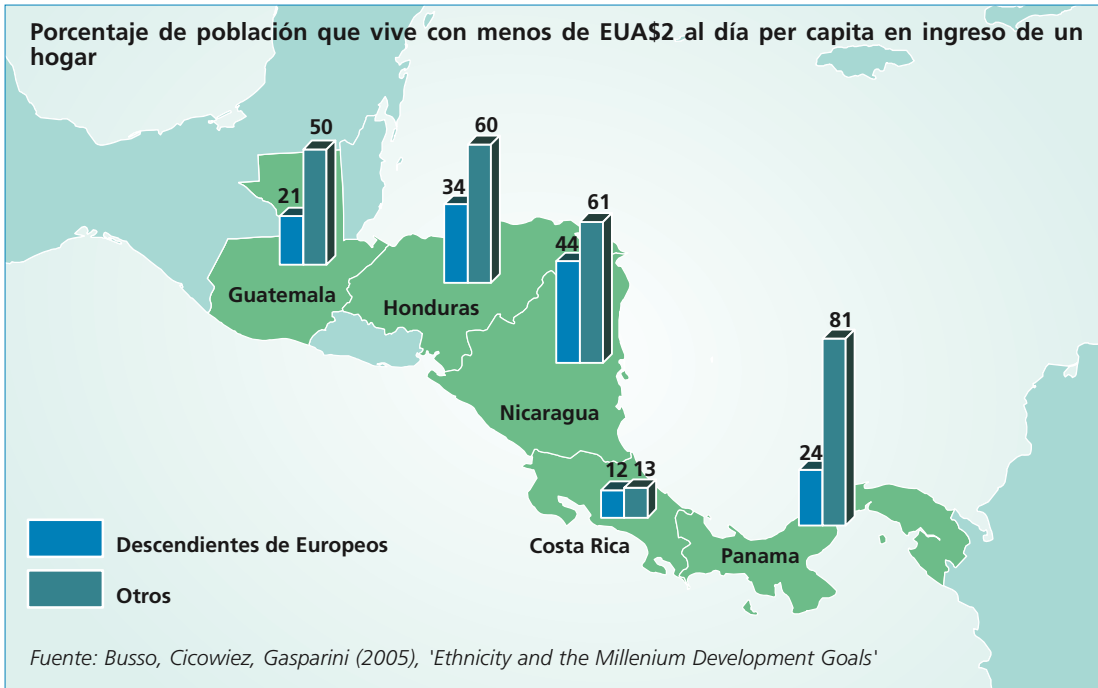


Fuente: Reporte sobre Desarrollo Humano 2006

Mientras que los países de esta región no son ricos, los estudios sobre la correlatividad en la delincuencia, han encontrado que la distribución de la riqueza en una sociedad, es de hecho mucho más significativa que la pobreza extrema, para predecir los niveles de violencia. Se ha dicho que las grandes disparidades en la distribución de la riqueza brinda a los delincuentes una justificación (poner fin a la injusticia social) y una oportunidad (riquezas que robar) para sus actividades y genera "violencia expresiva". Centroamérica es una de las regiones con los niveles más altos de desigualdad en el mundo, junto con América del Sur y África Subsahariana. Cuatro de los siete países de Centroamérica figuran entre los de más alto nivel de desigualdad, en términos de distribución de ingresos.

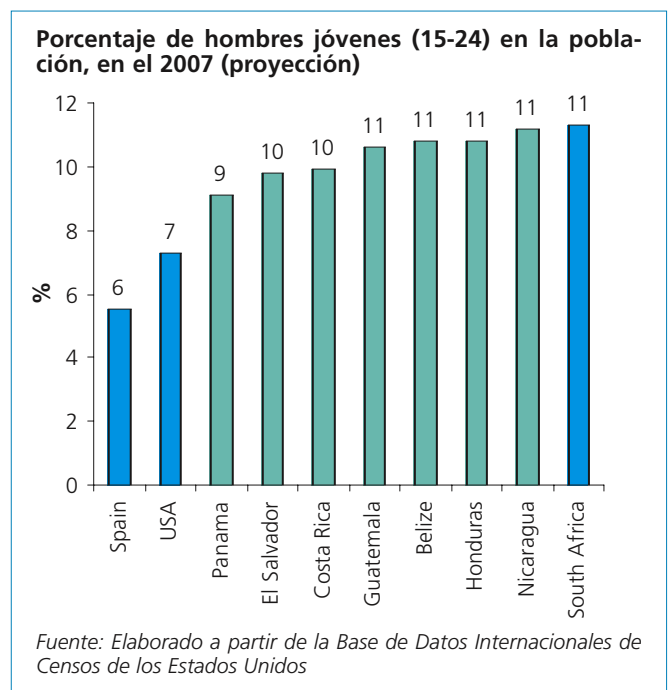
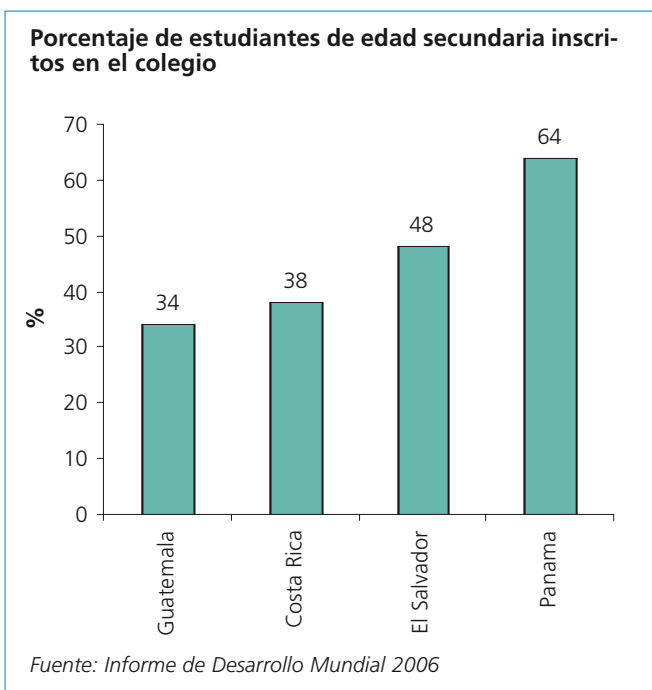
Con frecuencia el resentimiento ante la desigualdad se exagera cuando las divisiones de clase coinciden con líneas étnicas, como suele suceder. En muchos países de esta región los descendientes de europeos tienen muchas menos probabilidades de padecer pobreza que las poblaciones autóctonas o los descendientes de africanos.

El desempleo, especialmente en los jóvenes de las zonas urba-



nas que han abandonado la escuela, se ha asociado también con los niveles de delincuencia. Varias naciones de la región tienen altos niveles de juventud ociosa, mientras que el porcentaje de inscripciones en las secundarias es menor al 50%, y las economías urbanas no están creciendo lo suficientemente rápido como para soportar el crecimiento de la población.

De hecho, el porcentaje de hombres jóvenes en la población general puede por sí mismo ser visto como una fuente posible de vulnerabilidad al crine. Universalmente, la mayoría de los delitos callejeros se llevan a cabo por hombres jóvenes entre las edades de 15 y 24 años, y generalmente en contra de sus propios compañeros. Mientras más alto sea el porcentaje de este grupo demográfico en la población, mayor es la posibilidad de posibles perpetradores y víctimas en la sociedad, mientras que todo lo demás permanece igual. Como muchas regiones en desarrollo, la población de Centroamérica es muy joven, similarmente como algunos países en África Subsahariana.



### **Punto de vulnerabilidad: Poca capacidad de justicia penal**

Las pequeñas economías de Centroamérica se enfrentan también a graves problemas en lo que respecta a su capacidad para velar por el cumplimiento de la ley, particularmente si se comparan los recursos a disposición de los organismos estatales con las abundantes utilidades generadas por el comercio de la droga. Los países en desarrollo no pueden darse el lujo de destinar tanto dinero per cápita como los países ricos en sus sistemas policiales, judiciales y correccionales. En la medida en que el sistema de justicia penal cumpla sus funciones primordiales de disuadir, incapacitar y rehabilitar a los delincuentes, los países en desarrollo podrían encontrarse relativamente desprotegidos.

En cuanto a los niveles de vigilancia policial, varios países de Centroamérica tienen bajos índices de personal de policía por habitantes, en particular Honduras, Guatemala y Nicaragua.

Otros sectores del sistema judicial atraviesan por problemas administrativos y de recursos. En muchos países de la región existe la creencia popular de que los jueces están sujetos a influencias financieras o políticas. La falta de capacidad de la policía y de la capacidad de persecución tiene como resultado una tasa muy baja de convictos en algunas instancias. Por ejemplo, las gráficas del 2005 sugieren que los asesinos en Guatemala tenían alrededor del 2% de posibilidad de ser condenados. En tal clima de impunidad, el efecto disuasivo de las leyes es mínimo. En cuanto al sistema penitenciario, los países de la región tienen algunos de los índices más altos a nivel mundial de población penal por habitantes. Una gran cantidad de la población en estas prisiones, no ha sido, y no será condenada por nada - se encuentran encarcelados, esperando ser juzgados. Además de los enormes gastos que suponen las grandes poblaciones penales, éstas resultan difíciles de administrar si no se dispone de amplios recursos y hacen peligrar las perspectivas de una verdadera labor de rehabilitación.

### **Punto de vulnerabilidad: Un historial de conflictos**

Todos los países de la región han sido afectados por los conflictos de guerras civiles en gran escala: en Guatemala (1960 a 1996), El Salvador (1980 a 1992) y Nicaragua (1972 a 1991), y por la respuesta autoritaria a los levantamientos insurgentes.

Los efectos de esa violencia han sido profundos y sus repercusiones son patentes en la actualidad. En varios conflictos de la región se utilizaron tácticas terroristas, incluida la matanza pública de civiles, el recurso a la "desaparición" y los escuadrones de la muerte, la tortura y las violaciones colectivas. El hecho de que una buena parte de la población presenció, experimentó o participó en esas atrocidades ha generado un trauma psicosocial generalizado. La violencia puede convertirse en "algo normal" en comunidades en las cuales mucha gente se vio expuesta a actos de crueldad, y puede aceptarse tácitamente como medio legítimo de solución de controversias, en particular cuando se considera que la incompetencia, la corrupción o la parcialización imperan en los mecanismos estatales de solución de conflictos. Las comunidades pueden infectarse con "ciclos de violencia" a medida que las víctimas comienzan a desahogar su ira y actuar por sí mismas convirtiéndose en autores de actos de violencia, y puede producirse una sucesión de ataques de represalia durante años después de la cesación oficial de las hostilidades.

Los conflictos también facilitan la presencia de armas pequeñas en la zona y aportan los conocimientos prácticos y psicológicos necesarios para su utilización. También aportan las técnicas de contrabando y de organización encubierta, tanto a los insurgentes como a los agentes gubernamentales, incluidas las milicias patrocinadas por el Estado. Durante los períodos de conflicto puede quedar suspendida la actividad escolar. Por consiguiente, las técnicas de combate pueden convertirse en los únicos conocimientos adquiridos por una generación de jóvenes sin alternativas de identidad u oportunidades de empleo. Esas técnicas se aplican fácilmente en el gangsterismo, los delitos adquisitivos y el tráfico transfronterizo.

El historial de conflictos y la respuesta autoritaria del gobierno ante éstos pueden socavar gravemente a cualquier Estado democrático. Los recursos humanos y de infraestructura indispensables pueden verse afectados y muchos Estados autoritarios ignoran la corrupción en la administración pública siempre que no interfiera con la contrainsurgencia. Esos funcionarios públicos pueden continuar sus actividades incluso después de establecida la democracia y transmitir su cultura de la corrupción a sus sucesores.

Los métodos policiales autoritarios inculcan malos hábitos en los servicios de seguridad y obstaculizan la incorporación de las aptitudes necesarias en un servicio policial democrático. La integración del personal

militar anterior en las estructuras de seguridad posteriores a los conflictos exacerba aún más la militarización. Al tener la impresión de que la delincuencia está en aumento, la población puede sentirse alentada a exigir la presencia del cuerpo militar en los servicios de policía y la introducción de legislación contra la delincuencia sin tomar en cuenta el "debido procedimiento", lo cual menoscaba los logros alcanzados en materia de derechos humanos. En algunos países de Centroamérica se siguen utilizando los cuerpos militares para mantener el orden interno. A pesar de las similitudes superficiales, las habilidades involucradas en el servicio policial y el servicio militar son muy distintas.

Los conflictos destruyen las comunidades y, con ellas, los mecanismos informales de prevención del delito que constituyen el medio más eficaz de vigilancia del comportamiento antisocial. Los desplazados por los conflictos pueden verse obligados a luchar durante generaciones enteras para poder llegar a ser aceptados en sus nuevas zonas de residencia, quedando relegados durante ese período intermedio a medios alternativos de generación de ingresos. Los que llegan de otras partes pueden verse obligados a organizar grupos de defensa propia para hacer valer sus derechos en el vecindario, estos grupos corren el riesgo de degenerarse y convertirse en grupos de protección e incluso pandillas predatorias. Un ejemplo excelente de este proceso es el de los refugiados de Centroamérica radicados en los barrios marginales hispanos del sur de California durante el decenio de 1980. Los jóvenes salvadoreños, convertidos en blanco de las pandillas locales, formaron la pandilla "Mara Salvatrucha", una de las pandillas callejeras más extensas y notorias que funcionan actualmente en el hemisferio occidental. El campo de acción de Mara Salvatrucha se extendió a El Salvador y a toda la Centroamérica cuando algunos de sus miembros fueron condenados a prisión y luego repatriados una vez que cumplieron sus penas.

La deportación es una cuestión fundamental que suscita preocupación en muchas naciones de Centroamérica, así como de su vecino, el Caribe. Muchas autoridades afirman que la delincuencia en sus respectivos países se está incrementando con la llegada de delincuentes deportados que aprendieron su oficio en los Estados Unidos y otros países. Es innegable el efecto que ha tenido la cultura del pandillaje de los Estados Unidos en las maras (pandillas juveniles) de Centroamérica, pero se requiere más investigación para determinar el alcance que los deportados han tenido en el crimen a su regreso.

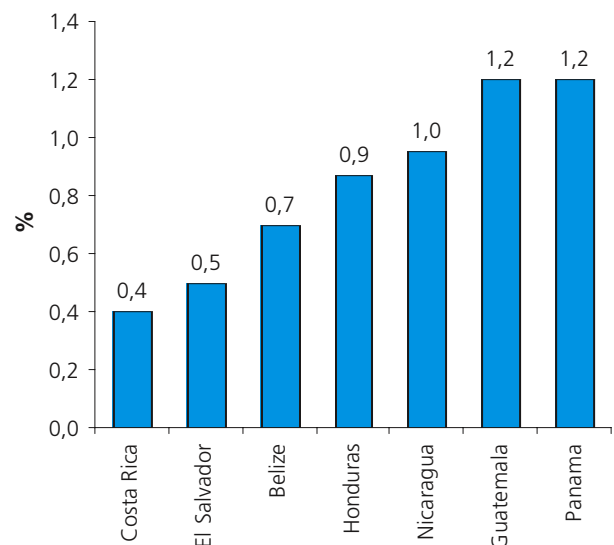
La situación delictiva en Centroamérica es un resultado de todos estos puntos de vulnerabilidad, junto con un hecho geográfico desafortunado: Centroamérica se ubica entre los productores mundiales de cocaína (Colombia, Perú, y Bolivia) y sus consumidores primarios (los Estados Unidos y Europa). Como resultado, la delincuencia en Centroamérica se distingue de la delincuencia en otras regiones del mundo, en al menos dos aspectos: su exposición a los flujos de drogas y al nivel de violencia en sus sociedades.

## Diagnóstico del crimen: Tráfico de drogas

El tráfico de drogas América del Sur produce anualmente un estimado de 900 toneladas de cocaína, la mayoría de las cuales se remesan a 10 millones de usuarios en los Estados Unidos y Europa, un mercado que en 2003 representó alrededor de 60.000 millones de dólares en los Estados Unidos. El valor que alcanza a flujo de drogas compite con el de las economías legítimas de las naciones que atraviesa. Asimismo, todos los países de Centroamérica incautaron al menos una tonelada de cocaína en 2004. Sin embargo, muy poca de esta cocaína, estaba destinada al consumo local; los órganos de represión de los países de Centroamérica y el Caribe invierten muchos recursos en la interceptación de drogas producidas en otros países y destinadas a otras partes del mundo. De hecho, Centroamérica tiene que sufrir por los problemas de sus vecinos del norte y sur.

Las rutas precisas que se utilizan para llevar la droga hasta sus destinatarios han variado con el paso del tiempo, al igual que sus destinatarios. Durante el período en que los cárteles colombianos controlaban el mercado, la mayor parte de la cocaína que se introduce en los Estados Unidos se llevaba en aeronaves priva-

**Proporción de adultos (de 15 a 64 años de edad) que consumieron cocaína el año pasado**



Fuente: Base de datos Delta de la ONUDD

das, mismas que paraban sobre en el Caribe. Actualmente, la mayoría del tráfico es marítimo, llega a las costas de Centroamérica, ya que los principales distribuidores actuales son carteles mexicanos.

Dado los grandes flujos de cocaína a través de América Central, los datos de las últimas encuestas muestran remarcables bajos niveles de abuso de cocaína a nivel local.

Por ejemplo, una investigación nacional llevada a cabo por la OEA y el Observatorio Nacional de Drogas en El Salvador descubrió que el uso anual de cocaína entre adultos (15-64), fue únicamente del 0.24% por cocaína y 0.17% por crack. Si comparamos esto con las tasas de uso en los Estados Unidos (2.8% en el 2004) o en España (2.7% en 2003), vemos que el consumo en estos países es mucho más alto.

Aunque la heroína no es tan importante como la cocaína, desde el punto de vista de los volúmenes transportados y el dinero involucrado, es una droga cuyos canales regionales han adquirido mayor importancia desde mediados del decenio de 1990. En la actualidad, la mayor parte de la heroína consumida en los Estados Unidos se produce en Colombia y, por consiguiente, es posible que se transborde por la región. Además, se ha calculado que en 2004 Guatemala tenía un potencial de producción de 1,4 toneladas métricas de heroína comparadas con 3,8 toneladas en el caso de Colombia. En 2006 las autoridades comunicaron haber eliminado 27 millones de plantas a principios de septiembre, lo que indica que ese cultivo ha recuperado los niveles registrados en el punto máximo alcanzado en 1990, momento en que hubo quizá 2.000 hectáreas dedicadas a ese cultivo. Esta es una pequeña cantidad para los estándares globales, pero podría constituir un problema local significativo. En caso de que esta situación persista, Guatemala pronto podría competir con Colombia como fuente de heroína para el mercado de los Estados Unidos.

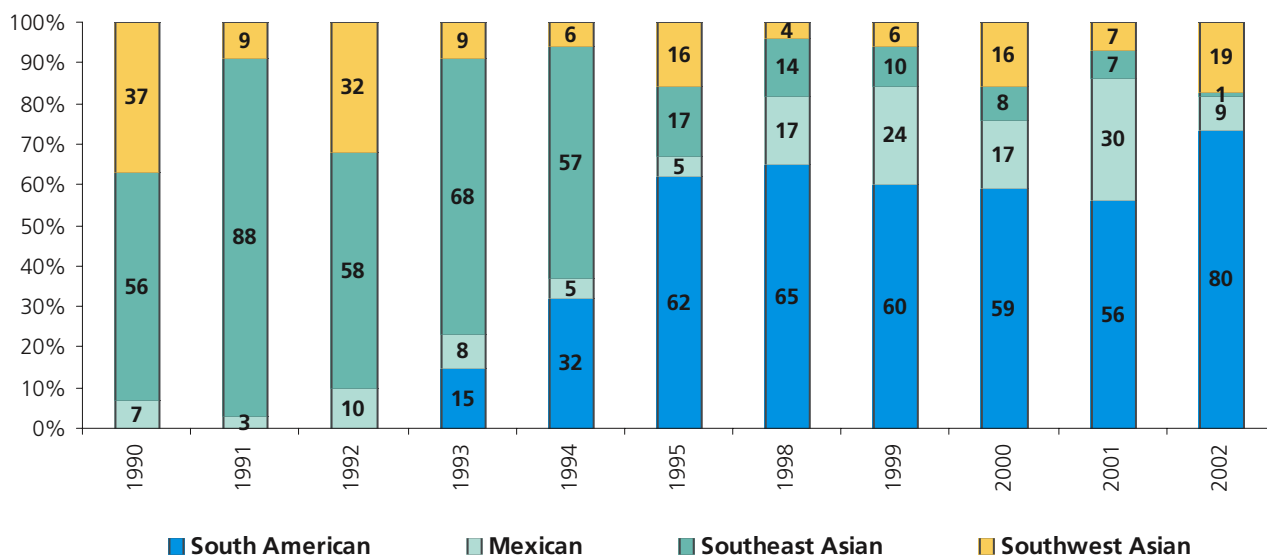
La llave para las operaciones de tráfico de drogas, es la habilidad para lavar el dinero. Centroamérica recibe remitentes masivos, y la moneda de los Estados Unidos, generalmente ingresa por contrabando, a través de México. Tanto Panamá como el Salvador han dolarizado sus economías, precisamente el uso del dólar en Panamá es una de las razones principales por las que el país es tan atractivo al lavado de dinero.

### Diagnóstico del crimen: Violencia

Los casos de homicidio intencional, generalmente son consideradas como el indicador más confiable de una situación criminal violenta en un país, debido a que, a diferencia de ciertos crímenes, tales como el robo y los asaltos, la mayoría de los homicidios intencionales, atraen la atención de la policía. Por esta razón, en este reporte únicamente discutiremos a detalle las estadísticas de homicidios internacionales.

Tradicionalmente, en las estadísticas de la INTERPOL y de la ONUDD, Colombia y Sudáfrica han reportado los índices más altos de homicidio intencional en el mundo, y varios de los países de la región ocupan

Origen de la heroína incautada en los Estados Unidos (1990-2002)



Fuente: Heroin Signature Program de la Dirección de Lucha Contra la Droga de los Estados Unidos

los 10 primeros lugares, incluyendo El Salvador, Guatemala, y posiblemente Honduras. Sin embargo, recientemente, las estadísticas de la policía de Colombia y Sudáfrica, han demostrado disminuciones dramáticas en el número de homicidios intencionales registrados en sus países, mientras que los países de Centroamérica han reportado incrementos. Entre todos los países en los que existen registros confiables, los países de Centroamérica ocupan un lugar importante en porcentajes de homicidios internacionales.

La llave para este problema es la disponibilidad de armas de fuego. Las estimaciones sobre el número exacto de armas de fuego que circulan en la región varían demasiado, sin embargo fuentes de confianza sugieren que existen alrededor de medio millón de armas de fuego registradas legalmente en Centroamérica, y un estimado de 800,000 armas de fuego sin registrarse en manos de civiles. En caso de que las estimaciones actuales sean correctas, alrededor de la mitad, o dos terceras partes de las armas de fuego presentes en Centroamérica son armas ilegales. Aunque que no todas estas armas son necesariamente utilizadas con un propósito delictivo, definitivamente son mayores, en un factor de cinco, al número que se utiliza por las estructuras de seguridad oficial. Las armas de fuego se utilizan para cometer más del 70% de todos los homicidios en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Los altos índices de homicidios reflejan altos índices de violencia en contra de mujeres y niños. Mientras que universalmente, la mayoría de las víctimas son hombres, diversos países en la región demuestran una tasa inusualmente elevada de víctimas femeninas. La información de violencia no letal de géneros, es limitada, pero la existente, demuestra que el crimen organizado no es la fuente de toda la violencia en la región.

## Diagnóstico del crimen: Pandillas juveniles

El tráfico de drogas se asocia a menudo con la proliferación de pandillas juveniles en la región, conocidas también como "maras" (término para referirse a los miembros de la pandilla). En varios países de Centroamérica, especialmente en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, se considera que esos grupos son una de las causas fundamentales del problema de la delincuencia local, y las estrategias más importantes en contra del crimen dependen de su erradicación.

Si bien las pandillas han existido en Centroamérica desde hace algún tiempo, no es hasta recientemente que han sufrido una transformación. Durante las guerras civiles ocurridas en la región, un gran número de centroamericanos buscó refugio en los Estados Unidos. Allí se congregaron en vecindarios urbanos hispanos, especialmente en el sur de California. En esas zonas, el problema del pandillaje es grave y los nuevos inmigrantes se convierten en blanco de los habitantes locales. En parte como mecanismo de defensa, muchos jóvenes se sumaron a pandillas ya existentes o crearon otras propias. Cuando en 1996 el Gobierno de los Estados Unidos comenzó a endurecer su régimen contra la inmigración, muchos miembros de pandillas fueron deportados al hallárseles culpables de algún delito, y de esa manera extendieron la cultura del pandillaje del sur de California a Centroamérica.

Aunque resulta difícil determinar con precisión la magnitud del problema del pandillaje, se calcula que en la actualidad existen unos 70.000 miembros de pandillas en los siete países de Centroamérica, de los cuales los más afectados son Honduras, El Salvador y Guatemala.

Las estadísticas varían respecto de la medida en que los miembros de las pandillas son responsables de los crecientes niveles de delincuencia en sus respectivos países: En Honduras se afirma que las maras son responsables de la mayor parte de los delitos cometidos en ese país, pero según investigaciones, menos del 5% de todos los delitos en el país son cometidos por jóvenes menores de 18 años de edad, y los miembros de las maras son mayoritariamente de ese grupo de edad. En El Salvador, se afirma que las maras son responsables del 60% de todos los homicidios dolosos, aunque en este caso tampoco resultan claras las pruebas que permiten llegar a esta conclusión. En las investigaciones llevadas a cabo por el Instituto de Medicina Forense de El Salvador, sólo fue posible atribuir alrededor del 8% de los homicidios con armas de fuego ocurridos en 2002, a las actividades de las maras. En Guatemala, en un reciente estudio poli-

### Estadísticas sobre pandillas y sus miembros nacionales

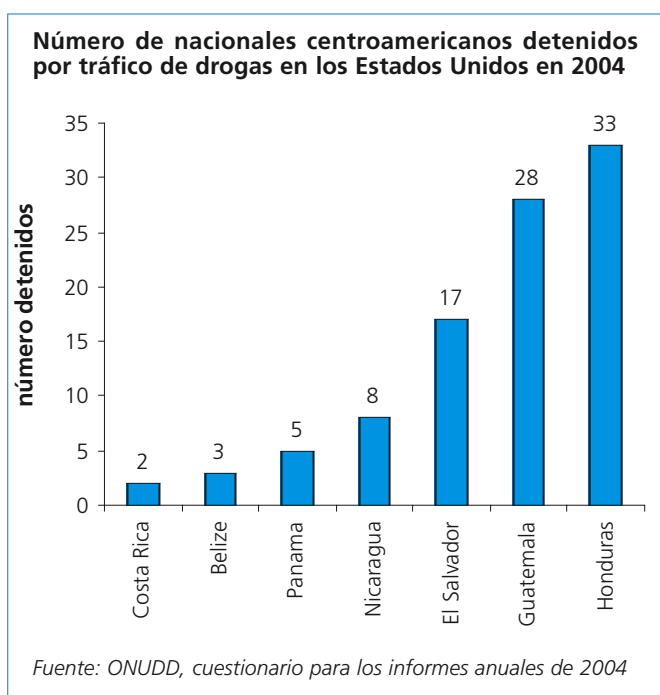
País	Número total demiembrros
Belice	100
Panamá	1385
Costa Rica	2660
Nicaragua	4500
El Salvador	10,500
Guatemala	14,000
Honduras	36,000
Total	69,145

Fuente: Adaptado de Hernández (2005)

cial, de los 427 homicidios dolosos ocurridos en ese país en enero de 2006 sólo pudo atribuirse 58 de ellos a las actividades de las pandillas (14%), 40 en zonas urbanas y 18 en zonas rurales.

Con frecuencia se establece una asociación entre las maras y el tráfico de drogas, especialmente la cocaína. Existen buenas razones para poner en duda la profundidad de esa relación; sin embargo:

- Como se mencionó con anterioridad, la prevalencia del consumo de cocaína en los países de Centroamérica no es terriblemente alto, salvo en El Salvador. Por ejemplo, en Honduras se calcula que menos del 1% de la población de 15 a 64 años de edad consume cocaína anualmente. De ese grupo, hasta el 50% son consumidores crónicos. Esto haría pensar que existe un máximo de 20.000 cocainómanos en el país, cifra inferior al número estimado de miembros de pandillas.
- La mayor parte de la cocaína que transita por la región se transporta por vía marítima y no terrestre. No resulta clara la manera en que los miembros de las pandillas juveniles, quienes se encuentran en su mayoría en zonas urbanas interiores, intervendrían en este proceso.
- Las diásporas internacionales pueden dar lugar al surgimiento de redes de tráfico de drogas; sin embargo, al parecer la diáspora de Centroamérica no constituye en la actualidad una red de distribución fundamental en los Estados Unidos. Esto no quiere decir que las pandillas de centroamericanos no sean un problema en los Estados Unidos, ya que en ese país se calcula que hay unos 10.000 miembros de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha solamente. No obstante, de las casi 12.000 personas detenidas por tráfico de drogas en los Estados Unidos en 2004, sólo 96 (menos del 1%) eran de Centroamérica.



Al parecer los miembros de pandillas de Centroamérica recurren a prácticas como la extorsión, a menudo "gravando" diversas formas de transporte público para permitirles el paso por sus zonas, o exigiendo pagos a negocios a cambio de su "protección". También se ha acusado a miembros de pandillas de Centroamérica de participar en el contrabando de migrantes y la trata de personas, pero esas afirmaciones no han sido respaldadas por datos cuantificados.

Todo lo anterior indica que es poco probable que las políticas de seguridad que giran en torno a la represión de la actividad de las pandillas logren resolver los problemas fundamentales que enfrentan esos países en relación con la delincuencia. La violencia parece ser endémica, y los miembros de las pandillas representan focos de violencia para cualquier sociedad. Mientras que parte del tráfico de drogas puede involucrar a los miembros de las pandillas, la parte medular del flujo parece estar en las manos de organizaciones delictivas más sofisticadas. Las grandes operaciones de represión en contra de los miembros de las pandillas, no solucionarán las causas de violencia en dichas sociedades, ni el problema del tráfico de drogas. La violencia juvenil es un hecho real que exige atención, pero constituye un

síntoma, y no una causa, del problema subyacente de violencia y droga.

### Diagnóstico del crimen: Corrupción

Puede ser que el impacto más dañino que ha tenido en tráfico de drogas en la región es fomentar la corrupción. Los datos en los niveles de corrupción en la región son generalmente confusos y contradictorios, sin embargo el arresto de oficiales públicos por involucrarse en actividades corruptas es un asunto común en varios países de Centroamérica. El impacto de este problema se discute de manera detallada en la sección final del reporte: calculando el impacto del crimen en el desarrollo.

### Calculo del impacto: Crimen debilita el capital social y humano

Así como el desarrollo es el proceso de construir sociedades que funcionen, la delincuencia actúa como una especie de "antidesarrollo", destruyendo las relaciones de confianza en que se basa la sociedad. La delin-

cuencia destruye el capital social y causa la fuga de un precioso capital humano. El temor que inspira restringe la movilidad, lo que entorpece la interacción social y económica, así como la educación, el acceso a la atención médica y otros servicios para el desarrollo.

La violencia puede tener costos considerables tanto para los hogares como para el Estado. Ella es particularmente onerosa en los países pobres, donde los mecanismos de seguridad social pueden ser escasos y el acceso a la atención médica limitado. Puede despojar a las familias de su único sustento y las lesiones que puede ocasionar pueden incapacitar a aquéllos cuya subsistencia depende de su trabajo físico. El costo acumulativo de ese trauma puede ser considerable; en un estudio realizado en El Salvador se determinó que el costo total de la violencia para el erario nacional llegaba al 11,5% del PIB, y un cálculo reciente de la UNDP coloca a Guatemala en la gráfica, en un nivel de 7.3% de PIB. Asimismo, la pérdida de bienes productivos puede resultar devastadora para los trabajadores independientes que no estén respaldados por un seguro.

Aunque la delincuencia tiene una enorme repercusión directa en las víctimas pobres, sus efectos indirectos son de mucho mayor alcance. La victimización o el temor a ella puede hacer que las personas se sustraigan a la interacción social a fin de reducir el riesgo de sufrirla. Esto puede obstaculizar las actividades comerciales, recreativas y educativas.

La delincuencia repercute negativamente en la calidad de vida y puede causar la migración de mano de obra calificada. Los expertos en desarrollo concuerdan en que uno de los elementos principales del desarrollo económico es la existencia de una población activa calificada, y por ello han alentado a los países en desarrollo a que inviertan en la educación. Sin embargo, esa inversión se pierde en gran medida si los que están mejor preparados y los más talentosos deciden emigrar. Diversos países en esta región se encuentran entre los primeros lugares de aquellos enlistados por el Banco Mundial, como países que experimentan la emigración de personas talentosas en altos porcentajes.

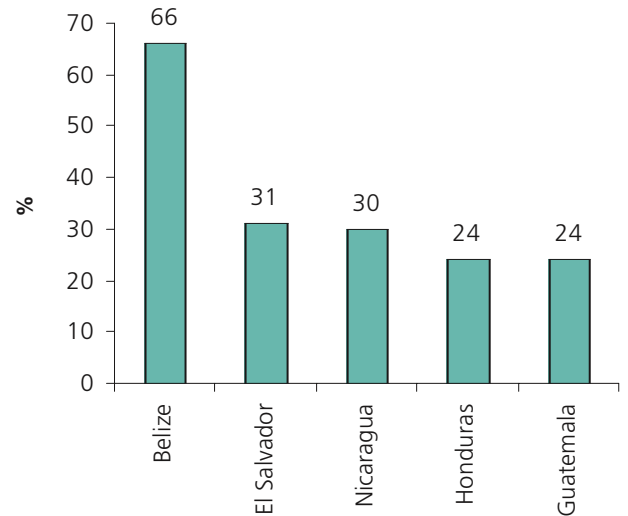
### Cálculo del impacto: La delincuencia es mala para los negocios.

En muchos países de la región, el crecimiento económico no ha sido suficientemente rápido para reducir la pobreza. La inversión, tanto extranjera como interna, es fundamental para el desarrollo económico. Los datos de las encuestas revelan que la delincuencia y la corrupción son dos de los principales obstáculos a la inversión en la región.

Para preparar su Informe sobre el Desarrollo Mundial correspondiente a 2005, el Banco Mundial realizó encuestas en empresas de todo el mundo sobre los obstáculos más importantes que se oponían a la actividad empresarial en sus países. Se analizaron diversas cuestiones, como la incertidumbre política, la reglamentación y el régimen fiscal, los problemas de financiamiento, el suministro de electricidad, la situación relativa a mano de obra y la actuación de los tribunales, así como la delincuencia y la corrupción. El estudio abarcó 53 países, incluidos tres de Centroamérica, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

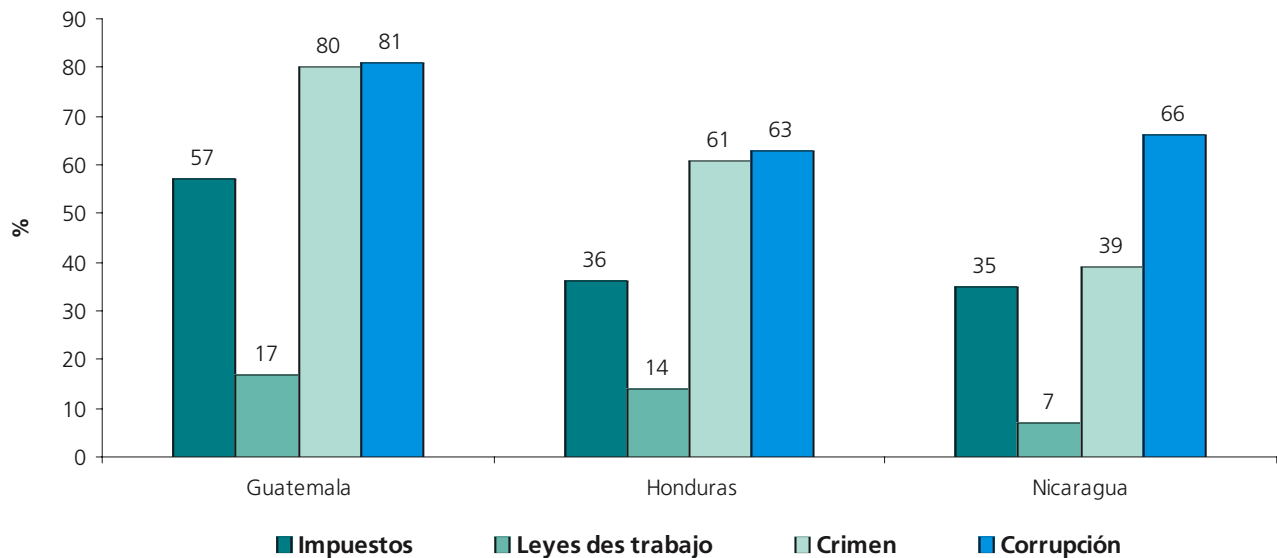
En general, la incertidumbre política, la inestabilidad macroeconómica y el régimen fiscal se consideraron las principales limitaciones para la inversión. Sin embargo, en los tres países de Centroamérica encuestados, la delincuencia o la corrupción se perfilaron como los problemas principales. Guatemala encabezó la lista mundial en cuanto al porcentaje de empresas que señalaron que el delito era un obstáculo grave. Más del 80% de las 455 empresas guatemaltecas encuestadas consideraron que la corrupción era una limitación importante para la actividad empresarial, en comparación con una media no ponderada mundial del 23%. El 61% de las empresas de Honduras consideró lo mismo, lo que representó el tercer porcentaje más alto (después de Kenya). El porcentaje correspondiente a Nicaragua fue inferior (39%), aunque resultó más elevado que en los países en que se reconoce ampliamente la existencia de corrupción, como Nigeria (36%).

**Porcentaje del total de población activa calificada que emigra**



Fuente: Banco Mundial (2005) "Migración internacional, remesas y la fuga de cerebros"

**Porcentaje de las empresas que señalaron factores que constituían "limitaciones importantes" para la actividad empresarial en el 2005**



Fuente: Elaborado con datos del Informe Mundial sobre el Desarrollo correspondiente a 2005 del Banco Mundial

El 42% de las empresas de Guatemala encuestadas, en comparación con una media mundial no ponderada del 25%, comunicó haber sufrido pérdidas debidas directamente a la delincuencia, lo que ubicó al país en el cuarto lugar. Las pérdidas medias debidas a la delincuencia representaban alrededor del 5% de las ventas. Eran mucho menores las pérdidas en Nicaragua (3%) y Honduras (3%), países que, de hecho, registraron el más bajo porcentaje a nivel mundial. Sin embargo, las sufridas en Nicaragua eran más graves y representaban el 7% de las ventas, en comparación con sólo el 3% en Honduras.

En Guatemala, más del 80% se refirió a la corrupción como una restricción importante, nuevamente el índice más alto de entre 53 países considerados, rebasando a países que se perciben en muchas ocasiones como los que tienen los índices más altos de corrupción, tales como Bangladesh, Tajikistan, y Nigeria. En Guatemala, alrededor del 58% de las empresas indicó que pagaba sobornos, cuya cuantía media equivalía a más del 7% de las ventas, lo que ubicó a ese país en segundo lugar en cuanto a pérdidas entre todos los países encuestados (después de Argelia). En Nicaragua, las cifras correspondientes fueron del 66% en el caso de las empresas que consideraban que la corrupción era una limitación importante y el 46% en el caso de las que pagaban sobornos, con pérdidas de exactamente el 7% de las ventas. En Honduras, el 62% de las empresas consideraba que la corrupción era una limitación, el 50% pagaba sobornos y se registraban pérdidas equivalentes al 6% de las ventas. En los tres casos, la cuantía de los sobornos es especialmente notoria en comparación con otras regiones del mundo.

El turismo es una de las industrias particularmente afectadas por la delincuencia. Constituye la principal fuente mundial de ingresos en concepto de exportaciones, y constituye la segunda fuente de ingresos en importancia después de las remesas en el caso de Guatemala y El Salvador. Los asesores de viaje en Centroamérica, hacen énfasis en los riesgos de ser víctimas de delitos.

### Cálculo del impacto: El crimen socava la democracia

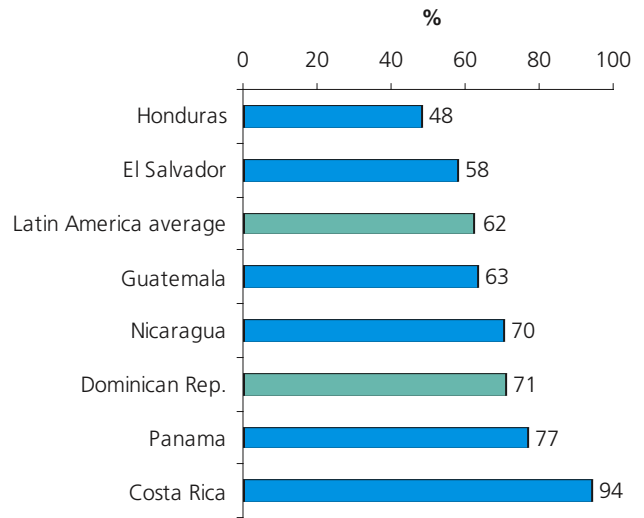
Posiblemente, el efecto más profundo de la delincuencia es el deterioro que provoca en la relación entre los ciudadanos y su gobierno. La obligación esencial del Estado es velar por la seguridad de los ciudadanos. Si no cumple esa función fundamental muchos ciudadanos pierden su interés en la democracia. La incapacidad del Estado para mantener la seguridad es especialmente peligrosa en los nuevos Estados democráticos. A menudo las personas interpretan el aumento de la delincuencia como señal de una aplicación excesiva de las garantías constitucionales. La noción de que impera la anarquía puede provocar incluso nostalgia por el régimen autoritario. Puede motivar a la población a pedir la presencia militar en el orden policial o apoyar la restricción de las libertades civiles. De acuerdo con el informe del Latinobarómetro de 2004, los países de Centroamérica (así como la República Dominicana), a diferencia del resto de los países de América

Latina, conceden prioridad al orden público respecto de las libertades civiles. Una gran cantidad de latinoamericanos encuestados, no rechazaron la idea de un gobierno militar, y muchos de ellos consideraron que un golpe de Estado sería aceptable en circunstancias de corrupción estatal, o en casos en los que el crimen se hubiera salido de control.

La impresión de que no se puede controlar la delincuencia suele hacer pensar que la policía es incompetente, lo que disminuye la confianza pública en su conjunto. Peor aún, en muchas zonas de esta región se considera que la policía contribuye activamente al problema de la delincuencia. Los datos de encuestas realizadas en cinco países de la región revelan que en Guatemala, se piensa que las fuerzas de policía son el sector más corrupto del gobierno, mientras que las de Nicaragua y Panamá recibieron también calificaciones extremadamente bajas. Excepto en El Salvador, en todos los países de Centroamérica encuestados, entre una tercera parte y la mitad de los encuestados consideraron que era posible sobornar a la policía. Si no es posible confiar en que la policía haga cumplir la ley con eficacia e imparcialidad, la población puede adoptar medidas para protegerse a sí misma. Cabe afirmar que uno de los indicadores más claros de la paralización del Estado es el aumento del "vigilantismo". En varias zonas de la región ya existen estructuras de "autodefensa", heredadas de períodos de conflicto político, que se prestan fácilmente para su uso como mecanismos no oficiales de imposición de la ley.

Lo que ocurre es que el "vigilantismo" constituye el último recurso de la gente que carece de medios para protegerse por otros medios. Los ricos pueden pagar un servicio de policía propio. Hay más agentes de seguridad privados que policías en los seis países hispanoparlantes de Centroamérica. Las empresas de servicios de seguridad privados suelen ser propiedad de miembros de las fuerzas de la policía o de seguridad en servicio activo o retirados. Sin embargo, la asignación a instancias externas de una función básica del Gobierno plantea graves problemas. Todos deben ser iguales ante la ley, pero las empresas de servicio de seguridad privados no ocultan su parcialidad. Gracias a los contactos de alto nivel que tienen muchas de ellas, pueden manipular el sistema con facilidad en beneficio de sus clientes y es muy improbable que declaren en su contra.

### "Bajo ninguna circunstancia apoyaría un gobierno militar"



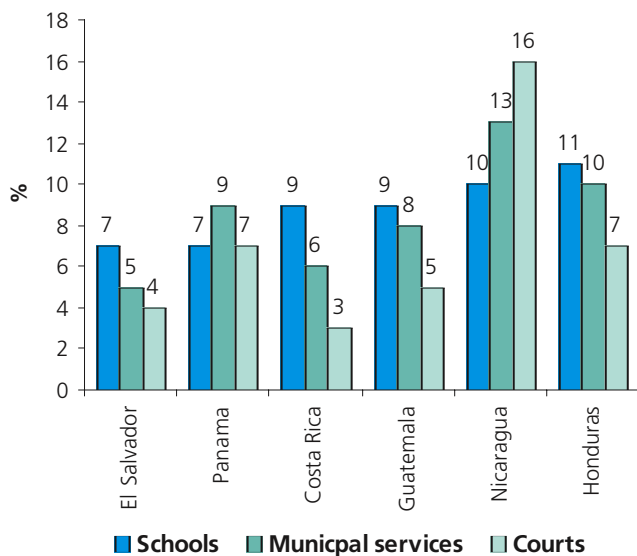
Fuente: Latinobarómetro 2005

### Tamaño relativo de las fuerzas de policía y los servicios privados de seguridad en Centroamérica



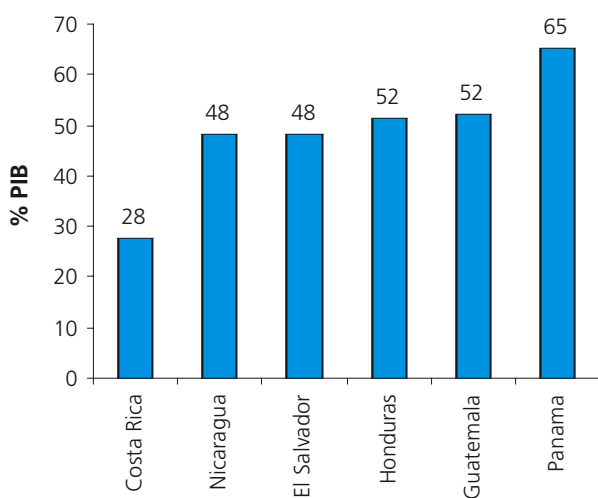
Fuente: Centro de Estudios Internacionales, 2002

**Porcentaje de buscadores de servicios que se enfrentaron con la corrupción en 2004**



Fuente: LAPOP 2005

**Tamaño de las economías sumergidas como porcentaje del PIB oficial, 2002 y 2003**



Fuente: Schneider (2005) *Shadow Economies of 145 Countries all over the World*

La corrupción, tanto leve como en gran escala, dificulta la capacidad del Estado para promover el desarrollo, pues obstaculiza la prestación de servicios, socava la base tributaria y distorsiona el gasto público. Aunque la segunda acapara titulares, en el caso de la primera el público se enfrenta a una barrera al desarrollo más insidiosa. Para tener acceso a servicios de desarrollo necesarios o para evitar extraordinarias barreras burocráticas tal vez sea preciso pagar sobornos. Por ejemplo, alrededor del 25% de quienes respondieron en esta región a la encuesta del Barómetro Global de la Corrupción de Transparencia Internacional indicó que se le habían pedido sobornos durante el año anterior. La cuantía media de los sobornos que pagaban anualmente los encuestados de Guatemala era de 147 dólares de los Estados Unidos, cifra no desdeñable en un país en que el 37% de la población subsiste con menos de dos dólares diarios. Las demandas por sobornos podrían estar evitando que el desarrollo esencial de los servicios, llegue a los pobres.

Para evitar que se les exija el pago de sobornos muchas empresas podrían pasar a la economía informal, socavando la base impositiva, y por tanto debilitando la capacidad del estado. Por ejemplo, se estima que Guatemala únicamente recauda impuestos sobre el 10% del PIB. Los países con marcos reglamentarios ineficaces y altos índices de corrupción tienden a tener economías no estructuradas que representan más del 40% del PIB. En la figura de la izquierda se presenta el tamaño estimado de las economías sumergidas como porcentaje del PIB oficial. Los sectores no estructurados de gran tamaño tienen vínculos estrechos con la actividad delictiva. En último término, es posible que el mercado "gris" y el mercado negro estén muy interrelacionados. Todas estas actividades se realizan sin pagar impuestos, por lo que no contribuyen a los recursos públicos que se utilizarían para el desarrollo. La falta de responsabilidad para el pago de impuestos también debilita los vínculos entre el estado y los ciudadanos. La gente puede demandar menos a un gobierno por el que no pagan, y el estado, por su parte puede sentirse menos obligado a prestar servicios a la población que no contribuye a las arcas del estado.

En el caso de los países de esta región respecto de los cuales se dispone de estimaciones, entre la quinta parte y el 40% de la actividad económica se realiza sin consignarse en los libros. Con excepción de Costa Rica, más de la mitad del empleo en Centroamérica se genera en el sector no estructurado. Las personas que trabajan en ese sector han optado por prescindir de los mecanismos de resolución de controversias y de protección al trabajador y de los demás beneficios derivados del registro de las

empresas y del pago de impuestos. Esto puede restar competitividad a las empresas de la economía informal, obligándolas a aceptar pérdidas por incumplimiento de contrato o en caso de impago. Los métodos no oficiales para hacer cumplir acuerdos o cobrar deudas suelen estar enraizados en la violencia, lo que representa otro foco de delincuencia. La evasión de impuestos y normativas también socava el funcionamiento del mercado. Las investigaciones revelan que estos recursos ocultos no pueden aprovecharse con los fines más rentables. En esencia, la corrupción puede trastornar la cooperación entre el estado y el sector privado, una cooperación que es fundamental para que ambos funcionen efectivamente.

Sin embargo, quizás lo que deteriora más gravemente la confianza en la democracia es la corrupción de alto nivel, y en muchos países de esta región el soborno llega a las instancias más elevadas. Muchos países de

Centroamérica han tenido presidentes a quienes después de su mandato han sido acusados de corrupción o condenados por incurrir en ella. En Costa Rica, considerada con frecuencia modelo de democracia, han sido tres los casos de este tipo, aunque esto también se erige como un testamento de la vigilancia de la sociedad en Costa Rica hacia los asuntos de corrupción. En Nicaragua, Panamá y Guatemala también ha habido casos de ex mandatarios acusados de corrupción, algunos de los cuales cumplieron condenas de prisión o huyeron del país.

Además de socavar la confianza pública en la democracia, la corrupción causa pérdidas muy concretas de los fondos existentes para promover el desarrollo. En América Latina, por lo menos el 10% del producto interno bruto de la región es consumido anualmente por el soborno, según a un estudio realizado en 2004 por el Banco Interamericano de Desarrollo. El fraude en las contrataciones públicas también puede distorsionar el gasto público, pues los funcionarios corruptos impulsan muchos proyectos con posibilidades de generar comisiones ilícitas, como planes de obras públicas de gran envergadura y contratos de adquisiciones en el ámbito de la defensa, a costa de programas sociales. En general, los países con más alto índice de corrupción tienden a registrar menos gasto social. Además, la calidad de los proyectos de obras públicas en gran escala puede ser deficiente porque los contratistas que ganan la licitación mediante sobornos no siempre se sienten obligados a cumplir las especificaciones. Así pues, la corrupción puede significar todavía más gastos para el desarrollo de un país, porque los funcionarios deshonestos procuran obtener beneficios inmediatos en perjuicio del interés público.

## Implicaciones en materia de política

Ningún otro asunto tiene más impacto en la estabilidad y desarrollo de Centroamérica, como lo tiene el crimen, y la gente de dicha región parece estar consciente de este hecho. De manera consistente, la gente entrevistada de dicha región, parece identificar los asuntos económicos y el crimen como dos de los mayores problemas que se encuentran profundamente relacionados. El delito y la corrupción socavan los esfuerzos para lograr el desarrollo en dichos países. La gente de Centroamérica se ha vuelto cada vez más vocal en la demanda de que se haga algo.

En consecuencia, no ha habido escasez de esfuerzos contra el delito, pero simplemente, no han logrado los resultados deseados. Adicionalmente, algunas de las soluciones ofrecidas, significan al menos, una amenaza tan grande como el problema mismo. Algunas partes de Centroamérica se encuentran muy cerca de sacrificar el triunfo sobre la democracia, que fue tan difícil de obtener, a cambio de un poco de seguridad. Pero como lo señala el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, "no seremos capaces de tener ni [seguridad ni desarrollo], si no respetamos los derechos humanos. A menos de que todas esas causas sean desarrolladas, nadie podrá tener éxito."

Centroamérica no se encuentra sólo enfrentando una elección ilusoria frente la seguridad y la democracia. Globalmente, la mayoría de la gente asocia la prevención del crimen con el cumplimiento de la ley, por lo que cuando el crimen sale de control, la tendencia natural es voltear hacia la policía. Esto dispara una serie predecible de eventos, en la que los derechos humanos pueden ser amenazados, elementos que se encuentran actualmente manifiestos en ciertas áreas de Centroamérica.

En primer lugar, existe una demanda para dar más recursos a la policía. Es cierto que la policía no cuenta con los recursos necesarios en muchos países de la región, y que se necesitan recursos y una reforma profunda en todo el sector de justicia criminal en muchos países de Centroamérica. Sin embargo, sería un grave error asumir que el incremento de los recursos a la policía, por sí mismo resultaría en tasas delictivas más bajas. Diversos estudios han demostrado que este no es el caso. Se requiere algo más que una justicia criminal efectiva, para enfrentar las causas del crimen.

Segundo, a efecto de reforzar los números de la policía, existen convocatorias par que los militares se utilicen como un multiplicador de fuerza, en la realización de operaciones conjuntas, o aún llevando a cabo patrullajes de rutina en áreas con altos índices criminales. A pesar de similitudes superficiales (uniformes, estructuras de rangos, armas), el trabajo de los militares y la policía son bastante diferentes. Los militares se encuentran entrenados para vencer a fuerzas enemigas y controlar el territorio. La policía se supone que trabaja con el público, para solucionar problemas, muchos de los cuales se encuentran relacionados de manera periférica con asuntos criminales. Es verdad que los militares cuentan con una mejor disciplina (y por tanto son más respetados) que la policía en algunos países, y que la policía en esta región tiene un enfoque alta-

mente militarizado. Sin embargo se cruza una línea, cuando el gobierno utiliza soldados en contra de sus propios ciudadanos, especialmente en una región en la que las fuerzas militares han jugado un papel tan importante en represiones en el pasado. El proceso de democratización de una fuerza policíaca autoritaria, es el proceso de hacerlos menos parecidos a los militares, y la reincidencia en estos asuntos no sirve a la causa de la prevención del crimen.

La policía puede jugar un papel vital en la identificación y ayuda para lograr solucionar los problemas locales de crimen, sin embargo únicamente pueden hacerlo si son desmilitarizados sistemáticamente, y se convierten en algo un tanto diferente. Se deben involucrar y conocer a sus comunidades, y por tanto tener la confianza de las mismas. Deben pasar una buena cantidad de tiempo clasificando los conflictos no criminales de una comunidad que al final se manifiestan como delitos. Deben convencer a la gente, de que es benéfico reportar al crimen, y que los resultados de hacerlo, son preferibles a el tomar los asuntos en sus propias manos. Ellos no pueden llevar a cabo estas tareas vitales, si se encuentran atrapados en una guerra, cambiando de un frente de batalla a otro. Finalmente, se debe reconocer que la policía es únicamente el elemento más visible de los esfuerzos de un estado para enfrentar los asuntos criminales, y que no pueden realizar la tarea por sí mismos.

La tercera respuesta predecible para las tasas de delitos fugitivos, tiene un impacto directo en los avances en materia de derechos humanos. Además de requerir más personal y equipo, la policía generalmente solicita que el estado haga su trabajo más fácil, modificando la ley penal sustantiva y adjetiva en su favor. Dada la falta de experiencia con las técnicas de investigación democráticas, argumentan que la protección a los derechos civiles, forman una barrera sin razón e insuperable, para que lleven a cabo su trabajo. La legislación es presentada como permitiendo una detención extendida (e inclusive indefinida) sin cargos para sospechosos criminales. Las leyes se introducen declarando que la pertenencia a ciertas organizaciones (tales como pandillas), se considera como un delito mismo. Esto permite arrestar a ciertos individuos, sobre la base de su apariencia o asociados conocidos, sin tener que probar que han llevado a cabo una conducta delictiva en concreto. Se renuncia a la protección a la privacidad, y a otro tipo de protecciones. Según se considera que la actividad criminal es una amenaza al estado, la línea entre el crimen y el terrorismo se borra, y aplican las leyes de guerra. Sin embargo estos cambios, que pueden ocurrir insidiosamente a lo largo del tiempo o en una aceleración de pánico, representan una mayor amenaza a la democracia, que las hordas desorganizadas a las que se encuentran dirigidas.

La principal de estas hordas en Centroamérica son las maras. La mayoría de los miembros de la maras son jóvenes urbanos marginalizados, entre las edades de 15 a 24, un grupo demográfico que comete un número desproporcionado de delitos callejeros y actos de violencia en todo el mundo. Igual que sus compañeros, son los responsables de un gran número de homicidios, generalmente de entre ellos mismos. Pero sería imprudente asumir que el apresar a un gran número de miembros de las maras solucionaría el problema del crimen. En primer lugar, dado el número de miembros de la pandilla, el hacerlo sería extremadamente desafiante para los sistemas de justicia criminal en Centroamérica. En segundo lugar, aún si este fuera un objetivo posible, es probable que surgiera una nueva generación de maras, mientras las condiciones que generan el pandillismo continúen siendo las mismas. Finalmente, la evidencia existente, sugiere que las maras son responsables de un número menor de crímenes del problema total, de lo que la mayoría de la gente esperaría.

Bajo estas circunstancias, lo que se necesita no es una mano dura. Más bien, se debe aplicar una mano con fineza, y que todos los recursos del gobierno, no únicamente el sector de la seguridad, deben ser aplicados de manera estratégica. Lo que se necesita es una *estrategia para la prevención del delito* que sea bien investigada y de disciplinas cruzadas, basada en intervenciones que se hayan probado como valiosas.

De hecho, muchos centroamericanos reconocen que la prevención del crimen requiere algo más que sólo una policía agresiva, y que se requiere una mayor experiencia de la que actualmente tiene el sector de seguridad. Por ejemplo, el gobierno de El Salvador, creó a recientes fechas la *Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social*, mismo que involucra a personas importantes, desde académicos universitarios, hasta gente de negocios, y que busca encontrar soluciones para los problemas delictivos. Mientras que sus recomendaciones hasta la fecha, han ido orientadas al cumplimiento de la ley, dichas iniciativas tienen un gran potencial de innovar las soluciones sociales.

Parte de la confusión sobre la mejor forma de actuar frente al delito parece provenir en parte en la noción errónea de una dicotomía entre las iniciativas de aplicación de la ley a corto plazo y el desarrollo social a

largo plazo. Casi todos reconocen instintivamente que los problemas del delito son de carácter social. Según la encuesta Latinobarómetro de 2004, el 57% de los que respondieron señaló como causa de la delincuencia "la situación económica". Sin embargo, la mayoría de las personas no está en condiciones de esperar a que la lenta dinámica del desarrollo elimine las injusticias sociales; necesitan seguridad inmediata. Como la policía es el órgano del Estado que debe combatir la delincuencia, las iniciativas a corto plazo suelen basarse en medidas como la asignación de recursos adicionales a ese órgano, recurrir a la fuerza militar o emprender operaciones de tipo militar para cumplir funciones policiales, restringir los derechos civiles de los acusados de delitos e imponer condenas más duras. Desde luego, se siguen impulsando iniciativas para promover el crecimiento y el desarrollo, y cabe esperar que con esos dos procesos independientes se logre reducir la delincuencia

Sin embargo este resultado no puede ser asegurado de ninguna manera. La policía tiene habilidades limitadas para la contener, y solucionar por sí mismos, los problemas delictivos, y muchos aspectos del desarrollo pueden por sí mismos impulsar el crimen. En lugar de dejar pasar el tiempo hasta el día en que se logre un empleo total, la llave para prevenir el crimen hoy en día, podría ser modificar la forma en la que las circunstancias sociales alimentan al delito. Existe una serie de técnicas para lograr lo anterior, generalmente clasificadas como "prevención del crimen social". Estas intervenciones no pueden modificar la naturaleza subyacente de la sociedad, sin embargo pueden romper el vínculo entre el desarrollo y el crimen. Por ejemplo, existe todo un rango de intervenciones agrupadas bajo el título de "prevención del crimen mediante el diseño del medio ambiente". La rápida urbanización, la superpoblación y los espacios urbanos irregulares se encuentran altamente asociados con altas tasas delictivas. Toda la vivienda y proyectos de infraestructura pública deben tomar en cuenta los principios básicos de la prevención de los delitos, dejando lugar para que las familias crezcan e incorporen características estructurales de seguridad. Las calles deben ser accesibles a los servicios de emergencia y deben tener una señalización y alumbrado adecuado. Las áreas urbanas no deben contener espacios irregulares, tales como edificios perdidos o abandonados. Los principios básicos de la zonificación deben ser adheridos a la misma. Los establecimientos informales deben ser movidos gentilmente a una mayor formalidad. Los propietarios de inmuebles deben ser obligados a conocer la identidad de sus arrendatarios, e intentar poblarlos conforme a los estándares básicos, así como cumplir con los asuntos de salud y seguridad contra incendios. Muchos de estos problemas pueden ser identificados mediante un análisis de incidentes de crimen, mediante los ojos de los mapas del sistema de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés). Al final, muchos de los asuntos del crimen urbano, pueden ser asuntos de la administración de la ciudad.

En relación con el pandillismo, existe una gran cantidad de evidencia sobre las intervenciones exitosas de los jóvenes. Resulta muy difícil hacer que una persona joven abandone una pandilla, mediante amenazas de justicia penal, debido a que el desafío al estado, aún hasta la muerte, es un punto central del pandillismo. Un miembro típico de una pandilla tiene como parte de su esencia, enraizado el sentido de desafío y rechazo a ser vencido. Dados estos factores, parece que las "zanahorias" son mucho más efectivas que los "palos", y también son efectivas en cuanto al precio. Universalmente, los jóvenes se unen a las pandillas, en un intento de inclusión, en un contexto de familias y comunidades disfuncionales. Por lo tanto, la prevención del pandillismo se trata de dar fuentes alternativas con un significado, a los jóvenes. La intervención pronta es la llave, y el estado puede hacer mucho para mitigar los peores efectos de una educación dura.

Todos los actores internacionales en el desarrollo, deberían estar involucrados en encontrar soluciones. Los problemas de esta región se deben atacar de manera regional, con el apoyo y cooperación de las demás naciones afectadas por flujos de droga regionales, incluyendo las fuentes de demanda de drogas. Muchos problemas son inherentemente tradicionales en carácter, y un caso obvio de discusión es la pregunta de la deportación de criminales. Por supuesto, los derechos de residencia para los no-ciudadanos deben estar relacionados con el buen comportamiento, y ningún país puede ser legalmente obligado a mantener criminales que no tienen un derecho para permanecer. Sin embargo, existen maneras para promover la reintegración de dichos deportados, en sus sociedades natales. La deportación debe ir acompañada de procesos de asistencia para llevar a cabo la reincorporación a su país. Este esfuerzo está en el propio interés de los países desarrollados - no obstante no haya evidencia que el deportado promedio se involucre en una actividad delictiva transnacional, un número muy pequeño de deportados peligrosos, ubicados en países de tránsito de drogas, puede ser un problema significativo para las naciones consumidoras de drogas. Está en el interés de la seguridad colectiva del hemisferio, por lo que se deben hacer esfuerzos genuinos para rehabilitar a aquellos que son lanzados a las sociedades que no cuentan con el equipo necesario para recibirlos.

Adicional a una estrategia comprensiva para el combate del crimen, todos los esfuerzos para el desarrollo en esta región, deben contener un componente de prevención, incluyendo el desarrollo del país y las estrategias para la reducción del crimen de las agencias internacionales. El crimen es un asunto de punta filosa, que afecta a la educación, vivienda, salud, comercio y todos los demás aspectos del desarrollo.

Al mismo tiempo, la necesidad vital de una reforma a la justicia criminal no se puede dejar a un lado. El intento de reducir el crimen puede distraer la atención del hecho de que las agencias que se encuentran a cargo de tratar con el crimen no funcionan tan bien como las instituciones democráticas. A efecto de que la regla de la ley prevalezca, el sistema de la justicia criminal debe ser efectivo, eficiente y equitativo para lograr sus deberes estatutarios. Esto es esencial, ya sea que estas tareas se consideren como contribuyentes al esfuerzo general para la prevención del crimen o no.

En resumen, este reporte indica que existen diversas áreas en las que la comunidad internacional puede asistir a los países de Centroamérica para afrontar el problema delictivo. La primera, es la formulación de estrategias de prevención del crimen basadas en la investigación y con trabajo conjunto de sectores, a niveles nacionales o regionales. La segunda es la integración de la política de prevención del crimen en todas las intervenciones del desarrollo, bien sean iniciadas por actores internacionales o por el gobierno local. Finalmente, la reforma de la justicia criminal es un proceso distinto del conductor de la prevención del crimen, y debe ser igualmente importante. La democracia se encuentra en peligro cuando la regla de derecho no es segura

# 1. El porqué Centroamérica es vulnerable al crimen

Centroamérica se compone generalmente de siete países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y (usualmente)<sup>1</sup> Belice y Panamá. Estos países tienen bastante en común, siendo Belice distinto por razones de lenguaje y Costa Rica y Panamá estando mejor en términos económicos. Existieron diversas tentativas de unificar a los cuatro países – Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras – durante los siglos 19 y principios del 20. Los puntos en común de estas regiones son multi-dimensionales:

- Todos fueron colonias españolas y por lo tanto comparten una lengua en común (el español, aunque el idioma oficial en Belice es el inglés) y antecedentes culturales similares (incluyendo el catolicismo que impera).
- Todos excepto Belice y Costa Rica han experimentado recientemente gobiernos autoritarios y militares, golpes de estado, o períodos de inestabilidad política, incluyendo prolongadas guerras civiles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
- De acuerdo con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas,<sup>2</sup> todos excepto Costa Rica y Panamá eran considerados países de desarrollo humano medio, con índices de alfabetismo de adultos de alrededor del 70% o más y expectativas de vida de 67 años o más.
- Históricamente, casi todos han mostrado altos niveles de dependencia en los bienes primarios, especialmente en los productos agrícolas de plátano (especialmente Honduras) y el café (Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y Costa Rica).

No obstante dichas similitudes, existen varias diferencias importantes. El ingreso *per cápita* varía en un factor de cinco, de alrededor de EUA\$ 9481 *per cápita* PPP (Costa Rica) a EUA\$ 2875 (Honduras) en 2004. Costa Rica se ha beneficiado de la estabilidad política y de una democracia duradera. Estos puntos parecen haber incrementado su resistencia al crimen y han impulsado su desarrollo económico. Sin embargo continúa vulnerable debido a otros factores sociales, económicos y demográficos, como lo hacen las otras naciones de la región. La falta de desarrollo económico se encuentra relacionada con la falta de capacidad de la justicia criminal. Las naciones pobres no pueden gastar en la justicia, tanto como las naciones ricas, y lo anterior se refleja en una respuesta poco adecuada para atender asuntos delictivos. Finalmente, es hasta ahora que Centroamérica se recupera de las guerras civiles devastadoras de las décadas recientes, dichos conflictos dejaron a la región vulnerable a la incursión del crimen organizado. Las consecuencias de la violencia son catastróficas y se siguen experimentando hoy en día.

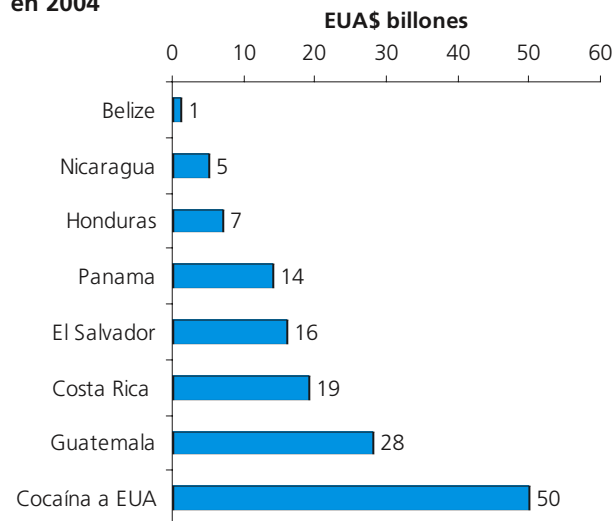
Sin embargo, el punto más importante de vulnerabilidad al crimen en esta región, es su ubicación geográfica. Centroamérica se ha encontrado repetidamente “atrapados en una encrucijada”, como una zona clave de tránsito de drogas.

## 1.1 Vulnerabilidad geográfica

Centroamérica tiene la poca fortuna de encontrarse ubicada entre los países productores de drogas y los consumidores. El flujo de cocaína de Sudamérica a los Estados Unidos es uno de



**Gráfica 2: El PIB en países de Centroamérica y del valor de mercado del flujo de cocaína a Estados Unidos (en billones de dólares de los Estados Unidos) en 2004**



Fuente: UNDP HDR 2006, UNODC WDR 2006

los ilícitos de mayor valor. Centroamérica ha sido el camino para las drogas por décadas, incluyendo los tiempos de las guerras civiles. De hecho durante ese tiempo, los flujos de drogas impulsaron el conflicto, y la corrupción en los servicios de seguridad se afianzaron en algunos países. Esta corrupción abre la puerta a las otras formas del crimen organizado, incluyendo el tráfico de todo tipo de contrabando (armas de fuego, gente, recursos naturales). Los traficantes de alto nivel, pueden operar con impunidad en algunas áreas, inclusive respecto a los homicidios. El sector financiero se convirtió en vulnerable al lavado de dinero.

Hoy en día, Centroamérica es el camino para alrededor de 450 toneladas de cocaína destinadas a México y a los Estados Unidos. Aún en nivel de venta al público en esta región, este flujo vale alrededor de EUA\$ 10 billones, y en su reventa a los Estados Unidos, vale alrededor de EUA\$ 50 billones. El efecto potencial desestabilizador sobre este flujo masivo de contrabando es considerable. El ingreso anual total de una nación pequeña como Belice, es menor a EUA\$ 600 millones.<sup>3</sup> El impacto actual se discute en la sección sobre tráfico de drogas, a continuación.

## 1.2 Vulnerabilidades demográficas, sociales y económicas

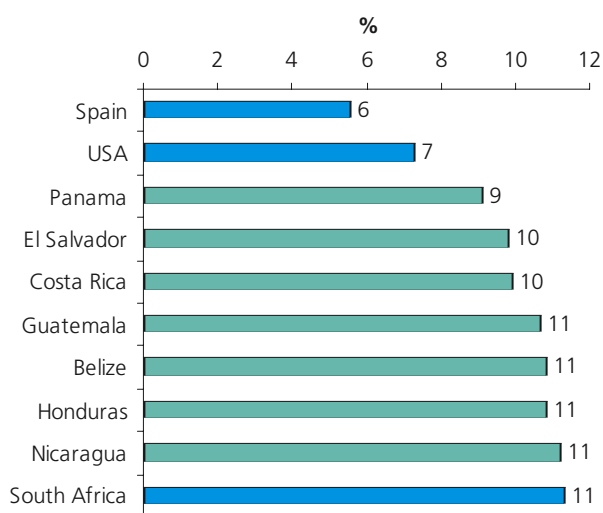
Han existido diversos intentos de correlacionar los factores sociales con los niveles del crimen, y una buena cantidad de literatura contradictoria se ha generado en estos esfuerzos. Al final, es seguro decir que no existen causas universales relacionadas con los altos porcentajes del crimen, sin embargo, ciertos factores parecen incrementar la vulnerabilidad a ciertos tipos de delitos. Algunos de estos puntos de vulnerabilidad se discuten a continuación.

### Porcentaje de población joven

Universalmente la mayoría de los delitos callejeros, y una buena parte de los crímenes violentos, se comenten por hombres jóvenes, generalmente entre las edades de 15 a 24. Las víctimas de esta violencia son generalmente otros hombres jóvenes, por lo que los jóvenes parecen ser especialmente vulnerables a convertirse tanto en víctimas, como en perpetradores del delito. Mientras sea mayor la proporción de la población que

se encuentra en este rubro, mayor es la vulnerabilidad de la sociedad. Como muchas regiones en desarrollo, la población de Centroamérica es demasiado joven, en comparación con algunos países africanos del sub-Sahara.

**Gráfica 3: Porcentaje de hombres jóvenes (15-24) en la población del 2007 (proyectado)**



Fuente: Elaborado a partir de la Base de Datos Internacionales de Censos de los Estados Unidos

### Pobreza y desigualdad

No necesariamente existe una relación entre la pobreza y la criminalidad. Claramente, los crímenes de desesperación material ocurren y aquéllos que sufren de pobreza pueden rechazar los sistemas legales y sociales dentro de la cual esta experiencia ocurre. Pero las naciones más pobres, y las personas más pobres, no son necesariamente los más afectos al crimen. Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas de criminalidad, los países más seguros en Centroamérica son probablemente los más ricos (Costa Rica) y el más pobre (Nicaragua).

Lo que resulta más relevante puede ser el grado de inequidad encontrado en las sociedades, y esto proporciona tanto una justificación (que ataque la injusticia social) como una oportunidad (riqueza) para el crimen. Los niveles de desempleo, especialmente entre la juventud, también pueden ser relevantes, ya que los jóvenes a quienes se les niegan oportunidades para una inde-

pendencia económica y con demasiado tiempo en sus manos, pueden incurrir en abuso de sustancias, actividades de pandillas y otras formas de crimen, incluyendo la participación en el tráfico de drogas.

Existen niveles altos de pobreza en Centroamérica. Para aquellos países en los que hay información disponible, un gran porcentaje de la población de los países de la región viven con menos de dos dólares al día, incluyendo Guatemala (37%), Honduras (44%), El Salvador (58%) y Nicaragua (80%). Nicaragua y El Salvador son más pobres que algunos países en Sub-Sahara Africa.<sup>4</sup> De conformidad con la Encuesta Gallup World Poll 2006, alrededor del 35% de centroamericanos entrevistados, dijeron que había habido momentos en el pasado, en los que no tenían dinero suficiente para comprar la comida necesaria.<sup>5</sup>

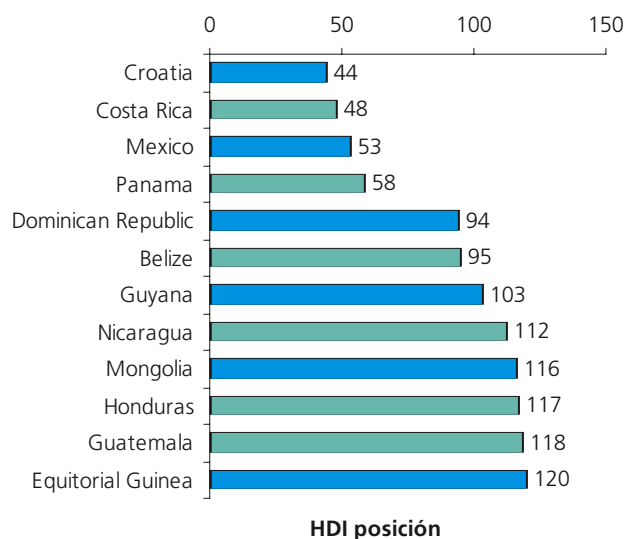
Pero todavía hay más en el tema de la pobreza que la simple economía. El Índice de Desarrollo Humano está compuesto de tres indicadores que pretenden capturar la esencia en la calidad de vida: ingreso (PIB *per cápita*), salud y longevidad (expectativa de vida), y educación (alfabetismo en adultos). En términos de este índice, Guatemala y Honduras son casos atípicos. La calificación de Guatemala ha sido rebajada ligeramente por un ingreso promedio relativamente alto, pero en otros aspectos, tiene cierta similitud con sub-Sahara Africa. No obstante que tiene un ingreso nacional promedio casi tres veces más que Nicaragua, tiene índices más altos de mortalidad de niños (35 de cada 1000 sobreviven), índices más altos de desnutrición infantil (23% de niños menores de 5 años), y niveles más altos de analfabetismo (31% de la población mayor de 15 años). De hecho, tiene los índices más altos en Centroamérica en cada una de estas categorías. E incluso, estos promedios no demuestran el panorama completo, ya que la pobreza está concentrada en un segmento de la población: los indígenas. Este tipo de inequidad masiva parece estar relacionada tanto con el crimen como con los abusos de derechos humanos, debido al resentimiento justificable por parte de los excluidos, y un temor justificado por parte de los más privilegiados.

Un indicador más confiable que está correlacionado con los niveles de crimen, es el grado de inequidad en una sociedad. La inequidad en los ingresos se expresa comúnmente en la tabla conocida como Índice Gini, en la que el cero representa un estado de equidad perfecto y el 100 un estado de inequidad perfecta.<sup>6</sup> Sin embargo, en términos generales, basado en estas cifras, se puede decir que Centroamérica es una de las regiones más inequitativas en el mundo. A nivel mundial, sólo hay 18 países de los que se tiene información disponible dentro del Índice Gini de 52 o más. Siete se encuentran en sub-Sahara Africa, 11 están en Latinoamérica, y cuatro de ellos se encuentran esta región: El Salvador (52), Honduras (54), Guatemala (55) y Panamá (56). Por lo tanto, cuatro de los siete países de Centroamérica se encuentran dentro de los países más inequitativos en el mundo. No existen cifras para Belice, mientras que Costa Rica (50) y Nicaragua (43) son menos extremistas, aunque están altamente divididos.

No obstante los índices relativamente bajos de crecimiento, ha habido cierto progreso en atacar la inequidad en varios países de la región sobre todo en el corto plazo. El Salvador ha demostrado el declive más alto en términos de inequidad, seguido por Guatemala, Nicaragua.<sup>7</sup> Pero todavía existen lagunas muy altas por considerar, y las tendencias a largo plazo no son claras.

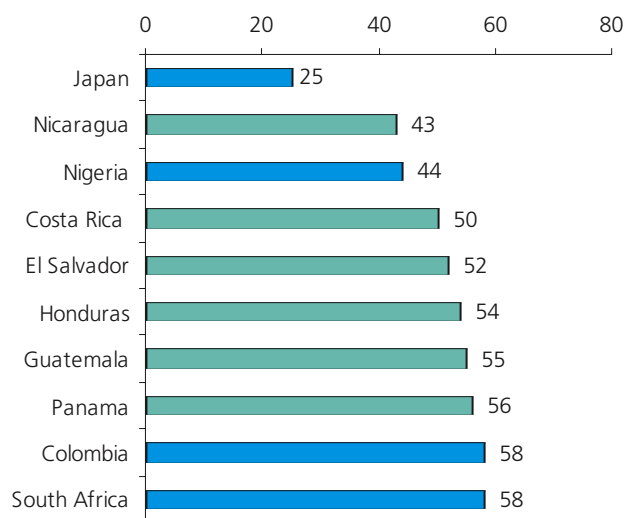
El resentimiento que se manifiesta debido a la inequidad es muchas exacerbada cuando las divisiones de clases se refieren

**Gráfica 4: Lugar en el Índice Desarrollo Humano del PNUD (en un orden del mejor al peor desarrollado)**



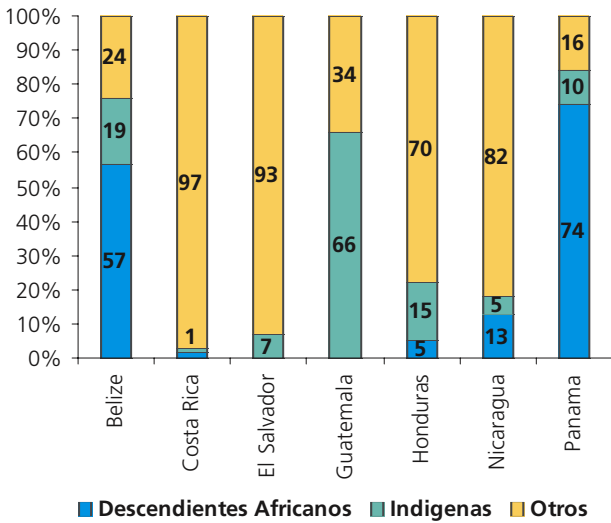
Fuente: Human Development Report 2006

**Gráfica 5: Índice de Gini**



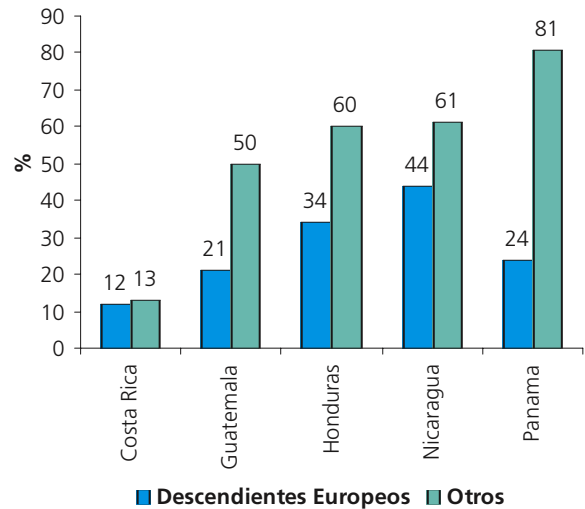
Fuente: Human Development Report 2006

**Gráfica 6: Porcentaje de descendientes africanos e indígenas en Centroamérica**



Fuente: World Bank, *Inequality in Latin America and the Caribbean: Breaking with history?*

**Gráfica 7: Porcentaje de población que vive con menos de EUA\$ 2 al día en cada hogar por ingreso per capita**



Fuente: Busso, Cicowicz, Gasparini (2005) 'Ethnicity and the Millennium Development Goals'

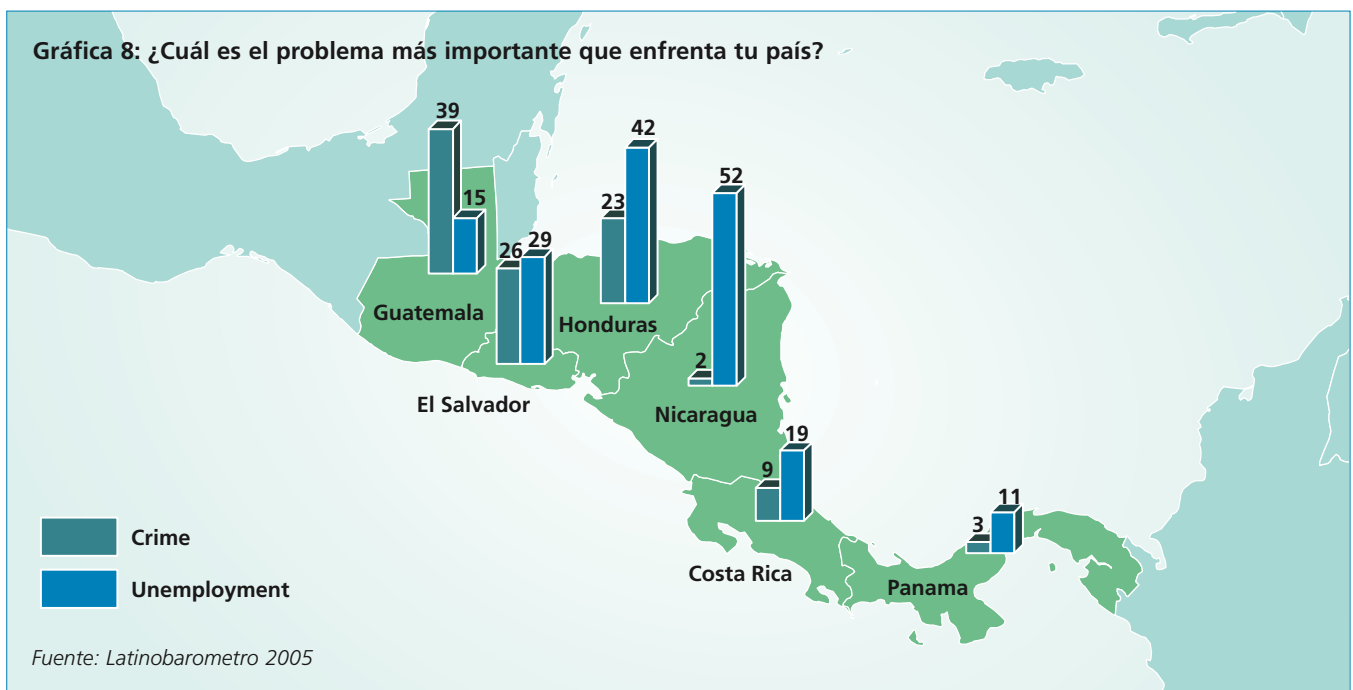
sobre cuestiones étnicas, como usualmente acontece. La identidad étnica es un asunto muy subjetivo, especialmente dado el caso de la inter-relación en Centroamérica. Existe gran diferencia de opiniones acerca del colapso étnico en varios países de esta región.<sup>8</sup> La distinción se encuentra generalmente entre gente indígena y mestizos y gente con descendencia africana. En esta región, y en el mundo aquéllos con sangre europea son generalmente más ricos que los de descendencia africana o gente indígena.

**Desempleo**

Constantemente se cita al desempleo como una causa del crimen en los enevestas populares y por los políticos. El crimen se ubicó en segundo lugar después del desempleo como el asunto más importante que afecta a Latinoamérica de acuerdo con estadísticas del Latinobarometro en el 2005. Asimismo, el 57% de dicha opinión en el 2004 se refirió a la "situación económica" como la causa del crimen, por lo que los dos temas pueden estar de alguna manera mezclados en la opinión pública.<sup>9</sup>

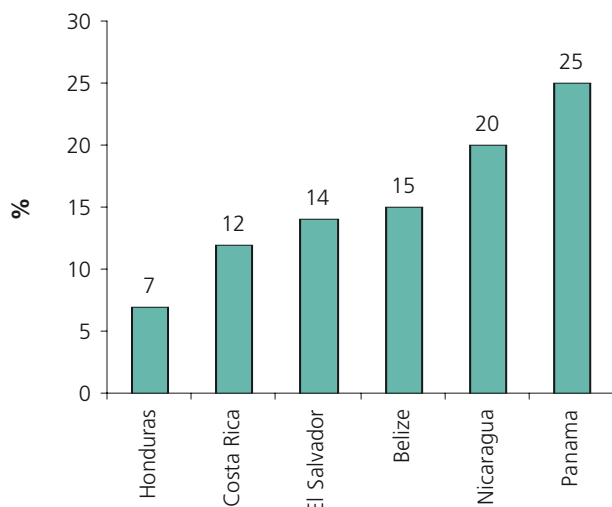
Las definiciones de desempleo son variables, por lo que es difícil establecer un margen internacional, pero

**Gráfica 8: ¿Cuál es el problema más importante que enfrenta tu país?**



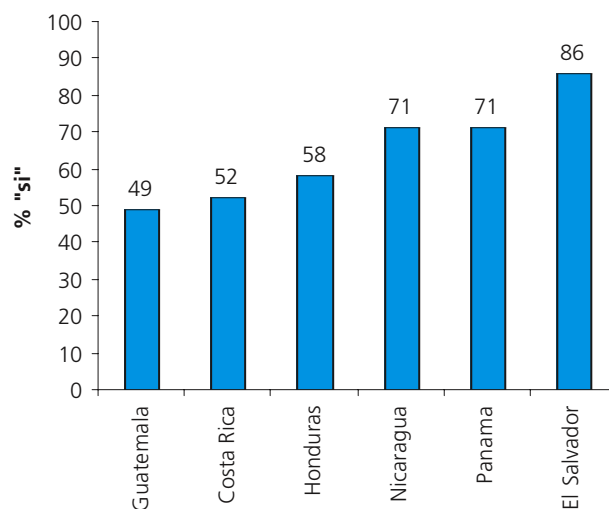
Fuente: Latinobarometro 2005

**Gráfica 9: Tasa de desempleo entre jóvenes (entre 15-24 años) en 2000 ó 2002**



Fuente: ECLAC, *Statistical Yearbook 2005*

**Gráfica 10: En los últimos 12 meses, ¿ha estado algún adulto en tu hogar desempleado?**



Fuente: *Latinobarometro 2005*

varios países en la región aparentemente van a experimentar niveles serios de desempleo. El desempleo urbano se ve con miras particularmente de criminalidad, ya que los residentes pueden ser requeridos a pagar por la renta y servicios, y no tienen acceso a las alternativas de subsistencia que se presentan en el campo.

Las definiciones de desempleo varían de manera que es difícil establecer un margen internacional. Sin embargo varios países de la región parecen estar experimentando serios niveles de desempleo. El desempleo urbano es de particular importancia.

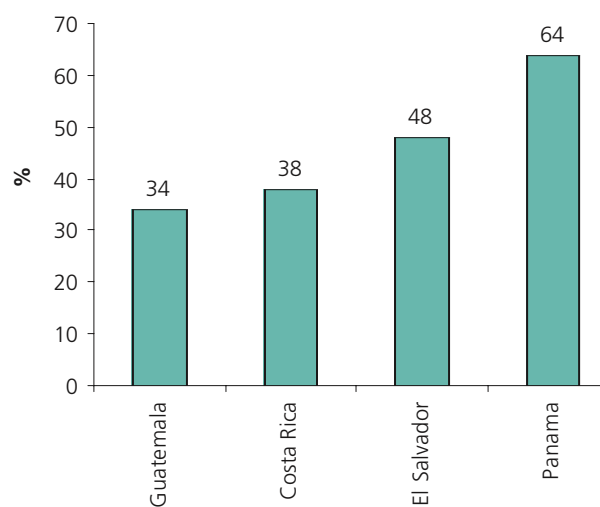
Las cifras oficiales sobre desempleo contrastan con los datos de encuestas. El Latinobarómetro preguntó “¿en los últimos 12 meses ha estado algún adulto en tu hogar desempleado?” El 86% de los salvadoreños dijo “sí”, no obstante el hecho de que el índice oficial de desempleo urbano es únicamente del 6%.

El Salvador ha experimentado una reducción significativa en el desempleo, del 10% en 1990 al 6% en 2004, tal como el caso de Panamá (del 20% al 16%), y mientras la información en años intermedios es escasa, Guatemala se redujo de un 6% en 1990 a un 3% en el 2004.<sup>10</sup> No obstante las reducciones, los índices de criminalidad han crecido en la mayoría de estos países.

Evidentemente, la calidad del empleo es también un factor. En Costa Rica, el 26% de ocupación masculina en zonas urbanas son profesionistas o trabajadores técnicos, el nivel más alto en toda Latinoamérica, mientras que Honduras tiene el nivel más bajo (9%) en 2003. En forma similar, el 8% de la población urbana en Costa Rica son considerados patrones, caso contrario en Panamá que es solamente el 3.5%.<sup>11</sup> El subempleo puede resentirse más que aquéllos que nunca han tenido un empleo formal.

Tal vez el grupo con mayor riesgo son los jóvenes que no están ni en la escuela ni en el trabajo. En la encuesta nacional que se realizó en Honduras, un gran porcentaje de adolescentes declaró que ni trabajaban ni iban a la escuela, incluyendo el 20% de los jóvenes entre 13 y 15 años y el 28% de los jóvenes entre 16 y 18 años.<sup>12</sup> La Gráfica muestra el porcentaje de inscripciones en escuelas de nivel secundaria. Únicamente el 34% de los estudiantes en edad para cursar secundaria se encuentran registrados en Guatemala y Costa Rica que está más desarrollada no tiene mejores índices.<sup>13</sup>

**Gráfica 11: Porcentaje de estudiantes de secundaria inscritos en la escuela**



Fuente: *World Development Report 2006*

Centroamérica tiene una población particularmente joven, quienes son susceptibles a ser atraídos por las pandillas que actualmente son un problema en la región, y los cuales supuestamente están jugando un papel muy importante en el tráfico de drogas de dicha región.

### 1.3 Capacidad limitada de justicia penal

Un elemento del subdesarrollo es la falta de capacidad del gobierno, incluyendo la capacidad de la justicia criminal. En Centroamérica, esta incapacidad es multifacética. Muchos países se encuentran aún en la transición del régimen autoritario a estructuras de cumplimiento con la ley, lo cual implica una pérdida predecible de eficiencia, mientras los servidores públicos aprenden a hacer su trabajo dentro de una democracia. La ciudadanía, de la cual una gran porción ha considerado que el apartado de cumplimiento de la ley es el enemigo, también necesita de tiempo para aprender a confiar y cooperar con las autoridades, ya que persiste la sospecha. En este sentido, existen contratiempos relacionados con la transición, estos pueden verse afectados por la corrupción.

En un nivel más básico, muchos países no cuentan con personal suficiente, equipo o infraestructura para enfrentar los desafíos del crimen con los que se encuentra el país. Esto resulta en una actuación pobre, que pone a prueba la paciencia del público. A menos de que cuente con los recursos suficientes, y sea debidamente dirigida, la desmoralización puede establecerse entre los policías, abogados, jueces y trabajadores de las correccionales, incrementando la vulnerabilidad a la corrupción.

De conformidad con el gasto nacional presupuestado, muchos países gastan una cantidad considerable del paquete fiscal en el sistema de justicia penal. El compromiso remarcable de Honduras aún es inadecuado para producir una policía decente para la razón pública.

Hay estadísticas que indican que Nicaragua es discutiblemente el segundo país más seguro en Centroamérica, y que también indican que este país tiene la más baja capacidad de exigibilidad de leyes, por lo menos según números aproximados. Pero la policía y el sistema de prisiones en Nicaragua es, según la opinión de algunos expertos, la mejor en la región,<sup>14</sup> lo cual sugiere que hay más en cuanto a la capacidad de gobierno que simplemente gasto público.

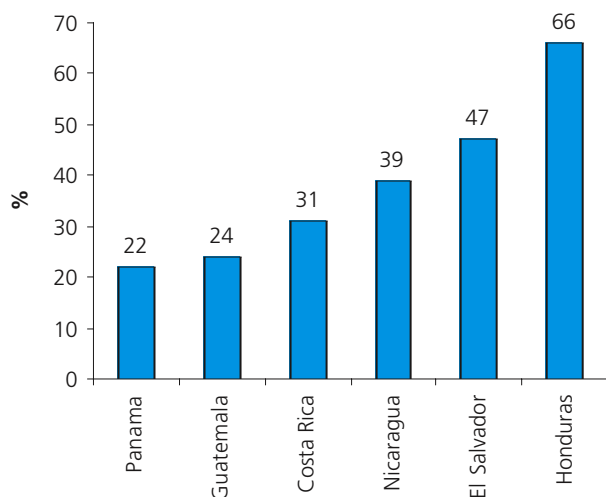
La pobreza no significa que los ciudadanos no tengan confianza en el sistema de exigibilidad de leyes. Dentro de los 18 países revisados en el Latinobarómetro, los hondureños fueron los que más demostraron que su país era el ganador en cuanto a la guerra contra el crimen durante el 2004, así indicándose por dos terceras partes (ver Gráfica 12). De hecho, Honduras fue uno de únicamente dos países en Latinoamérica (el otro es Colombia) en donde la mayoría de las personas entrevistadas, así lo manifestaron. En el caso de

el Salvador, un número menor de entrevistados sintieron que la policía puede ser sobornada (20%), en comparación con los demás países de Latinoamérica, incluso menos que Chile, un país que es generalmente reconocido por su integridad en la exigibilidad de sus leyes (ver Gráfica 13). Adicionalmente, muy pocos salvadoreños consideraron que era posible sobornar a un juez en su país (22%), en segundo lugar después de Chile en términos de confianza en el sistema judicial.<sup>15</sup>

Sin embargo no todos los países de la región pueden decir que han asegurado la confianza pública. La falta de continuidad en el liderazgo ha reducido seriamente los esfuerzos de exigibilidad de leyes en ciertos países. En Guatemala, por ejemplo, entre el 2000 y 2002, el país tuvo cuatro distintos ministros de gobierno, siete directores de policía, y al menos nueve directores de la policía anti-narcóticos.<sup>16</sup> Al menos, en parte, estos cambios se debieron a problemas de corrupción, según se discute en el cuadro en la página siguiente. De acuerdo con la *Transparency International's Global Corruption Barometer 2005*, la policía fue vista por la sociedad como el sector más corrupto de Guatemala.<sup>17</sup>

Revisando los porcentajes públicos de la policía, parecería que

**Gráfica 12: Porcentaje de entrevistados que piensan que su gobierno está ganando la guerra contra el crimen**



Fuente: Latinobarómetro 2004

## ESTUDIO DE CASO SOBRE CORRUPCIÓN POLICÍACA - GUATEMALA

Guatemala ha representado uno de los peores ejemplos en cuanto a corrupción policíaca. El 7 de diciembre de 2005 el ministro del interior de Guatemala Julio Godoy anunció planes para cesar a 1500 de 21000 policías, de los cuales 40% eran jefes de sector por corrupción y estaban involucrados en secuestro de camiones, tráfico de drogas y extorsión. Esta ronda de despidos representa 4000 el número de funcionarios de la Policía Nacional que fueron despedidos en los últimos dos años por haberse involucrado en actividades corruptas, o cerca del 20% de la fuerza policíaca actual. Los índices de corrupción son especialmente altos en la frontera mexicana, según Godoy, "Estamos entregando equipo nuevo, patrullas y armas a la gente que los utiliza para violar la ley. Al final, estamos facilitando estos crímenes." Desafortunadamente, muchos de estos oficiales acusados serán reinstalados después de llevarse a cabo las audiencias administrativas, ya que los casos que se preparan en contra de ellos por la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) es bastante débil y el proceso es muy lento.<sup>18</sup>

Es un área que ha sido particularmente débil en cuanto al tema de narcóticos. Un oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos declaró en el 2002: "La policía robó el doble de cantidad de drogas que la que oficialmente decomisaron, y fueron identificados con ejecuciones extrajudiciales relacionadas a drogas por ambos narcotraficantes y civiles."<sup>19</sup> El 16 de noviembre del 2005, el principal investigador de narcóticos en Guatemala, su auxiliar y otros investigadores fueron arrestados a su llegada a Washington, D.C. El Director del Servicio de Investigación y Análisis de Narcóticos (SAIA) Adán Castillo, pensó que iba a atender un entrenamiento anti-narcótico, pero en cambio fue acusado de conspiración al importar dos toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Irónicamente, unas semanas antes Castillo amenazó en que iba a renunciar si no recibía más apoyo del gobierno y que quejó de la corrupción que imperaba en su departamento. Después del arresto, una gran cantidad de efectivo y

cocaína fueron encontrados en su oficina de Guatemala. La SAIA, la unidad que Castillo encabezaba, fue la organización sucesora del Departamento de Operaciones Anti-Narcóticos (DOAN), la cual fue cerrada después de que hubieron alegatos sobre su corrupción y varios miembros fueron procesados por desviar drogas dentro de los decomisos policíacos.<sup>20</sup> El DOAN también fue acusada por la Administración Contra las Drogas de los Estados Unidos por involucrarse en secuestro y homicidio.<sup>21</sup> Dos de los anteriores miembros de la oficina de inteligencia de Guatemala, los agentes retirados Manuel Antonio Callejas y Callejas y Francisco Ortega Menaldo - les fueron revocadas sus visas americanas ya que se les acusó de estar involucrados en el tráfico de drogas.

La policía de Guatemala también sufrió de varios recortes en el presupuesto. En el 2003, la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) emitió un reporte del estado de la Policía Civil Nacional. MINUGUA encontró que el 50% de los vehículos policíacos estaban en pésimas condiciones de reparación. La desmoralización que resulta de ser un país con pocos recursos, es un posible contribuyente a la situación corrupta.

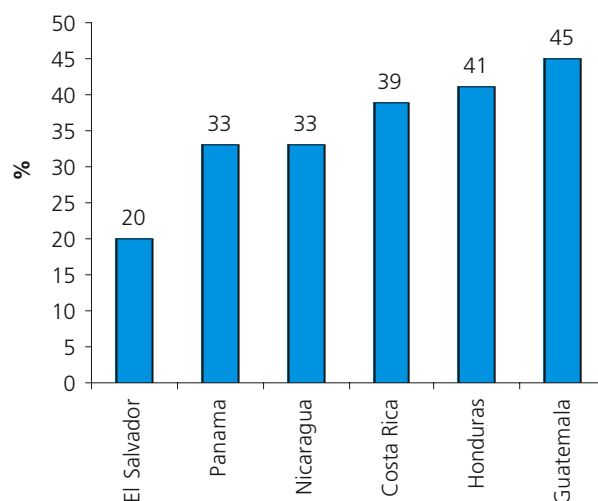
El 19 de febrero de 2007, tres representantes de El Salvador del parlamento centroamericano (Parlacen) en Guatemala fueron matados después los inexplicablemente han salido de su caravana oficial. Sus asesinos fueron identificados rápidamente: el jefe de la división criminal de las investigaciones de Guatemala y tres de sus empleados. Uno de estos hombres ha alegado dijo los habían sido empleados para secuestrar una carga de cocaína, valorada en 5 millones de dólares, que llevaba el coche. Los hombres nunca podían elaborar, por que todos fueron matados en la prisión el 25 de febrero. Algunos alegaron que Mara Salvatrucha eran responsables, y cuando fue anunciado que una fuerza policia-militar común de 400 hombres ocuparía la prisión, los miembros del MS rebelaron y tomaron algunos guardas rehén. Después este incidente, el ministro interior Carlos Vielmann presentó su dimisión.

Panamá es el país con mejores recursos en Centroamérica con respecto a personal, con un nivel de cobertura que excede a los porcentajes vistos en países como Estados Unidos y el Reino Unido. El Salvador y Costa Rica también cuentan con una cobertura adecuada, al menos frente a los números. Recientemente, se tomó en El Salvador, la decisión de contratar 2000 miembros más de la policía, incrementando la fuerza policíaca en un 12%. Guatemala, se encuentra similarmente carente de recursos. Su *Servicio de Investigación Criminal* cuenta con menos de 100 funcionarios para todo el país.

Lo bien que estos policías están funcionando es algunas veces expresado en términos de su índice de éxitos, o el porcentaje de crímenes registrados que resulta en la imposición de cargos hacia el que ofende. Hay una amplia variación en el comportamiento de los departamentos policíacos en este aspecto. Existen índices de resolución excelentes que se registraron por los departamentos de policía de Nicaragua (81%) y Costa Rica (82%).

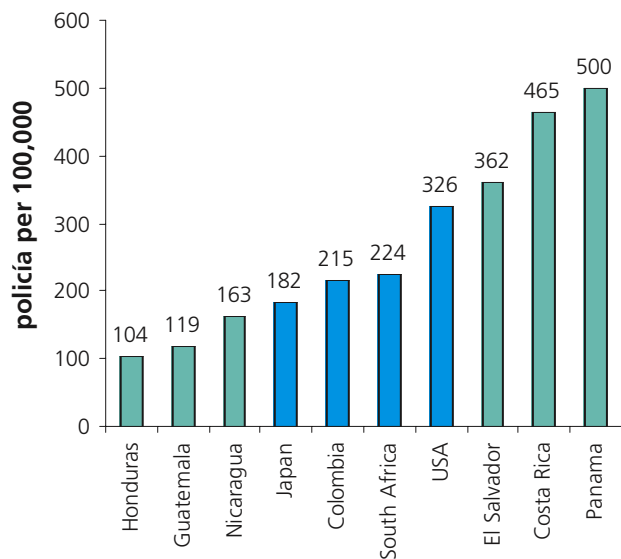
El Salvador no tiene tan buenos índices, con un índice de resolución del 44%. En Guatemala, únicamente 197 de los más

Gráfica 13: Porcentaje de entrevistados que consideran que es posible sobornar a un policía en su país



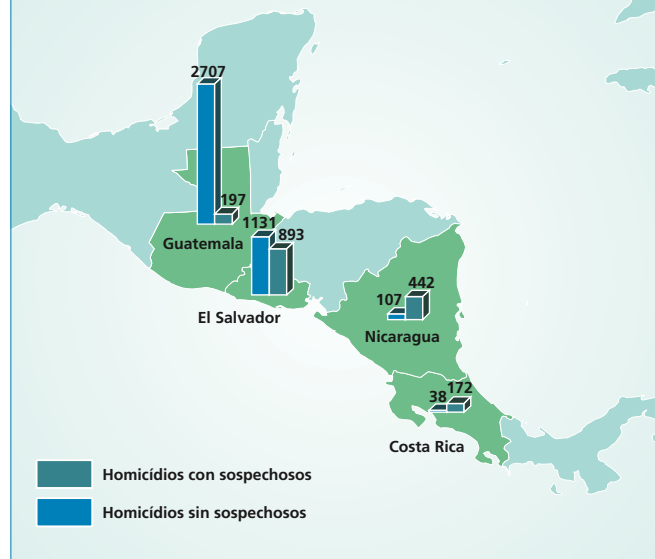
Fuente: Latinobarómetro 2004

**Gráfica 14: Policía por cada 100,000 habitantes (varios años)**



Fuente: UNODC CTS, CEJA<sup>23</sup>

**Gráfica 15: Numero de homicidios resueltos (varios años)**



Fuente: UNODC CTS

de 2900 asesinatos en el 2000 fueron resueltos, por un índice del 7%. Los índices mejoraron en el año anterior, sin embargo 423 sospechosos fueron identificados de 2655 asesinatos (16%).

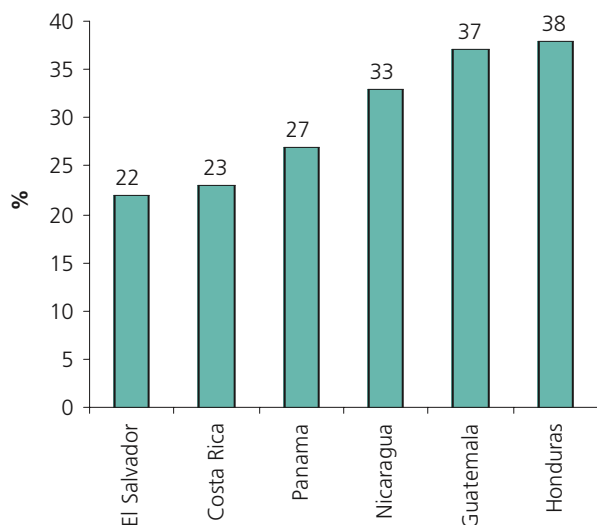
Pero aún en los casos en los que se tienen identificados a los sospechosos, las investigaciones no logran ser lo suficientemente fuertes como para mantenerse en juicio. Los reportes de los periódicos, indican que en el 2005, únicamente hubo 115 juicios por homicidio exitosos, de alrededor de 5338 casos reportados. Si es correcto, los homicidas en Guatemala, tenían una posibilidad de alrededor del 2% de enfrentarse a juicio.<sup>22</sup> En tal clima, el efecto disuasivo de la ley es mínimo. A diferencia de El Salvador, a policía de Guatemala nunca llevó a cabo una reforma integral al procedimiento, y lo anterior se refleja en su reputación y en su actuación.

Mientras que la policía tiene la mayor atención, los tribunales también son objetables en Centroamérica. Meses de trabajo policiaco honesto puede ser eliminado cuando los tribunales no hacen la justicia. La efectividad de los tribunales se ve seriamente impedida cuando los fiscales y jueces pueden ser intimidados o pueden ser removidos por el crimen organizado. De acuerdo con Amnistía Internacional, “[el] problema de más presión en la administración de justicia en Guatemala es la falta de seguridad personal de todos aquellos involucrados en el proceso judicial ...”<sup>24</sup> La lista de ejemplos de intimidación judicial y legal no tiene fin. En Guatemala en diciembre de 2002, un grupo de hombres armados trataron de matar al procurador Carlos de León Argueta cuando ordenó la investigación de varios funcionarios militares en servicio y retirados, incluyendo al General Luis Francisco Ortega Menaldo, Coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, Coronel Napoleón Rojas Méndez, General Retirado Manuel Antonio Callejas y Callejas, y Mario Roberto García Catalán. Estos hombres se encuentran dentro de los “poderes ocultos” que rigen al país.<sup>25</sup> La intimidación más tarde tuvo éxito cuando se persuadió a dos fiscales a que renunciaran a sus cargos.<sup>26</sup>

Los jueces en Guatemala han están bastante involucrados en casos de corrupción. En testimonio ante el Congreso de los Estados Unidos, la cabeza de operaciones del *Drug Enforcement Administration* (DEA) registró la historia del juez Delmi Castañeda, quien en diciembre de 2001 aceptó miles de dólares para eliminar un caso en contra de traficantes de drogas. Hasta se vio que esta juez transportaba a los acusados en su automóvil.<sup>27</sup> Guatemala no es el único en este respecto, claro está. Un número equivalente de entrevistados han determinado que es posible sobornar a un juez en Honduras como en Guatemala (ver Gráfica 16).

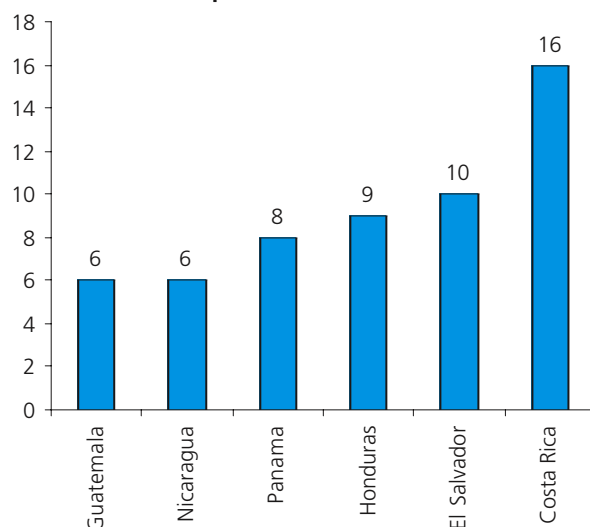
El sistema correccional recibe ímpetu de otros sectores, y generalmente tiene poca capacidad para regular su propia carga de trabajo. Idealmente, la intención es rehabilitar a los acusados para que no vuelvan a cometer crímenes, lo cual, a largo plazo, debiera reducir la población de las prisiones en términos generales. En la práctica la mayoría de los sistemas correccionales se ven afectados simplemente en capacitar a los acusados mientras aseguran durante su estancia su propia seguridad. En los países desarrollados especialmente,

**Gráfica 16: Entrevistados que dicen que es posible sobornar a un juez para obtener una sentencia menor en sus países**



Fuente: Latinobarómetro 2004

**Gráfica 17: Jueces por cada 100,000 habitantes**



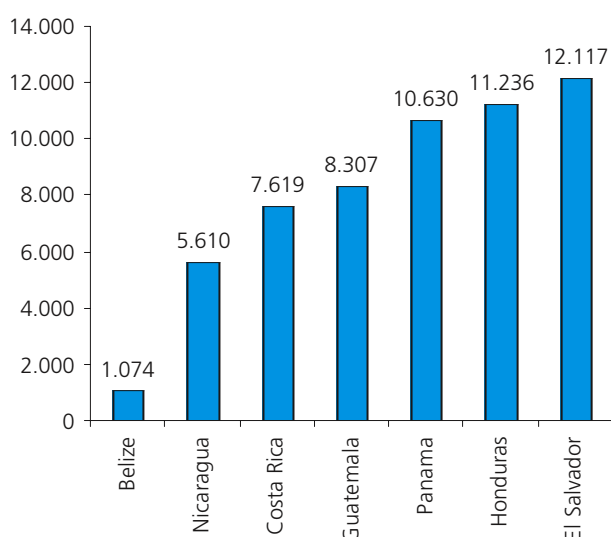
Fuente: Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Reporte de la Justicia: Segunda Edición (2004-2005); UNDP, Democracy in Latin America – Statistical Compendium 2005

medidas “extremas” por la policía (tal como el incremento del número de arrestos) y justicia (incluyendo la negación a fianza y sentencias más largas) puede reducir las correcciones a una fuente de violaciones a derechos humanos per se.

En una encuesta global por parte del *International Centre for Prison Studies*, de 211 países, Belice presenta problemas relacionados con el sistema penitenciario y un alto porcentaje de la población encarcelada.<sup>28</sup> En varios países en esta región, la población en prisiones está creciendo de manera galopante. La población en prisión tiende a incrementarse en El Salvador (50% en los últimos tres años) es particularmente notable.<sup>29</sup> El bajo porcentaje de Guatemala en el encarcelamiento, puede tener más que ver con la inhabilidad de apresar a los convictos que por una decisión de policía, para mantener los números de gente en prisión bajos.

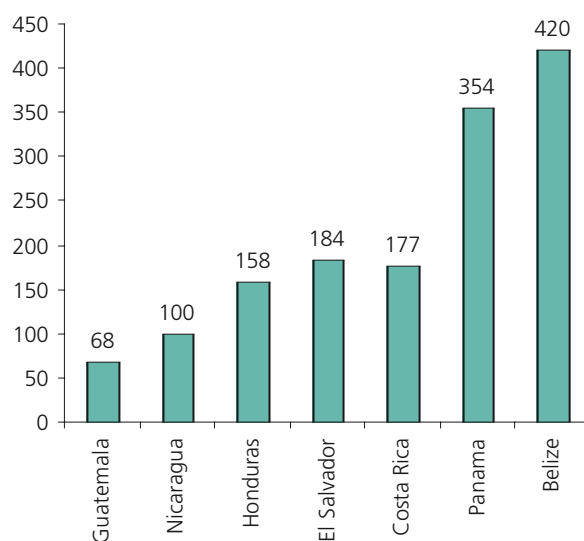
Algunos países más pobres tienen que asumir la carga de la criminalidad de sus vecinos. En países como Panamá y Costa Rica, por ejemplo, que son utilizados por traficantes de otros países y que atraen inmigrantes debido a su afluencia relativa, cerca del 9% de la población en prisiones es de extranjeros.<sup>30</sup>

**Gráfica 18: Población en prisiones**



Fuente: International Centre for Prison Studies

**Gráfica 19: Prisioneros por cada 100,000 habitantes**



Fuentes: International Centre for Prison Studies

Una buena medida de eficiencia de la justicia criminal es el porcentaje de prisioneros que aguardan juicio. Los prisioneros que permanecen en suspensión más no están detenidos presentan un problema para el sistema criminal judicial, ya que no han sido acusados de nada, sólo ocupan un espacio que pudiera estar ocupado por prisioneros ya acusados y no pueden participar en actividades de readaptación. Idealmente, estas cifras debieran ser mínimas, debido a un sistema de fianzas que funcione y un proceso expedito de casos. Sin embargo, varios elementos pueden interferir con este proceso, incluyendo cuellos de botella en el proceso de justicia criminal, debido a los recortes de recursos o demoras procesales.

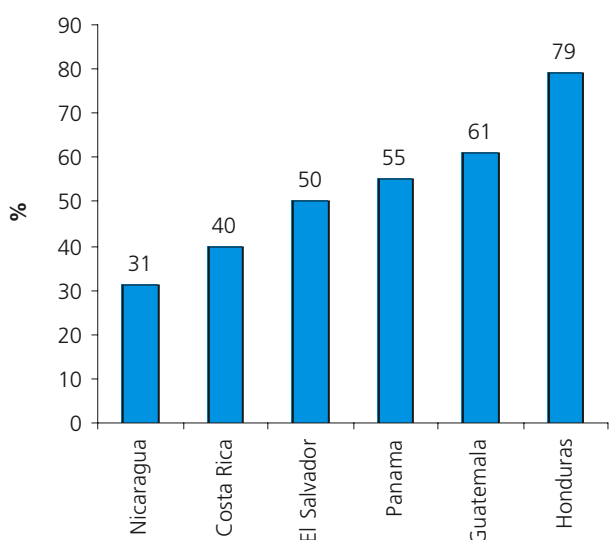
Sólo en Costa Rica y Nicaragua tienen más de la mitad de los prisioneros que han recibido sus condenas en Centroamérica. En Honduras, un 79% de los prisioneros se encuentran aguardando juicio.

El indicador final de la sobrecarga de centros correccionales es el índice de sobrepoblación en las prisiones. La sobrepoblación también representa una violación a los derechos humanos de los prisioneros, y debilita seriamente la función de rehabilitación en los sistemas correccionales. La información presentada en la gráfica siguiente es la más reciente, sin embargo algunos datos no son tan recientes. Por esta razón, la gráfica no debe considerarse como un indicador actual del nivel de sobrepoblación en el sistema penitenciario de cualquier país en particular, sino que se ofrece para demostrar el rango de niveles de sobrepoblación que los países experimentan en esta región en los últimos años.

Otra manera de representar un sistema correccional sobrepoblado es el índice de prisioneros contra el personal correccional. Claramente, cuando un individuo es responsable de cientos de prisioneros, y los niveles de automatización son bajos, los prospectos de rehabilitación son limitados. La seguridad de los prisioneros puede también verse comprometida. Aunque nuevamente estas cifras corresponden a varios años y no puede decirse que representan la situación actual, el número de internos por cada miembro del personal ha variado considerablemente en la región.

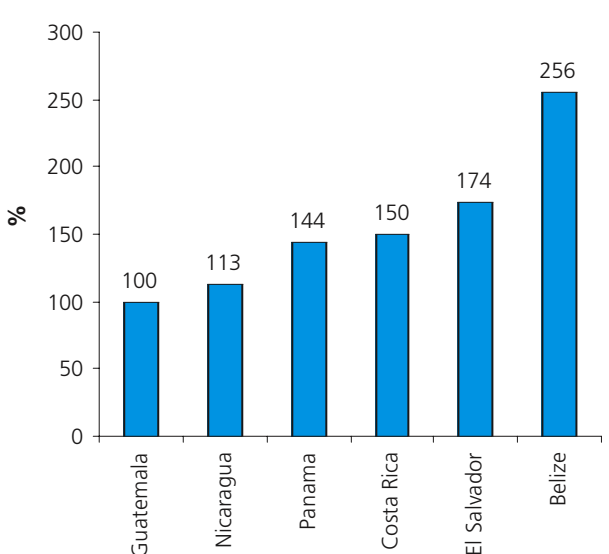
Como se discutirá más adelante, la membresía a las pandillas es un problema mayor en Centroamérica, y como es el caso en otros lugares, los conflictos de pandillas se extienden a los prisioneros. El 15 de agosto de 2005, un rompimiento dentro de

**Gráfica 20: Porcentaje de prisioneros esperando juicio**



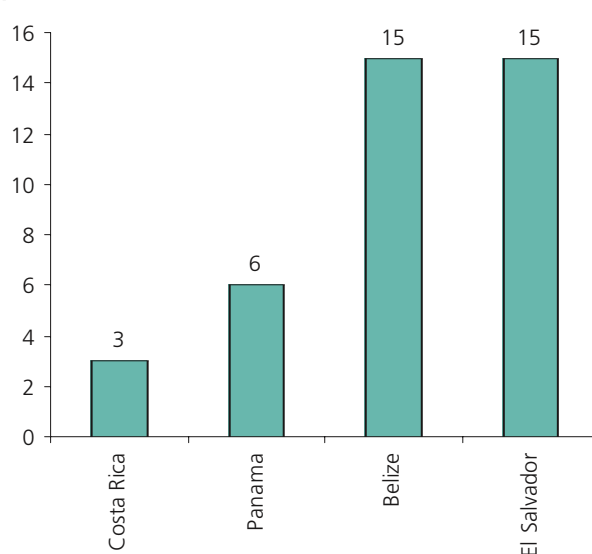
Fuente: UNDP, *Democracy in Latin America – Statistical Compendium 2005*; UNODC CTS, latest data available

**Gráfica 21: Porcentaje de literas por prisioneros en prisiones**



Fuente: CTS, diferentes años

**Gráfica 22: Número de internos por cada miembro del personal**



Fuente: UNODC CTS, datos disponibles más recientes

la Mara Salvatrucha ocasionó que miembros de prisiones en Guatemala resultaran en más de 30 muertos y más del doble fueron heridos. El ataque inicial se llevó a cabo en la prisión El Hoyón, cerca de la ciudad de Guatemala, se utilizaron granadas de mano, entre otras armas. De acuerdo con los prisioneros heridos, un guardia penitenciario fue visto ingresando a la prisión esa mañana con una maleta llena de armas.<sup>31</sup> Los ataques posteriores incluyen un ataque por los miembros de la MS en el centro de detención juvenil San José Pinula el 19 de septiembre de 2005, utilizando armas automáticas y granadas de mano que mataron por lo menos a 12, hiriendo a más de 10.<sup>32</sup>

Las prisiones en algunos países también tienen una tendencia alta de sufrir incendios. En mayo de 2004, 104 internos, la mayoría miembros de pandillas, murieron en un incendio en San Pedro Sula en Honduras. Los internos en ese caso alegaron que los guardias querían que murieran y respondieron a sus llamados con disparos de armas. Un año anterior, otro incendio en una prisión de Honduras mató a 68 prisioneros, la mayoría de ellos miembros de pandillas.<sup>33</sup>

## 1.4 Una historia de conflicto y autoritarismo

Además de las condiciones sociales presentes y la falta de capacidad del estado, otro punto importante acerca de la vulnerabilidad criminal se refiere a la historia de conflicto político. Mientras que muchos países y territorios han disfrutado de la paz desde su independencia, por lo menos la mitad de la población de la región vive en países que han experimentado una guerra o condiciones similares a una guerra en las últimas cuatro décadas. El impacto de esta violencia es muy profundo, y las repercusiones hoy se manifiestan:

- *Trauma psicosocial* – la violencia política impacta a víctimas de la misma manera que la violencia criminal, y puede resultar en un trauma psicosocial general. La violencia se puede convertir en un proceso “normal” en comunidades en las que muchas personas están expuestas a brutalidad, la cual puede ser tácitamente aceptada como una manera legítima de resolver disputas, particularmente donde el estado continúa considerándose como incompetente, corrupto o parcial. Los “ciclos de violencia” pueden infectar comunidades al verse que las víctimas ventilan su furia y reclaman sus derechos y se convierten en perpetradores, y las descargas de los ataques pueden sonar por años después de que las hostilidades hayan terminado formalmente.
- *Educación en conocimientos de guerra* – Los conflictos atraen armas pequeñas en un área y enseñan los conocimientos prácticos y psicológicos requeridos para su uso. También enseñan las habilidades de tráfico y organización criminal, para ambos los insurgentes así como los agentes del gobierno, incluyendo milicias patrocinadas por el estado. En ausencia de programas de movilización adecuados para los combatientes anteriores, los conocimientos de combate pueden ser los únicos conocidos por una generación de jóvenes sin identidades alternativas u oportunidad de empleos. Estas habilidades se aplican fácilmente en el pandillerismo, crímenes y tráfico entre fronteras.
- *Pérdida de capacidad y legitimidad de estado* – Una historia de conflicto y la respuesta autoritaria del gobierno a ello, puede seriamente disminuir el estado democrático. A un nivel práctico, la infraestructura puede dañarse, limitando la habilidad del estado para proporcionar servicios y extender la gobernabilidad a las áreas más remotas del país. De manera más abstracta, el pasado autoritario puede generar una cultura eterna a la resistencia del poder estatal, especialmente si no se hace esfuerzo alguno para reconciliarse con el pasado. Varios estados autoritarios, especialmente al afrontar sanciones internacionales, se tornan ciegos hacia la corrupción en el servicio civil (incluyendo abuso de poder en los servicios de seguridad) en tanto no interfiera con la insurgencia. Estos civiles pueden continuar con sus actividades después de la llegada de la democracia e impartir su cultura de corrupción a sus sucesores.
- *La militarización de la policía* – La policía autoritaria engendra malos hábitos en los servicios de seguridad y frena el desarrollo de las habilidades requeridas para una policía democrática. Al integrar a personal militar en las estructuras de seguridad post-conflicto se exagera la carga militar. La percepción de altos niveles de criminalidad puede alimentar la demanda popular para el uso de la policía militar, o sus tácticas “severas”.

**Cuadro 1: Guerras en Centroamérica**

País	Años	Muertes
Guatemala	1960-1996 (36 years)	200,000
El Salvador	1980-1992 (12 years)	75,000
Nicaragua	1972-1991 (19 years)	60,000

En la última mitad del Siglo 20, se suscitaron tres guerras civiles a escala total en esta región: Guatemala, El Salvador y Nicaragua (ver tabla). Otros países han estado sujetos a gobiernos autoritarios, con una represión violenta de oposición o grupos insurgentes.

**Trauma psicosocial**

La guerra siempre conlleva un trauma psicosocial para los sobrevivientes, especialmente los niños. Pero las guerrillas modernas son particularmente devastadoras para todos los involucrados debido a su naturaleza prolongada, que ataca a civiles, y el uso de tácticas de terror para obtener la dependencia psicológica del enemigo y quienes los apoyan. Los conflictos políticos recientes en Centroamérica muchas veces involucran el uso táctico de la brutalidad. Las técnicas utilizadas por las fuerzas estatales en Guatemala se cuentan a detalle por la Comisión de la Verdad.:

*Los actos tales como matar a niños indefensos, muchas veces golpeándolos contra las paredes o aventándolos vivos en hoyos en donde cuerpos de adultos son luego arrojados; la amputación de miembros; la tortura de víctimas; la matanza de personas cubriéndolas con petróleo y quemándolas vivas; la extracción en presencia de otros de las vísceras de víctimas que estaban vivas; el confinamiento de personas que fueron mortalmente torturadas en agonía por días; la apertura de tumbas de mujeres embarazadas y otros actos atroces similares, no sólo fueron acciones de extrema crueldad en contra de las víctimas, sino que también degradaron moralmente a los abusadores y a aquéllos que inspiraron, ordenaron o toleraron estas acciones.*

La Comisión de la Verdad declara que para los sobrevivientes, especialmente para los niños, el impacto psicológico de estos crímenes es muy alto. Los niños fueron con seguridad víctimas y testigos de la violencia de estos conflictos recientes. Tal y como la Comisión observa, “una gran cantidad de niños estuvieron ... entre las víctimas directas de ejecuciones arbitrarias, desaparecidos forzados, torturados, violados y otras violaciones de sus derechos fundamentales”. Pero los soldados juveniles también fueron un factor en estas tres guerras civiles en Centroamérica. De acuerdo con el estudio de Graca Machel sobre el impacto de la guerra en los niños “ En [Nicaragua] ... los niños han sido incluso obligados a cometer atrocidades contra sus propios familiares o comunidades.”<sup>34</sup> Las mujeres también fueron un punto de ataque, y las violaciones masivas fueron usadas como arma psicológica.

Asimismo, menos tácticas de terror estatales, incluyendo el uso de técnicas para “desaparecer gentes” y escuadrones de la muerte, son tácticas específicamente diseñadas para disminuir la fuerza psicológica de los insurgentes. Por otro lado, la “baja intensidad de guerra” peleada por las guerrillas fue también dirigida para erosionar la voluntad del estado y quienes los apoyaban para pelear. Los resultados en cada caso fueron luchas agonizantes en la que ninguna persona fue intocable y nadie se sintió seguro por un periodo prolongado. De acuerdo con la Comisión de la Verdad de Guatemala:

*El terror ocasionado no sólo fue resultado de los actos de violencia o las operaciones militares; sino que se generó y sostuvo también por otros mecanismos relacionados, tales como impunidad para los violadores, extensivas campañas para criminalizar a las víctimas y el involucramiento forzado de civiles en la secuencia causal que conllevó a que se llevarán a cabo las actuales atrocidades. Por estas razones, el terror no desaparece automáticamente cuando los niveles de violencia disminuyen; por el contrario, existen efectos acumulativos y de largo plazo los cuales para sobrellevar, requieren tiempo, esfuerzo y la experiencia directa de que las cosas han cambiado (énfasis añadido).*

Después de años de lucha, la violencia puede ser un efecto normal. De acuerdo con el ganador del premio sobre derechos humanos en Guatemala, el periodista Marielos Monzón, “La brutalidad de los crímenes cometidos durante el conflicto armado nos dejó como una herencia trágica; tenemos una sociedad azotada por la violencia y que está acostumbrada a ella.”<sup>35</sup>

El impacto de la guerra en la salud mental de los sobrevivientes de esta región ha sido sujeto a varios estudios. Estos han visualizado una prevalencia de un desorden de estrés post-traumático (PTSD) en los participantes. Por ejemplo, un estudio de exrefugiados en un área rural de Nicaragua, una cuarta parte de los hombres y la mitad de las mujeres tuvieron PTSD.<sup>36</sup> En un estudio de centroamericanos que se fugaron de las luchas y que actualmente viven en los Estados Unidos, más de la mitad fueron considerados que sufrían

de PTSD.<sup>37</sup> Una encuesta en 183 hogares en cinco campos de refugiados mayas en Guatemala que se encuentran en Chiapas se encontró una prevalencia del 12% con PTSD.<sup>38</sup> El PTSD se puede manifestar en una amplia gama de problemas de conducta, que incluyen enojo, violencia, alcoholismo y otras conductas auto-destructivas. Los niños que tienen PTSD pueden experimentar traumas secundarios, que pueden causar una transmisión entre generación sobre los efectos de la guerra.<sup>39</sup>

#### ESTUDIO DE CASO SOBRE TRAUMAS DE GUERRA - EL SALVADOR

El Salvador representa un buen estudio de caso de la manera particular en que la guerra civil brutal puede dejar heridas a largo plazo en la población. La guerra fue la culminación de una larga historia de represión. El Salvador sufrió una serie de dictaduras militares, alineadas con y apoyadas por élites comerciales, especialmente aquéllos involucrados en la industria del café. Entre 1931 y 1992, los líderes militares se opusieron a las protestas populares con violencia, que en varias ocasiones fueron en contra de las organizaciones de la Iglesia Católica promoviendo reformas, en lugar de los militares armados. Los sucesos llegaron a un límite a finales de los 70's, y se desató una guerra civil brutal en el Salvador entre 1980 y 1992, en la que se estima que 75,000 personas murieron y otras sufrieron severas violaciones a sus derechos humanos.

La historia de la violencia y opresión estatal ha tenido un impacto muy profundo en la sociedad salvadoreña. Algunos puntos interesantes en la forma en que el conflicto continúa afectando la vida de personas normales ha sido presentada por Phillipe Bourgois, un antropólogo que realizó trabajo de campo en un pueblo en El Salvador en 1981 y que ha regresado al área de estudio recientemente.<sup>40</sup> Bourgois encontró que, a pesar de haber "ganado" la lucha política, muchos de los sobrevivientes de la violencia viven en un mundo de trauma sin tratamiento, incapacidad, dudas, y recriminaciones. La experiencia de la "culpa del sobreviviente" está bien documentada y se incrementa de manera importante por un sentido de complicidad en la tragedia. Tal como Bourgois declara:

*El liderazgo [insurgente] fue dividido mediante la política de promover - y en ocasiones demandar - a los civiles y a los miem-*

*bros de familias de luchadores a que permanecieran en las zonas de guerra. Las esposas en muchas ocasiones se encontraban en desacuerdo sobre este tema. En retrospectiva, algunas madres en ocasiones responsabilizan a los padres por la muerte de sus hijos porque éstos insistieron en permanecer en sus pueblos de origen para apoyar la [insurgencia].<sup>41</sup>*

Bourgois describe cómo el pasado divide a comunidades y como los sobrevivientes viven sobre los errores cometidos durante la lucha:

*... que personas heridas hubieran sido abandonadas y dejadas al enemigo; que un niño en particular con capacidades cognoscitivas fue dañado permanentemente por una sobredosis de cinco pastillas de valium suministrada por su madre para silenciar su llanto durante la lucha; qué luchadores desertaron; cómo se habrá sentido disparar a un amigo en la cabeza cuando estaba herido para que el enemigo no lo capturara y torturara para revelar la entidad y ubicación de las guerrillas; cómo se habrá sentido ser un padre que forzó a su hijo aterrado de catorce años para unirse a la guerrilla únicamente para que lo mataran por armas aéreas en su primera salida.<sup>42</sup>*

Estos trágicos sacrificios son particularmente mortificantes ya que varios de los excombatientes no están materialmente mejor en la era democrática:

*Debido a la falta de tierra, los pueblerinos son forzados a labrar terrenos empedrados y rurales. Al agregar mayor insulto a las injurias, las heridas profundas de la guerra dificultan a muchos de los jóvenes a siquiera ingresar a sus milpas.<sup>43</sup>*

Al final, el trauma de la guerra y sus números ocasionó a algunos de los pueblerinos traumatizados al alcoholismo, violencia doméstica y homicidio.

#### Educación en las habilidades de guerra

La guerra equivale al suministro de armas y la habilidad para usarlas. Se requieren habilidades técnicas para operar un arma de fuego – se requiere estar listo psicológicamente, y este estado mental se aplica muy rápidamente en países afligidos por violencia política. En las guerras civiles, pocos no tienen acceso a las armas y el impacto de esta educación dura toda una vida.

Asimismo, el tráfico y la organización encubierta son habilidades importantes de la guerra civil. Los insurgentes necesitan aprender a traficar, recibir armas y otros apoyos. Particularmente como los fondos de la Guerra Fría se acabaron, el tráfico de drogas se convirtió en un recurso importante para el financiamiento. Las estructuras estatales también se vieron involucradas, ya sea porque el poder dado a las fuerzas de seguridad durante los tiempos de guerra se vuelve una fuente de corrupción para evadir sanciones internacionales, o porque hay una necesidad de financiamiento fuera de libros para las operaciones encubiertas.

La aplicación más obvia de las habilidades de la guerra en los periodos post-conflicto es el crimen organizado, particularmente para jóvenes cuya educación fue interrumpida por el conflicto. Tal como el *Human Rights Watch* declara, "Educados sólo en la guerra, exsoldados jóvenes son en muchas ocasiones llevados al crimen o son presas fáciles para futuros reclutamientos."<sup>44</sup> Y la forma más obvia de crimen organizado para involucrarse es la que ha sido por mucho tiempo la clave en el esfuerzo de la guerra en Centroamérica: el tráfico de drogas.

El vínculo histórico entre el tráfico de drogas, el crimen, la insurgencia y las estructuras estatales en Centroamérica ha estado bien documentado. El Subcomité de Narcóticos, Terrorismo y Operaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos, bajo el liderazgo del senador John Kerry, condujo una investigación entre 1986 y 1989 sobre los vínculos entre las actividades de los Estados Unidos en la región y el tráfico de drogas. Esto concluyó, "los carteles [de la droga] han estado involucrados con los gobiernos y movimientos terroristas similares en toda Latinoamérica."<sup>45</sup> Hoy en día, 15 años después, los principales partidos políticos e incluso algunos individuos, permanecen en las mismas circunstancias.

Como resultado, miembros ejecutivos de los gobiernos de Latinoamérica, principalmente en estructuras de seguridad, han sido acusados de estar involucrados en tráfico de drogas u otra actividad criminal. En Centroamérica, el expresidente de Panamá, General Manuel Noriega, está cumpliendo una sentencia de 40 años en una prisión de los Estados Unidos por tráfico de drogas. Las cabezas de las agencias de drogas de Panamá y Guatemala fueron arrestados por tráfico de droga en octubre y noviembre de 2005. Dos ex generales que dirigían la agencia de inteligencia en Guatemala les fueron canceladas sus visas para los Estados Unidos debido a su involucramiento en el tráfico de drogas. Tal y como Ana Arana describe:

*En la medida en que el tráfico de drogas se fue al norte, las oportunidades de ingresos y poder que proporciona han sido explotados rápidamente por varios de los mismos grupos que pelearon las guerras civiles de los 80's. En los nuevos conflictos de Centroamérica, los ingresos han desplazado a la política como la ideología gobernante ... la guerra entre la violencia criminal y política ha comenzado a borrarse.<sup>46</sup>*

#### ESTUDIO DE CASO EN EL APRENDIZAJE PARA MATAR Y TRAFICAR - GUATEMALA

En Guatemala, cerca del 10% de la población total, aproximadamente 1 millón de hombres, fueron forzados a participar en patrullajes guiados militarmente y en defensa propia. Estos mismos hombres fueron forzados a cometer atrocidades en contra de su propia gente. Jóvenes fueron forzados al servicio en ambos lados de la lucha, y su educación se vio interrumpida consecuentemente. En 1982, por ejemplo, hubo una reducción absoluta en el número de estudiantes de primaria de 37.000. Además como los maestros eran dirigentes importantes de la comunidad, cientos fueron asesinados en la campaña para combatir la insurgencia, ya que parecían sospechosos evidentes.<sup>47</sup>

Después del conflicto, niños huérfanos o perdidos pueden ser obligados a valerse por sí mismos. De acuerdo con la Comisión de la Verdad de Guatemala, "la confrontación armada dejó un gran número de niños huérfanos y abandonados, especialmente entre la población maya, quienes vieron a sus familias destruidas y que perdieron la posibilidad de vivir una niñez normal dentro de las normas de su cultura."<sup>48</sup>

En Guatemala, tanto los funcionarios gubernamentales anteriores y actuales, así como exinsurgentes, han estado vinculados en el tráfico de drogas y otras formas de crimen, incluyendo el silenciamiento de opositores. En 2003, grupos civiles en Guatemala propusieron la creación de una comisión independiente para investigar "grupos clandestinos" y su papel en el crimen organizado y las violaciones a derechos humanos en dichos país. Al unir fuerzas con el ombudsman de derechos humanos en Guatemala, estos grupos crearon la Comisión para la Investigación de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (CICIACS) y aseguraron el apoyo del gobierno. El gobierno del entonces presidente Portillo firmó un acuerdo con las Naciones Unidas en enero del 2004 para crear la comisión. Pero el

proyecto no fue exitoso cuando la Corte Constitucional omitió una opinión negativa al respecto. Después de reunirse con funcionarios de la ONU en diciembre de 2005, el Vicepresidente Eduardo Stein reactivó el proyecto y se encomendó la puesta en operación del CICIACS antes de que el gobierno de Berger deje el poder a principios del 2008. La ONU está actualmente trabajando con los funcionarios del gobierno para trabajar en las cuestiones constitucionales y crear un esquema que asegure la aprobación del proyecto en el Congreso.

Los excombatientes de Guatemala han también trabajado en el extranjero buscando oportunidades criminales. Los ex miembros de la élite contrainsurgente de Guatemala, los Kaibiles, han sido arrestados por la policía mexicana debido a actividades de crimen organizado. El entrenamiento de los Kaibiles, de acuerdo con la Comisión de la Verdad de Guatemala:

*... incluye matar animales y comérselos crudos y beber su sangre para demostrar valentía. La extrema crueldad de estos métodos de entrenamiento ... se puso en práctica en varias operaciones llevadas a cabo por estas tropas, confirmando un punto de su decálogo: "El Kaibil es una máquina de muerte."<sup>49</sup>*

Específicamente, parece que los Kaibiles están siendo activamente reclutados por los "Zetas", los ex comandos que pertenecen a la ala de refuerzo del cartel del golfo de México, que están luchando con otros grupos de crimen organizado en México por las rutas de tráfico más lucrativas. El 10 de septiembre de 2005, cuatro ex Kaibiles armados, quienes habían fungido como miembros de la guardia presidencial de Guatemala, fueron arrestados en el sur de México - supuestamente habían sido detenidos por proporcionar seguridad a los jefes locales de drogas.<sup>50</sup> El 30 de octubre de 2005, once guatemaltecos más, algunos con entrenamiento militar especializado, fueron arrestados en esta área.<sup>51</sup>

#### Pérdida de capacidad estatal y legitimidad

El conflicto civil es muy caro. Disminuye la capacidad del estado para resolver problemas de criminalidad y pobreza mediante la reducción de fondos disponibles para estas actividades y la interrupción del comer-

cio normal. El Banco Mundial ha determinado que una guerra civil típica dura siete años, reduce el crecimiento en un porcentaje promedio de 2.2% por cada uno de estos años y la pérdida total del ingreso nacional es típicamente alrededor del 60%.<sup>52</sup> Para Guatemala y El Salvador, la pérdida total debido a guerras civiles se estima que equivale un año entero de producción, o el 100% del PIB, y algunos estiman que esta cifra se ha calculado hasta más alto.<sup>53</sup>

La guerra también destruye la infraestructura vital. Carreteras, puentes, estaciones eléctricas, hospitales y otros puntos estratégicos pueden ser saboteados por los insurgentes. De acuerdo con Graca Machel, “Durante el conflicto armado entre 1982 a 1987 en Nicaragua ... 106 de los 450 unidades de salud suspendieron sus servicios eventualmente como resultado de una destrucción total o parcial ...”<sup>54</sup> La guerra también destruye al capital humano o lo lleva fuera del territorio, cuando se dirige especialmente a las personas bien educadas puede ser devastador. Por ejemplo, existe evidencia de que los profesionistas médicos eran puntos estratégicos de violencia en la guerra civil de Nicaragua.<sup>55</sup>

La violencia de la guerra reduce la credibilidad del estado, particularmente cuando los criminales de guerra no son enjuiciados pero se les permite que mantengan sus cargos durante el periodo post-conflicto para efectos de reconciliación. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua, los políticos y sus funcionarios permanecen en el poder quienes fueron implicados en abusos a los derechos humanos en el pasado. Contrastantemente, el partido en el poder en El Salvador, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) fue fundada por Roberto d’Aubuisson, el padre de la Unión de las Escuadrones de la Muerte *White Warriors* en 1981. El General Efraín Ríos Montt fue un dictador militar y presidente durante una de las peores atrocidades de la guerra. En el 2003, él pudo obtener una resolución de la Suprema Corte que anulaba una prohibición constitucional sobre participantes de golpe de estado elegibles para el cargo de presidente. Él terminó en un tercer lugar, pero permanece como una figura prominente en la política nacional.

Pero uno de los impactos más profundos que la guerra tiene en la capacidad estatal es lo que ocasiona a la policía. En tiempos de conflicto civil los militares asumen responsabilidad del orden interno. Esto tiene efectos a largo plazo en términos de la fuerza policíaca, especialmente cuando el personal anterior de la fuerza de seguridad es transferido a la policía civil. Este efecto es exacerbado cuando los militares reciben ayuda del exterior. Con una fuente de ingresos independiente, los militares son totalmente relevados de todo tipo

#### ESTUDIO DE CASO EN EL POST-CONFLICTO DE SEGURIDAD - EL SALVADOR

En El Salvador, las fuerzas de seguridad visualizaron un incremento masivo en los recursos durante la guerra civil (adquiridos primordialmente a través de la ayuda exterior en la Guerra Fría) y tuvo que aceptar un decremento masivo igual en el periodo de post-conflicto, debido a ambos la pérdida de ayuda y las condiciones para llegar a acuerdos de paz. Asimismo, los niveles tan altos de los militares se vieron purgados ya que estuvieron implicados en violaciones de derechos humanos por las comisión encargada de revisar la evidencia, incluyendo el Ministro y el Vice-ministro de Defensa. Esto resultó en el retiro forzado de un gran número de hombres bien conectados, así como cientos de miles de soldados y policías entrenados. También hubo un periodo de seguridad muy temprano, ya que el número de miembros de las fuerzas de seguridad fue reducido de 60,000 a 6,000 en el curso de unas pocas semanas.

Por supuesto, se tomaron medidas para reintegrar al estado y a los luchadores de la guerrilla, pero estos fueron inadecuados alcanzando únicamente 11,000 de un estimado de 42,000 de excombatientes. Mientras que los exsoldados y policías fueron elegibles a una indemnización equivalente a un año de salario, esta disposición se vio ampliamente interpretada, excluyendo a los miembros de la defensa civil y aquéllos eliminados antes de que se firmara finalmente los acuerdos de Paz. Dos años después de firmados estos acuerdos de Paz, sólo 6,000 de 18,000 exsoldados habían recibido su pago de indemnización. Los programas de distribución de tierras se vieron muy lentos para su implementación, y se dio como

resultado de que un gran número de hombres descontentos experimentaron con el uso de armas.

Los Acuerdos de Paz requirieron que las tres fuerzas policíacas del país fueran disueltas, junto con las patrullas civiles de defensa para-militar, y un servicio nuevo - la Policía Civil Nacional (PNC) - se formó fuera del Ministerio de Defensa. De conformidad con los Acuerdos, por lo menos el 60% de ambos cuerpos policiales y patrulleros regulares fueron reclutados, no teniendo participación en las hostilidades. No más del 20% pudieron ser ex miembros de la policía, y no más del 20% pudieron ser miembros de la ex guerrilla.<sup>57</sup> Los militares fueron claramente excluidos de proporcionar seguridad interna, salvo en el caso que se hubiera ordenado por el Presidente bajo circunstancias extraordinarias. Desafortunadamente, el Presidente de ARENA, Cristiani, rápidamente encontró varias circunstancias extraordinarias, incluyendo la amenaza de robos en las carreteras en 1993, la cosecha de café en el mismo año, y durante las elecciones de 1994. También hubieron patrullas conjuntas con la nueva fuerza policíaca en que los participantes militares rebasaron por mucho a la policía civil.<sup>58</sup>

En oposición también al espíritu del acuerdo de paz, en 1993 el ex líder de la unidad anti-drogas durante el conflicto fue designado por el Presidente para encabezar las operaciones de la división de la nueva PNC. Rápidamente impuso sus rangos ejecutivos con sus ex colegas, y comenzaron las violaciones a los derechos humanos.

de responsabilidad que puedan tener hacia el público. El interés de los Estados Unidos en la región se vio incrementado durante las luchas de la guerra fría en los 1980's particularmente en El Salvador, Honduras y Costa Rica. Entre 1984 y 1987, El Salvador recibió más ayuda de los Estados Unidos que Costa Rica, Guatemala o Nicaragua hayan recibido en los últimos 28 años.<sup>56</sup>

A diferencia de El Salvador, los militares permanecen muy fuertes en Guatemala. En Guatemala, entre 1983 y 1986, el gasto en las fuerzas militares fue más alto que el gasto en educación.<sup>59</sup> Aunque en un caso menos extremo hoy, los militares en Guatemala continúan jugando un papel importante en la política nacional. Tal como se mencionó anteriormente, muchos oficiales de gobierno introdujeron drogas durante y después de la guerra. De acuerdo con la Drug Enforcement Administration Agency de los Estados Unidos, en Guatemala:

*Los criminales con conexiones políticas funcionan dentro de varios departamentos del gobierno, incluyendo los tribunales y la policía nacional. La corrupción inmersa ha tenido un efecto mayor en todas las áreas del gobierno guatemalteco, incluyendo el esfuerzo contra las drogas.*<sup>60</sup>

## 1.5 Desplazamiento y deportación

La presencia de un gran desplazamiento de poblaciones puede ser visto como un punto de vulnerabilidad para la inclusión en la criminalidad. Mientras que los vínculos entre la migración y el crimen están sujetos a un debate considerable, no debe de haber duda alguna que el arribo de aquéllos que huyen de la guerra puede ser una fuente importante de presión social en las áreas que no están preparadas para recibirlos. La gente desplazada generalmente llega traumatizada y desorientada culturalmente, con poco dinero y sin conexiones locales. Salvo que haya alguna provisión para su arribo, estas personas generalmente compiten con los locales por espacios vitales, recursos y empleos. En respuesta, pueden enfrentarse a exclusiones xenofóbicas y hasta la violencia. Los migrantes pueden ser vistos como puntos fácilmente para crímenes de todo tipo, debido a su vulnerabilidad inherente. Pasado el tiempo, las áreas afectadas se pueden ver fraccionadas en poblaciones locales y de migrantes, con los jóvenes de ambos grupos puestos al frente del conflicto. Los distintos grupos de defensa pueden mutar a pandillas predatoras, y los ciclos de conflicto pueden entrelazarse salvo que haya alguna tipo de intervención. Las redes de población marginadas pueden incluso ser la base del crimen organizado transnacional. Los elementos de esta secuencia de eventos pueden ser vistos en poblaciones de Centroamérica.

En esta región, un gran número de porcentaje de la población de varios países pueden ser expatriados debido a conflictos políticos. Las poblaciones expatriadas incluyen un gran número de nicaragüenses que fueron expatriados a Honduras y Costa Rica; salvadoreños encaminados a Costa Rica y México; y guatemaltecos que volaron a México; y miembros de todos los estados en conflicto que llegaron como refugiados a los Estados Unidos.<sup>61</sup>

Por ejemplo, en El Salvador, se estima que tres cuartas partes de un millón de personas fueron internamente desplazadas y otro millón de salvadoreños dejaron el país (alrededor del 20% de la población), y la mayoría se dirigieron a los Estados Unidos. Lo que comenzó como una fuga de refugiados muy pronto retomó un *momentum* por sí mismo, y la migración continuó hasta después de que cesara el fuego (ver Gráfica). Y lo que originalmente fue un síntoma de crisis en El Salvador creció hasta convertirse una fuerza de soporte clave. Hoy en día, el ingreso obtenido en los Estados Unidos que se transfiere a lugares vía remesas, ha sido el ingreso más grande de intercambio internacional en el país, equivalente al 16% del PIB.<sup>62</sup>

Estos inmigrantes salvadoreños se establecieron especialmente en el sur de California, un área en donde frecuentemente se habla español, y todos terminan en colonias hispanas de antaño. Estos, desafortunadamente son unas de las áreas más pobres y con índice de criminalidad, tal y como el Distrito de Los Angeles. En esta área, son víctimas de otras pandillas hispanas, y en respuesta, han formado la pandilla notoria hoy en día Mara Salvatrucha como un cuerpo de defensa. Según se discutirá más adelante, miembros de este grupo fueron deportados de regreso a El Salvador durante los 1990s, y trajeron consigo la cultura de pandillas que ellos aprendieron en uno de los barrios más violentos del mundo.

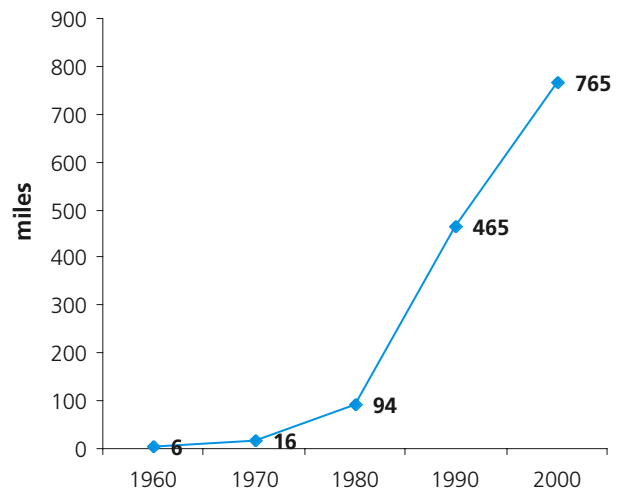
Un flujo similar se puede ver en Guatemala, que empieza con refugiados y continua después con migrantes económicos. En Guatemala se estima que 170,000 familias perdieron sus hogares a principios de los 1980s, lo que representa 850.000 personas. Algunos de los 600,000 se dijo que fueron desplazados internamente, y 150,000 volaron a México.<sup>63</sup> Tal como en El Salvador, estos escapes se deben primordialmente a la estrategia de guerra del gobierno, que involucró directamente la atracción urbana de la clase media y las poblaciones

rurales civiles se cree que proporcionaban apoyo a las guerrillas. Actualmente se estima que 1.2 millones de guatemaltecos viven en los Estados Unidos, de los cuales alrededor del 60% son indocumentados, aunque esta estimación es difícil de reconciliar con las cifras que arroja el censo.<sup>64</sup> Esto es aproximadamente el 10% de la población total de Guatemala.<sup>65</sup> Flujos similares pueden ser vistos en Nicaragua y Honduras (ver Gráfica 24).

Residentes de los Estados Unidos que nacieron en Centroamérica y que respondieron al censo de 1990, arribaron durante la década de los 80s.<sup>67</sup> En otras palabras, estos son los migrantes que arribaron primero y que huyeron de las guerras civiles de sus países respectivos. Más del 75% de los salvadoreños que vivían en los Estados Unidos en 1990 vinieron al país en los 1980s, 20% en los 1970s, y el resto antes de esa fecha. En 1980, sólo 94,000 salvadoreños vivían en Estados Unidos; en 1990 esa cifra se había cuadruplicado a más de 465.<sup>68</sup> El índice de crecimiento ha disminuido – la población un poco menos se duplicó dentro de la siguiente década – pero ha permanecido importante. Una situación similar ocurrió en Guatemala, que casi cuadruplicó su migración durante el período violento de los 1980s.

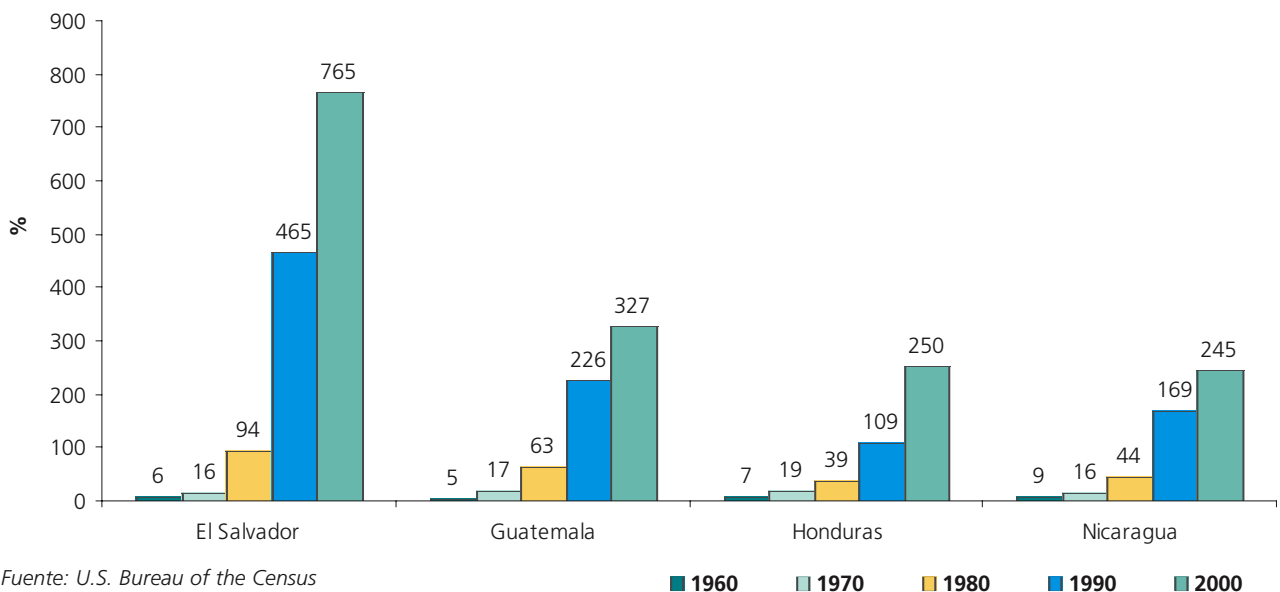
Por supuesto, la presencia de poblaciones migrantes no constituye por sí mismo un problema. Dentro de la región, los migrantes en ocasiones tienen índices menores de desempleo que los propios locales.<sup>69</sup> Los Estados Unidos se fundaron con base en la inmigración, y aún queda una fuerte demanda para las labores, en muchos sectores. En cambio, la investigación ha demostrado que los beneficios de las remesas, que pueden ser de alrededor del 10% de PIB, para Centroamérica. Mientras que las poblaciones de inmigrantes, generalmente se consideran como una fuente delictiva en los Estados Unidos, existen investigaciones que sugieren que la primera generación de migrantes tienen menos probabilidad de tener problemas legales que los nativos.<sup>70</sup> La explicación para esto, es que los migrantes económicos son un grupo selecto de personas con logros y motivación. Pero si enfrentan una marginación continua, sus hijos pueden resentirse justificablemente. Los que menos saben de los problemas de su tierra ancestral, los hijos de migrantes pueden arremeter en contra de las injusticias que ellos perciben, y si no son ciudadanos absolutos de su país de residencia, pueden enfrentar la deportación a un país al que poco conocen. Y es en este caso en el que la migración puede tener su mayor impacto en el crimen.

**Gráfica 23: Personas nacidas en El Salvador y residentes en los Estados Unidos (miles)**



Fuente: Census Bureau<sup>66</sup>

**Gráfica 24: Estimaciones oficiales de los cuatro contribuyentes más grandes en Centroamérica a la población de los Estados Unidos (miles)**



Fuente: U.S. Bureau of the Census

### Deportación criminal

En los ocho años corridos entre 1998 y 2004, los Estados Unidos deportó alrededor de 46,000 convictos a Centroamérica, así como alrededor de 36,000 convictos al Caribe. Estas deportaciones son en adición a los deportados por ser simples residentes sin los permisos o visas requeridos. Las deportaciones criminales involucran a personas que han sido convictos de un delito separado – tal como fraude de inmigración, drogas y crimen violento – en base a esto son devueltos a la fuerza a sus países de origen.

Hay una creencia global en ambos, Centroamérica y el Caribe de que los problemas recientes de crimen se pueden vincular directamente con los deportados criminales. Muchos, se asegura popularmente, entraron a los Estados Unidos a una edad joven, y por tanto su conducta criminal se debe a su educación en ese país. Debido a que sus familias se quedaban atrás cuando eran deportados, se dice que llegaban a Centroamérica sin ningún contacto o sin medios de apoyo. Se dice que muchos de ellos ni siquiera podían hablar bien Español. Por lo tanto se les dejaba con pocas opciones, más que aplicar las habilidades delictivas que aprendieron en Estados Unidos, su nueva tierra natal.

Un gran flujo de criminales deportados, tanto a Centroamérica como al Caribe, representa una de las pocas similitudes entre las dos regiones, mismas que se encuentran experimentando un incremento creciente de las tasas delictivas. Los representantes de CARICOM están tan convencidos de esta conexión, que recientemente recomendaron que la Comisión Interamericana en

Derechos Humanos interviniera para reducir el flujo de deportados.<sup>71</sup> La policía guatemalteca asegura que la mitad de los deportados son miembros de pandillas.<sup>72</sup> Si esto es cierto, las deportaciones criminales podrían representar la mayor fuente de inseguridad de la región.

La primera cosa que se debe considerar al evaluar esta relación, es que una gran proporción de la población de los países de Centroamérica propensa a cometer delitos, actualmente reside en los Estados Unidos. Por ejemplo en el 2005, el Informe de Desarrollo Humano para El Salvador, aseguró que un 20% de la población del país radica en los Estados Unidos.<sup>73</sup> Es posible que esta población, es en promedio, más joven y conformada por más hombres, que la población de el Salvador que se queda en casa, y por tanto, más propensas al crimen. Dado el gran número de migrantes y los guetos urbanos en las cuales muchos de ellos residen, no es de sorprenderse que algunos tengan problemas legales. La pregunta sigue siendo, cuál país es el responsable por la criminalidad.

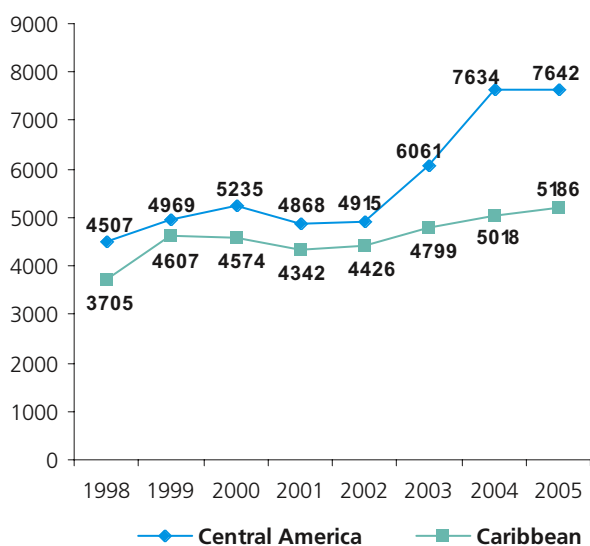
Desgraciadamente, no hay información detallada de los arrestos de extranjeros en los Estados Unidos, pero algunos están

disponibles para el sistema federal de prisiones. Entre 1984 y 1994, el número de ilegales en el sistema de prisión federal de los Estados Unidos se incrementó en un promedio del 15% por año, de un poco más de 4,000 a cerca de 19,000, más de la mitad de aquéllos que estaban en el país legalmente. Dada la jurisdicción de los tribunales federales, tal vez no es de sorprenderse que una gran parte de éstos (35% en 1984; 45% en 1994) fueron acusados por drogas – 42% que involucraron cocaína, 35% que involucró cannabis, y un 19% involucrando heroína en 1994. Mientras que cerca de la mitad de los convictos no ciudadanos a nivel federal anual en 1994 eran mexicanos, los ciudadanos de El Salvador también figuraron prominentemente.<sup>74</sup>

Para mediados de 2004, las prisiones federales y estatales de los Estados Unidos mantuvieron más de 90,000 no ciudadanos, lo cual representaba el 6.5% de la población total de la prisión y más del 20% de la población federal de la prisión. La carga de las prisiones estatales varió considerablemente entre las regiones del país. En el estado de California, que es de alta inmigración, el 10% de los prisioneros eran no ciudadanos.<sup>75</sup> Alrededor del 29% de los convictos federales por drogas durante el 2003 fueron identificados como no ciudadanos, y más de la mitad (56%) tuvo por lo menos un convicto adulto anteriormente.<sup>76</sup>

La preocupación sobre el crimen de los inmigrantes y la demanda que en cuanto a procuración de justicia en Estados Unidos contribuyó a que se llevara a cabo la Reforma de Inmigración Ilegal y el Acta de Respon-

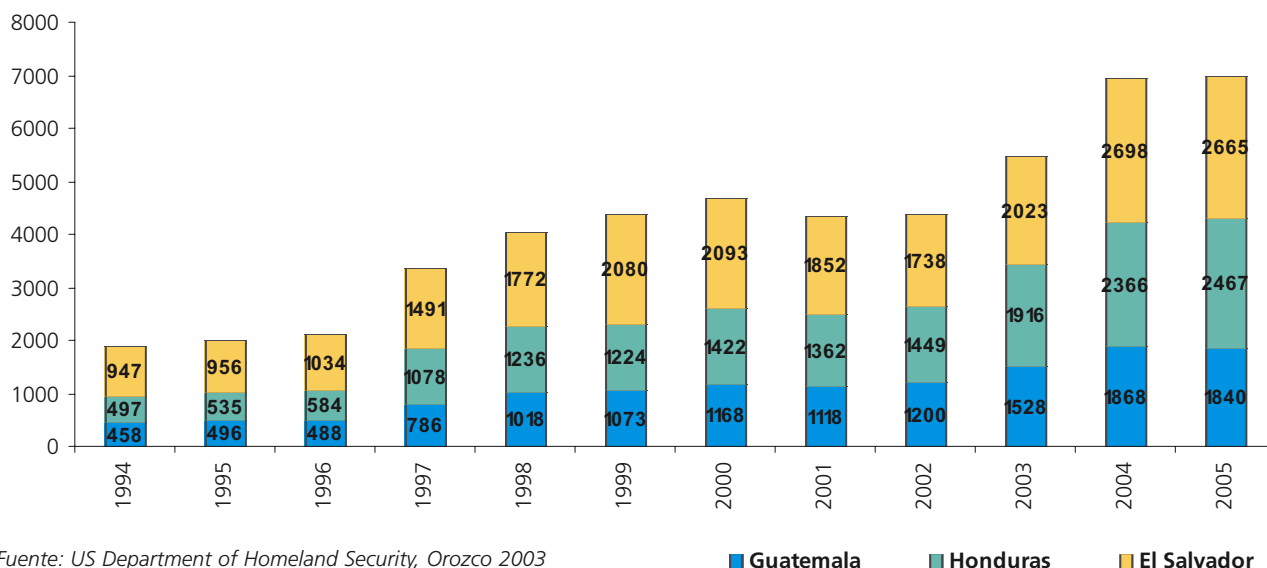
**Gráfica 25: Número total de criminales deportados a Centroamérica y el Caribe**



Fuente: US Department of Homeland Security

sabilidad de Inmigración. Esta Acta hizo cambios significativos al régimen de deportaciones, reduciendo las reclamaciones y expandiendo mayormente la definición de “los crímenes agravados” de deportaciones que incluyó un margen menor de las ofensas.<sup>77</sup> Los recursos también se dirigieron para asegurarse que todo convicto deportable fuera, de hecho, deportado. Como resultado, el número de deportados criminales de los Estados Unidos a la región se duplicó en una década.

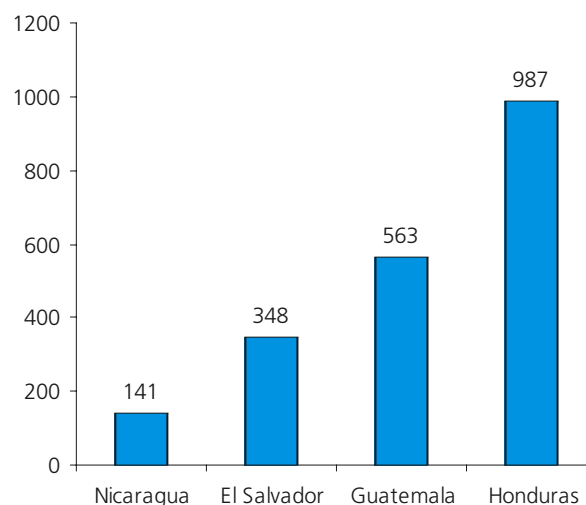
**Gráfica 26: Los tres destinos más importantes en Centroamérica para las deportaciones criminales de los Estados Unidos**



Tres países – El Salvador, Honduras y Guatemala – recibieron más del 90% de las deportaciones hacia América Central en el 2005. No es de sorprenderse que El Salvador, quien tuvo la población más alta de documentados en los Estados Unidos durante el último censo, produce la mayoría de los casos de deportados.<sup>78</sup> Honduras, quien tiene una población de censo relativamente pequeña en los Estados Unidos, produce una gran cantidad de población deportada desproporcionada. Por otra parte, Nicaragua está altamente subrepresentada, quien recibió únicamente 395 deportados criminales en el 2005. Esta puede ser una razón por la cual Nicaragua no tiene el problema de las maras que experimentan sus vecinos del norte. El significado de lo anterior, se puede atribuir a que esas razones son debatibles, aunque se entiende que se basan en datos de censos, pueden capturar diferentes proporciones de población indocumentada, entre los grupos nacionales.

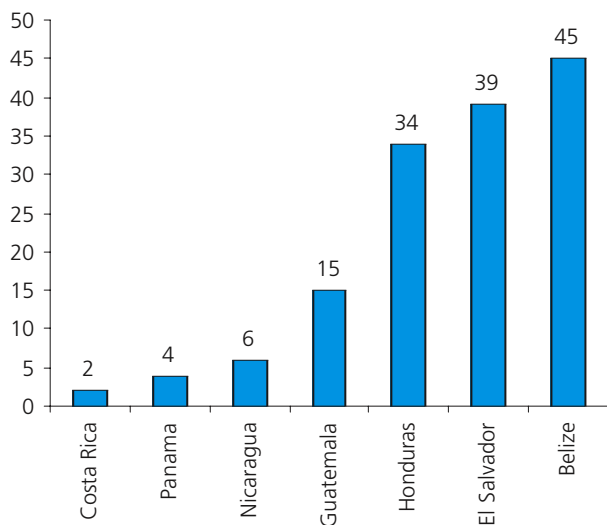
Otra forma de ver estas figuras es, comparar el número de deportados con el número de la población que se recibe, a efecto de calcular cuál país en la región tiene el número más largo en este caso. Aquí, parece que Belice, debido a su poca población, recibe más deportados por persona que cualquier otra nación en la región. El Salvador y Honduras también son altamente afectados. Puede ser, de manera sorprendente, que Guatemala recibe menos de la mitad de deportados per capita que El Salvador y Honduras. Sin embargo ninguno de los países de Centroamérica pueden comprar el impacto experimentado por un país como Jamaica, en donde se recibieron alrededor de 60 deportados únicamente de los Estados Unidos, por cada 100,000 en el 2005, así como también flujos del Reino Unido y de Canadá. Las deportaciones de jamaiquinos del Reino Unido, han incrementado dramáticamente en años recientes, y

**Gráfica 27: Deportaciones por cada 100,000 de población expatriados de los Estados Unidos en el 2005 (basados en los datos de Censo 2000)**



Fuente: Elaborado de los datos del United States Homeland Security y los datos de Censos

**Gráfica 28: Deportados recibidos por cada 100,000 ciudadanos en el 2005**



Fuente: Elaborado por el United States Homeland Security y los datos de UN Population Division

exceden el número de deportados de los Estados Unidos en 2004, sugiriendo que el flujo de deportados, actualmente se encuentra en más de 120 por cada 100,000 personas en Jamaica, que es más de tres veces la tasa en El Salvador.

El impacto de esta deportación criminal está sujeto a un intenso debate. Tal y como se discutirá en la sección siguiente de Pandillas Juveniles, es muy claro que los deportados han tenido un mayor impacto en la cultura centroamericana de las pandillas, sin embargo, es menos claro si son responsables por los incrementos en las tasas delictivas recientes. Es difícil calcular si ciertos deportados han asumido posiciones de liderazgo en las pandillas locales, pero existen razones para dudar que el impacto del flujo general sea tan grande como parece ser inicialmente.

Mientras que es cierto que los números de personas deportadas por crímenes, muchos de los “delitos graves” por los que fueron apresados, son de hecho, relativamente menores. De conformidad con el United States Homeland Security, el 37% de dichos deportados criminales en el 2005, fueron convictos por asuntos de drogas, y al menos una muestra de los deportados estudiados, encontró que alrededor de la mitad de dichas aprehensiones por drogas, eran por posesión, y no por venta.<sup>81</sup> Un 19%

adicional fue deportado por ofensas de inmigración delictiva, que incluían, desde la mentira en documentos de migración, hasta la participación en contrabando de inmigrantes. Entre ellos, drogas e inmigración sumaban alrededor del 56% de las deportaciones criminales. Sólo un 10% fueron arrestados por asalto, un delito violento, pero que se podría referir a un gran rango de actividades, desde violencia intrafamiliar hasta oponerse a un arresto. Robo a casa habitación en un 4% y robo en un 3%. Los homicidios no se registraron entre las 10 principales ofensas en el 2005.<sup>82</sup>

Investigación en Jamaica, el país más afectado por la deportación de criminales, confirma estas tasas, con el 81% de criminales deportados por crímenes no violentos.<sup>83</sup> Según se discute en el caso de estudio en el cuadro a continuación, la investigación también indica que la mayoría de estos deportados entraron al país como adultos, y fueron deportados a una edad mayor de la que generalmente se asocia con los crímenes callejeros y la pertenencia a pandillas.

Así bien, existen razones para dudar que el criminal deportado promedio es el responsable por el tipo de delitos que es de mayor preocupación para los países en Centroamérica. Sin embargo, queda muy poca información para describir los flujos de deportados criminales a la región. ¿Qué tan factible es que los deportados criminales a Centroamérica, comentan delitos tales como el homicidio, violación, secuestro y extorsión a su llegada?

La manera más clara para contestar esta pregunta sería mantener un registro de los deportados recibidos y determinar más adelante qué porcentaje fue acusado de una ofensa. Algo como esto ha sido llevado a cabo actualmente en por lo menos dos países del Caribe: Barbados y Trinidad y Tobago. De 332 deportados criminales que regresaron a Barbados entre 1994 y 2000, únicamente 43 (13 por ciento) habían sido acusados de una ofensa criminal al momento del análisis. Con excepción de un caso de homicidio, la mayoría de los deportados fueron acusados de robo o de asuntos relacionados con drogas. Similarmente, en Trinidad y Tobago, de los 565 deportados recibidos entre 1999 y 2001, únicamente 83 (15 por ciento) habían sido acusados de un crimen, de quienes casi la mitad (47 por ciento) fueron acusados de latrocinio u ofensas de drogas.<sup>84</sup> El periodo durante el cual se hicieron estas observaciones no está especificado, pero estos índices de reincidencia se cree que es menor entre los criminales locales.<sup>85</sup>

Una manera más fácil para llegar a resultados similares, sería comparar la cantidad de deportados criminales con los no deportados que se encuentran en la población de una prisión y la población general. Esto debería indicar si los deportados se encuentran desproporcionadamente representados entre los convictos. Parece que investigaciones de este tipo, que aún no son publicadas, se han llevado a cabo en Jamaica, y se discuten en el cuadro. Los resultados en el parlamento sugieren que los deportados tienen menores posibilidades de ser condenados que los jamaíquinos promedio.

## ESTUDIO DE CASO SOBRE DEPORTACIÓN - JAMAICA

En proporción a su población, Jamaica recibe más deportados criminales que cualquier otro país en la región, incluyendo flujos altos del Reino Unido y Canadá. Esto es en parte como resultado de tener una población muy amplia de expatriados - algunos estimados ubican a la mitad de la población extranjera global nacida en Jamaica. Pero ha habido incrementos recientes dramáticos en el índice de homicidio que conllevó a la presidencia de Jamaica a investigar las causas exógenas.

Entre 2001 y 2004, Jamaica absorbió un promedio de 2700 convictos por año. En 2003, la población de Jamaica en prisiones fue 4744, por lo que el influjo fue equivalente a la liberación de más de la mitad de la población de prisioneros doméstica en la sociedad cada año. En un ejemplo de investigación de Estados Unidos a mediados de los 1990s, alrededor de dos tercios de los convictos liberados volvieron a ser arrestados dentro de un periodo de tres años.<sup>79</sup> Por lo tanto no es sorprendente que los jamaquinos estén preocupados del influjo de conflictos de esta magnitud.

Durante finales de los 1990s, Estados Unidos fue el principal recurso de las deportaciones criminales a Jamaica, pero el Reino Unido ha recientemente superado esta cifra, debido en gran medida a un incremento dramático en el número de deportaciones relacionadas con drogas, posiblemente relacionada con el crecimiento de la industria de la cocaína en ese país, que tradicionalmente estuvo dominado por los grupos de Jamaica "yardie". Estados Unidos deportó más de 200 convictos asesinos y 128 por delitos sexuales a Jamaica entre 2001 y 2004, pero, en total, 81% fueron deportados por ofensas no violentas.

Algunos comentaristas han argumentado que muchos de los deportados dejaron sus países natales a una corta edad y aprendieron el comportamiento criminal mientras estuvieron en el extranjero. Bernard Headley, un Profesor de Criminología en la Universidad de las Indias Occidentales, exam-

inó alrededor de 5000 registros de criminales deportados de los Estados Unidos entre 1997 y 2003. Él encontró que la edad promedio de entrada a los Estados Unidos era de 23 años, cerca de la edad demográfica de alto riesgo de entre 15-25, y menos del 3 por ciento llegó antes de cumplir los cinco años. Headly también examinó la edad en que se llevaba a cabo la deportación, y encontró que la gran mayoría de los deportados ya no eran jóvenes al momento de llegar a Jamaica, teniendo el 62 por ciento 31 años ó más. Normalmente, estos hombres mayores tenían menos posibilidad de reincidir, particularmente con respecto de la violencia en calles con la cual los deportados han sido en ocasiones acusados.<sup>80</sup>

El 12 de septiembre de 2006, el Ministro de Seguridad Nacional, el señor Peter Phillips, anunció a la Cámara de Representantes de Jamaica que un estudio gubernamental encontró que los deportados no tenían más probabilidad que la población general de ser acusados de un crimen. Declaró que 1 de 18 deportados había experimentado una acusación en Jamaica, comparado a 1 en 17 dentro de la población general. Este estudio, el cual todavía no ha sido publicado, aparentemente también generó datos en conflicto, correlacionando incrementos en los índices de crimen con varios tipos de crímenes y condujo entrevistas con un número no especificado de deportados en los cuales muchos confesaron su involucramiento criminal. Desgraciadamente, el estudio no se puso a disposición para su discusión al momento de este estudio.

En resumen, la investigación existente indica que la edad promedio de un deportado criminal de Jamaica al ingresar a los Estados Unidos tenía 23 años, la edad promedio de deportación era 35, y el 81% fue regresado a Jamaica por ofensas no de violencia. Mientras que hay una clara heterogeneidad en el ámbito de deportados, el deportado típico no cumple con el perfil de un individuo que tiene probabilidad de ser un criminal violento a su regreso a Jamaica.

Dada la importancia del problema delictivo para los países de Centroamérica, así como el papel tan importante que juegan las relaciones con los Estados Unidos en las políticas locales, la deportación criminal es factible que permanezca como un asunto difícil, por lo que existe la necesidad urgente de investigaciones que aclaren el asunto. Si de hecho, se puede establecer una conexión entre los deportados y las tasas criminales crecientes, es de interés de todos los países preocupados, que la policía de los mismos busque mitigar dicho efecto.





## 2. Un diagnóstico del estado del crimen en la región

Existen dos áreas fundamentales del crimen en que Centroamérica es remarcable por estándares globales: los volúmenes de droga traficados a lo largo de la región, y las tasas de homicidios. También sucede que estas dos áreas del crimen, son áreas donde los datos cuantitativos son mejores, sugiriendo que puede haber otros aspectos del problema del crimen que no han sido capturados en las estadísticas regionales, debido a aspectos como su baja tasa de ser reportados. Con base en esta información, parece que Centroamérica sufre del flujo de drogas con mayor valor en el mundo. Así como parece tener los índices más altos de homicidio en el mundo.

El grupo que más frecuentemente se culpa por esta situación son las pandillas de jóvenes, o los maras, mismos que se alimentan de flujos de deportados criminales de los Estados Unidos. De hecho, las estrategias anticriminales más prominentes en la región (tales como la llamada mano dura) se enfocan en terminar con este grupo. Sin embargo existen razones para ser escépticos sobre esta asociación simplista. Mientras que las pandillas de jóvenes representan una fuente delictiva, no parecen ser responsables de proporción significativa de homicidios en los países en los que predominan. Su papel en el tráfico de drogas, aún en los mercados locales, es también dudoso, por las razones que se detallan a continuación.

En lugar de ser el producto de un grupo fácilmente identificable, parece ser que la violencia es endémica para muchas sociedades en Centroamérica, y que los maras son simplemente una manifestación intensa de esta violencia entre la población que es generalmente más propensa a involucrarse en derramamientos de sangre: Hombres de urbes marginadas entre las edades de 15 y 24 años. Esto sugiere que si las pandillas se disolvieran el día de mañana (una consecuencia poco probable con la política de la mano dura adoptada a la fecha), la violencia continuaría.

Es también poco probable que estos problemas característicos del crimen – tráfico de drogas y homicidios – se encuentren totalmente ajenos uno del otro. Por ejemplo, Petén, una provincia con un 70% de población rural en Guatemala, tiene el segundo lugar más alto en el índice de homicidios en el país con 116 homicidios por cada 100.000 en 2004), un hecho que se atribuye a su utilización en operaciones de tráfico. La pregunta de quién es responsable por el tráfico de cocaína es un asunto clave para los países de la región, para lograr encontrar soluciones a la violencia. Muchos de los mayores desmantelamientos, han involucrado conexiones con funcionarios del gobierno, especialmente en los servicios de seguridad y justicia. Si esta conexión puede ser establecida, la solución al problema delictivo de la región, tendría que enfocarse primero en los niveles más altos de las sociedades afectadas, y no en los más bajos.

### 2.1 Tráfico de drogas

El primer punto a considerarse sobre el flujo de drogas es que es masivo. Sudamérica produce un aproximado de 900 toneladas de cocaína, la cual se envía a 10 millones de usuarios en los Estados Unidos y Europa, un mercado que vale alrededor EUA\$60 millones según datos de 2003.<sup>86</sup> En el pasado, los volúmenes y el valor fueron mayores. En 1988, Estados Unidos gastó más de EUA\$100 billones en cocaína,<sup>87</sup> que fue mucho mayor que el PIB regional en ese momento. Algo de esta cocaína todavía se dirige directamente de los productores a los consumidores, pero hoy esta es la gran excepción. La mayoría de estas drogas transitan ya sea por Centroamérica o el Caribe o ambos, por tierra, mar y aire. Además, una gran cantidad de heroína y cannabis también se trafica dentro de la región a los usuarios en el norte.

El contrabando de drogas era un recurso importante de ganancias durante las guerras civiles para ambos grupos insurgentes y estatales, y la creciente corrupción combinada con la capacidad limitada del cumplim-

imiento de las leyes han asegurado que los canales de contrabando permanezcan viables. Existen áreas muy poco vigiladas en varios de los países centroamericanos – incluyendo el Parque de la Laguna del Tigre en Guatemala, Mosquita en Honduras, y la costa atlántica de Nicaragua – que proporcionan estaciones ideales para recargar, re-empaquetar y almacenaje. Las diásporas centroamericanas en Estados Unidos y México proporcionan una red de conspiradores atados étnicamente, y el lenguaje común con ambos países productores en México, el punto más importante de contrabando destinado a los Estados Unidos permite a los traficantes de Centroamérica moverse dentro de la región con facilidad. También facilita las conexiones con España, el punto más grande entrada de cocaína en Europa. Las grandes diásporas también significan grandes flujos de remesas y esto proporciona una forma muy conveniente de lavar dinero con la venta de drogas y su devolución a los involucrados en Centroamérica.

La siguiente discusión analiza a cada uno de los mercados de drogas: cocaína, heroína, cannabis y otras drogas.

### Tráfico de cocaína

En los últimos 40 años, el impacto de la demanda de cocaína por los Estados Unidos hacia Centroamérica ha sido muy profundo. Esta región, la cual no produce cocaína y difícilmente pudiera pagar para consumirla, ha sufrido un daño colateral masivo. Es como el ejemplo de un peatonal herido en un tiroteo cercano, ha pagado un precio muy alto por estar simplemente en el lugar equivocado y en el momento equivocado.

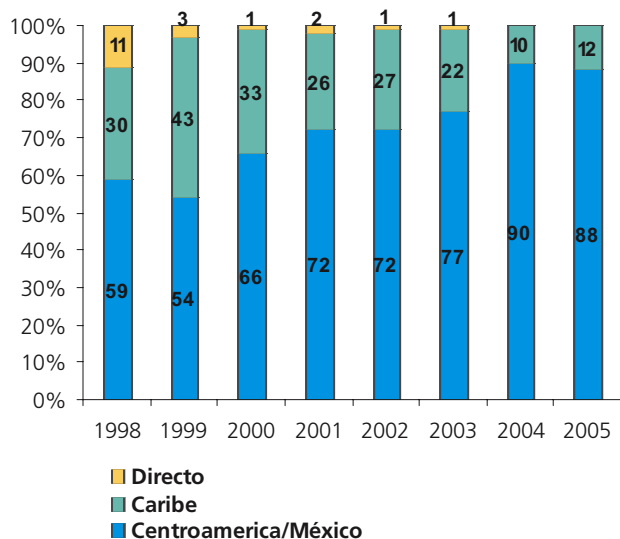
Esto no quiere decir que los elementos regionales no son cómplices. Mucha gente poderosa se ha vuelto más poderosa sólo por permitir los vicios del norte, y las drogas han enriquecido no a pocos de los empresarios criminales. Pero para la mayoría de los habitantes de esta región, el tráfico de cocaína no ha hecho nada más que corromper a los funcionarios públicos, apoyar la violencia opresiva, y desviar recursos que hubieran sido invertidos en el desarrollo social.

El impacto del tráfico de drogas no ha sido equitativo, ya que algunos países sufren más que otros. Al paso del tiempo, ha habido grandes cambios en las rutas que la cocaína lleva para alcanzar sus mercados de destino. Aunque sigue siendo el principal consumista, menos cocaína sigue siendo destinada a los Estados Unidos y más hacia Europa. Del flujo hacia los Estados Unidos, menos se está traficando por el Caribe y más por Centroamérica.

De acuerdo con las estimaciones de Estados Unidos más recientes, alrededor del 88% de cocaína destinada a los Estados Unidos actualmente transita el corredor Centroamérica/México, cerca del 50% a través del pacífico Este (en barcos pesqueros) y 38% a través de la costa del Caribe Oeste (en lanchas rápidas) de Centroamericanos.<sup>88</sup> Únicamente alrededor del 2% atraviesa Jamaica y el 4% a través de Haití/República Dominicana.<sup>89</sup>

La dominación exhaustiva del corredor de tránsito de Centroamérica es una situación reciente. El cartel de Cali de Colombia y los carteles de Medellín prefirieron el corredor del Caribe y lo han utilizado desde finales de los 1970s.<sup>90</sup> En los 1980s, la mayoría de la cocaína que entraba a los Estados Unidos provenía a través del Caribe y entraba por sur de Florida.<sup>91</sup> Pero eventos de interdicción causó que los traficantes interrumpieran sus rutas. En 1998, cerca del 29% de la cocaína iba a través de Centroamérica/México, 30% vía el Caribe, y el 11% iba vía por carga marítima comercial directa o por aire.<sup>92</sup> En 1999, los flujos a través de la frontera mexicana bajaron hasta 54%, los flujos vía el Caribe incrementaron un 43% y únicamente el 3% llegó directamente por Sudamérica.<sup>93</sup> Para el 2000, los índices se incrementaron a un 66% por Centroamérica/México y el 33% por el Caribe, con una disminución en el uso por parte de Haití y Puerto Rico y un incremento en el uso por parte de Jamaica.<sup>94</sup> Para el 2003, el índice era 77% a través de Centroamérica/México y el 22% vía el Caribe (ver Gráfica).<sup>95</sup>

**Gráfica 29: Porcentaje de cocaína que fluye a los Estados Unidos a través de corredores de transporte**



Fuente: US National Drug Intelligence Center, varios años

El cambio también puede observarse mediante la reducción de tráfico a través de ciertos países. Por ejemplo, los estimados del flujo de cocaína a través de Haití fueron desde el 5% de las importaciones en los Estados Unidos a principios de los 1990s a un 13% en 1999, a un 8% en el 2000<sup>96</sup> a un 2% en 2004 (incluyendo a la República Dominicana) y 4% en 2005 (incluyendo a la República Dominicana).<sup>97</sup> Similarmente, el flujo a través de Jamaica bajó de un 11% en 2000<sup>98</sup> a un 2% en 2005<sup>99</sup>. Estas tendencias tienen claramente efectos muy fuertes en las circunstancias locales, tal y como discutiremos más adelante.

Hoy, el flujo de cocaína desde Sudamérica a los Estados Unidos se estima en alrededor de 500 toneladas, 80% de su travesía se realiza en embarcaciones privadas,<sup>100</sup> de las cuales casi 200 toneladas se perdieron o se decomisaron en tránsito, y 31 toneladas fueron decomisadas en la frontera en el 2005.<sup>101</sup> Esto es un cambio significativo con respecto a lo que sucedía en los 1990s, cuando el transporte aéreo predominaba. En términos más concretos, esto sería equivalente a alrededor de 250 toneladas en el pacífico este, 200 toneladas en la costa oeste caribeña de Centroamérica, 10 toneladas a través de Jamaica y 10 toneladas a través de Haití/República Dominicana. Diez toneladas de cocaína aún se venden a un precio de EUA\$ 143 millones en las calles de Estados Unidos, cerca de 10 veces el ingreso neto oficial de Haití.

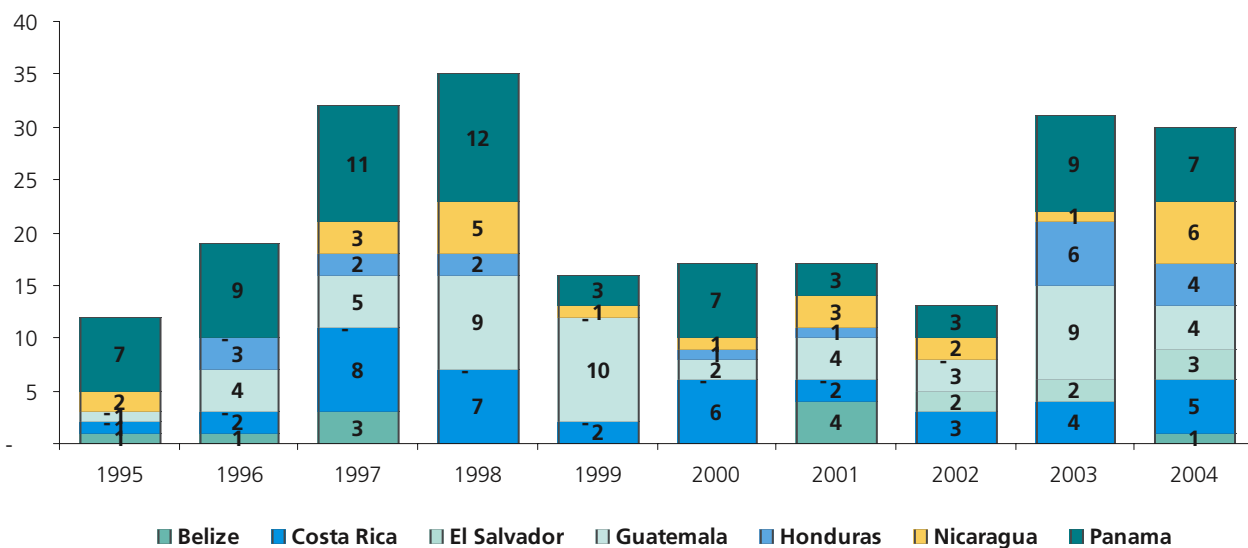
Esta tendencia de los patrones de tráfico ha sido atribuida al refuerzo del cumplimiento de las leyes.<sup>102</sup> Otra explicación posible es la tendencia a largo plazo hacia la dominación de México de los mercados de cocaína de los Estados Unidos. En los 1980s, organizaciones mexicanas fueron utilizadas primordialmente para transportar cocaína hacia los Estados Unidos en representación de grupos colombianos. Puesto que estos traficantes eran pagados con cocaína, a veces con más de la mitad del cargamento, hizo que fuera únicamente una cuestión de tiempo antes de que comenzaran a dominar todos los aspectos del comercio. Hoy, mientras que grupos colombianos y sus asociados dominicanos todavía controlan el Noreste, grupos mexicanos están retando a otras organizaciones en todo el país. Los grupos colombianos/dominicanos han preferido de manera tradicional usar el Caribe, mientras que grupos mexicanos prefieren usar los corredores centroamericanos. La tendencia hacia las rutas pasando por México puede ser un reflejo del dominio creciente de México.

Cualquiera que sea la causa, la tendencia fuera del Caribe podrá ser efímera. El Caribe ha sido un centro de contrabando durante siglos. En el pasado, el flujo de cocaína ha oscilado entre los dos corredores, en respuesta a la acción del cumplimiento de leyes y otros factores. El Caribe es un centro que factiblemente mantiene su atractivo para los traficantes por una variedad de razones. En tanto los grupos colombianos sigan permaneciendo como un factor, lo más probable es que continúen utilizando ambos grupos de crímenes organizado mexicanos y otros traficantes para traficar la droga. La importancia continua de los grupos expatriados del Caribe en la venta y consumo de cocaína en los Estados Unidos, particularmente en el noreste, posiblemente promocionará el uso de rutas de tráfico controladas en el Caribe. Históricamente los grupos de tráfico mexicanos han cobrado a los traficantes colombianos un 50% de participación de cada embarque para transportar su producto a través de México, mientras que los grupos de dominicanos y puertorriqueños ofrecen el mismo servicio con tan solo un 20%.<sup>103</sup>

Las cifras de decomisos muestran que la cocaína es traficada a través de cada país centroamericano – en el año 2000 cada país confiscó al menos una tonelada. En general, los países que se considera que son los que más albergan la droga no son necesariamente los que hacen los decomisos más grandes. En Centroamérica, Panamá, con una capacidad amplia de aplicación de la ley, ha sobrepasado en general a la mayoría de los otros países en términos de volumen total de decomisos. En el 2006, tres islas de la costa de Panamá, propiedad de la organización Rayo-Montano, fueron decomisadas por autoridades del cumplimiento de la ley de los Estados Unidos, Brasil, Colombia y Panamá, decomisando alrededor de 50 toneladas de cocaína, una cantidad importante del suministro anual.<sup>104</sup>

Considerando estas cifras como una tasa (kilos confiscados por 100,000), se pone en evidencia el gran esfuerzo realizado por la pequeña nación de Belice. En el 2005, las autoridades a cargo de hacer cumplir la ley en Belice y los Estados Unidos, decomisaron 2.4 toneladas de cocaína en un solo embargo.<sup>105</sup> Estos números también ponen en perspectiva los decomisos de Guatemala, un país con cerca de 50 veces su población. En noviembre de 2005, funcionarios de la embajada de EUA en Guatemala le dijeron a Associated Press y a Reuters que el 75% de la cocaína destinada a los Estados Unidos pasaba por Guatemala,<sup>106</sup> aunque, en aparente contradicción, el Comandante del Comando del Sur de los Estados Unidos afirmaba en marzo de 2006 que el 37% transitaba por Belice.<sup>107</sup> Guatemala es la zona principal de aterrizaje para aviones privados traficantes de cocaína de Colombia hacia los Estados Unidos (haciendo uso de centenares

**Gráfica 30: Toneladas de cocaína decomisada en países centroamericanos (redondeado)**



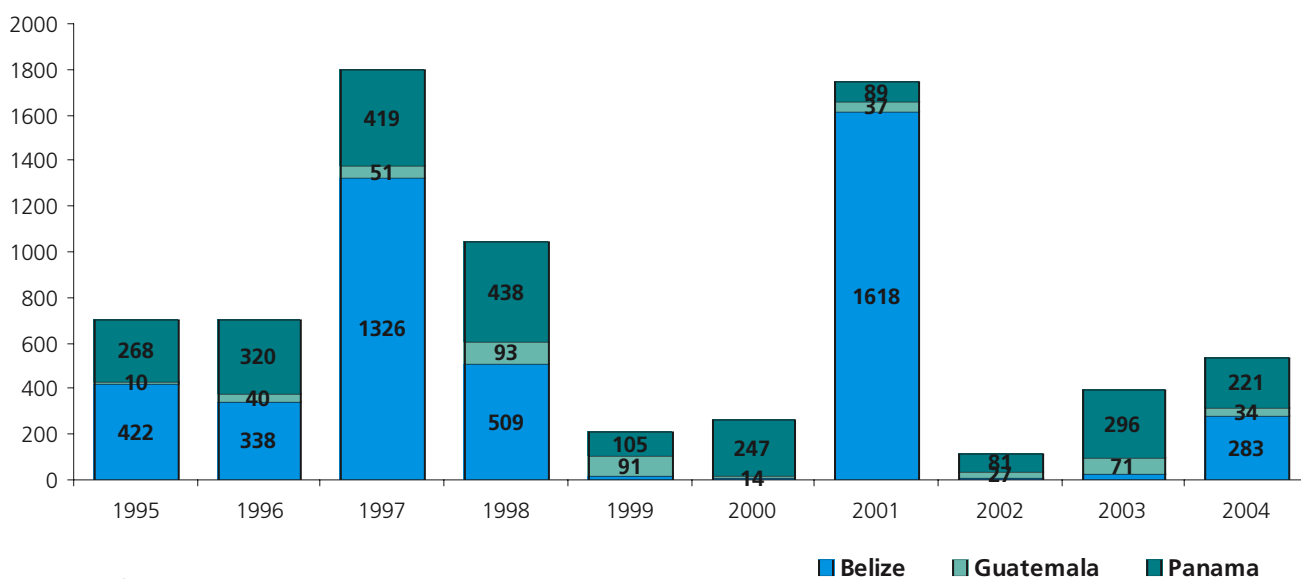
Fuente: base de datos UNODC Delta

de pistas encubiertas), y es también usada como un punto de tránsito para barcos de carga que llevan cocaína destinada a Europa. La aplicación de la ley ahí está seriamente debilitada por corrupción endémica en la policía, tribunales y otras ramas del gobierno.<sup>108</sup>

Antes de su arresto por tráfico de drogas, el jefe de la agencia guatemalteca anti-drogas, Adán Castillo, advirtió que las bandas de droga en Guatemala estaban terminando sus guerras internas para cooperar en un intento de controlar el comercio de droga en toda la región. Castillo dijo que esta consolidación era el resultado directo del escape de la custodia mexicana de Otto Herrera-García, un buen conocido traficante que está incluido en la lista objetivo de la Organización de la Prioridad Consolidada del Gobierno de Estados Unidos. Herrera había expandido sus actividades a Honduras y México antes de su arresto en México en abril 21, 2004. Castillo dijo que los traficantes guatemaltecos están involucrados en tratos con guerrillas colombianas para traficar drogas para uso personal en todo Centroamérica.<sup>109</sup>

Los centroamericanos también han sido destacados en el tráfico internacional de droga. La tabla siguiente

**Gráfica 31: Kilogramos de cocaína decomisada, por 100,000 ciudadanos**



Fuente: ARQ

Tabla 2: Algunos decomisos transnacionales recientes que involucran a centroamericanos

Fecha	Ubicación	Nacionalidad	Cantidad	Detalles
17 Junio 2005	Frankfurt	Costaricense	11 kg	Con 2 Alemanes
2 Marzo 2005	Portugal	Panameño	2.5 kg	Con 2 Portugueses
23 Febrero	Madrid	Costaricense	2 kg	En maletas
10 Febrero	Madrid	Costaricense	1 kg	En maletas
17 Enero 2005	Madrid	Salvadoreño	2 kg	Via Guatemala
15 Enero 2005	Honduras	Salvadoreño	1 kg	Con 2 Hondureños
1 Enero 2005	Argentina	Costaricense	2 kg	---
10 Diciembre 2004	Madrid	Guatemalteco	3 kg	De Guatemala
5 Octubre 2004	España	Salvadoreño	3 kg	Via Guatemala
4 Octubre 2004	Madrid	Salvadoreño	1 kg	En el cuerpo
9 Septiembre 2004	Barcelona	Salvadoreño	2 kg	Originado en Guatemala
28 Agosto 2004	Nicaragua	Guatemalteco	1.7 tons	Con un Colombiano
19 Agosto 2004	Managua	Guatemalteco	100 kg	Vehiculo comercial de carretera
3 Junio 2004	Nicaragua	Guatemalteco	30 kg	Con Nicaraguense
21 Mayo 2004	Venezuela	Costaricense	< 1 kg	Tragado
12 Mayo 2004	Nicaragua	Hondureño	3 kg	Con Nicaraguense
10 Mayo 2004	El Salvador	Guatemalteco	< 1 kg	Procurado en Colombia
1 Mayo 2004	Nicaragua	Hondureño	33 kg	Dos arrestados
30 Abril 2004	Nicaragua	Hondureño	7 kg	En autobus
19 Abril 2004	Nicaragua	Hondureño	7 kg	En autobus
8 Abril 2004	El Salvador	Hondureño	2 kg	Procurado en Honduras, hacia los Estados Unidos
6 Abril 2004	Venezuela	Nicaraguense	11 kg	En maletas
3 Marzo 2004	Nicaragua	Guatemalteco	39 kg	-----
28 Febrero 2004	Nicaragua	Guatemalteco	18 kg	En el negocio
23 Febrero 2004	Nicaragua	Guatemalteco	6 kg	Con partes de carro
21 Febrero 2004	Nicaragua	Guatemalteco	116 kg	Con partes de carro
4 Enero 2004	El Salvador	Guatemalteco	1 kg	En una casa

Fuente: Base de Datos de Decomisos Mayores UNODC

muestra algunos decomisos recientes importantes de cocaína involucrando nacionales centroamericanos operando fuera de sus propios países en Europa y Latinoamérica. La tabla destaca el hecho de que todas las nacionalidades están involucradas, incluyendo ciudadanos de países más ricos y de que cualquier país puede ser una fuente próxima de cocaína. Por ejemplo, se ha confiscado recientemente cocaína en vuelos comerciales procedentes de Costa Rica con destino a Países Bajos y a Austria.<sup>110</sup> Es también claro que el tráfico de cocaína no reconoce fronteras y que miembros de naciones centroamericanas son arrestados de forma regular en cada uno de sus países y en el extranjero (especialmente en países hispano parlantes) con grandes cantidades de cocaína (ver Tabla).

Además de su utilización como corredor a los Estados Unidos, también hay tráfico de drogas entre países centroamericanos para uso doméstico. Por ejemplo, los decomisos indican que crack de cocaína es transportado a Honduras desde El Salvador.<sup>111</sup> El tráfico transnacional de crack es inusual, debido a que es más voluminosa que la cocaína en polvo y es fácil producir el crack domésticamente. El hecho de que el crack es manejado internacionalmente a pesar de esta ineficiencia básica sugiere que las fronteras no representan una barrera infranqueable al movimiento de drogas en Centroamérica.

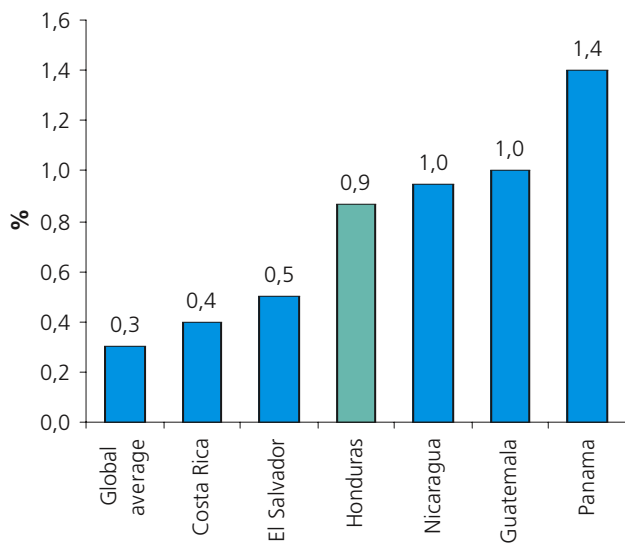
El tráfico entre países puede provocar el desarrollo de mercados domésticos. Se ha estimado que de las 150 toneladas de cocaína que pasan a través de Guatemala cada año, un 10% se queda en el país para consumo local.<sup>112</sup>

Tabla 3: Remanente estimado de cocaína en algunos países de tránsito

Proporción del flujo de cocaína que se queda en el país	
Belize	7%
El Salvador	5%
Honduras	1%

Fuente: ARQ 2004 y 2005

**Gráfica 32: Porcentaje de adultos que consumieron cocaína el año pasado**



Fuente: base de datos UNODC Delta estimados

Los índices de consumo de cocaína en la región son remarcablemente bajos. Tomando a El Salvador como ejemplo, un estudio del OAS / CICAD de consumo de drogas entre las poblaciones de estudiantes en el 2003, demostró que el consumo anual de cocaína es del 0.7%, y el consumo de crack es de sólo el 0.5%.<sup>113</sup> Un estudio de consumo de drogas entre prisioneros, encontró que el consumo anual de cocaína y crack es menor al 4.5%.<sup>114</sup> Finalmente, una investigación del consumo de drogas nacional en el 2006, en áreas urbanas, encontró que el consumo nacional del crack y cocaína es menor al 0.5%.<sup>115</sup> La explicación obvia es que los cargamentos transitan estas regiones se mantienen intactos, en lugar de ser re-empacados y vendidos en el mismo, sin embargo, se requiere de mucho más para explicar esta elasticidad.

El consumo de cocaína (base) y de cannabis ha sido documentado recientemente en varios sitios en el Caribe<sup>116</sup> y tal combinación fue reportada también en Guatemala, en el 2005.<sup>117</sup>

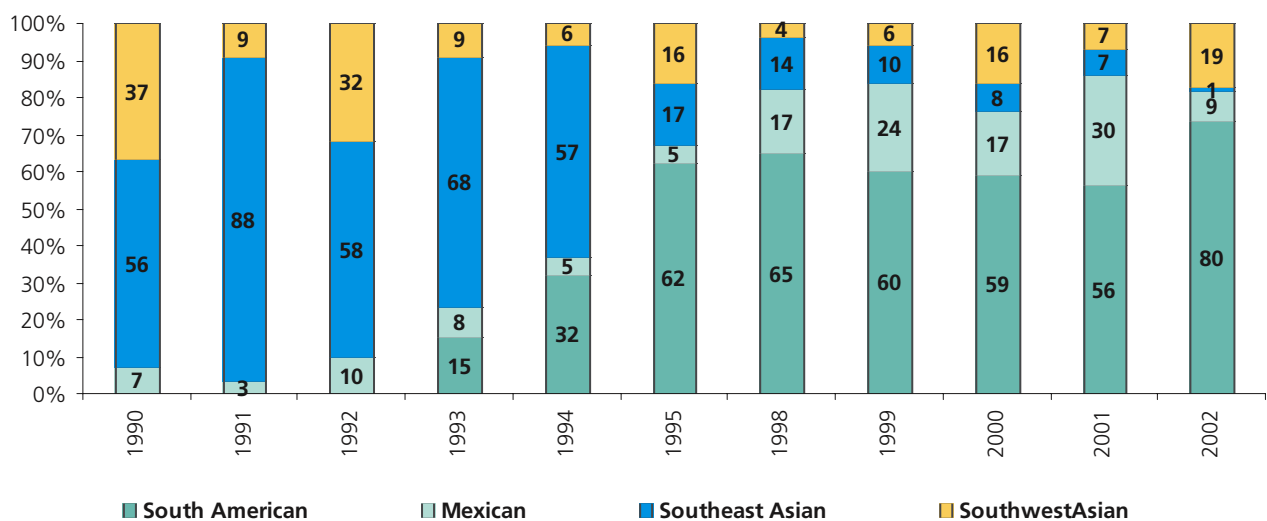
**Otras drogas**

En cuanto a otras drogas, históricamente, la mayoría de la heroína consumida en el mundo ha provenido del Suroeste

Asiático (últimamente Afganistán) y del Sureste Asiático (últimamente Myanmar). Pero los criminales colombianos comenzaron a experimentar con el cultivo de la amapola a desde finales de los 1970's, y hacia mediados de los 1980's grandes parcelas fueron descubiertas en diferentes partes del país. Hacia mediados de los 1990's Colombia se había convertido ya en un proveedor de importancia para Estados Unidos, siendo a menudo la droga transportada a través del Caribe y distribuida por grupos dominicanos.

En los Estados Unidos, México ha sido también una fuente de importancia desde mediados de los 1970's, especialmente para las zonas del oeste y del medio oeste del país.<sup>118</sup> Sin embargo, en 1989 el 96% de la heroína confiscada en los Estados Unidos provenía del Sureste o Suroeste de Asia. Hacia 1984 la producción colombiana ya era voluminosa y el 32% de la heroína confiscada en los Estados Unidos era sudamericana. En 1995 la cifra fue de 62% (ver Gráfica).<sup>119</sup> En años recientes la heroína blanca colombiana ha llegado a dominar el mercado en el noreste de los Estados Unidos, el mercado más grande de heroína del país. Los esfuerzos de erradicación han empezado a reducir este suministro en años recientes.

**Gráfica 33: Origen de la cocaína confiscada en los Estados Unidos**



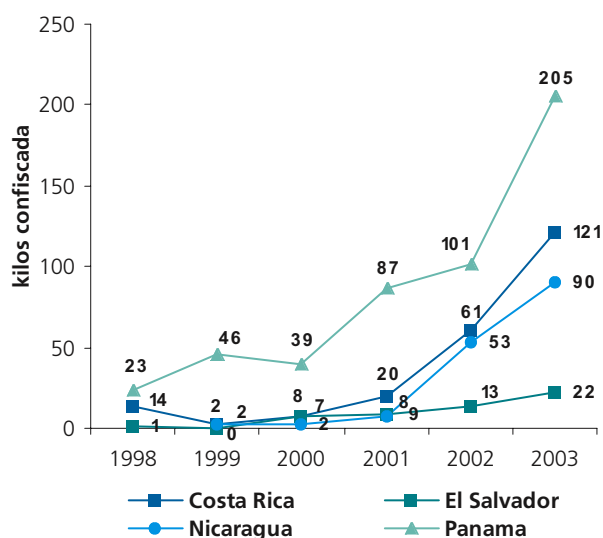
Fuente: US Drug Enforcement Administration (DEA) Programa Piloto de Heroína

De esta manera, la heroína es producida en los dos extremos de Centro América, en Colombia y en México, y el grado de exposición a esta droga parece estar relacionado con la proximidad de los países productores. Los decomisos de heroína han empezado a aumentar recientemente en varios países centroamericanos, incluidos Panamá, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. Se está llevando a cabo en Guatemala algo de cultivo de amapola en pequeña escala: 181 hectáreas (un estimado de 5.4 millones de plantas) que fueron erradicadas en el 2004,<sup>121</sup> 184 y 48 hectáreas que fueron erradicadas en 2005.<sup>122</sup> La agencia de EUA de Evaluación de Amenaza de Droga (United States National Drug Threat Assessment) asegura que Guatemala tenía el potencial para producir 1.4 toneladas métricas de heroína en 2004, comparado con 3.8 en Colombia.<sup>123</sup> En 1998, 1999, 2000 y 2003 se reportaron decomisos de grandes cantidades de cápsulas de opio (la porción de la planta que contiene la goma de opio).<sup>124</sup> Sin embargo, los decomisos de heroína en el país han sido esporádicos, lo que sugiere que el procesamiento se puede estar llevando a cabo cerca o en la frontera con México. Autoridades del país dicen haber erradicado 27 millones de plantas hacia principios de septiembre 2006, lo que sugiere que los niveles de cultivo han regresado a los niveles máximos de 1990, quizá con 200 hectáreas de cultivo.<sup>125</sup> Si esta tendencia continúa, Guatemala podría rivalizar a Colombia como productor de heroína para el mercado de Estados Unidos.

Igual que la cocaína, el tráfico inicial de heroína colombiana fue realizado por medio de vuelos directos. Debido a que actualmente la heroína tiene un valor 5 veces mayor que la cocaína en términos de peso, el uso de mensajeros humanos en vuelos comerciales continúa siendo una opción viable. Pero la utilización de países intermedios en Centroamérica, incluyendo Guatemala, Costa Rica, y Panamá, ha aumentado y se han detectado grandes embarques por mar y por carga aérea.<sup>126</sup>

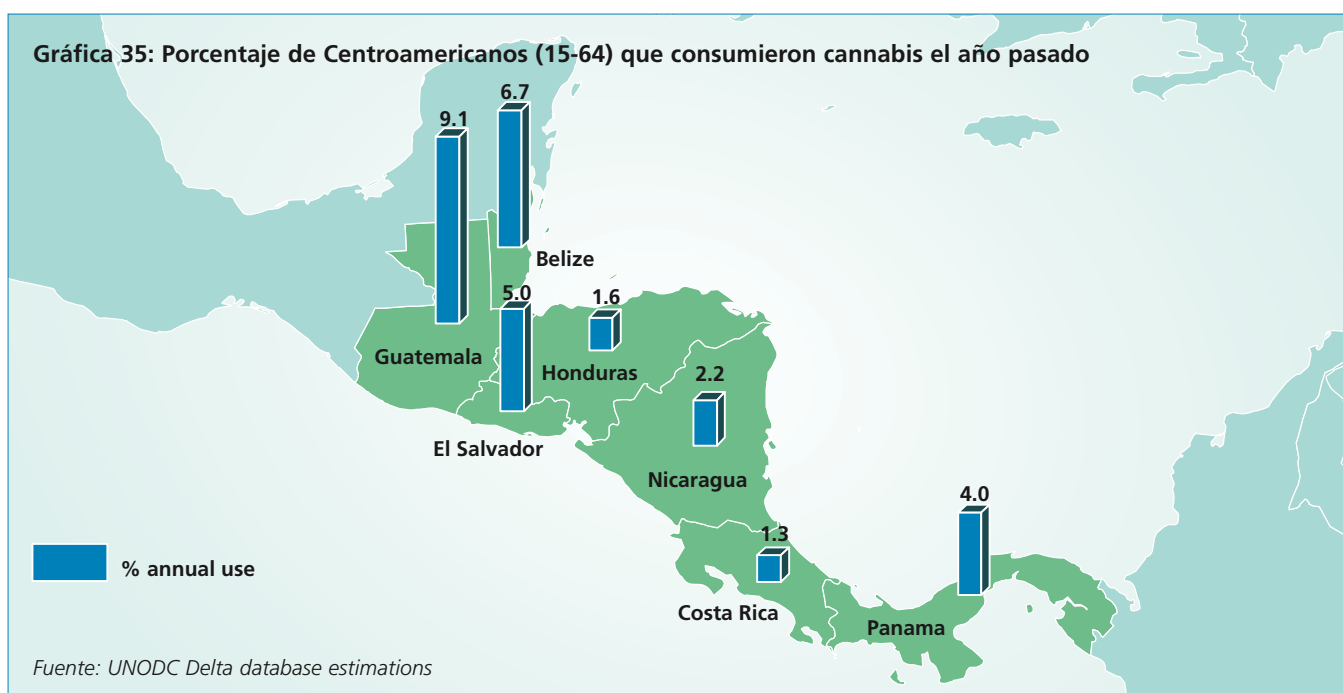
Existe también una cuantiosa producción de cannabis en América Central. La mayoría es para consumo doméstico, pero algo es traficado a través de las fronteras dentro de la región. Por ejemplo, una gran parte del cannabis es confiscado en El Salvador parece ser producida en Guatemala.<sup>127</sup> En 2005 los salvadoreños dijeron que el 75% de su cannabis provenía de Guatemala, 15% de Honduras y 10% fue producido domés-

**Gráfica 34: Kilos de heroína confiscada en cuatro países centroamericanos, 1998-2003**



Fuente: UNODC ARQ

**Gráfica 35: Porcentaje de Centroamericanos (15-64) que consumieron cannabis el año pasado**



Fuente: UNODC Delta database estimations

ticamente. Ello representa un incremento respecto el año anterior, cuando solo la mitad provino de Guatemala.<sup>128</sup>

A pesar de que la mayoría de los países de la región tienen algo de producción doméstica y algunos son exportadores, los niveles de consumo de cannabis, según es determinado por los estudios, son marcadamente bajos. En América Central, Guatemala encabeza en la participación de la población que consume cannabis cada año (9% en 2003), pero esto es aún menor que los niveles encontrados en países como los Estados Unidos (13% en 2004), España (11% en 2003), o Inglaterra y Gales (11% en 2003/4).

La región no ha sido asociada con la producción de drogas sintéticas en el pasado, sin embargo la capacidad limitada del control del precursor en conjunto con su ubicación geográfica, deja a Centroamérica vulnerable a la posible explotación para este objeto. El Reporte Internacional sobre el Control de Narcóticos en las Fronteras, de 2006, informó que la región se utiliza como un punto de entrada para la efedrina y pseudoefedrina. Los grupos del crimen organizado en México, utilizan estos químicos para elaborar la meta-anfetamina para el mercado de los Estados Unidos, y podría estar utilizando la región en respuesta a los altos controles de los químicos en Canadá y México. Una embarcación de 5 toneladas de efedrina y 2.5 toneladas de pseudoefedrina fue parada por las autoridades de la India, en su camino hacia Belice en el 2006. Los gobiernos de Costa Rica y El Salvador, han descubriendo intentos para desviar grandes cantidades de preparaciones farmacéuticas de estas drogas.<sup>129</sup>

## 2.2 Homicidio

Tan problemático como el tráfico de drogas es para Centroamérica, no es el flujo de drogas en sí mismo lo que es más preocupante. En vez de ello, es el efecto que este flujo tiene en el crimen de la región, especialmente en el crimen violento, por un lado, y en la corrupción, por el otro. En esta sección veremos los recientes desarrollos en los países de Centroamérica con relación al crimen más supremo entre los crímenes violentos: el homicidio.

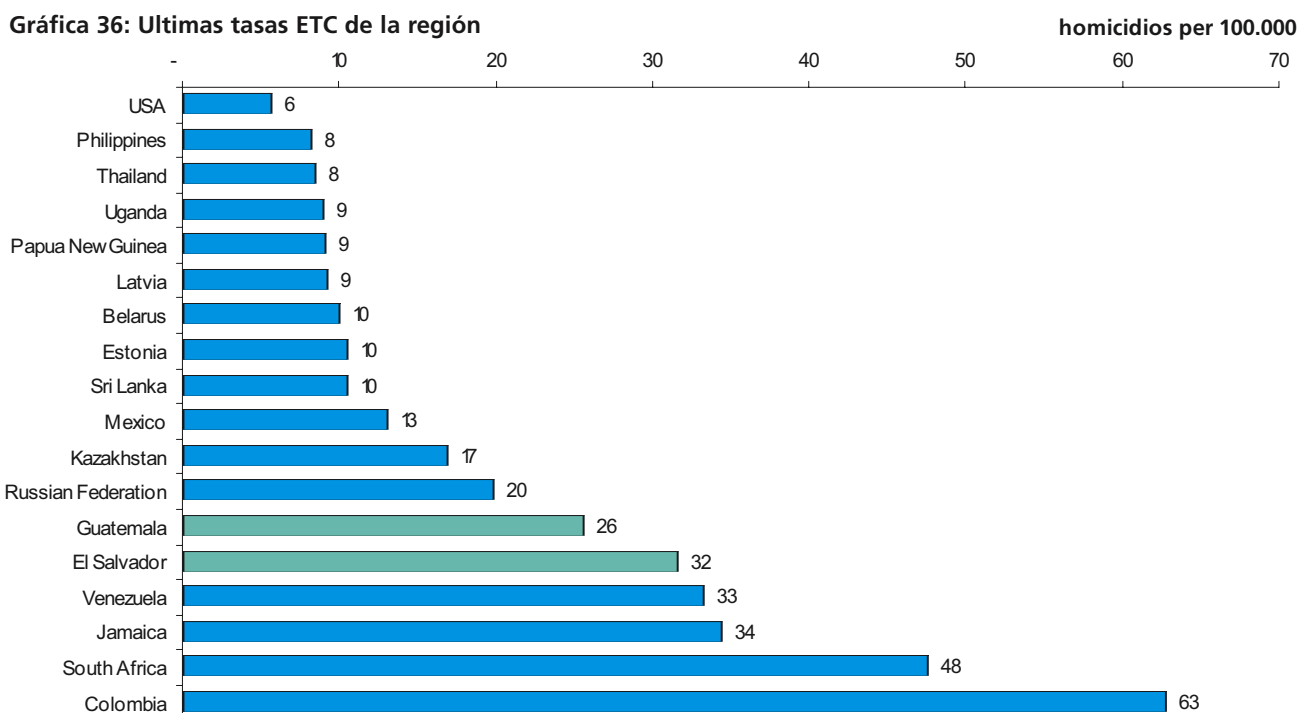
Los datos de crímenes son extremadamente problemáticos y la región Centroamérica provee un excelente caso de estudio de cuán engañosos pueden ser. Las cifras oficiales están generalmente basadas en estadísticas de la policía, y las cifras de la policía están principalmente basadas en casos reportados a la policía por el público. Los casos no reportados no pueden ser registrados y hay buenas razones para pensar que una gran cantidad de crímenes no son reportados en esta región. El homicidio es el crimen que tiene más probabilidades de atraer la atención de las autoridades y por esta razón es el mejor parámetro para comparaciones internacionales.

Hacer comparaciones entre jurisdicciones es aún más complicado. Las definiciones de crimen varían ampliamente entre países. Aún para lo que parece ser una ofensa fácilmente definida, tal como el homicidio, las definiciones varían ampliamente. El homicidio es un crimen de intención y la determinación de la intención es una cuestión de juicio, no de hecho. Los homicidios realizados en defensa propia o en defensa de otros (incluyendo casi todos los homicidios por la policía) no son homicidios. Los asesinatos que ocurren por accidente varían en culpabilidad dependiendo del grado de negligencia del perpetrador – accidentes por miedo son menos culposos que los actos de salvajismo injustificado. En muchas jurisdicciones, el intento de homicidio es considerado igual al acto consumado; el probable asesino no debería ser exonerado simplemente porque fracasó en su intento. La forma en que estos temas de intención son entendidos varía sustancialmente entre jurisdicciones. Aún más, en algunos casos la identidad de la víctima hace la diferencia en la manera en que el crimen es clasificado.

Nicaragua proporciona un ejemplo de cuán complicado puede llegar a ser el clasificar un asesinato. Los homicidios en Nicaragua se dividen entre homicidios y asesinatos y ambos se dividen a su vez en actos consumados, intentos, e intentos frustrados. Los homicidios se dividen también en intencional, culpable y homicidios vehiculares culpables. Los parricidios e infanticidios y sus intentos también se registran separadamente.<sup>130</sup>

Para complicar aún más las cosas, muchos países en la región parecen tener problemas para ponerse de acuerdo internamente dónde se encuentran las tasas de homicidio. En El Salvador, por ejemplo, hay al menos tres tasas oficiales de homicidios: uno publicado por la policía, otro por el instituto nacional de ciencia forense y el último por la autoridad nacional procuradora de justicia.<sup>131</sup> Los datos del forense, deberían

**Gráfica 36: Últimas tasas ETC de la región**



Fuente: CTS, varios años

por lo menos estar de acuerdo los datos de salud pública dadas por la Organización Panamericana de la Salud, pero no, al contrario eso significa una cuarta tasa.

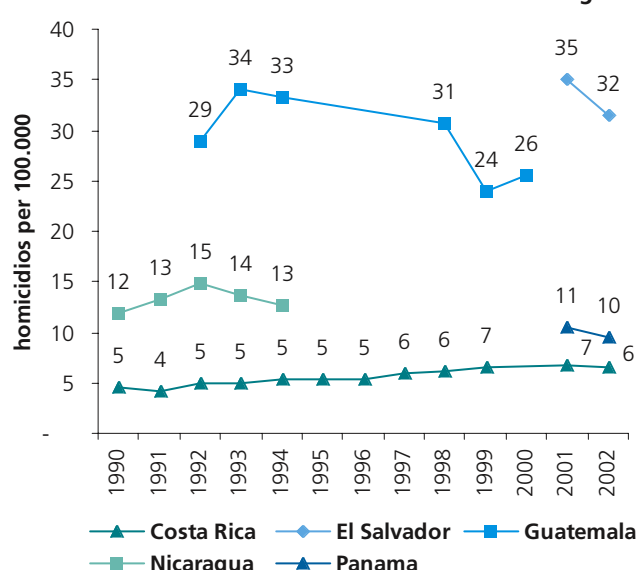
La ONUDD intenta superar algunas de estas dificultades por medio de sus encuestas bianuales de tendencias de crimen (ETC). Un cuestionario se envía a todos los Estados Miembros de Naciones Unidas proporcionando definiciones estandarizadas de cada tipo de crimen y pide a los respondientes que llenen sus cifras de crímenes en las categorías apropiadas. Desde luego, este es un ejercicio difícil, pero sí proporciona una mejor base de comparación que las cifras publicadas por las fuerzas policíacas nacionales. Desgraciadamente, no todos los estados miembros proporcionan esta información, o lo hacen de manera errática, por lo que la cobertura global dista mucho de ser completa. Obviamente, los países con problemas severos de estabilidad no están en capacidad de proveer estadísticas confiables y es precisamente en estas áreas en que es probable que los problemas sean los peores. Por ejemplo, no hay datos ETC disponible de Honduras, un país donde otra información indicaría un problema serio de homicidio.<sup>132</sup>

Comparando las tasas nacionales más altas de América Central con las tasas más altas de otras regiones del mundo, basado en los datos ETC más recientes disponibles, resalta el hecho que El Salvador y Guatemala se clasifican entre las naciones más peligrosas del mundo para las que existen datos estandarizados disponibles.<sup>133</sup>

Dada la manera esporádica en que los datos son proporcionados, es bastante difícil distinguir las tendencias en las ETC de la región, con la excepción de Costa Rica, que demuestra una alta estabilidad con un leve incremento desde 1990. Ningún país en la región ha respondido a la última ola de cuestionarios del ETC, mismos que se refieren al 2003 y 2004.

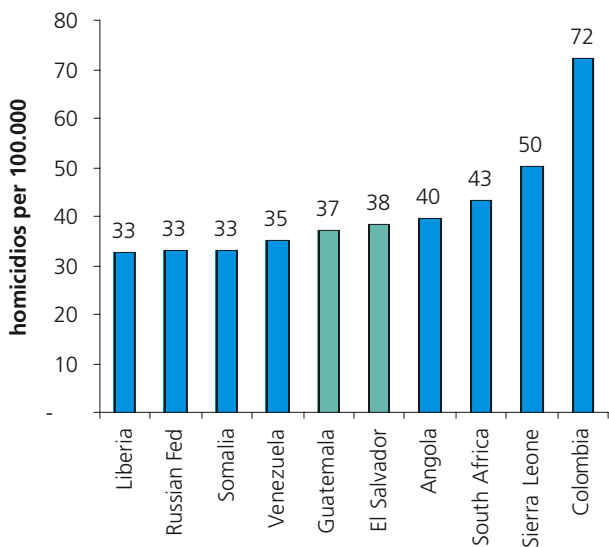
A un lado de las estadísticas de la policía, las autoridades de salud pública mantienen registros del número de homicidios en

**Gráfica 37 : Tendencias de homicidio ETC en la región**



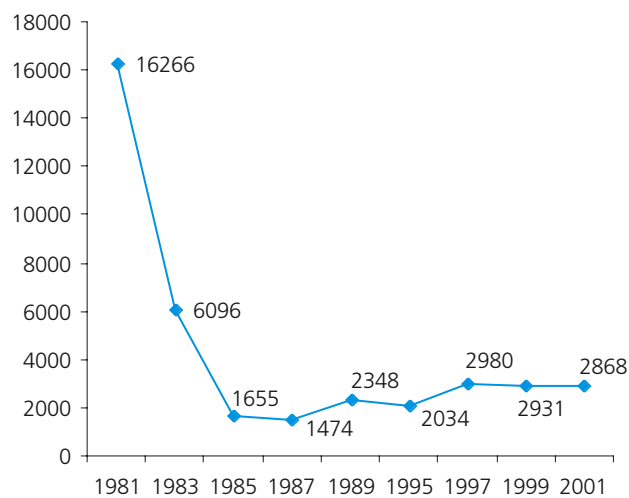
Fuente : UNODC CTS, varios años

**Gráfica 38: Las 10 tasas más altas de homicidios basadas en datos de salud pública en 2002**



Fuente: OMS, 2004

**Gráfica 39: Comparación de muertos de guerra y homicidios en El Salvador**

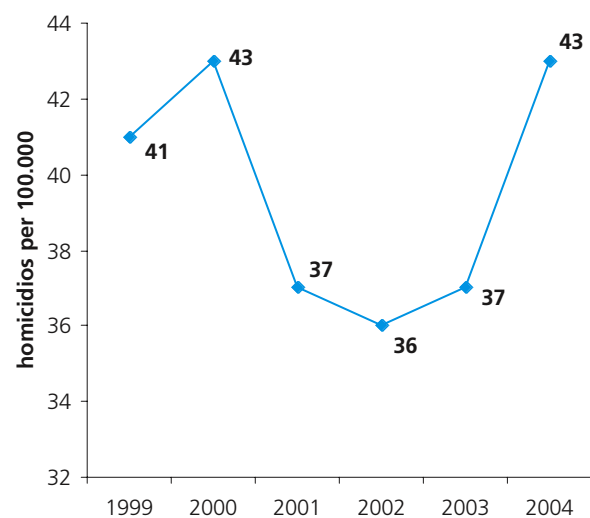


Fuente: Comisión de la Verdad para El Salvador; PAHO<sup>135</sup>

muchos países, y éstos son recogidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus afiliadas regionales, tales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Dado que las definiciones de homicidio de salud pública son generalmente más amplias que las legales, no es sorprendente que las tasas de salud pública sean más altas. La clasificación de estas cifras se comporta de manera aproximada con las clasificaciones observadas en datos de ETC e Interpol. El Salvador y Guatemala emergen como dos de los más peligrosos países del mundo, después de Colombia, Sudáfrica y dos países africanos que sufrían de conflicto civil y que generalmente no reportan estadísticas de crimen, Sierra Leona y Angola.

En resumen, puede afirmarse con seguridad que en Centroamérica los países se clasifican como sigue, del más seguro al más peligroso: Costa Rica, Nicaragua o Panamá, Guatemala y El Salvador. No hay suficientes datos actuales sobre Honduras y Belice para clasificarlos, pero aquellos que existen sugieren que deberían ser situados cerca del tope de la lista. Casi todos los datos sugieren que El Salvador y Guatemala se encuentran en el mismo nivel que Jamaica, Colombia y Sudáfrica/Swazilandia como los países más violentos sobre

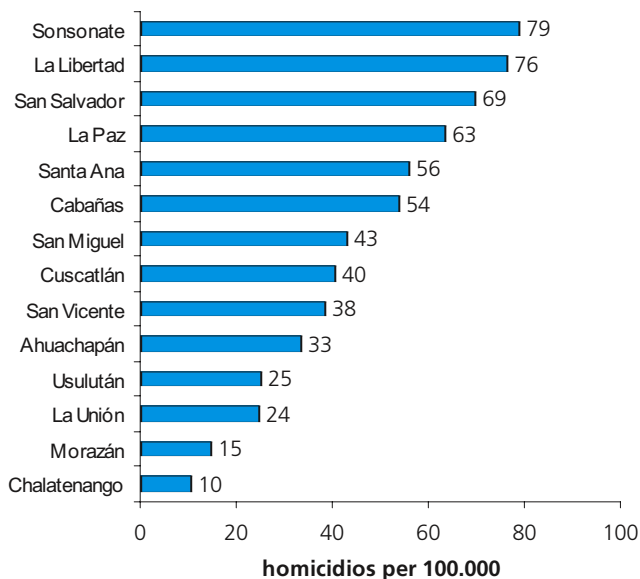
**Gráfica 40: Tasas de homicidios en El Salvador - datos de salud pública**



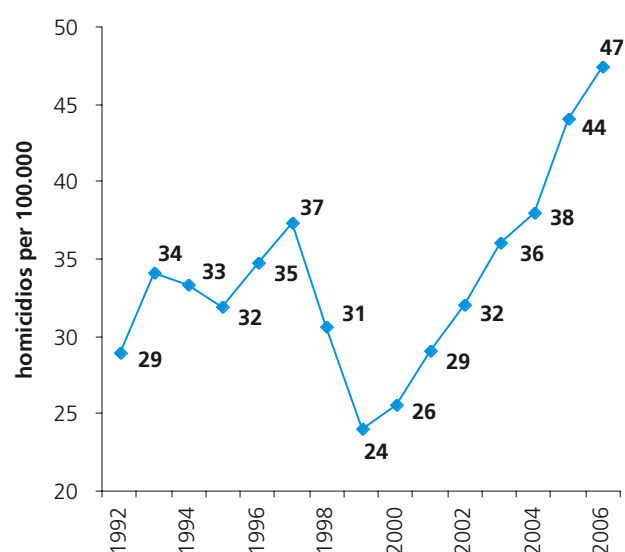
Fuente: Instituto de Medicina Legal<sup>138</sup>

la tierra. En ausencia de datos de ETC, la información de la policía y de las fuentes de salud pública, puede ser utilizada para analizar las tendencias, pero no se pueden utilizar para comparaciones entre naciones. Desgraciadamente, estos datos reflejan incrementos agudos en las tasas de homicidios en varios países de Centroamérica. En contraste, tanto Colombia como Sudáfrica han mostrado disminuciones dramáticas en los homicidios, de acuerdo a sus propias estadísticas nacionales. Por lo tanto las naciones en Centroamérica podrían haber sobrepasado recientemente a los líderes mundiales tradicionales en el número de homicidios cometidos por 100,000 habitantes.

En El Salvador, los observadores frecuentemente señalan que en 1995 las muertes por homicidio excedían el número promedio anual de muertos durante la guerra.<sup>134</sup> Por supuesto, es muy fácil exagerar esta comparación – no hay cifras claras acerca del número de homicidios criminales durante el conflicto y no hay confiabilidad en las muertes relacionadas con la guerra. Las cifras muestran que las muertes fueron mucho más intensas en los primeros años de la guerra, pero para 1985 los informes oficiales de muertes por la guerra fueron más bajos que el número de homicidios reportados durante los 1990's. Según se men-

**Gráfica 41: Tasa de homicidios provinciales en El Salvador en 2003 y 2005**

Fuente: Fiscalía General of El Salvador<sup>139</sup>

**Gráfica 42: Tasa de homicidio en Guatemala - datos de policía**

Fuente: UNODC CTS; Ministerio de Gobernación de Guatemala<sup>143</sup>

cionaba antes, tres tasas de homicidios son generalmente reportadas para El Salvador. Todas coinciden en una tendencia creciente, aunque algunos han argumentado que esto podría estar cambiando. De acuerdo con la policía, hubo 3777 homicidios en 2005, con una tasa nacional de alrededor de 56 por 100,000 habitantes, muy por arriba de años previos.<sup>136</sup>

Si estos números fueran internacionalmente comparables, colocarían probablemente El Salvador en segundo lugar solamente por abajo de Jamaica en el tope de las listas internacionales de homicidio. Los datos preliminares para 2006 sugieren una estabilización a ese nivel.<sup>137</sup>

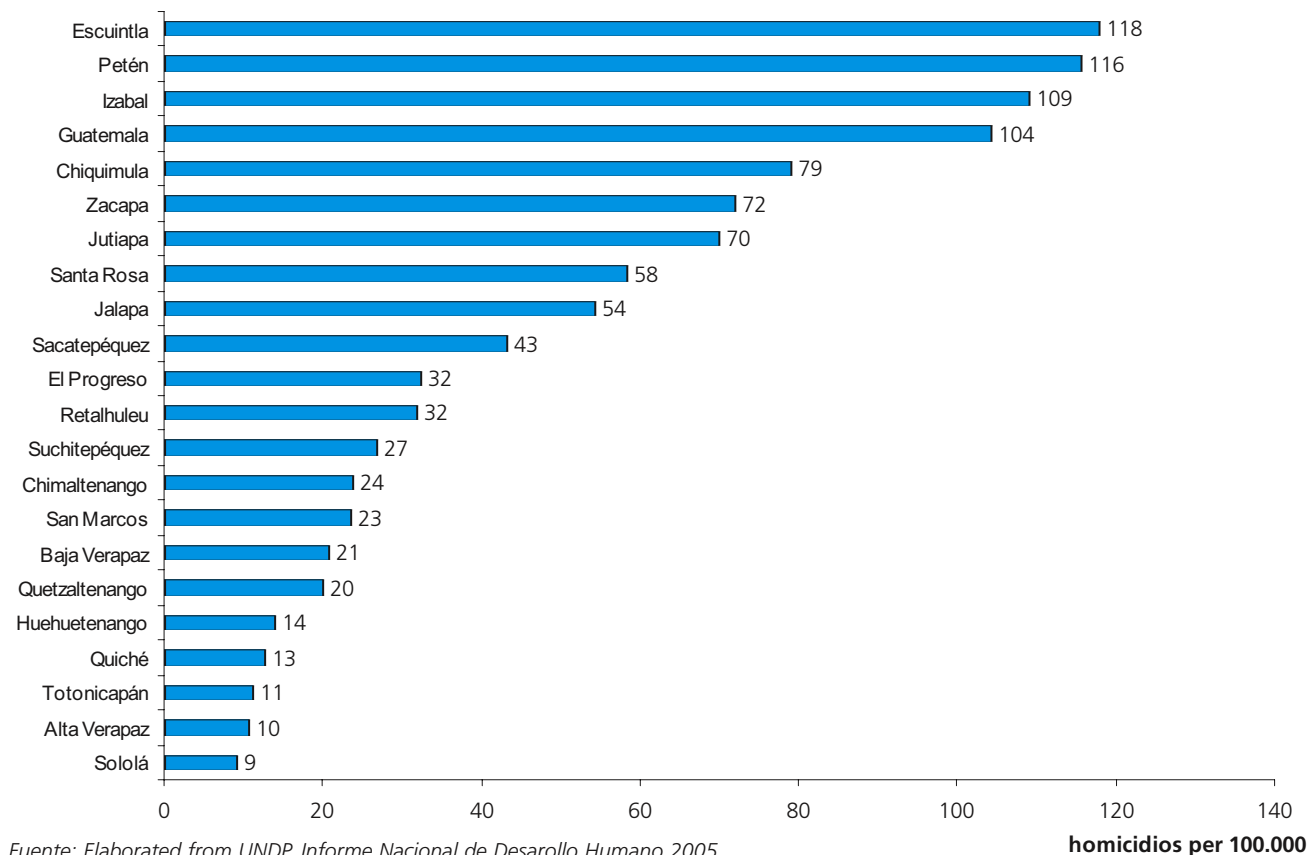
Sin embargo, estos números acumulados obscurecen gran diversidad en circunstancias locales. Las tasas provinciales de asesinato varían por un factor de ocho.

En 2005, La Libertad y Sonsonate, dos de las provincias más desarrolladas, demuestran tasas más altas de asesinatos que en San Salvador, la provincia más urbanizada del país. Estas dos provincias albergan los únicos puertos principales en la costa pacífica cerca de la frontera con Guatemala (Acajutla y la Libertad respectivamente) y están conectadas con la autopista Panamericana, ambos vías para los flujos de la droga. En contraste, las provincias de Chalatenango y Morazán son dos de las provincias menos desarrolladas, cerca de la frontera de Honduras, y tienen las tasas más bajas del homicidio en el país.

Los altos niveles de asesinato en El Salvador también se ligan claramente a la disponibilidad extensiva de armas de fuego. Heridas causadas por las armas de fuego se creen explican por lo menos el 70% de homicidios en El Salvador (el estudio más reciente dispuso la estimación en el 84%<sup>140</sup>), y 30% de los heridos por tiros mueren en el hospital. Un estudio de 100 pacientes admitidos en un hospital público con heridas de arma de fuego en El Salvador concluyó que por cada herido por arma de fuego que fallece, existen cinco admisiones que sobreviven.<sup>141</sup> Sin embargo, el hecho de que la mayoría de las muertes sean causadas por armas de fuego no significa que otras armas no sean utilizadas en la violencia. Según el ministerio de El Salvador de la salud, en 2001 la tarifa de lesión de arma de fuego en El Salvador era 57 por 100.000, mientras que lesiones debido a los cuchillos y a los machetes ocurrieron en una tasa de 118 por 100.000.<sup>142</sup>

La situación en Guatemala es similar. La tasa de homicidio ha declinado agudamente después de la firma de la paz acordada en 1996, pero comenzaron a levantarse dramáticamente justo después de 1999, con las tasas casi duplicándose en apenas siete años. Como en El Salvador, las tasas de asesinato en Guatemala están lejos de estar distribuidas uniformemente, variando desde 9 por cada 100.000 en 2004 en Sololá, hasta 118 por cada 100.000 en Escuintla, una tasa sin paralelo en El Salvador. Las provincias más seguras tienen la proporción más grande de población indígena en sus poblaciones: Sololá, Alta Verapaz, Totonicapá y Quiché, que son aproximadamente 89% y 98% indígenas. Estas provincias no tienen riquezas - con un Índice de desarrollo humano (IDH) de 0.58. en 2002, Sololá tiene el mismo nivel del desarrollo humano

**Gráfica 43: Tasa de homicidio en Guatemala por provincia en el 2004**

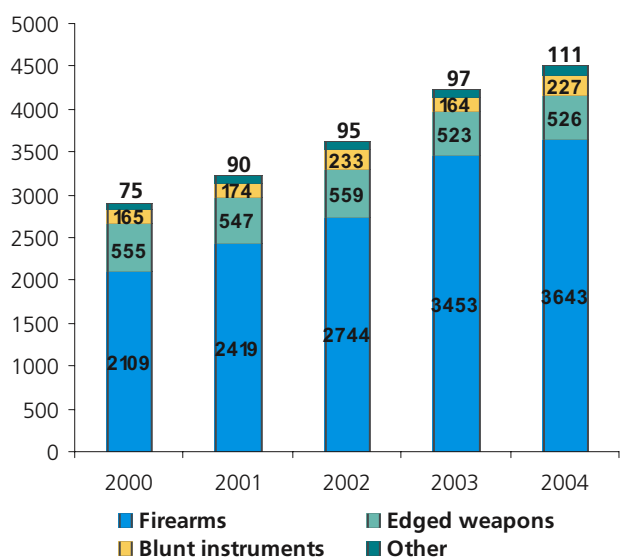


que Camboya, y es el más rico de los cuatro. La provincia de Guatemala, en contraste, tiene un IDH de 0.77, pero diez veces mas es su tasa de homicidio. Y mientras que Alta Verapaz es la provincia más rural del país (el 79% rural), Sololá es el cuarto más urbanizado (de 22, del solamente 51% rurales). La provincia más peligrosa es Escuintla, con un nivel similar de urbanización que Sololá, y niveles mejores de desarrollo humano (IDH de 0.61), sin embargo, esta se compone de solamente un 8% indígena.<sup>144</sup> Puede ser que las provincias predominante indígenas tengan mayores niveles de la cohesión social, y ésta sirve como punto de la resistencia al crimen.

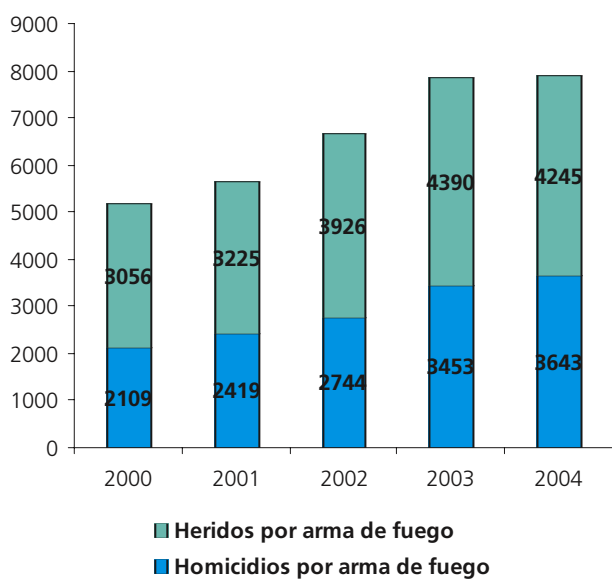
El papel del tráfico de drogas es también evidente en las estadísticas de homicidio. Las tres provincias que tienen las tasas del homicidio más altas que la provincia de Guatemala (donde se encuentra la ciudad de Guatemala, el área urbana en gran medida más grande del país) son Escuintla (en la costa pacífica), Petén (lugar del llamado “cementeros del aeroplanos”, donde los traficantes de la droga esconden sus naves), e Izabal (en la costa del Caribe, con los dos puertos más grandes del país). Izabal y Petén son aproximadamente compuestos por un 70% rural, y todas las tres provincias de la alta violencia han estado implicadas en tráfico de droga.

Mientras que la tasa acumulada de homicidios de Guatemala puede ser menos que en El Salvador, tiene algunas características propias que llaman la atención. El uso de “sicarios”, o los asesinos de contrato, parece ser una característica importante, a menudo armados con AK 47s. Además, muchas víctimas de asesinato son torturadas primero. En 2005, hubo 624 muertes

**Gráfica 44: Instrumentos de homicidio en Guatemala**

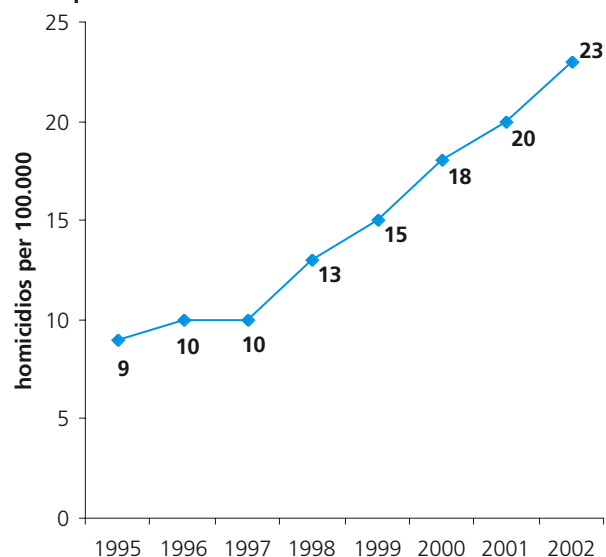


**Gráfica 45: Violencia con armas de fuego registrado por la policía en Guatemala**



Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala

**Gráfica 46: Tasa de homicidios en Belice - datos de salud pública**



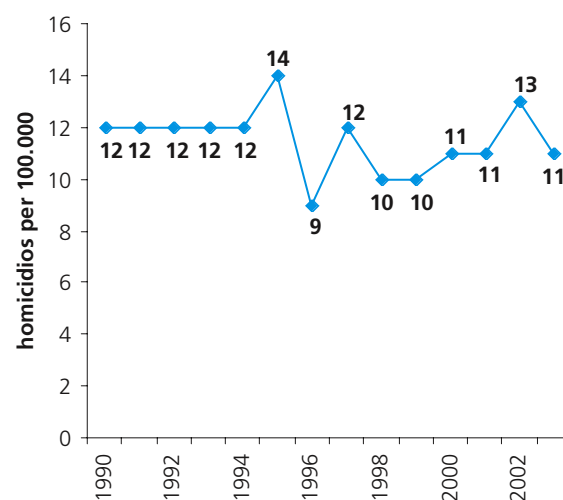
Fuente: PAHO<sup>149</sup>

con tortura en el país, pero en los primeros 20 días de 2006, fueron 306 casos, y en casi dos tercios de los asesinatos se dice ha habido elementos de sadismo.<sup>145</sup> Mujeres en particular, han sido mutiladas, a menudo, una práctica común durante los tiempos de la contra insurgencia. Como se discutió anteriormente, las probabilidades de persecución pueden ser tan bajas como de un 2%. Como en El Salvador, la mayoría de los asesinatos están efectuados con un arma de fuego. El número de homicidios con arma de fuego efectuados en Guatemala en los pasados cinco años se ha incrementado drásticamente, mientras que asesinatos con armas blandas han seguido siendo bastante estables. Cerca de 1500 armas de fuego se reportan robadas cada año en Guatemala, proporcionando una fuente nueva doméstica a los criminales.<sup>146</sup>

Las tendencias de homicidio en Honduras no pueden ser revisadas, porque no hay de datos estandarizados. Las figuras enviadas a INTERPOL en 1998 sugieren que este país puede tener no solamente la tasa más alta de asesinato de la región, si no también de todo el mundo. Aunque desde ese tiempo, no se ha enviado ningún dato sobre homicidio a CTS, Interpol, o a la Organización Mundial de la Salud. Los periódicos observan disminuciones significativas en las estadísticas de la policía en comparación con esos tiempos. La oficina nacional de estadística de Honduras divulga que el asesinato era la tercera causa principal de muerte en el país entre 2000 y 2002, después de enfermedades del corazón y el cáncer, responsables del 10% de todas las muertes. Algo así como el 92% de las víctimas son masculinos, y el homicidio es la fuente principal de los años de vida perdidos, puesto que muchas de sus víctimas son jóvenes.<sup>147</sup> Según informes de los periódicos, en los primeros seis meses de 2005, asesinaron a 1468 personas, 15% menos que en el mismo período en 2004. Entre 2001 y 2004 más de 14.000 personas fueron asesinadas, con un promedio de 2800 por año.<sup>148</sup> Esto daría a Honduras una tasa del homicidio de cerca de 39 por 100.000, encima de Guatemala y El Salvador.

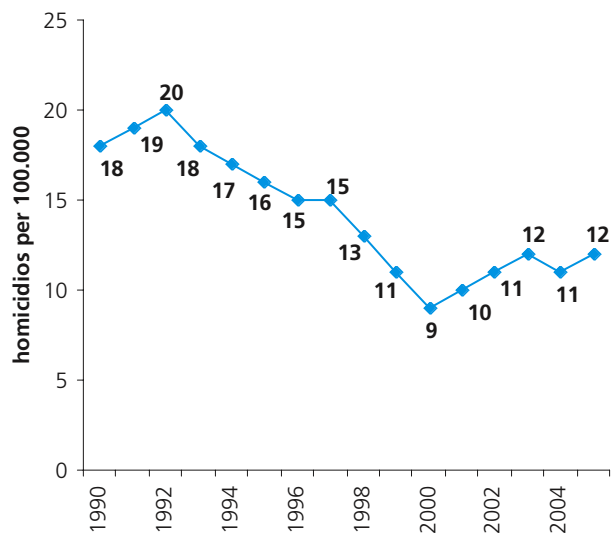
Los datos para Belice provienen de fuentes de salud pública y están solamente disponibles hasta 2002, pero demuestran una tendencia de incremento clara y constante. Si las estadísticas de homicidio continuaran levantándose a esta tasa, el dato para 2006 sería de 35 asesinatos por 100.000. Si estos datos se pudiesen com-

**Gráfica 47: Tasa de homicidio en Panamá - datos de policía**



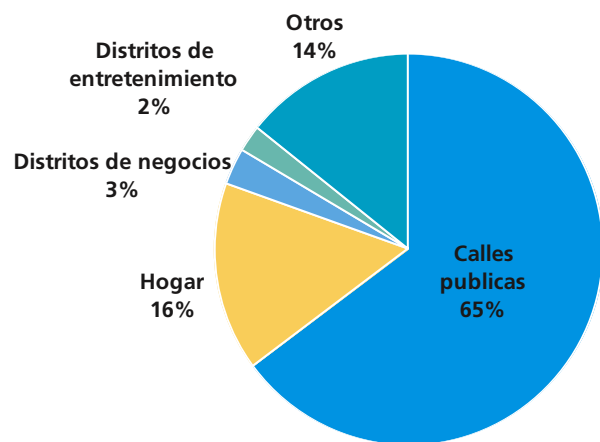
Fuente: CONADEC, Ministerio de Gobierno<sup>150</sup>

**Gráfica 48: Tasa de homicidios en Nicaragua - datos de policía**



Fuente: Rodgers 2004; Policía Nacional de Nicaragua 2005<sup>151</sup>

**Gráfica 49: Ubicación de homicidios en Nicaragua en 2005**



Fuente: Policía Nacional de Nicaragua 2005<sup>152</sup>

parar con las estadísticas de la policía, éstas se colocarían a Belice en igualdad con el resto de la región. Por supuesto, este país tiene un poco mas de un cuarto de millón de habitantes, así que el crecimiento de tres asesinatos por 100.000 por año desde 1997 indica siete u ocho asesinatos adicionales por año. Mientras que este número es pequeño en términos absolutos, sigue siendo significativo en un país con una población tanta pequeña como la de una ciudad.

Mas al sur, las tasas comienzan a declinar. Costa Rica, con tasas de homicidio relativamente bajas (cerca de seis por 100.000) se observa bien en los datos de ETC, proporcionando un ejemplo de un país que se salva de la guerra y lo peor del comercio de las drogas. No obstante, las tasas se han levantado levemente a partir de los 1990s, y mientras se mantienen bajas para la región, aun hay sitio para mejorarlas. Las tasas de homicidio de Panamá son también relativamente bajas y estables. Por supuesto, el país no ha tenido que ocuparse de la historia de guerras civil que afligía a sus vecinos norteños, pero sigue siendo afectado por su papel prominente en el comercio internacional de las drogas.

En contraste con el resto de la región, Nicaragua aparece haber llegado a ser más segura en 1990s, y la tasa del homicidio se ha nivelado después de experimentar un aumento leve en los primeros años de este siglo. Los niveles relativamente bajos de la violencia encontrados en el país demuestran que un pasado violento no determina un futuro violento. Aunque alarmantemente, muchos de los homicidios ocurren en las calles, en vez de en el hogar. Esto sugiere que el crimen en las calles puede ser la base de dos tercios de todos los crímenes.

Es exactamente esta parte de los homicidios - éstos que resultan de crimen en las calles y de conflictos - por lo cual se culpan a los miembros de los maras. La sección siguiente analiza los datos referentes a pandillas en la región y considera si los esfuerzos del contra-crimen que apuntan a este grupo son probables para tratar las causas de la base de la violencia en sociedades centroamericanas.

### 2.3 Pandillas juveniles

En esta región, como en todas partes, los problemas de droga y violencia son atribuidos a gente joven, especialmente hombres jóvenes agrupados en "pandillas". Globalmente, hombres jóvenes actuando en grupo dominan muchas formas de crimen, pero se requiere hacer una distinción entre asociaciones criminales informales y verdaderas pandillas institucionalizadas. En muchas partes del mundo, muchachos y jóvenes desocupados se juntan en las esquinas de las calles y se dedican a conductas anti-sociales. Muchas de estas agrupaciones se dan a sí mismas nombres y proceden a victimizar a sus comunidades locales. Pero estas pandillas realmente no son más que los individuos que las integran; carecen de una continuidad institucional que compromete sus miembros a un estilo de vida dedicado a la criminalidad. En contraste, una

“pandilla” en el sentido propio de la palabra, tiene una existencia independiente de su membresía actual. La distinción es comparable entre una turba y un ejército y es clave para determinar las intervenciones apropiadas.

Una pandilla institucionalizada es un marco a través del cual la membresía fluye, a veces a lo largo de generaciones, y tiene su propio conjunto de reglas y convenciones. Estas generalmente incluyen unas historias estilizadas y secretas, rituales de iniciación, sistemas de categorización, ritos de admisión, reglas de conducta y rituales de muerte. Los miembros de la pandilla consideran a la lealtad como lo más importante en sus vidas. Se convierte en la fuente primaria de identidad y es frecuentemente asociada a una familia extendida – dos aspectos muy atractivos a jóvenes sin guía y rumbo cuyas familias reales o están ausentes o son disfuncionales. Como resultado de ello, los miembros de las pandillas hacen grandes esfuerzos por identificarse como tal, adoptando ropaje característico, tatuajes, graffiti, señales de mano y lenguaje vernáculo. Ellos están frecuentemente, aunque no siempre, atados a un territorio particular donde residen la mayoría de los miembros. Su relación con esta comunidad puede ser opresiva, protectora o un poco de ambas. Muchas pandillas institucionalizadas se iniciaron como asociaciones voluntarias defensivas de jóvenes de una comunidad victimizada. A lo largo del tiempo, grupos de autodefensa pueden evolucionar en estafadores de protección exigiendo compensación por la seguridad que proveen. Una vez que el control sobre el barrio es absoluto, ellos pueden exigir el derecho exclusivo de victimizar a la población.

Los códigos de las pandillas comprometen explícitamente a sus miembros a involucrarse en crimen y a oponerse a toda aplicación de la ley. En consecuencia sus miembros cometen crímenes no solamente como medio hacia un fin (tal como ganancias u otras formas de beneficio personal), sino como una manifestación esencial de lo que son. Este hecho es muy importante para anticipar la reacción de los miembros de pandillas a cualquier intervención. La aplicación pesada de la ley es vista como un desafío y es improbable que disuada a los jóvenes dispuestos a morir por sus identidades de pandilleros. Tal y como sucede con unidades militares, la resistencia a la coerción, valor y auto sacrificio son temas esenciales del discurso de la pandilla y son tomados muy seriamente por sus miembros. Muchos escogerían la muerte al deshonor.

En Centroamérica las pandillas juveniles son más prominentes en el discurso público, en la forma de “pandillas” o “maras”. En varios países centroamericanos, incluyendo El Salvador, Honduras, Guatemala, y Nicaragua, estas agrupaciones son vistas como el núcleo del problema local de crimen.

### **Pandillas de Norte América**

Para poder entender a las maras, es esencial entender un poco acerca del gangsterismo en los Estados Unidos, y particularmente en el estado de California. Los Estados Unidos es una nación de inmigrantes, pero cada oleada sucesiva tiene que pasar por el crisol de la marginalización antes de lograr integrarse. Diferencias étnicas, de lenguaje, religiosas u otras diferencias han apartado a los nuevos inmigrantes y los han contrapunteado con los locales pobres con los que se ven forzados a competir por empleos y otros recursos. Desde hace tiempo los nativos pobres han albergado pandillas y por ello la creación de estructuras similares entre nuevos grupos inmigrantes es de alguna manera predecible, aunque sea nada mas como una reacción defensiva.

Estas agrupaciones pueden ser eventualmente destruidas o absorbidas por rivales, pueden desaparecer en tanto que los inmigrantes son integrados o pueden llegar a institucionalizarse para emerger como estructuras con una inercia propia. Una vez que están bien establecidas, una pandilla callejera puede llegar a estar afiliada a agrupaciones “cúpula” de pandillas, creando nuevas alianzas e influenciando sus tradiciones y actividades. A miembros individuales puede o no permitirseles continuar con sus vidas cuando alcanzan la edad a la cual ya no es apropiado ser miembro de pandillas. En general, sólo se encuentran miembros mayores de pandillas en comunidades donde la movilidad fuera de la comunidad es limitada. Muchos miembros de pandillas se gradúan a la criminalidad profesional adulta, quizá usando sus vínculos con la pandilla para avanzar sus propios fines. Sin embargo, estos individuos han superado la necesidad adolescente por el confort familiar de la pandilla y tienden a dar mayor importancia a su ganancia personal que a cualquier sentido de lealtad por el grupo.

La relación entre las pandillas callejeras, que se inician como locales y territoriales, y el crimen organizado transnacional puede ser difícil de distinguir. Claramente, donde es posible, es ventajoso tanto para las pandillas y las organizaciones criminales transnacionales el formar alianzas. Las pandillas locales proporcionan la red ideal para la distribución de droga o para, por ejemplo, conseguir mercancía robada mientras

que sus asociados internacionales proveen las drogas y distribuyen los bienes robados. Los vínculos entre grupos criminales y pandillas pueden ser intensificados cuando ambos son de la misma distintiva nacionalidad. Pero las pandillas callejeras a menudo tienen sus propios asuntos que tratar, originados en el hecho de que estos suelen ser más que aventuras generadoras de ingreso. Las pandillas están compuestas de gente joven asociada por su residencia en una ubicación particular y continúan preocupados principalmente por asuntos locales, incluyendo cuestiones de identidad, territorio y respeto. Ello puede llevarlos a actuar en contra de sus propios intereses económicos, convirtiéndolos en socios impredecibles de verdaderos criminales profesionales.

Frecuentemente se comete el error de suponer que las pandillas que comparten el mismo nombre (o que operan bajo la misma organización cúpula) responden a una cadena individual de mando, pero este no necesariamente es el caso. Los organismos cúpula de pandillas con frecuencia son más simbólicos de relaciones históricas que demostrativos de unidad actual de liderazgo. Por ejemplo, un asunto que se verá más adelante es la emergencia de pandillas callejeras transnacionales, pero no es claro actualmente si éstas son grupos que comparten un nombre y un conjunto de convenciones (como los aficionados internacionales de algún equipo de fútbol) o si todos aquellos que presumen afiliación son verdaderas oficinas sucursales de la misma organización criminal. Se requiere aún más investigación en ésta área. En última instancia los acuerdos para mercar drogas o reunir mercancía robada son hechos entre individuos, y la fuerza de éste vínculo gira en torno en la coherencia e integridad de ambos actores.

Un riesgo ocupacional del gangsterismo es el tiempo que pasan en detenciones juveniles o en el sistema de prisión para adultos. Aquí, los miembros de pandillas callejeras están expuestos a una segunda red de agrupaciones – el sistema de prisión de pandillas. En los Estados Unidos las prisiones de pandillas se basan a menudo en factores étnicos y tienden a propiciar la identidad pan-hispánica, aunque algunas de las más despiadadas rivalidades pueden formarse entre prisiones de pandillas del mismo grupo étnico. Irónicamente, el tiempo en prisión permite que pandilleros de áreas geográficas dispersas identifiquen características comunes y forjen vínculos. La membresía en una prisión de pandilla puede ser considerada como un prerrequisito para la admisión a niveles más altos de las pandillas callejeras, creando así un incentivo perverso para jóvenes pandilleros ambiciosos. El tener tatuajes de prisiones de pandilla puede identificar a un hombre como depredador, en vez de presa en comunidades donde tal distinción es esencial para la supervivencia. La relación entre prisión de pandillas y pandillas callejeras puede ser compleja y difícil, pero a menudo la membresía en una prisión de pandilla es determinada por alianzas callejeras. Las prisiones de pandillas ofrecen protección y acceso a recursos, tal como en las pandillas callejeras, pero tienen su propio conjunto de reglas y rituales.

California es un punto tradicional de asentamiento para inmigrantes hispanos y hay áreas en las barriadas que rodean ciudades grandes como Los Angeles que han sido hispano parlantes por generaciones, aunque la nacionalidad de su composición puede haber cambiado con los años. El grupo étnico dominante en la mayoría de las áreas es el mexicano, pero hay un sentimiento de identidad pan-hispánica entre gente que vive en el extremo inferior del espectro económico y a menudo, debido a su entrada ilegal en el país, en el lado equivocado de la ley. Aquellos recién llegados de un cruce clandestino de la frontera pueden encontrarse en éstas áreas azotadas por el crimen y enfrentan un nada deseado dilema: ¿debo ser víctima o verdugo?

Un grupo así son los salvadoreños refugiados que llegaron al área Rampart de Los Angeles en los 1980's. Esta área estaba dominada por pandillas de etnia mexicana, que depredaban a los recién llegados, pero fue también el lugar de nacimiento de la pandilla de la Calle 18 en los 1960's, una pandilla que operaba sin barreras étnicas para entrar. Los jóvenes salvadoreños tenían dos alternativas: o se unían a la Calle 18 o formaban su propia pandilla para combatirla. Aquellos que optaban por la segunda formaron lo que llegó a conocerse como Mara Salvatrucha, y a sí empezó la rivalidad entre los dos grupos.

Ambos grupos llegaron a alinearse a la Mafia Mexicana de prisioneros y se convirtieron en "Sureños", adoptando el número 13 en su iconografía (por la letra "M", la 13ava. letra del alfabeto).<sup>153</sup> Como resultado la Mara Salvatrucha es a menudo conocida como "MS-13". Sin embargo, esta alianza nominal hizo poco por disminuir la violencia entre M-13 y M-18, la cual fue regresada a El Salvador una vez que los pandilleros empezaron a ser deportados en masa en los 1990's.

El grado al que los deportados son responsables de los problemas del crimen de la región es discutible (véase la sección 1.4 arriba), sin embargo, no existe ninguna duda que influenciaron la cultura local de las pandil-

las. A nivel per capita, Honduras y El Salvador han recibido un gran número de deportados, y es en estos países es que el problema es más severo. Guatemala ha recibido solamente la mitad de deportados per capita, mientras que los otros países han recibido mucho menos. Ésta puede ser una razón de porque las pandillas en Nicaragua, que tiene una gran tradición en pandillerismo, no son tan violentas como en los otros tres países.

### De las pandillas a las maras

En América Central el término “pandilla” ha sido por mucho tiempo aplicado a agrupaciones delictivas juveniles, las cuales existían aún antes del inicio de los conflictos de la Guerra Fría de la región. En contraste, el término “mara” emergió solo a mediados de los 1980's<sup>154</sup> y para muchos tiene unas tonalidades más siniestras. En este informe, así como en el lenguaje común, los dos términos se usan de manera intercambiable.

Las pandillas han existido en América Central desde al menos los 1960's y 1970's, disminuyendo su importancia durante las guerras de los 1980's. Pero los grupos cambiaron radicalmente cuando fueron cruzados con los deportados que llegaban de los Estados Unidos en los años 1990's. Actualmente, la cultura de pandilla de países como El Salvador, Honduras y, en un menor grado, Guatemala, se parece mucho la de las áreas hispanas de Los Angeles en muchos aspectos, aunque la fortaleza de los vínculos entre pandilleros en Centroamérica y aquellos de los Estados Unidos está aún siendo investigada.

El grado al cual las pandillas están institucionalizadas varía entre países, con el dominio de algunas grandes pandillas cúpula en algunas áreas y una menor organización en otras. Este se manifiesta en el número promedio de miembros por pandilla calculado en la tabla que sigue, siendo cuatro pandillas de El Salvador órganos cúpula. Sería erróneo concluir que 2000 miembros responden a una única cadena de mando en El Salvador, pero es probablemente cierto que las pandillas en Panamá, Nicaragua y Guatemala están más fragmentadas y son más pequeñas en escala. Para propósitos de comparación, el Centro Nacional de Jóvenes Pandilleros estima que el número de pandillas de jóvenes en los Estados Unidos es de 21,500, con 731,500 miembros,<sup>155</sup> y un tamaño promedio de 34.

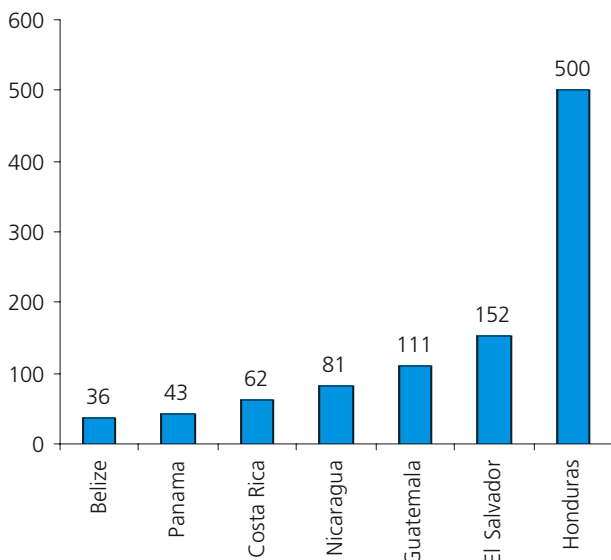
**Tabla 4: Estimados de membresía en pandillas centromericanas**

País	Numero de pandillas	Membresía total	Numero promedio de miembros por pandilla
Panamá	94	1385	15
Nicaragua	268	4500	17
Guatemala	434	14,000	32
Belice	2	100	50
Honduras	112	36,000 <sup>156</sup>	321
Costa Rica	6	2660	443
El Salvador	4	10,500	2625
TOTAL		69,145	

Fuente: Adaptado de Hernández, 2005<sup>157</sup>

La intensidad del problema de las pandillas se comprueba con el número de integrantes de las pandillas por cada 100,000 habitantes (Gráfica). Estas cifras indican que es en Honduras en donde los miembros de pandillas equivalen al porcentaje mayor de población, mientras que la membresía a las pandillas en El Salvador es comparativamente más pequeña en proporción a su población, aunque más alto que en los países en donde las pandillas es un factor menos común. Para efectos de comparación, hay unas estimaciones de 224 miembros de pandillas por cada 100,000 habitantes en los Estados Unidos.

Sin embargo, es probable que estos estimados de membresía en pandillas sean inexactos. Por ejemplo, casi el doble del número estimado de pandilleros en El Salvador fueron arrestados el primer año de redadas anti-pandillas en ese país.<sup>159</sup> La mayoría de estos fueron puestos en libertad de inmediato por los tribunales, pero es improbable que la población total de pandillas del país haya sido arrestada dos veces en ese período. Algunos estimados hacen un conteo mucho mayor, de 200,00 a 500,000.<sup>160</sup>

**Gráfica 50: Miembros de pandillas por 100,000 habitantes**

Fuente: Calculado de Hernández, 2005<sup>158</sup>

Por supuesto que estimar con exactitud el número de pandilleros es extremadamente difícil. Además del hecho de que se trata de una actividad clandestina, existen varios grados de participación pandillera, y a menudo es difícil saber a quién incluir en el conteo. Por ejemplo, mientras que hay pandillas femeninas y pandillas integradas en género, el núcleo de la membresía de la mayoría de los grupos es principalmente, o quizás exclusivamente, masculino. Los socios femeninos de los pandilleros, cuyo grado de participación criminal puede variar y que a menudo se asocian con otras pandilleras femeninas, podrían razonablemente ser incluidas o excluidas del conteo de pandillas. Además, las pandillas callejeras atraen típicamente una periferia de aspirantes, incluyendo jóvenes que no se han iniciado plenamente en el grupo y otros miembros del barrio que proveen servicios a la pandilla, tales como niños o drogadictos empleados como vigías. Las pandillas también tienen miembros retirados o semi-retirados, los que pueden o no estar envueltos en otra actividad criminal. Los pandilleros pueden asociarse con traficantes de drogas u otros que no son miembros de la pandilla, y podrían jugar un papel clave en su actividad criminal. Aún dentro del núcleo de miembros activos iniciados, hay a menudo un “círculo íntimo” que está envuelto en activi-

dades que los miembros más jóvenes de la periferia no saben nada de ello.

También varían los estimados sobre el grado en que los pandilleros son responsables por el aumento en los niveles de crimen en sus respectivos países. El anterior Ministro de Seguridad de Honduras, Oscar Álvarez, culpa a las maras por el grueso del crimen en ese país,<sup>161</sup> pero la policía hondureña no ha puesto a disposición estadísticas para respaldar esa afirmación. Las investigaciones indican que menos del 5% de todo el crimen en Honduras es cometido por menores de 18 años y los jóvenes menores de edad comprenden una gran proporción de la membresía de las maras.<sup>162</sup>

En El Salvador se afirma que el 60% de todos los homicidios son llevados a cabo por las maras,<sup>163</sup> pero, otra vez, la evidencia de esta conclusión no es clara. De acuerdo a la Fiscalía General, El Salvador sufrió 3781 homicidios en 2005, de los cuales el 60% son 2269. Si los 10,500 gánsteres del país fueran responsables de éstos, entonces una de cada seis personas mató a otra ese año. Esto los haría un grupo excepcionalmente violento – si los gánsteres de EUA (que incluyen pandilleros centroamericanos) mataran a esa tasa, la tasa de homicidios de EUA sería de 41 por 100,000 basado en solo esa actividad. Al contrario, las investigaciones hechas por el Instituto de Medicina Forense pudo nada más atribuir un 8% de homicidios por arma de fuego en 2000 a la actuación de las maras.<sup>164</sup> Además, contrario a los temores populares, investigación cualitativa sobre pandillas ha sugerido que las víctimas más comunes de la violencia mara son otros pandilleros.<sup>165</sup> De manera similar en Guatemala, un estudio policíaco reciente de los 427 asesinatos que ocurrieron en ese país en enero de 2006, sólo 58 de estos pueden atribuirse a la actividad de pandillas (14%), 40 en áreas urbanas y 18 en el interior.<sup>166</sup>

En Honduras, el Casa Alianza ha observado los asesinatos de la gente joven desde 1998. En 2006, solamente 15% de estas muertes fueron de personas que se encuentra entre los años 18-22 (y 10% éstas de personas por debajo de los 18 años) que podrían atribuirse a la violencia de las maras.<sup>167</sup> Debido a que el grupo demográfico que sustenta la base de los miembros de las maras, es muy poco probable atribuirles estos hechos.

La policía nicaragüense es menos proclive a culpar de la tasa de homicidios del país a jóvenes pandilleros, y es generalmente reconocido que las pandillas nicaragüenses son menos violentas que sus contrapartes más al norte. La lista de los más buscados del país se compone principalmente de hombres mayores, ninguno de los cuales está asociado a pandillas. Mientras que casi dos tercios de los homicidios en 2005 ocurrieron en la calle, hay muy buenas razones para preguntarse si las pandillas se encontraban en el centro del problema. La mayoría de los 119 hombres arrestados por homicidio intencional en el primer trimestre de 2006 podrían caber en el perfil demográfico de las pandillas, pues eran de edades entre 18 y 25 (55%), desempleados (43%) o trabajadores (26%), con sólo educación primaria (57%). Para la mayoría (78%), sin

embargo, fue su primer arresto y en general los pandilleros tienen amplios antecedentes criminales antes de alcanzar la mayoría de edad. Aún más, la mayoría de los asesinados eran hombres mayores a 25 años (58%) y desempleados (90%).<sup>168</sup> Ellos sugiere que el grueso de estos homicidios no fueron el resultado de guerras entre pandillas, lo que generalmente comprende el grueso de la violencia mara. Estos asesinatos pueden ser debidos a robo en la calle o extorsión, pero ninguno de estos es en sentido estricto es del dominio de las pandillas callejeras.

En general, este grupo de la población - hombres urbanos marginados entre las edades de 15 y 24 - es responsable de una gran parte de la violencia en cualquier sociedad, independientemente de que exista o no un problema de pandillerismo. Por ejemplo, en Jamaica en 2004, mas de la mitad de la gente arrestada por asesinato eran hombres entre la edades de 15 y 24, sin embargo este grupo demográfico es responsable de solamente el 10% de la población en general.<sup>169</sup> En El Salvador, según las mejores estimaciones, aproximadamente 2% de este grupo demográfico de alto riesgo son mareros. De esta forma, si los miembros de las maras fueran menos violentos que cualquier otra típica contraparte, serían responsables del 1% del total nacional de asesinatos. Estudios que atribuyen el 8% de los homicidios de arma de fuego a ellos sugieren que los maras son ocho veces más probables de cometer homicidio que personas que no son miembros de pandillas. Pero tómese en cuenta, que algunas provincias de El Salvador tienen ocho veces el índice asesinatos de las provincias más seguras, así que una vez que su estado social y sus áreas residenciales se pondere, el papel que las pandillas jugaría un papel cuestionable.

Claramente, dado la importancia social de esta pregunta, el grado a la cual los miembros de las maras son responsables del homicidio, el cual se incrementa en estos países, es un área que necesita urgentemente de una investigación profunda. Pero esos estudios que existen parecen mencionar la asociación simplista entre las maras, la tasa del asesinato, y la hipótesis que el encarcelamiento de miembros de las maras parará la violencia. Mientras que los miembros de las maras se atribuyen una gran cantidad de asesinatos, lo mismo sucede con otros individuos del mismo grupo demográfico y socioeconómico a nivel global, que habitan en sociedades que son altamente violentas. El papel que desempeñan los miembros de los maras en el ambiente de la violencia nacional debe ser explorado por si mismo más a fondo si se quieren divisar intervenciones apropiadas.

Hay también razones para cuestionar el grado de participación de las maras en otras formas de actividad criminal por las que son frecuentemente culpadas. La asociación es a menudo hecha entre maras y drogas, especialmente cocaína. De hecho, la policía de El Salvador asegura que las dos principales fuentes de ingreso de las maras son extorsión y tráfico de drogas.<sup>170</sup> Hay variadas razones para cuestionar la profundidad de esta relación a través de la región; sin embargo:

- Todos los indicadores sugieren que los mercados de drogas en la regions son relativamente bajos, insuficientes para ser una importante fuente de ingreso para los criminales organizados.
- La mayoría del trafico de cocaína es marítimo, y la mayoría de los miembros de las pandillas están basados al interior del país.
- La importancia de las redes de tráfico centroamericanos hacia el mercado de los Estados Unidos parece ser limitado.

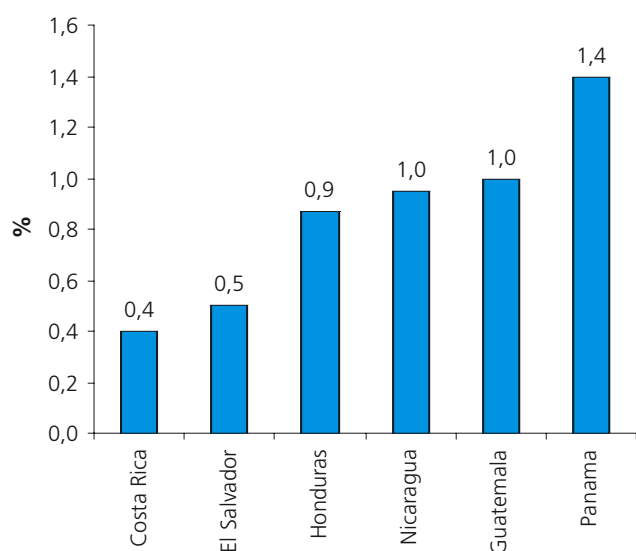
#### Pequeños mercados domésticos de drogas

La popularidad del consumo de cocaína (incluyendo crack) en los países centroamericanos no es terriblemente alta, de acuerdo a estimados basados en datos recientes (ver Gráfica). En Honduras, por ejemplo, menos del 1% de la población de edad 15 a 64 consumen cocaína anualmente. De este grupo, no más de la mitad son consumidores crónicos.<sup>171</sup> Esto sugeriría un máximo de 20,000 drogadictos en el país, menos del estimado de miembros de pandillas. Simplemente hay demasiados gánsteres y no suficientes adictos para el tráfico local de droga para que sea una fuente importante de ingreso. Ya sea que los niveles de consumo de drogas están muy subestimados, la membresía de pandillas está sobrestimada, o el tráfico de cocaína no es una fuente mayor de ingreso para las maras en Honduras.

De igual forma, en El Salvador, una investigación nacional en 2006 sobre el uso de la droga encontró que solamente alrededor de un cuarta parte del uno por ciento de la población uso cocaína y alrededor de un quinto de un uno por ciento utilizaron "crack".<sup>172</sup> Incluso si no hubiera traslapo entre estas poblaciones, sugeriría que hay debajo de 10.000 adictos a la cocaína en El Salvador, menos que el número estimado de los miembros de las maras.

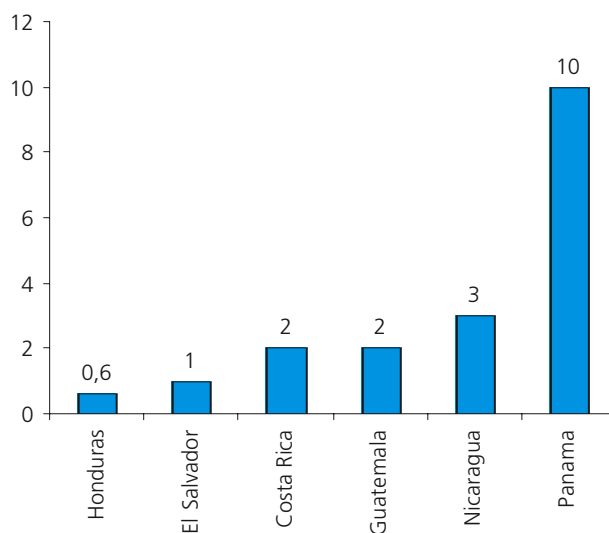
Los miembros de las maras también utilizan las drogas en una tasa mucho más alta que la población en general, así que lo mucho de lo que trafican es para consumo propio. Cerca de 43% de 938 miembros de las maras entrevistados en El Salvador en 2000 dijeron que utilizaron “crack” con frecuencia o constantemente.<sup>173</sup> Si esto fue generalizado a la población nacional del marero, casi la mitad de los adictos a la cocaína en el país podría ser los miembros de las maras. Los estudios forenses de los cadáveres de los miembros matados de las pandillas han encontrado altos niveles de cocaína en su flujo sanguíneo.<sup>174</sup> Solamente en Panamá la proporción estimada de adictos a la cocaína y las maras adictos a ella sugieren que el negocio doméstico de la cocaína podría ser una fuente importante del ingreso a los miembros de la pandilla, y el problema de las maras en Panamá no se mira generalmente como agudo. Semejantemente, los niveles del uso de las marijuanas son bajos en América Central comparada al resto del mundo, y la droga es muy barata en la región, según los mejores datos disponibles. Mientras que los miembros de las maras venden seguramente las drogas, como hacen por todas partes en el mundo, hay simplemente también muchos de ellos y un mercado muy pequeño para que éste se convierta en la base del sustento de la membresía.

**Gráfica 51: Proporción (%) estimada de la población que consume cocaína anualmente**



Fuente: estimados de bases de datos UNODC Delta

**Gráfica 52: Cociente de miembros de pandillas y usuarios crónicos de cocaína**



Fuente: Cálculo estimado de la base de datos UNODC Delta y Hernández, 2005

### Escaso potencial para la implicación en tráfico marítimo

Tal y como se observaba arriba, casi toda la cocaína que transita por la región sucede en grandes envíos controlados por perfectamente establecidas organizaciones de tráfico de droga, dominadas generalmente por Colombianos y los Mexicanos. Además, la mayoría de la cocaína se trafica por mar, no por transporte terrestre. El gobierno mexicano reporta que sólo el 30% de lo que entra en su país viene por tierra, y el Gobierno de EUA dice que un poco menos del 40% viene por tierra, por ello, sólo cerca del 12% de la cocaína pasa por ambas fronteras terrestres.<sup>175</sup> Hay algo de transporte aéreo de países centroamericanos a México, pero muy poco de Centroamérica directamente a Estados Unidos. Ello sugiere que sólo una pequeña porción de la cocaína traficada a los Estados Unidos pasa a través de la masa terrestre de América Central.

Aunque cada país en la región logró confiscar una tonelada o más de cocaína en 2004, el grueso de ésta está compuesta de varios decomisos grandes, a menudo concentrados en las costas. En Honduras, por ejemplo, en 2004 la policía hizo 21 decomisos de más de 100 gramos de cocaína que representó el 62% de toda la cocaína confiscada ese año. Sólo un decomiso, en la Bahía Jutiapa, produjo una tonelada de cocaína, más del 25% de toda la cocaína confiscada ese año. Similarmente, en Nicaragua en 2004 algo así como 42% de la cocaína recuperada ese año fue confiscada en sólo dos intercepciones mayores en la Costa Atlántica.<sup>176</sup> No se explica cómo pandilleros jóvenes, el grueso de quienes se hayan en zonas urbanas tierra adentro, podrían estar involucrados en este proceso.

A lo largo del Atlántico, la mayoría del tráfico de drogas es traficado por llantas rápidas, así que las paradas

para recargamento de combustible pueden ocurrir en áreas relativamente aisladas, tales como las áreas de RAAN y de RAAS de Nicaragua y de la costa del mosquito de Honduras. En el pacífico, grandes ciudades portuarias son la llave para estas paradas de abastecimiento. Sin embargo, la mayoría de las ciudades grandes de América Central son al interior del país, incluyendo las áreas urbanas más citadas de la actividad de pandillas, tal como San Salvador, ciudad de Guatemala, Tegucigalpa, Quetzaltenango, Santa Ana, Choluteca, y Copán.

Es confuso cómo la mayoría de los miembros de las maras, que viven lejos del mar y no se distinguen por sus habilidades marítimas, darían un valor agregado al proceso de traficar las drogas hacia el norte. Incluso con respecto a tráfico a lo largo de la Autopista panamericana, es confuso cómo los mareros podrían asistir. Podrían estar envueltos en el abastecimiento de una limitada ayuda logística o de seguridad de menor importancia, pero es altamente inverosímil que los miembros de las pandillas, que son generalmente jóvenes de la calle, sean los genios detrás del movimiento de la cocaína a los Estados Unidos.

### Limitada participación en el tráfico hacia los Estados Unidos

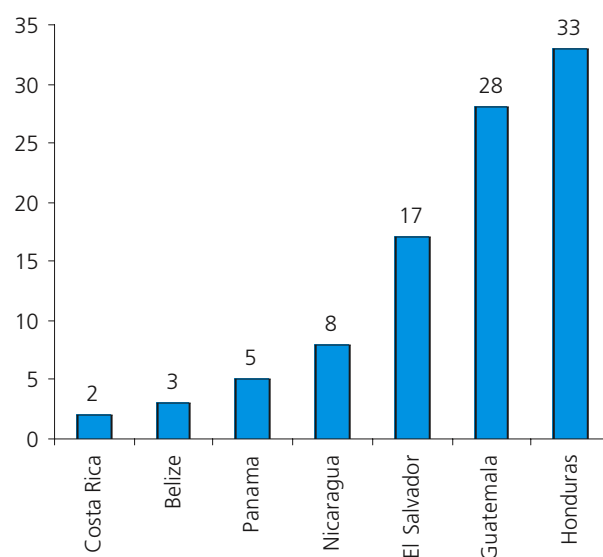
Como veíamos arriba, diásporas internacionales podrían producir redes de distribución de drogas, pero no parece que la diáspora centroamericana es una red clave de distribución en los Estados Unidos en la época actual. No hay grupos centroamericanos mencionados en la Evaluación de la Amenaza de la Droga de EUA en 2004. De las poco menos de 12,000 personas arrestadas por tráfico de drogas en los Estados Unidos, sólo 96 (menos de 1%) fueron de Centroamérica. De hecho, hubo tres veces más dominicanos arrestados por tráfico de drogas que todos los países centroamericanos juntos. Los salvadoreños son la nacionalidad dominante en la temida Mara Salvatrucha y en las pandillas Mara 18, pero su tasa de arrestos por droga como porcentaje de la población residente en los EUA es cerca del 5% de la de los dominicanos.<sup>177</sup>

Según los informes anuales sobre el gravamen de la amenaza de la droga emitidos por autoridades del estado al Centro Nacional de la Inteligencia de la Droga, Mara Salvatrucha están implicados en la venta de las drogas en la calle en un número de estados, incluyendo California, Nueva York, Texas, Virginia y Maryland (principalmente cerca de Washington, D.C.), y también en estados rurales como Arkansas y Tennessee. Pero según la mayoría de estos informes, Mara Salvatrucha está implicada principalmente en marihuana y metamfetamina.<sup>178</sup> La mayoría de la marihuana vendida en los Estados Unidos se produce nacionalmente o se importa de México y de Canadá. Poco si acaso se importa a través de Centroamérica - el valor de la droga en este momento es simplemente demasiado pequeño como para merecer traficar la por largas distancias. Semejantemente, la mayoría del metamfetamina vendido en los Estados Unidos se produce en los Estados Unidos y en México. Conexiones con las pandillas situadas en Centroamérica no son una fuente necesaria para estas drogas, y aparece que son ambas principalmente de las organizaciones mexicanas de los tráficos de droga que controlan los mercados de la droga de los Estados Unidos. De hecho, a pesar de que varias se mencionan organizaciones de tráficos de droga de un número de países centroamericanos en el reporte sobre el Gravamen Nacional de la Amenaza de la Droga 2007, los maras no se encuentran.

Hay también investigación cualitativa que sugiere que pandilleros y traficantes de droga constituyen dos grupos diferentes en Centroamérica. En El Salvador se hace la distinción entre pandilleros (miembros de pandillas callejeras), banderos (miembros de bandas de crimen organizado) y transeros, (traficantes de droga). Las relaciones entre estos grupos varían entre áreas y a través del tiempo – pueden estar plenamente integradas, puramente comerciales y aún hostiles. Típicamente, los pandilleros compran droga a los transeros para mercaderarla en las calles, en vez de conseguirla independientemente. Los banderos y los transeros están supuestamente protegidos por sus conexiones con elementos corruptos de los servicios de policía, mientras que los gánsteres callejeros llevan la carga de las campañas de aplicación de la ley.<sup>179</sup>

Los maras se refieren a menudo como “transnacionales” en su carácter, porque los grupos existen con el mismo nombre en

**Gráfica 53: Número de Centroamericanos arrestados por tráfico de drogas en los EUA en 2004**



Fuente: UNODC ARQ 2004

diversos países. Puesto que algunos mareros fueron deportados anteriormente, sería inusual que no hubiera cierta comunicación entre estos grupos. Pero el espectro de “megapandillas”, respondiendo a una estructura del un solo comando e implicado operaciones de tráfico sofisticadas, no parece actualmente haber sido observado, por lo menos en cuanto se refieren los tráficos de droga. Es probable que miembros de las maras se preocupen por aspectos más locales. Unos de éstos son controlando el territorio y demandando “respecto” de la autoridad en el, así como a comerciantes y operadores del transporte público.

La extorsión es claramente una actividad en la cual los mareros están implicados pesadamente en algunas áreas. Por ejemplo, la Cámara de Comercio e Industria en San Miguel, El Salvador, afirma que el 80% de su membresía está actualmente siendo extorsionada por las maras y que algunos negocios están pagando tanto como \$1,200 a 1,400 dólares al mes de dinero de protección. Sindicatos de transporte en la ciudad están también en armas, con miembros de maras que demandan un “impuesto” de tres a cinco dólares al día de chóferes de minibús para operar en las áreas que ellos controlan. Las autoridades salvadoreñas han respondido estableciendo una unidad especial anti-extorsión en la policía.<sup>180</sup>

El vínculo entre las maras y la extorsión es claro. Por ejemplo, la Cámara de Comercio e Industria en San Miguel, El Salvador, afirma que el 80% de su membresía está actualmente siendo extorsionada por las maras y que algunos negocios están pagando tanto como \$1,200 a 1,400 dólares al mes de dinero de protección. Sindicatos de transporte en la ciudad están también en armas, con miembros de maras que demandan un “impuesto” de tres a cinco dólares al día de chóferes de minibús para operar en las áreas que ellos controlan. Las autoridades salvadoreñas han respondido estableciendo una unidad especial anti-extorsión en la policía.

Pandilleros jóvenes están también asociados con tráfico humano y contrabando de inmigrantes, pero, otra vez, faltan números concretos del grado de esta participación. Esto está vinculado a la falta de evidencia concreta sobre el grado en general de tráfico humano en la región. El Departamento de Estado de EUA reporta 59 condenas en todo el hemisferio occidental por tráfico humano en 2005, de 56 en el 2004, y 27 en 2003.<sup>181</sup> Compárese esto con Europa que registraron 1984 condenas en 2005. Hay muchos incidentes de miembros de maras que depredan a emigrantes voluntarios que se dirigen al norte, pero parecería que mucha de esta migración continúa fuera del ámbito del crimen organizado.

Estas observaciones sugieren que pandilleros jóvenes se han convertido en chivos expiatorios a los que se les culpa del aumento en las tasas de crimen del país, cuando que ellos pueden ser actores menores en países con mucha violencia endémica y con operaciones sofisticadas de crimen organizado que operan con impunidad debido a corrupción en la aplicación de la ley. Esto no es una excusa para la criminalidad de la mara. Siguen siendo un peligro a sí mismos y a la sociedad. Pero sí sugiere que las estrategias de reducción de crimen basadas en el encarcelamiento de pandilleros, son probablemente inefectivas en solucionar las causas de la violencia.

Desgraciadamente, en los países más afectados – particularmente en El Salvador y Honduras – la respuesta al problema de las pandillas ha sido combatir fuego con fuego. Bajo varias políticas de “mano dura”, la membresía en pandillas ha sido criminalizada, las sentencias juveniles alargadas y miles de jóvenes arrestados. De manera informal, grupos vigilantes conocidos bajo el término paraguas de “sombra negra”, alegado con participación de los miembros de las fuerzas de la seguridad, han sido culpados de ejecuciones extrajudiciales de pandilleros y niños de la calle a la manera de “Escuadras de la Muerte” de la época pasada.<sup>182</sup>

Honduras, el país con la tasa más baja de policías/población de la región ha compensado esta debilidad promulgando leyes anti-crimen draconianas. Es un crimen el pertenecer a una pandilla en Honduras. Bajo la Ley de Policía y Orden Social de 2002, se le permite a la policía detener pandilleros y vagos sin orden de arresto. Como resultado, el 90% de los reclusos no han sido indiciados por algún crimen. Una investigación en 2005 determinó algo así como el 40% de los reclusos en la prisión de San Pedro Sula fueron arrestados y detenidos como resultado de la ley de “Mano Dura” contra las pandillas.<sup>183</sup>

Un comentarista de los Estados Unidos incluso se ha referido a las pandillas como “la nueva insurrección urbana”.<sup>184</sup> Éstas son palabras peligrosas en una región sabida por la represión brutal de insurrectos, en un mundo donde las líneas entre el crimen y el terrorismo organizados se están velando cada vez más. En países, como Brasil, están tratando a los miembros de las pandillas de la calle cada vez más como terroristas y los militares han sido desplegados contra ellos. Hay implicaciones serias para la democracia cuando tratan a los ciudadanos como los combatientes y los vecindarios como territorio hostil.

La verdad es que los miembros de las pandillas son simplemente el sector más violento (varones urbanos

marginados entre las edades de 15 y 24) de sociedades muy violentas. Destruir este grupo no solucionará las causas de la raíz de la violencia en estos países. La violencia ocurre no solamente en las calles pero en el hogar. Mientras que los datos sobre violencia privada son mucho más difíciles de obtener, los que si existen indican que las raíces de las tasas del homicidio de Centroamérica van mas a allá del grupo de jóvenes con tatuajes en la esquina.

## 2.4 Violencia en contra mujeres y niños

La violencia generalizada en Centroamérica se destaca en los niveles de la violencia contra las mujeres y los niños, violencia que ocurre generalmente fuera del contexto de las pandillas. Las altas tasas de homicidio son el reflejo de altos niveles de la violencia contra mujeres y niños. Mientras universalmente la mayoría de las víctimas de homicidios son masculinas, varios países en la región demuestran una alta proporción de víctimas femeninas, inusual en países con tal altas tasas de asesinato. Entre los 44 casos de asesinato de la gente joven supervisada por Casa Alianza en Honduras en 2006, el 40% de los niños debajo de 18 y del 10% de éstos entre 18-22 eran del sexo femenino.<sup>185</sup> Ninguno de estos caos se atribuyó a la violencia de los maras.

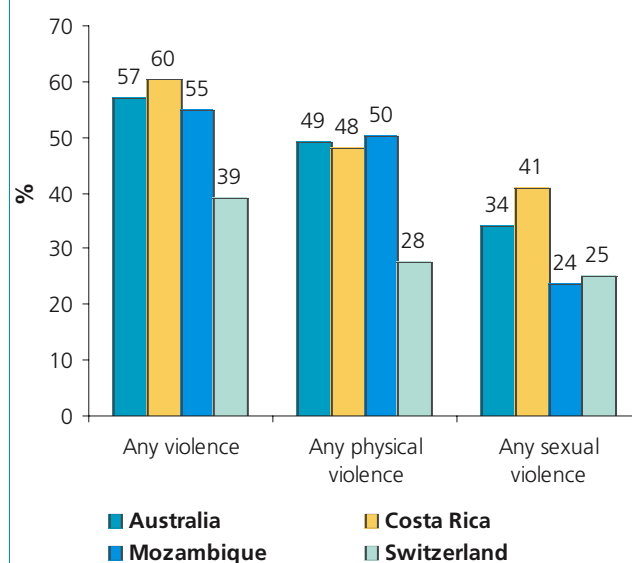
El nivel de la violencia doméstica en una sociedad no es capturado por las estadísticas de crimen. Las estimaciones varían en la parte de los incidentes de violencia doméstica reportados a la policía, y esta parte es altamente dependiente en la manera que el crimen se ve en el contexto local. Incluso donde las tasas de reporte son altas, estos crímenes se registran generalmente como asaltos, indistinguibles de discusiones de bares y de otras formas de violencia no letal. Pocos países divulgan la relación entre las víctimas y los autores, o aún los géneros de las partes.

Además el trabajo de investigación se ve limitado en su capacidad de capturar la incidencia real de la violencia en el hogar. Víctimas pueden dudar en mencionar abuso en la presencia del autor, y encuestas de hogares mas generales raramente otorgan suficiente privacidad para comprobar este aspecto. Dependiendo del contexto cultural, los encuestados podrían estar avergonzados de ser victimas o pudieran considerar la que la ofensa no es un crimen. Finalmente, ha habido algunos estudios que han hecho uso estandarizado de instrumentos y metodologías para obtener un sentido de que nivel de violencia domestica es normal y que debiera ser considerado notorio. El trabajo de las encuestas a menudo realizado por aquellos que intentan avanzar en las causas de las mujeres, tasas de victimización en sus vidas y ampliar los conocimientos de abuso son varias veces usadas para ilustrar el grado del problema. Las definiciones varían entre estudios, y así, complican la comparación internacional.

Una excepción es la encuesta internacional sobre la violencia contra las mujeres, que se ha aplicado en un número de países en años recientes, incluyendo Costa Rica. Datos comparables de cuatro países indican que, de los cuatro, las mujeres de Costa Rica experimentaron los niveles más altos de la violencia doméstica en el curso de la vida y los niveles más altos de violencia sexual. Más del 9% reportan haber sido violadas por sus maridos.

Desgraciadamente, Costa Rica es el único país en la región que ha participado en este proyecto. La estadísticas de la policía sobre violaciones y asaltos es muy limitada y es muy difícil considerarlos como indicadores de la situación verdadera del crimen. Es probable que las incidentes de violación y la violencia doméstica no sean generalmente reportadas en Centroamérica. Las sociedades centroamericanas siguen siendo patriarcales. En la encuesta 2004 de Latino barómetro, los países en esta región (junto con la República Dominicana) se distinguieron como las únicas en América latina en donde más de la mitad de éstos que votaron, opinaron que las mujeres deben concentrarse en el hogar mientras que los hombres deben concentrarse en el trabajo.<sup>186</sup> Solamente en Costa Rica y Panamá esto que fue una minoría de opinión, y el 66% de los encuestados en Honduras y Guatemala llevaron a cabo esta creencia. Un estudio de casi 5000 padres fue conducido recientemente en Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. La mayoría de

**Grafica 54: Porcentaje de mujeres reportando violencia domestica en sus vidas**



Fuente: International Violence Against Women Survey

estos se clasificaron (el 51%) como “hombres tradicionales”, que creen en que el padre es la cabeza jerárquica de la familia y debe actuar como un abastecedor y otorgante de la disciplina.<sup>187</sup>

Nicaragua ha sido el anfitrión de una serie de encuestas donde se encontraron los niveles mas altos de violencia domestica encontrados en cualquier parte en el mundo, con dos estudios a partir de los años 90 que demuestran que un quinto de las mujeres experimentó abuso físico severo. Un cuarta parte de los hombres rurales en una encuesta manifestaron estar de acuerdo que golpear a una mujer si ella descuidaba a los niños o a la casa, y el 10% de los encuestados pensaron que era aceptable si se negaban al sexo, Solamente el 17% de las víctimas en una encuesta declararon que reportaron estas ofensas a la policía.<sup>188</sup>

Guatemala se menciona con frecuencia como el país donde es especialmente peligroso ser una mujer, y el femicidio en el país fue el tema de un informe de Amnistía Internacional en 2005.<sup>189</sup> Las mujeres victimas de asesinato muchas veces fueron torturadas y mutiladas, como lo fueron durante la campaña del contra-insurgencia. La violación también fue utilizada como herramienta de la guerra psicológica en operaciones del contra-insurgencia, y los abusos todavía continúan. La proporción de mujeres víctimas del homicidios parece aumentar: en 2002 victimas mujeres fue de 4.5% de todas las víctimas del asesinato. En 2003, era 11.5% y en 2004 era 12.1%.<sup>190</sup> Las estrangulaciones, de las cuales generalmente son mujeres, han sido elevadas dramáticamente en los últimos cinco años.

Las sociedades donde las mujeres tienen a menudo altos índices de victimacion, se encuentran también altos niveles de abuso de niños. En un número de países centroamericanos, los niños pueden ser forzados en

situaciones de trabajo donde su salud y seguridad están en peligro. Niños trabajando a sido documentado en operaciones comerciales en un número de países. En El Salvador, por ejemplo, emplean a una gran cantidad de niños en la industria de la caña de azúcar, que se mira como una de las formas más peligrosas de trabajo agrícola. De acuerdo al observador de derechos humanos:

*Hasta una mitad de los trabajadores en las plantaciones de la caña de azúcar de El Salvador son niños bajo edad de 18 años, muchos comenzaron a trabajar en los campos entre las edades de ocho y 13. La Organización Internacional de Trabajo estima que por lo menos 5.000 y hasta 30.000 niños bajo la edad de 18 trabajan sobre plantaciones del azúcar de El Salvador.*<sup>191</sup>

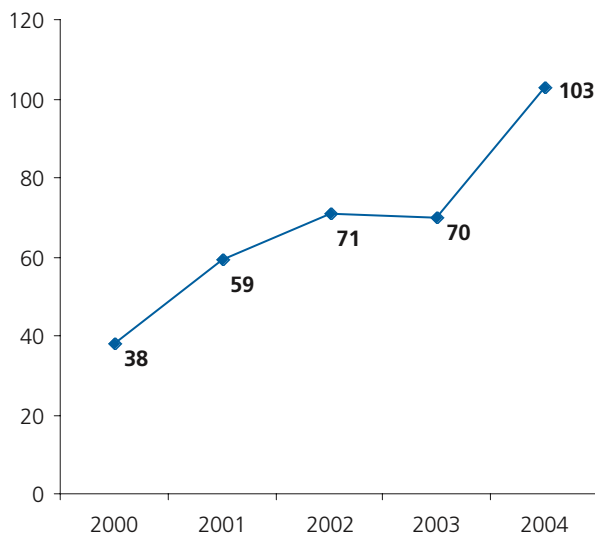
El trabajo de niños es también común en Honduras. En su encuesta nacional de hogares, casi un cuarto de los niños entre las edades de 13 a 15 años y el 42% de los jóvenes de 16 a 18 años divulgaron estar trabajando.<sup>192</sup> En Guatemala, según la OIT, los 16% de los jóvenes de 10-14 años trabajaban en 2003.<sup>193</sup> Los trabajadores domésticos, en particular, pueden estar sujetos a la explotación sexual de sus patrones:

*La encuesta rápida del gravamen en El Salvador encontró que el 66% de muchachas en servicio doméstico divulgaron haber sido físicamente o psicológicamente abusadas, muchas de ellas sexualmente, y que la amenaza de avances sexuales de patrones estaba siempre presente.*<sup>194</sup>

La Organización de Estados Americanos (OEA) ha hecho trabajo sobre el trafico humano en Centroamérica. La mayoría del trafico en Centroamérica ocurre dentro de la región, de países más pobres a países más ricos. Según la OEA, los “requisitos necesarios para la inmigración hacia Costa Rica y México esencialmente han encajonado los fenómenos de trafico hacia Nicaragua a Guatemala.”<sup>195</sup> Sin embargo, OEA menciona que, “en contraste con los otros cinco países de la región, Costa Rica, la República Dominicana y Panamá han estado implicados en trafico extra-regional en un mayor grado.” Nicaragua se caracteriza por ser una fuente de prostitutas de niños, traficados internamente y a otras partes de Centroamérica. La Comisión Interamericana de Mujeres citan a la policía de Guatemala, en estimar que se explotan a 2000 niños sexualmente en 600 burdeles de la ciudad de Guatemala solamente.<sup>196</sup>

Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Belice tiene experiencias de traficar por trabajo y sexo, y las mujeres jóvenes que son importadas de Centroamérica para trabajadores agrícolas hasta de

**Grafica 55: Las estrangulaciones en Guatemala**



Fuente: Policia Nacional Civil de Guatemala

China y India. A pesar del procesamiento legal de 18 casos que traficantes en 2004, el país no ha aumentado sus esfuerzos de proporcionar protección de víctimas y de procesar la corrupción relacionada con el tráfico, y así que fue colocado en una lista de observación por el segundo año consecutivo en 2005.

Los niños están susceptibles también a otras formas de violencia, por supuesto. Una investigación en 2001 de la explotación sexual de niños de Casa Alianza documentó una variedad de abusos en Costa Rica (Cental Limon, Sixaola, y San Jose), El Salvador, Guatemala, Honduras (Comayagua, Puerto Cortés, San Pedro Sula, la Ceiba, EL Progreso, y Tegucigalpa), y Nicaragua (Managua, Granada, y Somotillo) El gobierno de Estados Unidos indica que más de 1000 casos de explotación sexual de menores fueron documentados en Honduras en 2004, muchos implicaban el uso de niños rurales traídos a las áreas turísticas a lo largo de la costa. Nicaragua también se dice ser un país de fuente de las niños prostitutas.<sup>197</sup> Casa Alianza divulga que matan a dos niños cada día en Guatemala.<sup>198</sup> Ha habido demandas repetidas que las escuadrillas de la muerte apuntan a niños de la calle en Honduras, en una práctica similar a ésta vista en Brasil.

## 2.5 Tráfico de armas de fuego

El tráfico de drogas y el tráfico de armas es un problema mundial y América Central no es la excepción. Debido a la falta de un mantenimiento coordinado de registros, no hay una manera fácil de estimar el número de armas cortas en la región. Hay desacuerdos agudos sobre el número de armas cortas circulando en Centroamérica, con cifras citadas de hasta tres millones. De acuerdo con la Red de Acción Internacional de Armas cortas:

*Hay un estimado de 1.6 millones de pistolas en América Central, de las cuales cerca de 500,000 están legalmente registradas. Muchas de estas armas son remanentes de conflictos militares en la región en los 1970's y 80's, especialmente en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Después de que estos conflictos cesaron, miles de armas militares terminaron en el mercado ilícito en esas naciones. De ahí han empezado a fluir a países con menor historial de violencia armada generalizada, como Costa Rica, Honduras y Panamá... Se usan armas de fuego para cometer más del 70% de todos los homicidios en El Salvador, Guatemala y Honduras.*<sup>199</sup>

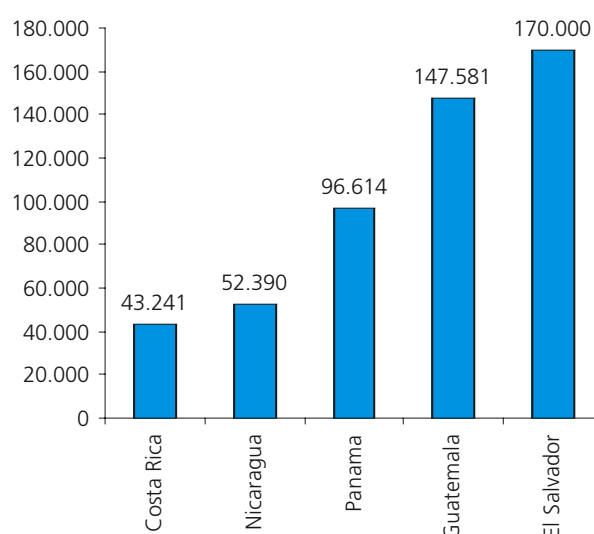
La Encuesta sobre Armas cortas esencialmente confirmó este estimado general, colocando la cifra en 1.5 millones en 2002. Confirmó también que cerca de medio millón de armas de fuego estaban registradas en manos civiles, alrededor de 150,000 fueron entregadas a la policía y al ejército y cerca de 90,000 a seguridad privada.<sup>200</sup> La Gráfica muestra la distribución del medio millón de armas de fuego en la región en el 2000.

Viendo esto como el número de armas por 100,000 ciudadanos, Panamá emerge como el líder en términos de cobertura de armas legales, la cual, si se distribuyera uniformemente, permitiría al 3% de la población total poseer una pistola legalmente registrada. Pero un estudio reciente en El Salvador ha estimado que hay realmente 450,000 armas pequeñas en el país – suficiente para que una de cada cuatro personas estén armadas. De ser correcto, más del 60% de las que circulan son poseídas ilegalmente. El estudio, que incluye un elemento de encuesta, también encontró que más del 40% de la población admitió ya sea poseer o que le gustaría poseer un arma de fuego, incluyendo 54% de los hombres entrevistados.<sup>202</sup>

Si estos estimados son correctos, en algún punto entre la mitad y dos tercios de las armas de fuego existentes en Centroamérica son armas ilegales. Si bien no todas estas armas son necesariamente usadas para propósitos criminales, sí superan en número a aquellas en manos de estructuras oficiales de seguridad por un factor de cinco.

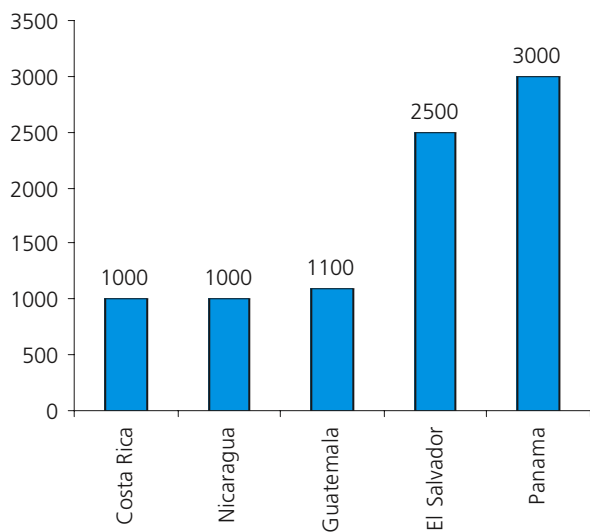
Muchas de las armas militares en Centroamérica fueron transferidas como ayuda durante los conflictos de la Guerra Fría. El gobierno de EUA envió más de 30,000 rifles de asalto y 260,000 granadas a El Salvador durante la guerra civil de los 1980's y una misión de observación de la ONU al final de la guerra testificó la entrega de sólo 10,000 armas. Además, a

**Gráfica 56: Armas de fuego legalmente registradas en Centroamérica en 2000**



Fuente: Encuesta sobre Pequeñas Armas y IANSA<sup>201</sup>

**Gráfica 57: Armas de fuego legalmente registradas en Centroamérica por 100.000 habitantes en 2000**



Fuente: *Small Arms Survey and IANSA*<sup>203</sup>

mediados de los 1990', El Salvador, un país de menos de 7 millones de personas, era el séptimo mercado más importante de exportación de armas de mano estadounidenses.<sup>204</sup>

En 2002 el gobierno de Guatemala reportó que había más de 180,000 armas registradas en el país, y la Misión de la ONU en Guatemala (MINUGUA) ha estimado que hay 1.8 millones adicionales de armas de fuego ilegales en circulación. El desarme de unidades de guerrilla bajo MINUGUA seguido al término de la guerra civil en 1996, testificó la rendición de sólo 1,500 armas. En el pasado, la paraestatal Industrias Militares de Guatemala producía rifles de asalto, pero actualmente sólo manufactura municiones para la policía y las fuerzas militares. Sin embargo, hay evidencia de que estas municiones han sido usadas en robos de bancos, lo que sugiere un desvío del uso oficial a la actividad criminal.<sup>205</sup>

A pesar de ser Nicaragua el país más pobre de América Central, es también uno de los más seguros. Una razón para ello puede ser el éxito de sus programas de reducción de armas. Más de 100,000 armas fueron destruidas en ese país luego del cese de hostilidades. En contraste, en Honduras, que no sufrió una guerra civil, el Instituto Militar de Pensiones tiene el monop-

lio de comercio al menudeo de armas en el país y militares de alto rango han sido implicados en varios escándalos de tráfico de armas en el pasado.<sup>206</sup>

Gobiernos de la region han comenzado a observar la relacion entre la disponibilidad de armas de fuego y la violencia. Por ejemplo, en 2006, la policía de El Salvador en San Martín se enfocó en la aplicación de la ley respecto a armas de fuego y observó una reducción del 35% en las tasas mensuales de homicidios con respecto al año anterior.<sup>207</sup> Este éxito incitó a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social, un comité civil establecido por el gobierno para encargarse del problema del crimen, a recomendar el desarmamiento de las 20 más violentas comunidades en el país.

## 2.6 Secuestro

En teoría, el secuestro por recompensa podría constituir una fuente de ingresos para grupos criminales en cualquier parte del mundo donde la desigualdad del ingreso es aguda. Pero por razones que requieren más investigación, no se trata de un crimen que está uniformemente distribuido en naciones con alto crimen alrededor del mundo. Algunas áreas muy problemáticas nunca sufren muchos secuestros, mientras que en otras el problema es endémico. El secuestro también parece ocurrir en rachas, adquiriendo una inercia propia cuando los grupos criminales ven su beneficio. Como resultado, un problema de secuestro puede emerger muy rápidamente en áreas donde no se había visto antes. Por alguna razón parece ser más común en áreas de conflicto civil que también están afectadas por el comercio de drogas, por lo que el país mejor conocido por su problema de secuestro es Colombia.

Las estadísticas oficiales de secuestro no reflejan el grado del problema de secuestro en un país. Hay varias razones para esto. Las definiciones de secuestro varían enormemente, desde una muy específica ofensa de raptó de un niño con el propósito de extorsionar dinero de los padres, a leyes más genéricas proscribiendo el mover gente en contra de su voluntad. Las leyes de secuestro a menudo no distinguen entre la remoción ilegal de una persona por motivos no-financieros (tal como frecuentemente ocurre durante una disputa sobre la custodia de un niño) y el secuestro organizado con fines de recompensa. En algunas jurisdicciones el secuestro es a menudo un cargo suplementario atraído para reforzar un caso que en realidad se trata de otra cosa, como en los casos de raptó con el propósito de asalto sexual. Muchos secuestros no son reportados a la policía, pues es frecuente que sea una demanda hecha por los secuestradores como condición para el retorno a salvo de la persona. De hecho, es precisamente en países donde el secuestro es común que a menudo el reportarlos declina debido a la intervención de negociadores que suplantán el papel de los agentes de la ley. Como resultado de esto, algunas de las tasa más altas registradas de secuestro en el mundo ocurren en países no comúnmente asociados con el secuestro.

Esto es fácilmente demostrado al comparar las tasas de secuestro según son capturadas por las Encuestas de Tendencias de Crimen (ETC). A Colombia generalmente se le reconoce como el país con la peor situación de secuestro por recompensa en el mundo, pero su tasa palidece junto a la de Canadá, donde el crimen es altamente reportado (ver Gráfica). Las tasas de América Central son aún menores, pero ello no prueba mucho acerca de la situación prevaleciente en esos países. Hay otras fuentes como el Economist Intelligence Unit, que evalúan el riesgo de secuestro para aquellos considerando el invertir en el país. A pesar de la baja tasa oficial de El Salvador, el Economist Intelligence Unit advierte:

*El secuestro es común en El Salvador. Sus ciudadanos son elegidos indiscriminadamente, y el secuestro y la extorsión están llegando a ser crecientemente comunes en barrios de trabajadores, pueblos y áreas rurales. Sin embargo, los extranjeros son raramente escogidos para secuestro. Los policías y guardias de seguridad a veces están involucrados en la identificación de blancos potenciales para los grupos criminales organizados.*<sup>208</sup>

En Guatemala el Economist Intelligence Unit señala que los secuestros “express” es la táctica favorita del crimen organizado: una víctima es secuestrada por una recompensa relativamente pequeña y es rápidamente liberada una vez que el pago es hecho”. Ello sugiere que, como sucede en El Salvador, personas de todos los niveles socioeconómicos están sujetos a esta extorsión. En contraste, en Honduras dicen: “la principal ciudad industrial, San Pedro Sula, es considerada como la capital del secuestro en América Central. Las víctimas de secuestro suelen ser industriales acaudalados locales o extranjeros.”<sup>209</sup>

## 2.7 Lavado de dinero

El lavado de dinero es otra actividad difícil de definir del crimen organizado, pero una en la que se ha hecho un considerable progreso desde el 11 de septiembre de 2001, debido a las medidas para bloquear el financiamiento al terrorismo. América Central recibe remesas masivas, y mientras que la mayoría de estos flujos provienen del trabajo de los inmigrantes, algo de estas ganancias proceden del crimen. En 2003, América Latina y el Caribe recibieron el 30% de los flujos globales de remesas, la tasa más alta de todas las regiones, con cifras absolutas de más de 42 mil millones de dólares actualmente.<sup>210</sup> En varios países las remesas llegan a ser el 10% del Producto Interno Bruto (ver Gráfica 58).<sup>211</sup>

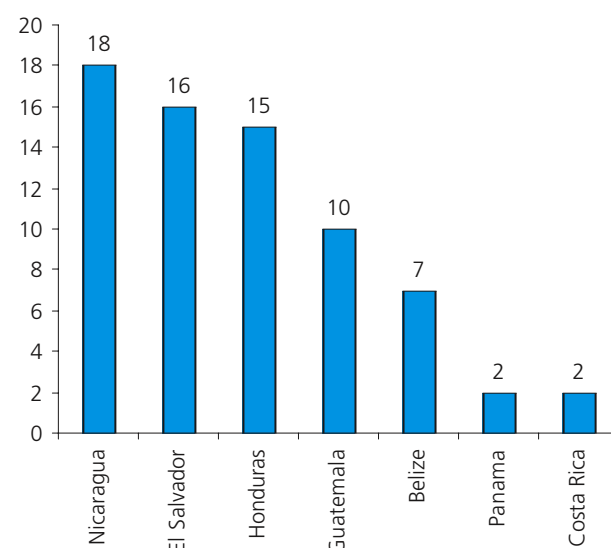
Debido a su importancia económica y volúmenes crecientes, las remesas son un flujo financiero difícil de regular y monitorear. Las remesas financian cerca del 80% del déficit comercial de El Salvador, son equivalentes al 18% de su PIB y el 23% de los hogares salvadoreños las reciben. Han ido creciendo a cerca del 15% anual en los últimos años. En Guatemala las remesas fueron de 2,456 millones de dólares en el período de enero a octubre de 2005, un incremento año con año de casi 18%.<sup>213</sup>

La moneda de EUA es también contrabandeada a través de México y Centroamérica. En octubre de 2005 se confiscaron \$5.7 millones de dólares en Panamá.<sup>214</sup> Tanto Panamá como El Salvador han dolarizado sus economías y el uso del dólar en Panamá es una razón clave por la que el país es tan atractivo como un centro de lavado de dinero.<sup>215</sup> La Zona Libre de Colón, la segunda más grande zona de libre comercio del mundo, después de Hong Kong, está situada en la entrada atlántica del Canal de Panamá, y la Zona Libre permite la importación y re-exportación de bienes libres de impuestos. Más de 12 mil millones de dólares en bienes son importados y re-exportados cada año.

La zona franca forma parte integral del intercambio del Peso Colombiano en el mercado negro, un sistema originado después de que el gobierno colombiano prohibiera el uso del dólar de los EUA, creando un mercado negro para la moneda suministrada fácilmente por ventas de la droga procedente de los EUA. Este mecanismo fue descrito en el último informe del programa de evaluación financiera del FMI como:

*... El comercio basado en mecanismos de lavado de dinero... donde los dólares ilícitos en efectivo vendidos en una tasa de intercambio*

Gráfica 58: Remesas como porcentaje de PIB en 2004



Fuente: CEPAL, Panorama Social de América Latina 2005

*descontada a los importadores latinoamericanos, quienes después los usan para comprar mercancías en la zona franca. Los comerciantes de la zona franca solían recibir de conformidad o no el dinero en efectivo y depositarlo en sus cuentas bancarias como ingresos legítimos de ventas verdaderas.*<sup>216</sup>

Algunos países centroamericanos han sido listados y des-listados por la Fuerza de Tarea de Acción Financiera o por autoridades de EUA. El Departamento de Estado de EUA realmente produce tres listas, indicando diferentes niveles de preocupación y países relativamente no afectados no están listados. A lo largo del tiempo, varios países en Centroamérica han pasado de una lista a otra y estos cambios se indican en la Tabla que sigue. Si tales cambios son iniciados en respuesta a movimientos reales en los flujos financieros, entonces parece que flujos a través de esta región son dinámicos.

**Tabla 5: Cambios en lavado de dinero, clasificación del Departamento de Estado de EUA**

País	Acción	Año
Nicaragua	Upgraded	2000
Costa Rica	Upgraded	2002
Belize	Upgraded	2005
Guatemala	Upgraded	2006

Fuente: INCSR 1999-2006

Si bien las dos listas evalúan cosas diferentes, es interesante notar que Belice y Costa Rica en alguna ocasión países de preocupación primaria para los Estados Unidos, nunca fueron listados por la FTAF, mientras que Guatemala no aparece como país de preocupación primaria para el Departamento de Estado de EUA hasta 2006.

## 2.8 Corrupción

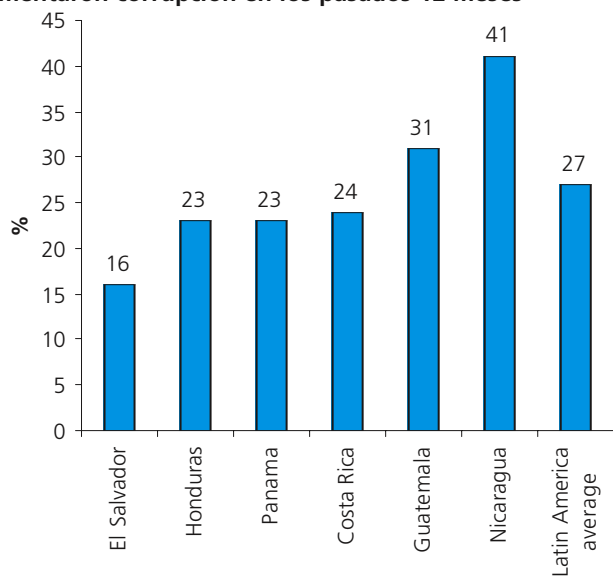
Según lo expuesto anteriormente, la corrupción puede ser un reto importante para los estados pequeños o para aquéllos con un historial de conflictos o gobiernos autoritarios. La corrupción puede darse en todos los niveles de gobierno, desde la corrupción de funcionarios de bajo nivel que exigen un pago para realizar (o detener) el cumplimiento de sus obligaciones, hasta la gran corrupción de altos niveles que llega hasta el fraude y malversación de fondos públicos. Las drogas son un conductor clave de la corrupción en áreas de tránsito, empezando por las patrullas fronterizas y policías pero potencialmente alcanzando los más altos niveles de gobierno.

Como con otras formas del crimen organizado, la detección puede ser difícil, y el cumplimiento de la ley es generalmente confiada al trabajo proactivo de las autoridades. Como resultado, las estadísticas sobre el crimen son de poco valor y la mayor parte de la información internacional para efectos de comparación proviene de estudios de las víctimas y de encuestas de opinión. Desafortunadamente, estas encuestas no están estandarizadas y producen información que frecuentemente es contradictoria, de modo que es difícil de explicar. Tres importantes encuestas formulan preguntas sobre corrupción en la región: el Latino-barómetro, el Barómetro de Corrupción Global de Transparencia Internacional y el Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica (LAPOP).

La encuesta de opinión del Latinobarómetro es un estudio anual de alrededor de 1000 encuestados en cada uno de los 17 países de Latinoamérica, incluyendo países de Centroamérica, que cubre un rango de temas sociales. En la encuesta del 2002, la corrupción era contemplada como el segundo más importante problema que enfrentaba la región, después del desempleo. A los encuestados se les preguntó si ellos o algún miembro de su familia habían experimentado algún acto de corrupción en los pasados 12 meses. Nicaragua reportó la tercera tasa más alta después de Brasil (61%) y México (59%). En contraste, El Salvador obtuvo la segunda tasa más baja de los 17 países de América Latina encuestados, después de Uruguay (13%).

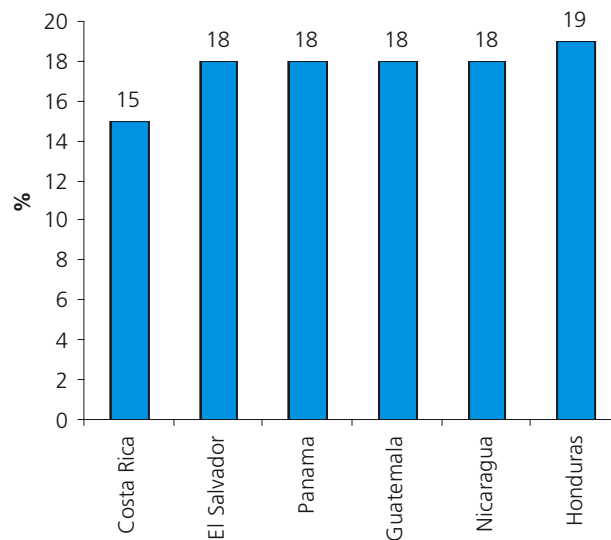
El Proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica (LAPOP) también formula preguntas sobre actos de corrupción. A diferencia del informe del Latinobarómetro, los niveles de actos de corrupción fueron sorprendentemente uniformes y marcadamente más bajos, con entre 15% y 19% de encuestados respondiendo que

**Gráfica 59: Porcentaje de respondientes que experimentaron corrupción en los pasados 12 meses**



Fuente: Latinobarómetro 2002

**Gráfica 60: Porcentaje de respondientes que experimentaron corrupción en los pasados 12 meses**



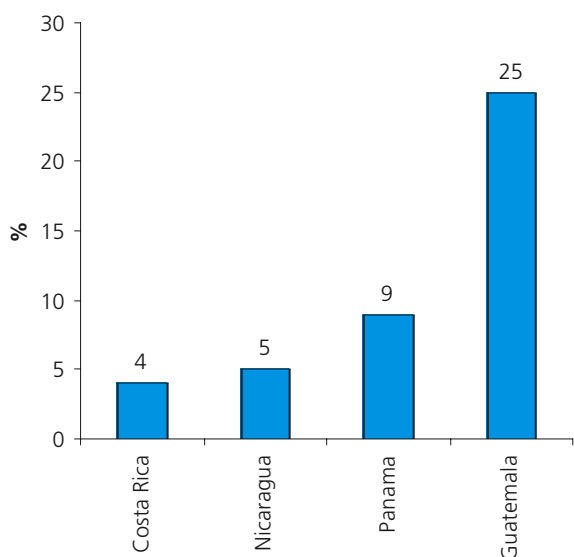
Fuente: LAPOP 2004

experimentaron actos de corrupción durante el año anterior. Una razón para los resultados más bajos en el grado de victimización fue que el Latinobarómetro pregunta sobre experiencias de miembros de la familia, mientras que el estudio de LAPOP pregunta sólo sobre las experiencias del respondiente. Aún así, los encuestados en Nicaragua y El Salvador reportaron resultados en los mismos niveles de victimización, en agudo contraste con el Latinobarómetro.

Aunque formulada de diferente manera, el Barómetro de Corrupción Global hizo una pregunta similar en su encuesta de 2005: “En los pasados doce meses, ¿ha usted, o algún miembro de su familia viviendo con usted, pagado algún soborno de cualquier forma? Aquí la clasificación fue muy diferente al Latinobarómetro. Sólo 5% de los nicaragüenses encuestados aceptaron haber pagado una extorsión, comparado con el 25% de los guatemaltecos (comparado a un promedio mundial del 9%)<sup>217</sup>. Esta radical diferencia es difícil de explicar.

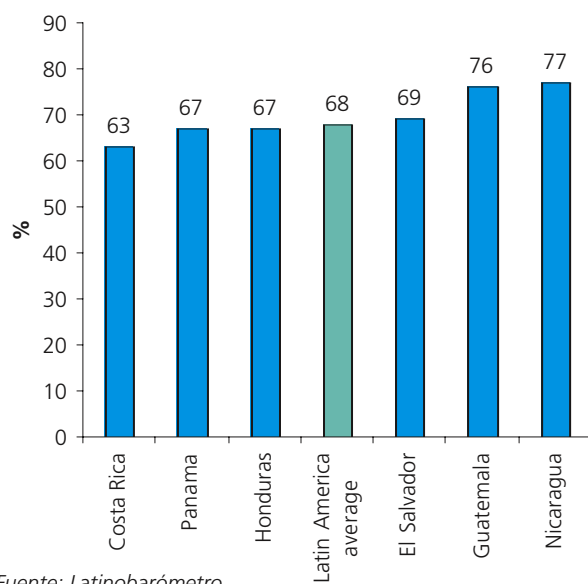
A los respondientes del Latinobarómetro también se les preguntó cuál era la proporción de servidores públicos que consideraban corruptos. En todos los países de esta región, la mayoría de los funcionarios públicos

**Gráfica 61: Proporción de respondientes que pagaron una extorsión en los últimos 12 meses**



Fuente: Transparencia Internacional Barómetro de la Corrupción

**Gráfica 62: Proporción de servidores públicos percibidos como corruptos**



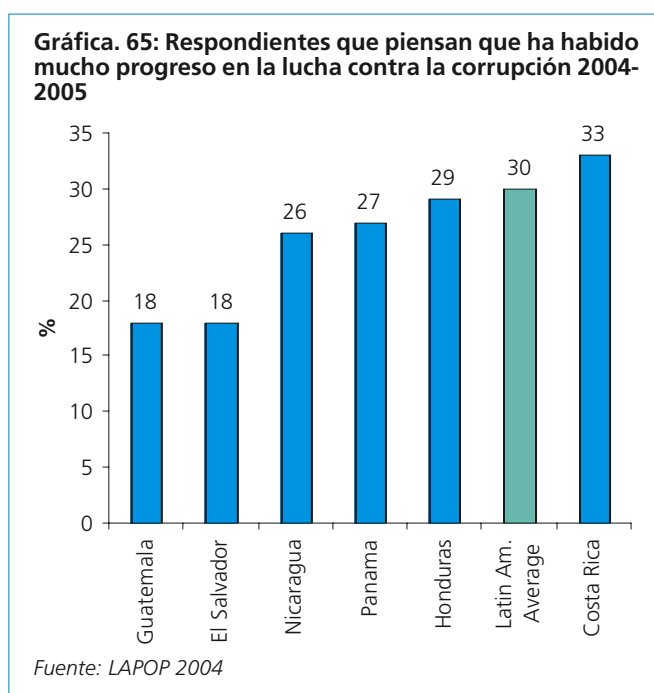
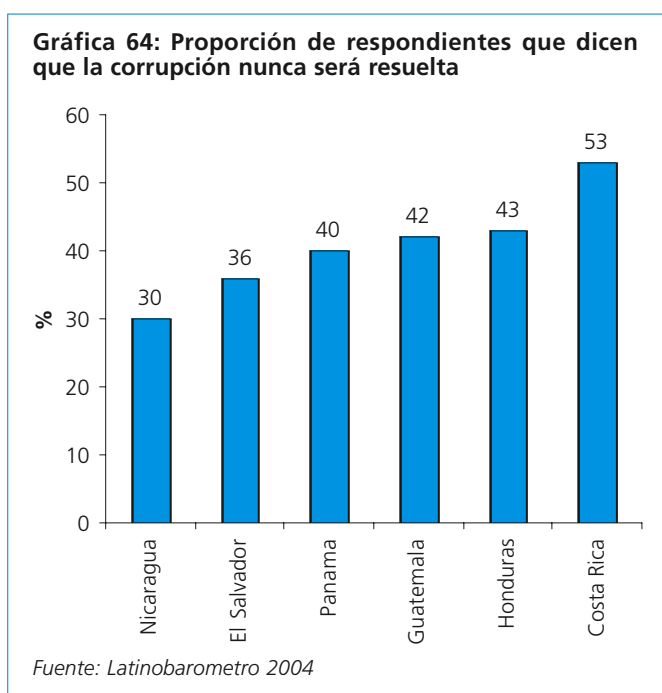
Fuente: Latinobarómetro



fueron percibidos como corruptos, siendo Nicaragua el de más alto nivel. Los costarricenses resultaron los más positivos en cuanto al grado de corrupción de sus servidores públicos.

El estudio de LAPOP también formula preguntas sobre las percepciones acerca de la proporción de funcionarios públicos corruptos. Otra vez las cifras difieren acusadamente de los resultados del Latino-barómetro sobre las cifras más altas reportadas en los resultados del LAPOP. Los valores en los dos estudios parecen bastante consistentes, sin embargo, mostrando todos los países caídas en los 60's y los 70's.

En el Latinobarómetro del 2004 se les preguntó a los respondientes si el problema de la corrupción podría alguna vez ser resuelto. En contraste con los resultados mostrados por los costarricenses en cuanto al nivel más bajo de funcionarios civiles percibidos como corruptos y los nicaragüenses el más alto, los costarricenses fueron decididamente más sarcásticos y los nicaragüenses más optimistas que el promedio. La perspectiva optimista de los nicaragüenses también contrasta con los resultados del Barómetro de Corrupción Global



2005, en el que Nicaragua se distingue como una de las naciones más pesimistas en el mundo con respecto a la corrupción, con el 70% diciendo que piensan que ésta aumentará en los próximos tres años.<sup>218</sup>

Parece también haber una opinión diferente entre LAPOP y el Latinobarómetro acerca de cuáles son los países más escépticos sobre las reformas para combatir la corrupción. En el estudio de LAPOP, el 22% de los costarricenses sintieron que se progresó en el combate a la corrupción en 2004-5, mientras que el Latinobarómetro indica que más de la mitad piensa que el problema nunca será resuelto.

En suma, estos tres estudios presentan resultados conflictivos de los relativos grados de corrupción en América Latina. No se trata de decir que alguno de estos estudios sea incorrecto, pero sería muy difícil determinar cómo sutiles diferencias en la forma en que las preguntas fueron hechas pudieron producir diferentes respuestas.

Independientemente de estas preguntas generales de opinión, las encuestas pueden producir información interesante sobre la naturaleza de la corrupción local, como las áreas de gobierno donde se encuentra más corrupción. Por ejemplo, el estudio de LAPOP reportó que es en el área de educación donde las peticiones de sobornos son más comunes, con un promedio del 11% en esa área, seguido de cerca por servicios municipales. Más del 9% también reportaron demandas de sobornos en el área de tribunales.<sup>219</sup> De manera similar, de acuerdo con el Barómetro de Corrupción Global de Transparencia Internacional, los partidos políticos son vistos como las instituciones más corruptas de la región, con Costa Rica, Guatemala, Panamá y Nicaragua clasificándolos en primer lugar entre las instituciones locales.<sup>220</sup>





## 3. Cómo es crimen esta impidiendo el desarrollo

En la Parte I se analizaron algunas razones por las que Centroamérica es especialmente vulnerable al crimen, y en la Parte II se confirmó que efectivamente el crimen es un problema muy serio en la región. En esta Parte III se observará cómo el crimen puede impedir el desarrollo social, económico y político de la región.

- *El crimen destruye el capital social y humano:* el crimen degrada la calidad de vida y fuerza a las profesionales calificadas a buscar trabajo en otros países; los costos de la victimización, así como el temor al crimen, interfieren en el desarrollo de los que se quedan en sus países. El crimen impide el acceso a posibles oportunidades de empleo y educación y desalienta la acumulación de activos.
- *El crimen es negativo para el desarrollo de los negocios:* los inversionistas contemplan el crimen como una señal de inestabilidad social, además de que el crimen eleva los costos de los negocios. La corrupción es aún más dañina, probablemente el más grande obstáculo para el desarrollo. El turismo, una industria clave para el desarrollo en Centroamérica, es especialmente sensible al crimen.
- *El crimen debilita al gobierno:* el crimen y la corrupción destruyen la relación de confianza entre el estado y el pueblo, debilitando la democracia. Además de las pérdidas directas a los fondos del estado debido a la corrupción, el crimen erosiona la base de la población para efectos de impuestos, ya que los ricos extorsionan a las autoridades hacendarias y los pobres se pliegan a la economía informal. La corrupción desvía recursos en obras públicas ideales para malversación de fondos, con un costo para los servicios de educación y salud.

Estas series de impactos son clave para explicar los problemas experimentados en la región en términos de crecimiento económico y confianza en la democracia.

### 3.1 El impacto del crimen en la sociedad

Los impactos más profundos del crimen están en las personas. Convertirse en una víctima del crimen puede cambiar la vida de una persona para siempre. Manejar los costos emocionales y prácticos de las víctimas puede ser muy pesado en los países en desarrollo, donde el acceso a los servicios de salud y sociales es limitado. Los efectos de un solo acto de victimización pueden convulsionar a una familia entera hasta afectar a la comunidad entera. El temor al crimen puede paralizar el desarrollo de las raíces mismas de la sociedad. Si el desarrollo es el proceso para crear sociedades que funcionan, el crimen actúa como una especie de factor antidesarrollo, destruyendo las relaciones de confianza en que la sociedad se basa.

Para adoptar otra vez el lenguaje de la economía del desarrollo, el crimen erosiona el capital social y humano. El Banco Mundial define el “capital social” como las normas y redes que hacen posible la acción social<sup>221</sup>. Investigaciones del Banco Mundial determinan que el capital humano es esencial para el desarrollo<sup>222</sup> y que el crimen puede llegar a destruir el capital humano.<sup>223</sup> En América Latina y el Caribe, un análisis arrojó que “la acumulación neta de capital humano” se redujo a la mitad en los últimos 15 años por el crimen y la violencia.<sup>224</sup>

El temor al crimen restringe la movilidad que interfiere en la interacción económica y social, así como en la educación. Aún más concretamente, el crimen evita la instalación y el mantenimiento de la infraestructura, en tanto que grupos criminales florecen con el debilitamiento de las autoridades locales. En el punto más extremo, las relaciones sociales se resquebrajan todas debido a que la gente minimiza su exposición a una posible victimización.

### Los costos humanos del crimen violento

El crimen violento puede tener un desproporcionadamente alto impacto en los países en desarrollo. La muerte o discapacidad puede eliminar al único sostén de un hogar, y los apoyos del gobierno para ello son necesariamente limitados. En 2004, la Organización Mundial de la Salud emitió un informe sobre los efectos económicos de la violencia interpersonal que buscaba documentar y cuantificar el impacto que la exposición a la violencia tiene en los individuos, así como el impacto de la violencia en el resto de la economía.<sup>225</sup> Con base en una amplia revisión de la literatura disponible sobre los costos de la violencia, el informe plantea que existen varias formas en las que haber experimentado un crimen violento resultó en pérdidas financieras directas o indirectas. Estos costos incluyen la pérdida de la productividad asociada a la muerte o lesiones, los costos de atención médica y servicios legales, así como las pérdidas no económicas tales como la pérdida en el capital humano y el impacto de daño psicológico infligido a la víctima.<sup>226</sup>

Otorgar un valor monetario al costo del crimen violento es extremadamente problemático, al menos porque cualquier intento de hacerlo tendrá que incluir los ingresos perdidos y esto tendrá la desafortunada consecuencia de darle un valor menor a la vida en los países en desarrollo. Por el contrario, la pérdida o la discapacidad de un proveedor de la familia puede tener un impacto mucho mayor en países en desarrollo que en países desarrollados. Por una razón, se afecta a más gente: dada la forma de la curva de la edad, el nivel de desempleo, y a que las tasas de dependencia son sustancialmente más altas.

El impacto de las lesiones físicas es obviamente más grande para quienes desarrollan labores físicas para ganarse la vida, tales como muchos de los trabajadores agrícolas de Centroamérica. Las mismas lesiones pueden tener diferentes consecuencias a largo plazo cuando suceden en un país en desarrollo que en el mundo desarrollado, debido al acceso a los servicios médicos. De allí que lesiones físicas que podrían significar unos cuantos días de convalecencia en países desarrollados, pueden significar el fin de una vida productiva en áreas más pobres y hasta poner en peligro la vida.

El impacto acumulado de este trauma también tiene implicaciones para el estado. Por ejemplo, extrapolar un estudio de 100 pacientes admitidos por lesiones de armas de fuego en un hospital público en El Salvador, un estimado de 2580 personas fueron tratadas en hospitales de El Salvador durante 2003. De éstos, 2400 fueron tratados en hospitales públicos con un costo para el estado de más del 7% del presupuesto para la salud. Los autores estiman además que el costo total de la violencia por armas de fuego en El Salvador fue de \$34 millones de dólares.<sup>227</sup> Otros estudios estiman el costo total de la violencia en El Salvador del 11.5% del PIB, o sea, \$1.7 mil millones de dólares.<sup>228</sup> Un estudio reciente del PNUD en Guatemala estimó el costo de la violencia en el país como el 7.3 del PIB, ó 2.4 billones de dólares de EUA.<sup>229</sup>

Entre 1996 y 1997, el Banco de Desarrollo Interamericano patrocinó estudios sobre la magnitud y el impacto de la violencia en seis países de América Latina. Cada estudio examinó el gasto, como resultado de la violencia, para servicios de salud, fuerzas del orden y servicios judiciales, así como pérdidas intangibles y pérdidas por la transferencia de activos. En términos de porcentaje del Producto Interno Bruto en 1997, el costo de los servicios de salud como resultado de la violencia fue del 4.3% en El Salvador, la segunda tasa más alta en la región (después de Colombia con un 5%).<sup>230</sup> Londoño y Guerrero argumentaron que en 1997 los costos fueron mucho más altos, con los de El Salvador (24.9% del PIB) apenas rebasando a los de Colombia (24.7% del PIB) para el primer lugar entre los siete países de Latinoamérica.<sup>231</sup>

Mientras que el impacto del crimen en víctimas pobres es alto, los efectos directos del crimen tienen un alcance más amplio. Ser víctima o el temor a serlo es causa de que la gente reduzca su interacción social para limitar su exposición. Esto se manifiesta de formas muy concretas. Hay muchos costos de oportunidad que se incurren viviendo una vida diseñada para evitar la vulnerabilidad criminal. Alguna gente simplemente evita salir por la noche o usar transporte público, lo que puede limitar el acceso a actividades productivas o educativas. Datos del ICVS muestran que el 46% de los panameños y el 37% de los costarricenses se sienten inseguros caminando por el área donde viven cuando oscurece.<sup>232</sup> Dado que caminar es la única forma de transporte disponible a mucha gente pobre, esto puede limitar la interacción comercial y social al anochecer.

Las mujeres, quienes deben enfrentar las amenazas adicionales de violencia sexual y hostigamiento, pueden ser más severamente afectadas que los hombres. Las mujeres víctimas de la violencia doméstica ganan mucho menos que sus pares que no son abusadas, lo que significa una pérdida regional de salarios del 1.6% al 2% del PIB.<sup>233</sup>

### Fuga de cerebros

Los expertos en desarrollo están de acuerdo en que uno de los elementos clave necesarios para el desarrollo económico es una fuerza de trabajo capacitada, de allí que han alentado a los países en desarrollo a invertir en educación. Un estudio arrojó que aumentar el promedio del nivel educacional en un país por sólo un año incrementaría la producción de un trabajador entre 5% y 15%.<sup>234</sup>

Sin embargo, esta inversión se pierde en buena medida cuando los mejores y más brillantes emigran. Desafortunadamente, cuando la calidad de vida declina, aquéllos que pueden hacerlo emigran y sus capacidades tan en demanda son su mejor boleto de salida. De acuerdo al Banco Mundial:

*En los albores del siglo XXI más de 130 millones de personas viven fuera de su país de nacimiento y este número crece a razón del 2% anual... La emigración de cruce de frontera, combinada con la “fuga de cerebros” proveniente de los países en desarrollo hacia los industrializados será una de las fuerzas que darán forma al panorama del siglo XXI.*<sup>235</sup>

Desafortunadamente, por muchas razones, un gran número de trabajadores capacitados en Centroamérica deciden dejar sus países por una mejor perspectiva en el mundo desarrollado. De acuerdo al Banco Mundial, la proporción de la fuerza laboral que se considera “capacitada” es sólo 11% en Centroamérica. La tasa de emigración de esta fuerza de trabajo capacitada es 17 %.

De acuerdo con el Banco Mundial, “En proporción con la fuerza de trabajo capacitada en sus países de origen, las tasas más alta de migración se observan en Centroamérica y Africa ...”.<sup>236</sup>

Las tasas de inmigración de personas con educación post-secundaria de virtualmente todos los países de Centroamérica excede el 10%.<sup>237</sup>

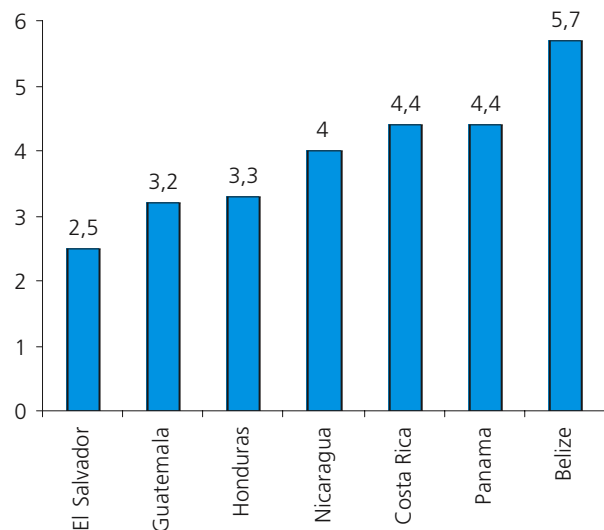


### 3.2 El impacto del crimen en la economía

*Estamos comprometidos a construir... políticas económicas, sociales y públicas que contribuyan a la generación de un empleo decente que debe comprender... un marco legal que se base en el imperio de la ley, transparencia y acceso a la justicia; garantice la imparcialidad y la independencia de las instituciones judiciales; prevenga y combata la impunidad y la corrupción tanto en los ámbitos públicos como privados y, combata el crimen internacional...*<sup>238</sup>

- Organización de los Estados Americanos, “Declaración de Mar del Plata”, 5 de noviembre de 2005

**Gráfica 67: Tasas promedio de crecimiento en el PIB 1996-2005**



Fuente: CEPAL, Panorama Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2005

Cuando un país no es lo suficientemente seguro para retener a su fuerza de trabajo capacitada, generalmente se le considera inseguro para la inversión tanto extranjera como nacional. El crimen se asocia a la inestabilidad, un estigma que los estados pequeños con un historial político vacilante difícilmente pueden darse el lujo de permitir. Las corporaciones multinacionales no quieren invertir en personal o infraestructura en un ambiente de riesgo. El crimen también aumenta los costos para los negocios, en pérdidas directas, primas de seguros más altas y sobre sueldos para empleados expatriados en puestos difíciles. La corrupción presenta un reto independiente e igualmente significativo. Finalmente, los que tienen dinero, ya sea extranjero o doméstico, encontrarán un entorno más seguro donde invertirlo.<sup>239</sup>

#### Inversión directa extranjera y doméstica

*En América Latina más del 50 por ciento de las empresas encuestadas consideran que el crimen es un serio obstáculo para la conducción de los negocios. En África Sub Sahariana y el este de Asia más del 25 por ciento estuvieron de acuerdo.*

- Banco Mundial, Informe de Desarrollo Mundial 2005<sup>240</sup>

Existe una serie de formas en las que el crimen y la corrupción pueden disuadir la inversión y, afortunadamente, esta relación ha sido empíricamente evaluada por el Banco Mundial. Para su Informe del Desarrollo Mundial 2005, el Banco realizó estudios de empresas alrededor del mundo preguntándoles acerca de las barreras más significativas para hacer negocios en sus países. Se discutieron un rango de asuntos, incluyendo la incertidumbre de políticas, regulación e impuestos, finanzas, electricidad, trabajo, tribunales y otros, así como crimen y corrupción. Se cubrió un total de 53 naciones, incluyendo tres en Centroamérica: Guatemala, Honduras y Nicaragua.

Mundialmente, las políticas inciertas, la inestabilidad macroeconómica y los impuestos fueron considerados como las limitantes más importantes a la inversión. Pero en todos los países encuestados de Centroamérica, el crimen y la corrupción emergieron como los problemas prioritarios. Guatemala ocupó el primer lugar en la proporción de empresas que posicionan al crimen como el más serio obstáculo.

Más del 80% de 455 empresas guatemaltecas encuestadas consideraron que el crimen es el mayor obstáculo a los negocios, comparado con un promedio no ponderado mundial del 23%. Sesenta y un por ciento de las empresas hondureñas se manifestaron en el mismo sentido, siendo la tercera tasa más alta (después de Kenia). Las tasas en Nicaragua fueron menores (39%), en concordancia con las tasas bajas de esos países en general.

Cuarenta y dos por ciento de los negocios encuestados en Guatemala reportaron pérdidas directas como consecuencia del crimen, comparado con un promedio mundial no ponderado del 25%, ocupando el cuarto lugar de 53 países en este aspecto. El promedio de las pérdidas a causa del crimen fue de cerca del 5% de las ventas. Las pérdidas fueron menos comunes en Nicaragua (3%) y en Honduras (3%), mismas que fueron las tasas más bajas reportadas a nivel mundial. Las pérdidas entre las víctimas en Nicaragua fueron, sin embargo, más severas, con un 7% de las ventas, comparado con apenas un 3% en Honduras.

En Guatemala, más del 80% consideran la corrupción como el mayor obstáculo, de nuevo la tasa más alta de los 53 países encuestados, superando a países muy a menudo percibidos con más altos niveles de corrupción tales como Bangladesh, Tayikistán y Nigeria. Cerca del 58% de los negocios establecidos acusaron haber pagado sobornos, significando un promedio del 7% de sus ventas, la segunda pérdida más alta de cualquiera de los países encuestados (después de Argelia). En Nicaragua, las cifras correspondientes fueron del 66% que consideraron a la corrupción como el mayor obstáculo (la cuarta tasa más alta), 46% que pagaron sobornos y una pérdida de exactamente el 7% de las ventas. En Honduras las cifras fueron del 62% señalando la corrupción como un obstáculo (la quinta tasa más alta), 50% que pagaron sobornos con un 6% de pérdidas en las ventas. En los tres casos, el costo de los sobornos es sobresaliente en comparación con otras áreas en el mundo.

De acuerdo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, grandes empresas en Guatemala ase-

guran que la seguridad aumenta los costos de hacer negocios en un 25%.<sup>241</sup> De acuerdo al Banco Mundial:

*El crimen y la violencia parecen ir en aumento en Guatemala y son una carga significativa en la operación de las empresas... Las pérdidas materiales asociadas con la incidencia de actos violentos y su prevención, tanto en familias como en negocios, son de cerca del 6.8 por ciento del PIB y el más alto de la región. En consecuencia, los gastos en seguridad, como porcentaje de los costos totales de una empresa, es de justo debajo del 5.5 por ciento para las empresas en Guatemala, más altos que los reportados por firmas en Honduras (3.5 por ciento) y Nicaragua (3 por ciento)... Menos del 6 por ciento de los crímenes denunciados son resueltos por la policía, muchos menos llevados a tribunales, en agudo contraste con Nicaragua donde cerca del 30 por ciento de esos crímenes son resueltos por la policía. El análisis econométrico muestra que los intentos criminales afectan la productividad de las empresas negativa y significativamente. Con cada nuevo intento criminal, la productividad de las empresas se reduce entre 1.8 por ciento y 3.2 por ciento.*<sup>242</sup>

De acuerdo con el Servicio de Asesoría de la Inversión Extranjera:

*Ha habido un deterioro severo en la seguridad personal en Honduras en varios años anteriores. Tanto los representantes de las empresas hondureñas como los de las empresas extranjeras están preocupados por el incremento del robo, tanto en empresas como en casas particulares, y por la frecuencia con que se cometen secuestros para obtener recompensas y otros actos de violencia. Entre los muchos efectos adversos, el incremento aparente del crimen puede disuadir la inversión extranjera.*<sup>243</sup>

El informe continua con la evaluación general de los obstáculos de las empresas hondureñas en su operación y crecimiento:

*El principal obstáculo es la inestabilidad de la inflación/precios seguida de cerca por la inestabilidad de la tasa de cambio. El tercer obstáculo en orden de importancia es el crimen callejero, robo y desorden civil.*

El titular de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador (Anep), Federico Colorado, ha llamado al crimen “una piedra en el zapato del desarrollo”, y el presidente Saca, quien fue titular también de la Anep, dice que ésta es la fuerza que impulsa su lucha contra las maras.<sup>244</sup>

Bajo estas circunstancias, es notable que la inversión extranjera directa (IED) sea tan buena como en toda la región. La IED neta hacia Centroamérica se incrementó de un promedio de \$634 millones de dólares entre 1990 y 1995 a más de \$2,000 millones de dólares en 2004. La diferencia ente la primera mitad de 1990 y la segunda mitad es clara en cada país, como resultado de una mayor estabilidad en la región. Sin embargo, algunos países tuvieron alta volatilidad, especialmente Panamá y El Salvador, mientras que Guatemala mostró una aguda caída en la confianza a la inversión después de 2001.

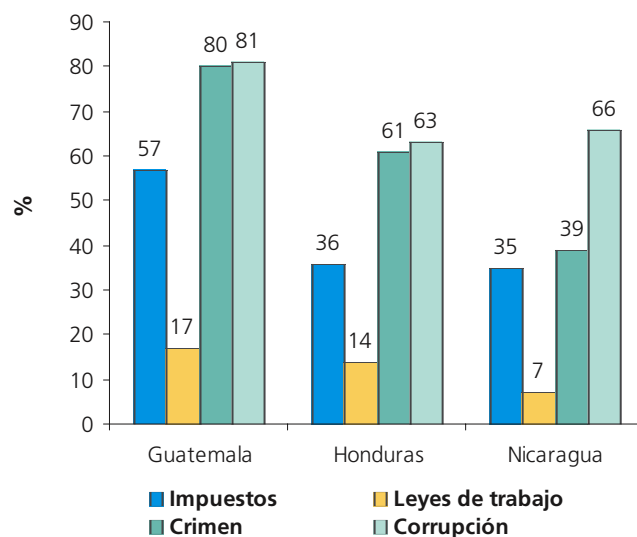
Información detallada sobre la fuente nacional de la inversión está disponible en un número limitado de países en la región. Quizás no sorprendentemente, los Estados Unidos es el inversionista más importante en Costa Rica (57% de todo la IED en 2003) y en Salvador (36% en 2003).<sup>245</sup> Pero la inversión Venezolana es también muy importante en El Salvador (12% en 2003).<sup>341</sup> El grueso de la inversión en Costa Rica está en el sector manufacturero (64% en 2003), mientras que el sector de servicios atrajo la mayor parte en El Salvador (70% en 2003).<sup>246</sup>

### Turismo

*Para aquellos pequeños países en los cuales el sector de servicios constituye el principal motor de crecimiento, el impacto del crimen, tanto nacional como transnacional y la posibilidad de ser considerados como un “blanco débil” para el terrorismo internacional, presentan serios obstáculos para el crecimiento y aún para mantener al sector en sus niveles actuales.*

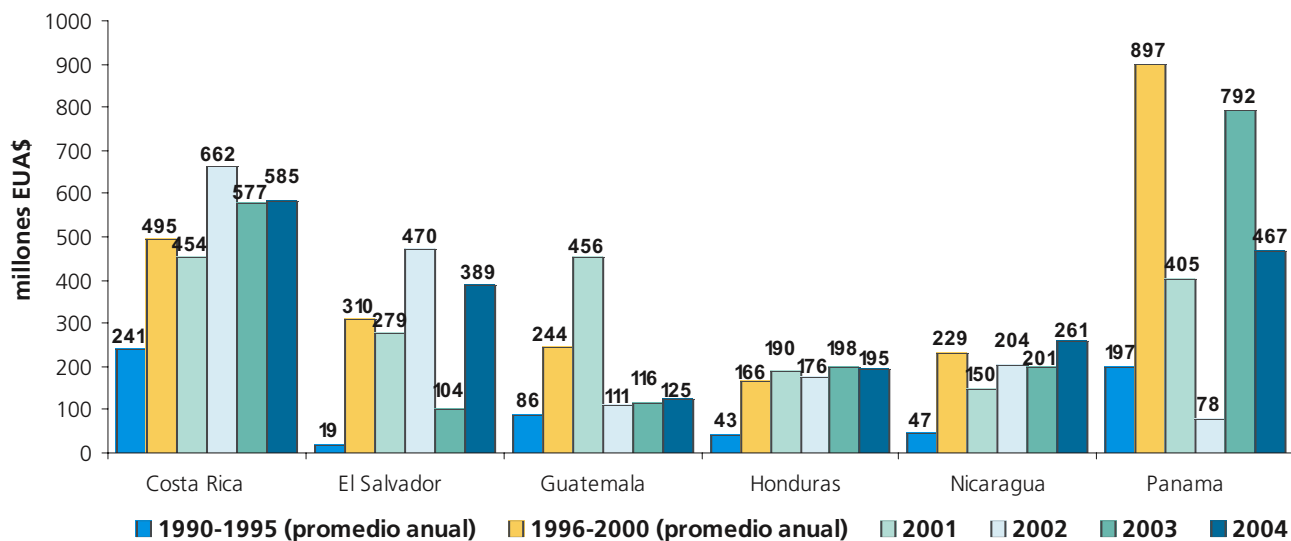
- Julian R. Hunte, presidente electo para el 58avo. Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas<sup>247</sup>

**Gráfica 68: Porcentaje de firmas que reportan factores como 'mayor obstaculo' en los negocios**



Fuente: Informe sobre el Desarrollo Mundial 2005

**Gráfica 69: IED neta a países Centroamericanos 1990-2004**



Fuente :ONU Consejo Económico para América Latina y el Caribe, Inversión Extranjera 2004

El turismo es el principal generador de divisas en el mundo, y el la segunda fuente más importante de ingresos, después de las remesas, tanto para Guatemala como para El Salvador. En Panamá, el turismo es la segunda fuente de ingresos sólo después de los provenientes del Canal.<sup>248</sup> En Belice, la economía del turismo es responsable del 22% del PIB, y del 22% del empleo total.<sup>249</sup> En Costa Rica, los porcentajes son del 16% y del 17%.<sup>250</sup> El sector turístico en Costa Rica se incremento en un 11.2% entre 2002 y 2005.<sup>251</sup>

De acuerdo con Sara Sanchez, la secretaria de turismo en Panamá, el “Turismo es el pasaporte para la paz.” Honduras espera recibir más de un millón de turistas en el 2005, mismos que equivalen a un estimado de \$440 millones de dólares.<sup>252</sup>

Por supuesto que el crimen es la antítesis a la industria del turismo. Para entender el impacto que el crimen y la violencia pueden tener sobre la imagen pública de los países en esta región, los consejeros de turismo emitieron, por ejemplo, de la Oficina de Extranjería y Commonwealth del Reino Unido, un instructivo. Guatemala es un ejemplo excelente:

*El crimen violento es uno de los mayores problemas en Guatemala. Se detectan serios ataques a los turistas, incluyendo homicidio y violación. El robo armado y asaltos a turistas pueden suceder en cualquier lugar del país. Es extremadamente importante no resistirse a un asalto. Se recomienda no utilizar joyas y llevar pequeñas cantidades de dinero. ... los turistas son detectados por los criminales ... Son parados por pandillas armadas, que generalmente se acompañan por violencia física y/o sexual, generalmente sucede en el transporte público de la ciudad, así como en rutas de larga distancia. Se han detectado atracos en automóviles y autobuses (incluyendo camiones turísticos), durante el día y en algunos de los caminos principales. Estos atracos han incluido violaciones a las mujeres pasajeras ... Deben ser cuidadosos con las personas que se ostentan como policías. Ha habido varios visitantes que se convierten en víctimas de los ladrones, que experimentan extorsiones o violaciones por personal que puede o no ser miembro de la policía.*

Aunque el efecto es difícil de medir, declaraciones como estas de los gobiernos de países fuentes del turismo, seguramente tienen un efecto negativo en los flujos del turismo.

### 3.3 El impacto del crimen en la gobernabilidad

Probablemente el efecto más profundo del crimen es la forma en que socava la relación entre los ciudadanos y el gobierno. La obligación básica del estado es la de asegurar la protección de su ciudadanía. Cuando el estado fracasa en cumplir esta obligación esencial, o es visto como un cómplice de la criminalidad, entonces muchos ciudadanos dejan de tomar a la democracia seriamente. Dice Charles S. Shapiro, Subsecretario Asistente del Secretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, “los altos niveles de criminalidad,

presentes en muchas naciones del hemisferio, empaña el entusiasmo de los votantes por el ejercicio democrático.<sup>253</sup> Los ciudadanos demandan que el gobierno tome medidas extremas, mientras que recurren al empleo de seguridad privada; para el rico esto significa a menudo la contratación de seguridad privada; para el pobre, participar en o apoyar actividades de vigilancia. La tendencia a opciones diferentes al aparato de seguridad del estado es aun mayor cuando la policía se conduce como un elemento más del problema del crimen.

El fracaso en proporcionar seguridad por parte del estado es particularmente peligroso en los estados recientemente constituidos democráticamente. La gente a menudo interpreta el incremento en las tasas de criminalidad como una evidencia de que la protección constitucional se ha extendido demasiado. De hecho, el incremento en las tasas de la criminalidad puede ser nada más que un artificio estadístico: en una democracia la gente está más dispuesta a denunciar un crimen, es más probable que el estado lo documente y la prensa más libre para transmitir los hechos al público. La transición a la democracia ha coincidido con frecuencia con el difícil proceso de hacer ajustes a la estructura económica, lo que lleva a la gente a equiparar a la democracia con una declinación de la economía y caos social. La libertad de movimiento expone a las élites a las realidades sociales que han estado escondidas para ellos y ahora tienen los recursos para denunciar en voz alta estas situaciones. Finalmente, el alza del crimen en las post-democracias puede ser tanto producto de las percepciones como de la realidad.

Cualquiera que sea el estado real del crimen, la percepción de falta de cumplimiento de la ley puede provocar nostalgia hacia un régimen autoritario; puede incitar al público a pedir el uso del ejército en actividades policíacas y hasta apoyar el regreso a la falta de libertades civiles. Obviamente, los políticos que estuvieron involucrados en el régimen anterior, toman ventaja de la inseguridad para fortalecer antiguas alianzas y vencer adversarios que promueven los derechos humanos. Como lo establecimos anteriormente, muy a menudo son los autoritarios del régimen anterior los que están implicados en facilitar el crimen organizado en la región. Los efectos de todo esto culminan en la descomposición activa de la democracia, en cuanto a que la gente canjea sus derechos a cambio de la promesa de seguridad.

La corrupción distorsiona la relación entre el gobierno y el pueblo. Cuando los tratos con los funcionarios públicos inevitablemente involucran una palma de mano extendida, el estado pronto es percibido como un depredador en vez de un protector. El efecto es especialmente odioso cuando se les paga a los servidores públicos (generalmente la policía) simplemente para dejar en paz a los ciudadanos. Estas constantes demandas de gente mal preparada tienen como consecuencia el desarrollo de actividades informales por parte del pueblo que los hace un objetivo más visible.

Si la corruptibilidad consuetudinaria de los empleados públicos es irritante, cuanto más es la fraudulencia de los funcionarios en puestos de elección popular. Los políticos ocupados en llenar sus bolsillos tienen poco tiempo para atender las necesidades de desarrollo de su pueblo y las pérdidas en los fondos públicos pueden ser considerables.

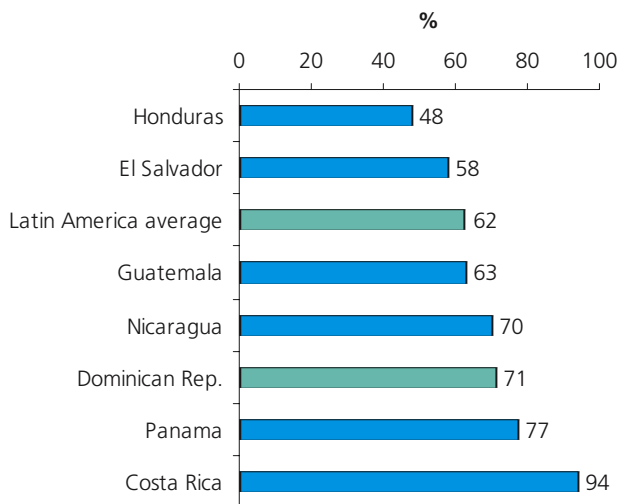
### **Nostalgia por el autoritarismo**

Las dictaduras militares son popularmente consideradas como efectivas para combatir el crimen. Se piensa que su desprecio a los derechos humanos infunde miedo en los criminales potenciales. El mantenimiento democrático del orden público, en contraste, parece más bien insípido y la policía que ha operado bajo los dos regímenes argumenta que la protección constitucional les ata las manos. Cuando parece que la tasa de criminalidad se incrementa después de elecciones nacionales, esos autoritarios del régimen anterior culpan a las libertades civiles galopantes y a la decadencia moral de una sociedad tolerante.

Por una variedad de razones históricas y culturales, la gente de esta región puede ser especialmente susceptible a este tipo de argumentación. El Latinobarómetro de 2004 señala que los países de Centroamérica (con excepción de Panamá y Nicaragua) y la República Dominicana priorizan el orden público sobre las libertades civiles, a diferencia del resto de Latinoamérica (a excepción de Paraguay).<sup>254</sup> Es posible que a las sociedades paternalistas o agrarias se les pueda vender fácilmente la noción de que los lastres de la sociedad pueden ser resueltos con disciplina férrea y un liderazgo fuerte. Mientras que la mayoría de los latinoamericanos no apoyarían un gobierno militar, minorías sustanciales en varios países no desechan la idea. Aquéllos con las experiencias más recientes de gobiernos militares parecen ser los menos escépticos.

De acuerdo a datos de otros estudios, hasta las sociedades más liberales pueden verse afectadas. El Proyecto de Opinión Pública de América Latina realizó encuestas sobre actitudes hacia la democracia en países lati-

**Gráfica 70: “Bajo ninguna circunstancia apoyaría un gobierno militar”**



Fuente: *Latinobarómetro 2005*

noamericanos en 2004. Los resultados muestran una sorprendente nostalgia por la autocracia, asociado a la sensación de que la criminalidad está a la alza. Aunque menos factible que apoyen un golpe de estado que cualquier otro país en la región, una investigación entre nicaragüenses encontró que aquellos que se sienten en mayor riesgo de ser víctimas del crimen, son más propensos a justificar un golpe de estado bajo algunas circunstancias.<sup>255</sup> Aún más, el 16% de las más de 1600 personas encuestadas en Panamá en 2004, dijeron que preferían el regreso de los militares sobre el actual régimen. Un notable 43% dijeron que un golpe de estado podría ser justificado bajo circunstancias de corrupción, mientras que un 40%, en circunstancias de niveles muy altos de criminalidad.<sup>256</sup> El estudio concluye: “Los resultados de estos estudios sirven a manera de advertencia a los gobiernos, líderes políticos y donantes internacionales en el sentido de que la corrupción y el crimen pueden afectar el apoyo al sistema político y a la democracia.”<sup>257</sup>

La artimaña de que la democracia castra el cumplimiento de la ley tiene peso porque conlleva un grano de verdad. Existe una predecible pérdida de eficacia en el cumplimiento de la ley durante los cambios de régimen. La policía, cuya cartera de técnicas investigativas se centra en el uso de agujijones eléctricos

para ganado y botas con punta de acero, requerirá un período de reeducación, durante el cual funcionarán de manera menos que óptima. Es de esperarse que resentirán el ser enseñados a cómo hacer su trabajo a la mitad de su vida profesional, especialmente cuando esto generalmente significa renunciar a todo lo que han hecho profesionalmente en el pasado. Pero no hay evidencia que apoye el argumento que una policía autoritaria tiene al pueblo más seguro que una policía democrática.

Sin embargo, es de un gran interés para los militares o los que lo han sido, convencer al público de lo contrario. Las elites que antes protegieron se adhieren a este coro para quienes la democracia es altamente inconveniente. De hecho, cualquier líder nacional corto de ideas acerca de los asuntos verdaderamente difíciles como sacar adelante a su pueblo, encontrará en despotricar sobre el crimen un medio efectivo para allegarse votos. Como la guerra, el crimen une al pueblo, no permite disidentes y centraliza el poder en el ejecutivo. El crimen o la percepción del crimen es una bendición para aquéllos que están de duelo por un estado autoritario.

El ejemplo de El Salvador ilustra las formas en las que las percepciones del crimen revierten los logros democráticos:

*La ola criminal eliminó incentivos creados para apresurar el entrenamiento policiaco y el despliegue para relajar los estándares de selección, para confiar en el ejército la seguridad interna y, para debilitar las leyes diseñadas para proteger los derechos de los sospechosos – todo lo cual significa una amenaza al logro del proceso de paz.*<sup>258</sup>

El impulso para reincluir a los militares en el mantenimiento del orden interno es típico. Masivamente reducidos en escala y robados de su poder absoluto, los militares post-autoritarios podrían estar buscando un punto de reinserción. El uso del ejército para actividades policíacas tiene también un atractivo financiero. Ya que muy pocos de estos países tienen enemigos externos, hacer que el ejército patrulle las calles significa hacer uso de recursos que estados pobres no pueden permitirse dilapidar. Aun más, en algunos estados se considera que los militares se adhieren a un código moral más alto que el de la policía, que son comúnmente vistos como corruptos. Si los militares pueden vender al público esta noción, una institución declinante se puede encontrar en el centro de la escena una vez más.

Pero usar soldados para hacer el trabajo de policías es un gran error. El ejército está concebido para ocupar, no para ser policía. Mientras que el panorama de uniformados patrullando las calles puede ser tranquilizante para algunos, puede significar un retroceso mayor si la meta es la actividad policíaca democrática. En adición a cualquier abuso, tiene el desafortunado efecto de conservar una policía militarizada. Sólo en tanto que la policía pueda quedar impune con hacer nada más que conducir bloqueos de calles, búsquedas en zonas y haciendo redadas, así lo harán. La actividad policíaca de forma democrática es difícil. Requiere de

hablar con la gente, no sólo golpearlos contra el piso. Requiere de investigación, no sólo de extracción de confesiones. Requiere de resolver problemas, no solamente de golpear todo con un martillo más grande. Si la policía debe optar por algo, deberá hacerlo por el camino de la menor resistencia. Cuando muchos se enlistaron, pensar no era parte de la descripción del puesto.

Desafortunadamente muchos gobiernos en esta región han caído en el encanto de la retórica de la “mano dura” y han cedido a la tentación de usar el ejército para actividades policíacas. Por ejemplo, en El Salvador, a pesar de que esta práctica está prohibida en los acuerdos de paz, las tropas se han utilizado durante varios años para proteger del robo las cosechas de café como parte de los “Grupos de Tarea Conjunta” y en el “Plan Cuscatlán, la campaña antidrogas, bajo una excepción que le permite al Presidente utilizar soldados de manera interna, en circunstancias extraordinarias. Parece que lo extraordinario se ha convertido más en ordinario. Más recientemente, el ejército se movilizó como refuerzo a los veinte municipios más violentos del país.<sup>259</sup>

De manera similar, en Guatemala, en Abril de 2006, se creó un “escuadrón de seguridad ciudadano”, y 2400 militares fueron asignados para patrullar de manera conjunta con la policía, contrario al papel que se les otorga por la Constitución. Parecería que se busca que estos cuerpos sean permanentes. Para hacer el asunto más humillante, la mitad de los fondos de estas tropas se toman del presupuesto de la policía, y el presupuesto de los militares se incrementó para cubrir el remanente. Los soldados también se han utilizado para funciones de seguridad interna, como erradicación de sembradíos, hasta la guarda de transporte público. En respuesta a la actividad vigilante, en mayo de 2006, se desplegaron 11,000 tropas, incluyendo a los miembros de la elite de las fuerzas en contra de la insurgencia, los Kaibiles. Honduras también ha desplegado unidades militares para patrullar las calles.

Mientras que generalmente los soldados no tienen la autoridad total de la policía, la idea es que fungan como multiplicadores de fuerza, en la premisa de que los números adicionales, harán más fuerte el efecto disuasivo. La saturación del patrullaje puede suprimir el crimen callejero en una estrecha área geográfica definida por un período de tiempo, pero no ataca las causas del crimen. Como poner el dedo en el hoyo de un ducto que evita el goteo, pero no las corrientes de agua que lo producen. Tapar un hoyo incrementa el flujo hacia otro. Al final, ningún estado tiene suficientes dedos para tapar los hoyos.

Para demostrar la efectividad de las operaciones conjuntas policía/ejército u otra medida de “mano dura”, el estado puede aducir que las estadísticas sobre el crimen declinan rápidamente. No obstante, en teoría, mayor actividad policíaca debe resultar en mayor cantidad de crímenes detectados. Los crímenes que nunca han sido denunciados deben ser registrados, por medio de dinámicas iniciativas por parte de las autoridades, por vez primera. Con toda seguridad, eso debería resultar en el incremento de las estadísticas del crimen, al menos en el corto plazo. Si no es así, hay gato encerrado. Alternativamente, el estado puede dejar de reportar totalmente las estadísticas sobre el crimen, por una serie de razones falsas. En septiembre de 2005, el subsecretario de Seguridad Ciudadana de El Salvador, Rodrigo Ávila, dijo que el gobierno prefería no hacer públicas las tasas de homicidio porque su reducción podría incitar a los pandilleros a asesinar más gente.<sup>260</sup>

El siguiente paso es ‘fortalecer’ la legislación para el crimen. Esto puede significar: condiciones de libertad bajo caución más duras, sentencias más largas, reducción en la edad para ser juzgado como adulto y posiblemente el retiro de protección durante el proceso. Los golpes policíacos aunados a leyes más estrictas significan una sobrecarga al sistema. Los sistemas de justicia y carcelario se ven rebasados, los detenidos esperando a ser procesados o sentenciados se acumulan y cualquier posibilidad de rehabilitación se pierde. Los derechos humanos de los detenidos es lo que menos preocupa al público.

Una cosa es segura – si el sistema de justicia está corrompido, los auténticos criminales no sufrirán por el retorno de una policía autoritaria. Por el contrario, significará el regreso de su monopolio a las actividades criminales, y la eliminación de competencia menor. Los que llenarán las celdas serán los marginados y despreciados: niños de la calle, sexo servidoras, pandilleros juveniles, extranjeros, menesterosos y el urbano pobre.

### **Justicia criminal de hágalo-usted- mismo**

La percepción de que el crimen está fuera de control conlleva a la percepción de que la policía es incompetente. Aun peor, en muchas áreas de esta región, se tiene la opinión de que la policía contribuye al problema del crimen. Como se expuso anteriormente, datos de un estudio en cinco países de la región muestran que la policía es vista como el sector más corrupto del gobierno en Guatemala, y también recibieron muy

bajas calificaciones en Nicaragua y Panamá.<sup>261</sup> Con la excepción de El Salvador, entre una tercera parte y la mitad de los encuestados sienten que es posible sobornar a la policía en cada país de Centroamérica en los que se condujo el estudio.<sup>262</sup>

Si a la policía no se le tiene confianza para efectiva e imparcialmente hacer cumplir la ley, la gente puede tomar medidas para protegerse a sí mismos. Discutiblemente, uno de los mejores indicadores de que la policía ha fallado es el establecimiento de ciudadanos vigilantes (para-policíacos). La 'justicia' tomada en manos de miembros de la comunidad puede ser una fuente mayor de violencia y hasta de inestabilidad política en algunas otras áreas. Lo que empieza como 'auto-protección' puede degenerar eventualmente en el negocio de protección y expandirse a otras áreas de la criminalidad.

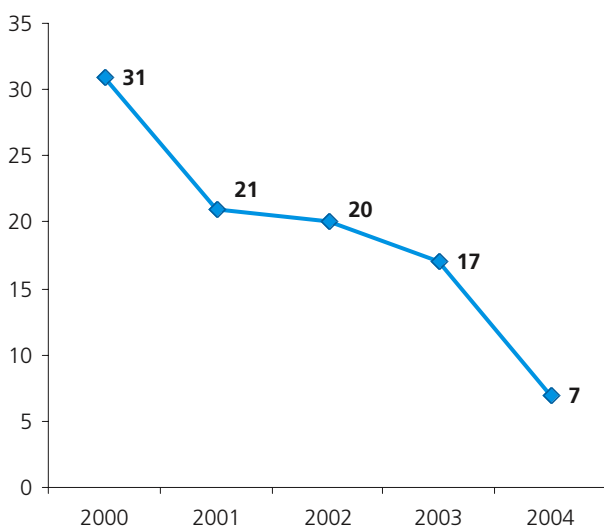
En algunas áreas de la región, ya hay estructuras de 'autodefensa' que quedaron de conflictos políticos, que las predisponen a ser una estructura informal para hacer cumplir la ley. En Guatemala, por ejemplo, las milicias formadas en el régimen militar – las Patrullas de Autodefensa Civil (PACs) - han sido acusadas de realizar linchamientos. Estos han declinado en los años recientes, lo que es una manifestación positiva de confianza pública en la policía. Pero también se han trasladado a las áreas urbanas, mientras que previamente eran del ámbito de la justicia rural.

Pero los 'vigilantes' son para los pobres, ya que los ricos pueden darse el lujo de tener su propia policía. Los oficiales de seguridad privada superan a los policías en los seis países de habla hispana de Centroamérica. Estas compañías son a menudo propiedad de miembros de la policía o de las fuerzas de seguridad en servicio que pertenecieron a ellas.<sup>263</sup>

No sorprende que las sociedades mas acaudaladas tienen tasas más altas de cobertura de seguridad privada, a pesar de que también tienen menos criminalidad.

Hay serios problemas con la contratación externa de una función central del estado. Todos deben ser iguales ante la ley, pero a la seguridad privada no le interesa disimular ser imparcial. Dado el alto nivel de contactos que muchas firmas de seguridad privada mantienen, pueden manipular fácilmente el sistema para favorecer a sus clientes y es muy improbable que testifiquen

**Gráfica 71: Linchamientos en Guatemala**



Fuente: Policía Nacional Civil de Guatemala

**Gráfica 72: Tamaños relativos de policía y seguridad privada en América Central en 2002**



Fuente: Centro de Estudios Internacionales<sup>264</sup>

en contra de ellos. Ya que las firmas privadas pagan mucho mejor que el gobierno, policías en activo contemplan sus puestos nada más como una audición para obtener después un empleo en la seguridad privada y tratan a los guardias de seguridad privada con una correspondiente deferencia. Aunado a esto, el proyecto nacional de prevención del crimen requiere del apoyo de los ricos y poderosos, pero cuando se pueden aislar de la realidad que sufren sus conciudadanos menos favorecidos, tienen pocos incentivos para tener en cuenta sus frustraciones. Al final, la más numerosa y mejor equipada seguridad privada puede hacer parecer superflua a la policía oficial ante los ojos de la gente que cuenta.

### Optar por salir de una sociedad corrupta

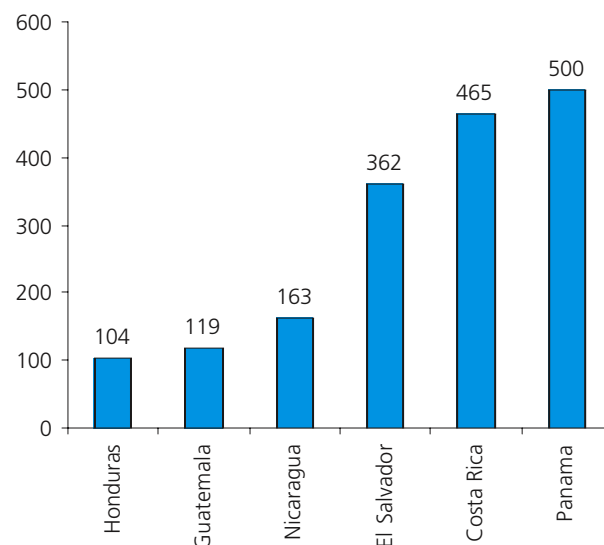
La sección anterior ilustró como la corrupción puede alejar la inversión, pero nos es la única forma en que interfiere con el sistema. Tanto la pequeña como la gran corrupción interfieren con la habilidad del estado para promover el desarrollo, bloqueando el cumplimiento de los servicios, socavando la base impositiva y distorsionando el gasto público.

Además de la gran corrupción que acapara los encabezados, el público enfrenta una forma de barrera más insidiosa en la pequeña corrupción. Para acceder a los servicios necesarios para el desarrollo o para evitar tremendas barreras burocráticas, los sobornos pueden ser necesarios. La corrupción puede bloquear el acceso para los pobres a servicios esenciales, mientras que estos bienes públicos son disfrutados por aquellos que tienen la habilidad de sobornar a los funcionarios. De esta manera, la corrupción puede evitar directamente la prestación de servicios de educación, salud, electricidad, servicio y justicia, para quienes más lo necesitan.

Cuando se deben pagar sobornos, los mismos pueden representar una privación considerable para las viviendas pobres. Por ejemplo, un 25% de los respondientes del Barómetro de Corrupción Global de Transparencia Internacional en Guatemala, dijo que se les solicitó un soborno el año anterior. El promedio de soborno pagado fue de \$147 dólares, no asunto menor en un país donde el 37% de la población vive con menos de dos dólares al día.

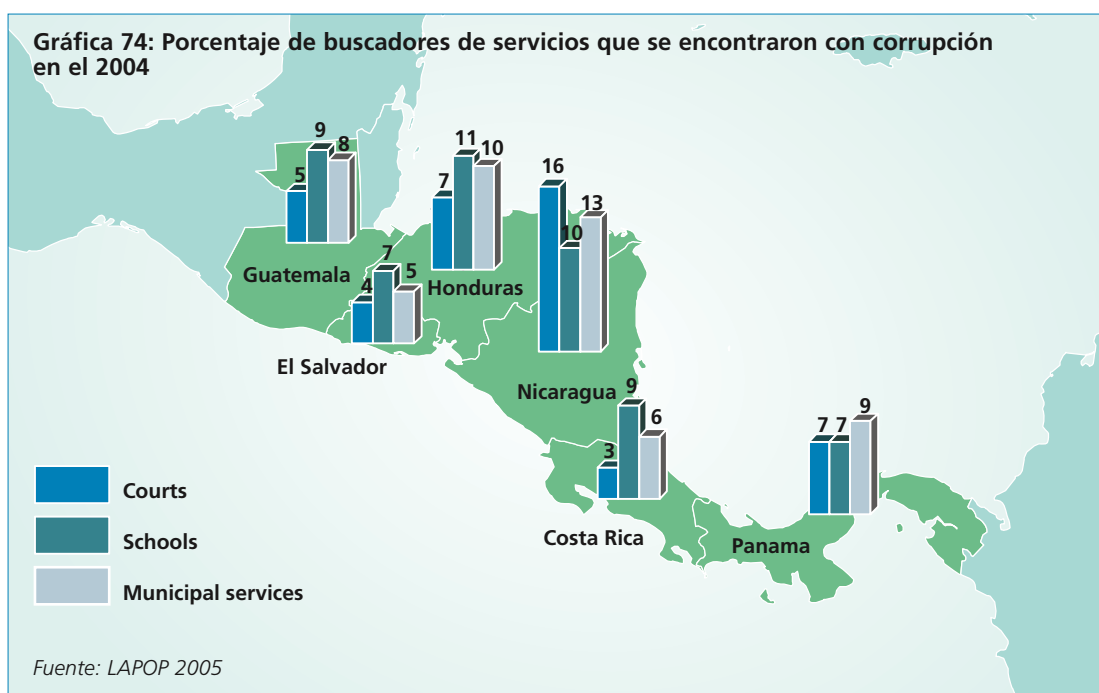
Tan malo como el crimen es para la confianza pública en un estado, la corrupción es probablemente peor.

**Gráfica 73: Guardias de seguridad por 100.000 habitantes**



Fuente: Cálculo del Centro de Estudios Internacionales<sup>265</sup>

**Gráfica 74: Porcentaje de buscadores de servicios que se encontraron con corrupción en el 2004**



Fuente: LAPOP 2005

La corrupción involucra a oficiales que traicionan de manera directa su papel de servidores públicos. Es difícil imaginar una forma más efectiva para trasninar la participación en la democracia. Como Vargas Llosa señala: “En Latinoamérica existe una falta total de confianza, de parte de una vasta mayoría de la gente, en las instituciones, y ésta es una de las causas por las que nuestras instituciones fallan... el pueblo tiene una desconfianza fundamental en las instituciones y las ve, no como una garantía de seguridad o de justicia, sino precisamente como lo contrario.”<sup>266</sup>

Hay un sentimiento creciente de falta de cumplimiento de la ley en Centroamérica y la percepción de que otros no cumplen las reglas puede llevar a la impresión de que la sociedad es libre para todos. De acuerdo al último estudio del Latinobarómetro, la porción de gente que piensa que sus conciudadanos generalmente cumplen con la ley disminuyó del 25% en 1996 al 20% en 2005. Los analistas argumentan que los países encuestados están divididos en tres categorías en términos de su sentido de responsabilidad civil, con Costa Rica y El Salvador cayendo al estrato más bajo.<sup>267</sup> Cuando el 80% de la gente cree que sus conciudadanos no obedecen la ley, solamente quienes tienen un alto código moral resisten la tentación de darle la vuelta a la ley cada vez que sea posible.

La respuesta natural a los bajos niveles en los servicios y altos niveles de corrupción es que la gente evite contacto con agentes del estado siempre que sea posible. Los adinerados desembolsan cuando es provechoso hacerlo, como cuando evaden impuestos. La evasión de impuestos drena las arcas públicas. Fomenta también una mayor inequidad en el ingreso,<sup>268</sup> lo que está altamente asociado con una mayor criminalidad<sup>269</sup> y tiene un efecto negativo en el crecimiento<sup>270</sup> y el desarrollo.<sup>271</sup>

Por supuesto, no son sólo los ricos los que evaden impuestos. El pobre lo hace simplemente trabajando informalmente y sin registrar su negocio. Una parte importante de la actividad económica en la región es informal, como muestra la gráfica. De acuerdo con la OIT:

*“...el tamaño del sector informal se estima contando aquellas empresas que operan sin registro. Los trabajadores informales son aquellos a quienes no aplican las leyes laborales de la nación. Por ejemplo, esto puede ser verificado por la ausencia de un contrato laboral o la ausencia de un esquema de contribuciones a la seguridad social”.*

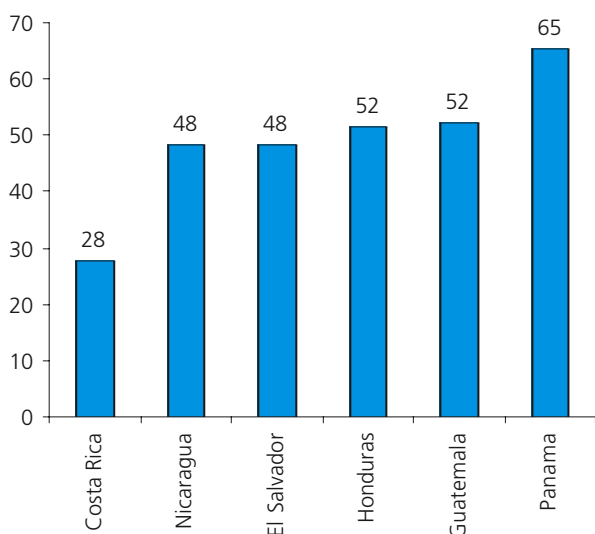
Los países con marcos regulatorios ineficientes y altos niveles de corrupción tienden a tener una economía informal por arriba del 40% de su PIB.<sup>272</sup> También se cree que en países con bajo ingreso grandes sectores informales promueven la corrupción de manera que la relación puede ser cíclica.<sup>273</sup> Los grandes sectores informales están asociados con la actividad criminal - al final, el mercado gris y el mercado negro están interrelacionados muy de cerca. Y toda esta actividad, que muchas veces comprende la mayor parte de la economía, no tiene carga impositiva .

Para la mayoría de los países en esta región, entre un tercio y dos tercios de la actividad económica se realiza fuera de los libros. Con la excepción de Costa Rica, más de la mitad del empleo en Centroamérica proviene del sector informal. Esta gente ha optado por no sujetarse a los mecanismos de resolución de disputas, a las protecciones laborales o a los otros beneficios que resultan de pagar impuestos. Esto puede hacer menos competitivas a empresas de la economía informal, forzándolas a aceptar pérdidas debido al rompimiento de un contrato o a la falta de pago. Alternativamente, los métodos informales de hacer cumplir los acuerdos o de cobrar las deudas se basan en la violencia, representando otra fuente del crimen.

El evitar impuestos y regulación también socava el funcionamiento del mercado. La investigación muestra que estos recursos escondidos pueden no atraer sus usos de máximo valor.<sup>275</sup> En otras palabras, el esconder la actividad comercial requiere de trabajo, tiene costos de oportunidad, y puede en última instancia impedir el crecimiento.

Efectivamente, es altamente dañino para el estado empujar a los contribuyentes al mercado informal, pues los negocios y los contribuyentes constituyen la columna vertebral del ingreso gubernamental. En Guatemala, el cobro de impuestos estuvo

**Gráfica 75: Porcentaje de la economía informal como total del PIB 2002/2003**



Fuente: Schneider 2005<sup>274</sup>

por debajo del 10% del PIB en los noventas, la más baja de la región, y fue del 10.3% en 2004. Esto ha inhibido el aumento del ahorro público y ha restringido el gasto social. En un intento para incrementar sus ingresos, el estado ha promulgado una serie de reformas impositivas, algunas de las cuales fueron revertidas por el Corte Constitucional. Desafortunadamente, la siempre cambiante situación impositiva ha prevenido también la inversión.<sup>277</sup>

El rompimiento de la relación recíproca entre el estado y la ciudadanía es probable que dañe a ambas partes. La gente que vive en el lado gris de la ley es probable que evite al gobierno cada vez que pueda y las poblaciones que no pagan impuestos tienen menos probabilidades de recibir menos servicios del estado. Esto divide adicionalmente a la sociedad entre el estado y la elite por una parte y las masas y el pueblo por la otra. Es probable que en tal entorno, el desarrollo no ocurra.

### Sangrando desde la cima

No puede haber escenas más perjudiciales para la confianza en la democracia que la escena de un servidor popularmente electo llevado a prisión esposado. Los pueblos de Centroamérica han tenido que soportar estas escenas con desmoralizante regularidad. Estos son líderes en los que el pueblo confió y puso en el poder por petición popular. Unos años más tarde, la nación tiene que cargar con la vergüenza de haber sido engañada. Bajo estas circunstancias, es difícil mantener alejado el escepticismo.

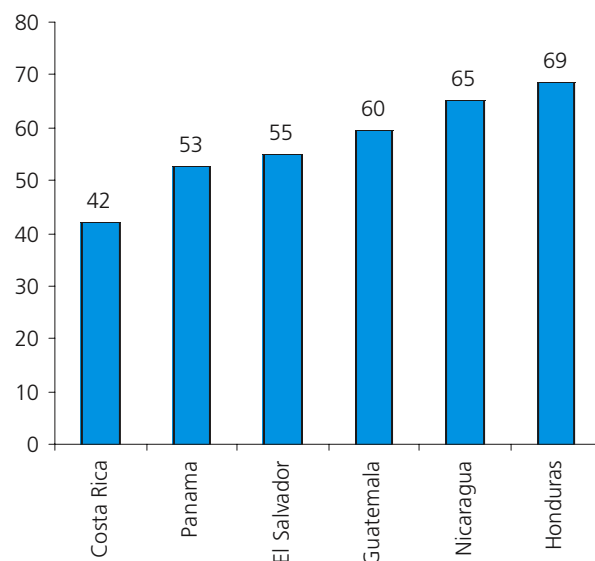
La mayoría de los países de Centroamérica han tenido presidentes que han sido acusados o sentenciados por corrupción. Costa Rica, a menudo puesto como ejemplo de democracia, ha tenido tres:

- Rafael Ángel Calderón, presidente de 1990 a 1994, fue acusado de corrupción y malversación de fondos de \$39.5 millones de dólares de un préstamo del gobierno finlandés al servicio de seguridad social para actualizar el equipo de un hospital. Calderón supuestamente recibió \$500,000 dólares.
- José María Figueres, presidente de 1994 a 1998, fue acusado de haber recibido \$900,000 dólares del gigante francés de las telecomunicaciones, Alcatel. Admitió haber recibido el dinero y renunció al puesto de director del Foro Económico Mundial.
- Miguel Ángel Rodríguez, presidente de 1998 a 2002, fue forzado a renunciar a su puesto como Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, después de que también fue acusado de recibir parte de los \$2.4 millones de dólares de soborno de Alcatel.

El saliente presidente, Abel Pacheco, (2002-2006), también ha sido acusado de recibir contribuciones de campaña no declaradas de, entre otros, Alcatel. Cada presidente de Costa Rica desde 1990 ha sido acusado de corrupción. Aunque la mayoría de los indicadores sugieren que el promedio de nivel de corrupción en el país es bajo, estos casos de alto perfil no pueden más que debilitar la confianza pública en su gobierno. De acuerdo con el Barómetro de Corrupción Global de Transparencia Internacional 2005, algo así como el 46% de los costarricenses piensan que la corrupción será peor en los tres años siguientes, uno de los más altos niveles de escepticismo en el mundo.

Pero probablemente el ex-presidente corrupto más conocido es el de Nicaragua, Arnoldo Alemán. Alemán fue sentenciado a 20 años en prisión por corrupción en diciembre de 2003. A pesar de haber sido encontrado culpable de lavado de dinero, fraude, malversación de fondos, crímenes electorales y acusado de haber ayudado a desviar cerca de \$100 millones de fondos del estado en la campaña electoral de su partido, Alemán fue puesto en libertad para cumplir su sentencia en su casa, donde continua haciendo negociaciones políticas que podrían revertir su sentencia. Es reconocido como uno de los dos caudillos que realmente dirigen su país, el otro es el líder sandinista Daniel Ortega, ahora el presidente. En una alianza perversa entre dos viejos enemigos en los extremos del espectro político, los dos han hecho un pacto para socavar al presidente anterior, Enrique Bolaños (quien también ha sido acusado de irregularidades en su campaña), y pro-

**Gráfica 76: Porcentaje del empleo total que es informal**



Fuente: OIT 2000-2003<sup>276</sup>

mover sus propios intereses. Como resultado, los nicaragüenses son todavía más escépticos que los costarricenses sobre las perspectivas de corrupción en su país, con 62% que dicen que será peor en los próximos tres años, la segunda más alta cifra registrada por Transparencia Internacional en 2005.

Otro líder regional acusado de malversación de fondos es el último presidente de Guatemala, Alfonso Portillo. El, junto con su vicepresidente y su secretario personal, fue acusado de una malversación de \$600,000 dólares de fondos públicos y abrir trece cuentas bancarias y cuatro compañías fantasmas en Panamá para lavar dinero. Portillo dejó el país y su visa para los Estados Unidos fue revocada por el Departamento de Estado. A go así como el 57% de los guatemaltecos piensan que la corrupción será peor o mucho peor en los próximos tres años.

El mismo Panamá ha sido sujeto de una serie de escándalos de corrupción de alto nivel. Recientemente, a Mireya Moscoso el tribunal electoral de la nación le retiró la inmunidad diplomática por acusaciones de no haber rendido cuentas de \$70 millones de gasto público durante su administración. Ella admitió haber usado \$3 millones para efectos personales. Fue precedida en el cargo por Ernesto Pérez Balladares, acusado de vender visas a chinos panameños que querían emigrar a los Estados Unidos; como resultado, el gobierno de los Estados Unidos revocó su visa. Estos casos son sólo dos de los muchos que descompusieron la administración de los dos presidentes.

Uno de los escándalos más memorables de corrupción en años recientes es el asunto 'CEMIS' en Panamá. Después de una serie de sorprendentes acusaciones y confesiones públicas, llegó a aclararse que miembros de la legislatura nacional habían recibido sobornos del partido mayoritario para asegurar que a cierto contratista se le otorgara una licitación para la construcción de un centro industrial y que ciertos nominados para la Suprema Corte de Justicia fueran confirmados. Esencialmente, la mayoría pudo comprar a la oposición en temas claves, trastocando agudamente con fraude la democracia.

Además de socavar la fe pública en la democracia, la corrupción resulta en pérdidas muy reales de fondos disponibles para la promoción del desarrollo. En América Latina, de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, la corrupción consume al menos 10% del producto interno bruto de la región. Según el Presidente de Transparencia Internacional (TI), Peter Eigen, "La corrupción en proyectos públicos de gran escala es un obstáculo intimidante para el desarrollo sustentable, y resulta en una gran pérdida de fondos públicos necesarios para la educación, la salud y el combate a la pobreza, tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo". TI estima que la cantidad que se pierde en sobornos en adquisiciones gubernamentales nada más, es al menos de \$400 mil millones de dólares, mundialmente.<sup>278</sup>

Las adquisiciones fraudulentas pueden distorsionar el gasto público, en tanto que funcionarios corruptos buscan afanosamente proyectos de grandes obras públicas y adquisiciones para defensa susceptibles de producir ganancias ilícitas, y con un costo para los programas sociales. Los países con altos niveles de corrupción tienden a tener niveles menores de gasto social en general.<sup>279</sup>

Además, la calidad de las obras públicas de gran escala puede sufrir, pues los contratistas que ganaron licitaciones con sobornos, pueden no sentirse obligados a cumplir con las especificaciones. De allí que la corrupción puede resultar aún más costosa para el país en tanto que los funcionarios públicos buscan beneficios inmediatos en detrimento del interés público.



## 4. Conclusion

Ningún otro asunto tiene más impacto en la estabilidad y el desarrollo de Centroamérica como el crimen, y la gente de la región parece estar conciente de este hecho. De manera consistente, la gente entrevistada de esta región, identifica los asuntos económicos y el crimen como dos de sus más grandes problemas, y los dos asuntos se encuentran profundamente relacionados. El crimen y la corrupción trastornan los esfuerzos para el desarrollo de estos países. La gente en Centroamérica se ha convertido más y más vocal en sus demandas, exigiendo que se haga algo al respecto.

En consecuencia, no se han escatimado en los esfuerzos en contra del crimen, sin embargo, simplemente no han sido capaces de alcanzar los resultados deseados. Adicionalmente, algunas de las soluciones propuestas, son al menos una amenaza tan grande como el problema mismo. Algunas partes de Centroamérica se encuentran cercanas a sacrificar las ganancias tan difíciles de obtener en la democracia, a efecto de lograr un poco de seguridad. Pero como lo señala el ex Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, "no seremos capaces de tener ni [seguridad ni desarrollo], si no respetamos los derechos humanos. A menos de que todas esas causas sean desarrolladas, nadie podrá tener éxito."

Centroamérica no se encuentra sólo enfrentando una elección ilusoria frente la seguridad y la democracia. Globalmente, la mayoría de la gente asocia la prevención del crimen con el cumplimiento de la ley, por lo que cuando el crimen sale de control, la tendencia natural es voltear hacia la policía. Esto dispara una serie predecible de eventos, en la que los derechos humanos pueden ser amenazados, elementos que se encuentran actualmente manifiestos en ciertas áreas de Centroamérica.

En primer lugar, existe una demanda para dar más recursos a la policía. Es cierto que la policía no cuenta con los recursos necesarios en muchos países de la región, y que se necesitan recursos y una reforma profunda en todo el sector de justicia criminal en muchos países de Centroamérica. Sin embargo, sería un grave error asumir que el incremento de los recursos a la policía, por sí mismo resultaría en tasas delictivas más bajas. La policía debe creer que todo lo que hay entre ellos y la prevención del crimen, son más números y mejores equipos, sin embargo, diversos estudios han demostrado que este no es el caso. Se requiere algo más que una justicia criminal efectiva, para enfrentar las causas del crimen.

Segundo, a efecto de reforzar los números de la policía, existen convocatorias par que los militares se utilicen como un multiplicador de fuerza, en la realización de operaciones conjuntas, o aún llevando a cabo patrullajes de rutina en áreas con altos índices criminales. A pesar de similitudes superficiales (uniformes, estructuras de rangos, armas), el trabajo de los militares y la policía son bastante diferentes. Los militares se encuentran entrenados para vencer a fuerzas enemigas y controlar el territorio. La policía se supone que trabaja con el público, para solucionar problemas, muchos de los cuales se encuentran relacionados de manera periférica con asuntos criminales. Es verdad que los militares cuentan con una mejor disciplina (y por tanto son más respetados) que la policía en algunos países, y que la policía en esta región tiene un enfoque altamente militarizado. Sin embargo se cruza una línea, cuando el gobierno utiliza soldados en contra de sus propios ciudadanos, especialmente en una región en la que las fuerzas militares han jugado un papel tan importante en represiones en el pasado. El proceso de democratización de una fuerza policíaca autoritaria, es el proceso de hacerlos menos parecidos a los militares, y la reincidencia en estos asuntos no sirve a la causa de la prevención del crimen.

La policía puede jugar un papel vital en la identificación y ayuda para lograr solucionar los problemas locales de crimen, sin embargo únicamente pueden hacerlo si son desmilitarizados sistemáticamente, y se convierten en algo un tanto diferente. Se deben involucrar y conocer a sus comunidades, y por tanto tener la confianza de las mismas. Deben pasar una buena cantidad de tiempo clasificando los conflictos no crim-

inales de una comunidad que al final se manifiestan como delitos. Deben convencer a la gente, de que es benéfico reportar al crimen, y que los resultados de hacerlo, son preferibles a el tomar los asuntos en sus propias manos. Ellos no pueden llevar a cabo estas tareas vitales, si se encuentran atrapados en una guerra, cambiando de un frente de batalla a otro. Finalmente, se debe reconocer que la policía es únicamente el elemento más visible de los esfuerzos de un estado para enfrentar los asuntos criminales, y que no pueden realizar la tarea por sí mismos.

La tercera respuesta predecible para las tasas de delitos fugitivos, tiene un impacto directo en los avances en materia de derechos humanos. Además de requerir más personal y equipo, la policía generalmente solicita que el estado haga su trabajo más fácil, modificando la ley penal sustantiva y adjetiva en su favor. Dada la falta de experiencia con las técnicas de investigación democráticas, argumentan que la protección a los derechos civiles, forman una barrera sin razón e insuperable, para que lleven a cabo su trabajo. La legislación es presentada como permitiendo una detención extendida (e inclusive indefinida) sin cargos para sospechosos criminales. Las leyes se introducen declarando que la pertenencia a ciertas organizaciones (tales como pandillas), se considera como un delito mismo. Esto permite arrestar a ciertos individuos, sobre la base de su apariencia o asociados conocidos, sin tener que probar que han llevado a cabo una conducta delictiva en concreto. Se renuncia a la protección de la privacidad, y a otro tipo de protecciones. Según se considera que la actividad criminal es una amenaza al estado, la línea entre el crimen y el terrorismo se borra, y aplican las leyes de guerra. Sin embargo estos cambios, que pueden ocurrir insidiosamente a lo largo del tiempo o en una aceleración de pánico, representan una mayor amenaza a la democracia, que las hordas desorganizadas a las que se encuentran dirigidas.

La principal de estas hordas en Centroamérica son las maras. La mayoría de los miembros de las maras son jóvenes urbanos marginalizados, entre las edades de 15 a 24, un grupo demográfico que comete un número desproporcionado de delitos callejeros y actos de violencia en todo el mundo. Igual que sus compañeros, son los responsables de un gran número de homicidios, generalmente entre ellos mismos. Pero sería imprudente asumir que el apresar a un gran número de miembros de las maras solucionaría el problema del crimen. En primer lugar, dado el número de miembros de la pandilla, el hacerlo sería extremadamente desafiante para los sistemas de justicia criminal en Centroamérica. En segundo lugar, aún si este fuera un objetivo posible, es probable que surgiera una nueva generación de maras, mientras las condiciones que generan el pandillismo continúen siendo las mismas. Finalmente, la evidencia existente, sugiere que las maras son responsables de un número menor de crímenes del problema total, de lo que la mayoría de la gente esperarían.

Bajo estas circunstancias, lo que se necesita no es una mano dura. Más bien, se debe aplicar una mano con fineza, y que todos los recursos del gobierno, no únicamente el sector de la seguridad, deben ser aplicados de manera estratégica. Lo que se necesita es una estrategia para la prevención del delito que sea bien investigada y de disciplinas cruzadas, basada en intervenciones que se hayan probado como valiosas.

De hecho, muchos centroamericanos reconocen que la prevención del crimen requiere algo más que sólo una policía agresiva, y que se requiere una mayor experiencia de la que actualmente tiene el sector de seguridad. Por ejemplo, el gobierno de El Salvador, creó a recientes fechas la Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social, mismo que involucra a personas importantes, desde académicos universitarios, hasta gente de negocios, y que busca encontrar soluciones para los problemas delictivos. Mientras que sus recomendaciones hasta la fecha, han ido orientadas al cumplimiento de la ley, dichas iniciativas tienen un gran potencial de innovar las soluciones sociales.

Parte de la confusión sobre la mejor manera de lidiar con el crimen, parece estar enraizada en una falsa dicotomía sobre las intervenciones para el cumplimiento de la ley a corto plazo, contra el desarrollo social a largo plazo. La mayoría de la gente instintivamente reconoce que los problemas delictivos son problemas sociales. De conformidad con la investigación del Latinobarómetro del 2004, el 57% de las personas encuestadas declararon que "la situación económica" era la causa del crimen. Sin embargo, la mayoría de la gente no puede esperar que el paso lento del desarrollo se refiera a la injusticia social - se necesita la seguridad ahora. Debido a que la policía es la agencia del estado encargada de enfrentar el crimen, los esfuerzos a corto plazo generalmente se basan en intervenciones, tales como dar más recursos a la policía, utilizar fuerzas militares u operaciones del tipo militar en la policía, dar menos protecciones de derechos civiles a aquellas personas acusadas de un crimen, y asegurar sentencias más duras. Por supuesto que estos esfuerzos continúan promoviendo el crecimiento y el desarrollo, y se espera que estos dos procesos por separado tengan como resultado una reducción en el crimen.

Sin embargo, este resultado no se puede asegurar de ninguna manera. La policía tiene habilidades limitadas para contener, y solucionar por sí mismos, los problemas delictivos, y muchos aspectos del desarrollo pueden por sí mismos impulsar el crimen. En lugar de dejar pasar el tiempo hasta el día en que se logre un empleo total, la llave para prevenir el crimen hoy en día, podría ser modificar la forma en la que las circunstancias sociales alimentan al delito. Existe una serie de técnicas para lograr lo anterior, generalmente clasificadas como "prevención del crimen social". Estas intervenciones no pueden modificar la naturaleza subyacente de la sociedad, sin embargo pueden romper el vínculo entre el desarrollo y el crimen.

Por ejemplo, existe todo un rango de intervenciones agrupadas bajo el título de "prevención del crimen mediante el diseño del medio ambiente". La rápida urbanización, la superpoblación y los espacios urbanos irregulares se encuentran altamente asociados con altas tasas delictivas. Toda la vivienda y proyectos de infraestructura pública deben tomar en cuenta los principios básicos de la prevención de los delitos, dejando lugar para que las familias crezcan e incorporen características estructurales de seguridad. Las calles deben ser accesibles a los servicios de emergencia y deben tener una señalización y alumbrado adecuado. Las áreas urbanas no deben contener espacios irregulares, tales como edificios perdidos o abandonados. Los principios básicos de la zonificación deben ser adheridos a la misma. Los establecimientos informales deben ser movidos gentilmente a una mayor formalidad. Los propietarios de inmuebles deben ser obligados a conocer la identidad de sus arrendatarios, e intentar poblarlos conforme a los estándares básicos, así como cumplir con los asuntos de salud y seguridad contra incendios. Muchos de estos problemas pueden ser identificados mediante un análisis de incidentes de crimen, mediante los ojos de los mapas del sistema de información geográfica (GIS, por sus siglas en inglés). Al final, muchos de los asuntos del crimen urbano, pueden ser asuntos de la administración de la ciudad.

En relación con el pandillismo, existe una gran cantidad de evidencia sobre las intervenciones exitosas de los jóvenes. Resulta muy difícil hacer que una persona joven abandone una pandilla, mediante amenazas de justicia penal, debido a que el desafío al estado, aún hasta la muerte, es la llave para el ethos del pandillismo. Un miembro típico de una pandilla encuentra los "palos" más amenazantes, que cualquier cosa que el estado pueda crear, y su imagen personal se encuentra enraizada en sus sentido de desafío, su rechazo a ser vencido. Dados estos factores, parece que las "zanahorias" son mucho más efectivas, y también son efectivas en cuanto al precio. Universalmente, la gente joven se une a las pandillas, en un intento de inclusión, en un contexto de familias y comunidades disfuncionales. Por lo tanto, la prevención del pandillismo se trata de dar fuentes alternativas con un significado, a los jóvenes. La intervención pronta es la llave, y el estado puede hacer mucho para mitigar los peores efectos de una educación dura. Una vez que una persona joven ha experimentado varios encarcelamientos, el mismo proceso sería más fácil de lograr.

Todos los actores internacionales en el desarrollo, deberían estar involucrados en encontrar soluciones. Los problemas de esta región se deben atacar de manera regional, con el apoyo y cooperación de las demás naciones afectadas por flujos de droga regionales, incluyendo las fuentes de demanda de drogas. Muchos problemas son inherentemente de carácter transnacional, y un caso obvio de discusión es la pregunta de la deportación de criminales. Por supuesto, los derechos de residencia para los no-ciudadanos deben ser contingentes en buen comportamiento, y ningún país puede ser legalmente obligado a mantener criminales que no tienen un derecho independiente para permanecer. Sin embargo, existen maneras para promover la reintegración de dichos deportados, en sus sociedades natales. El mantener a las personas indeseables de reingresar al país del que fueron deportados puede ser contingente al hecho de hacerlos creer que permanecer en casa es algo más atractivo, mediante a asistencia de los deportados en la reincorporación a su país. Este esfuerzo sería en el propio interés de los países desarrollados - no obstante no haya evidencia que el deportado promedio se involucre en una actividad delictiva transnacional, un número muy pequeño de deportados peligrosos, ubicados en países de tránsito de drogas, puede ser un problema significativo para las naciones consumidoras de drogas. Es en interés de la seguridad colectiva del hemisferio, por lo que se hacen esfuerzos genuinos para rehabilitar a aquellos que son lanzados a las sociedades que no cuentan con el equipo necesario para recibirlas.

Adicional a una estrategia comprensiva para la prevención del crimen, todos los esfuerzos para el desarrollo en esta región, deben contener un componente de prevención de crimen, incluyendo el desarrollo del país y las estrategias para la reducción del crimen de las agencias internacionales. Las iniciativas de los ministros y departamentos nacionales deben también comprender la prevención del crimen. El crimen es un asunto de punta filosa, que afecta a la educación, vivienda, salud, comercio y todos los demás aspectos del desarrollo.

Al mismo tiempo, la necesidad vital de una reforma a la justicia criminal no se puede dejar a un lado. El intento de reducir el crimen puede distraer la atención del hecho de que las agencias que se encuentran a cargo de tratar con el crimen no funcionan tan bien como las instituciones democráticas. A efecto de que la regla de la ley prevalezca, el sistema de la justicia criminal debe ser efectivo, eficiente y equitativo para lograr sus deberes estatutarios. Esto es esencial, ya sea que estas tareas se consideren como contribuyentes al esfuerzo general para la prevención del crimen o no.

En resumen, este reporte indica que existen diversas áreas en las que la comunidad internacional puede asistir a los países de Centroamérica a enfrentar el problema delictivo. El primero, es la formulación de estrategias de prevención del crimen basadas en la investigación y con trabajo conjunto de sectores, a niveles nacionales o regionales. La segunda es la integración de la política de prevención del crimen en todas las intervenciones del desarrollo, bien sean iniciados por actores internacionales o por el gobierno local. Finalmente, la reforma de la justicia criminal es un proceso distinto del conductor de la prevención del crimen, y debe ser igual de importante. La democracia se encuentra en peligro cuando el estado de derecho no está asegurado.

# Referencias

- 1 Algunas fuentes excluyen a Panamá, mientras que Belice es muchas veces excluido de discusiones y de datos que involucran a Latinoamérica. En algunos sistemas de clasificación, México se incluye en Centroamérica.
- 2 El PNUD clasifica a los países basándose en sus indicadores de desarrollo humano.
- 3 Gobierno de Belice, Presupuesto 2007. Disponible en <http://www.belize.gov.bz/budget.html>
- 4 Datos del PNUD.
- 5 <http://www.gallupworldpoll.com/content/?ci=26233>
- 6 De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, el coeficiente de Gini: "Mide el grado en que la distribución de los ingresos (o del consumo) entre individuos u hogares de un país se desvía con respecto a una distribución en condiciones de perfecta igualdad. La curva de Lorenz representa los porcentajes acumulados de los ingresos totales recibidos en función de la suma de receptores, empezando con el individuo u hogar más pobre. El Coeficiente de Gini mide el área situada entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de igualdad absoluta, expresada como un porcentaje del área máxima por debajo de la línea. El valor 0 representa la igualdad perfecta, y el 100, la desigualdad total".
- 7 CEPAL, Panorama social de América Latina 2005, New York: United Nations.
- 8 Para una explicación mas detallada sobre los datos étnicos, véase Busso, M., M. Cicowicz y L. Gasparini, 'Ethnicity and the Millennium Development Goals'. Bogota: United Nations Development Programme, 2005.
- 9 Latinbarometro, 'Informe - Resumen Latinobarómetro 2004: Una Década De Mediciones'. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, 2004.
- 10 LatinNews.com, 'Statistics'. Latinnews Daily, 9 November 2005.
- 11 ECLAC, Statistical Yearbook for Latin America and the Caribbean 2004. Santiago de Chile: United Nations, 2005, p. 90.
- 12 Instituto Nacional de Estadística, 'Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2002', February 2003.
- 13 United Nations Development Programme, Human Development Report 2006. New York: UNDP, Table 12.
- 14 Comunicación personal con Elías Carranza, Director, Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), February 2006.
- 15 Latinbarometro, 'Informe - Resumen Latinobarómetro 2004: Una Década De Mediciones'. Santiago de Chile: Corporación Latinobarómetro, 2004.
- 16 Declaración de Rogelio E. Guevara, Chief of Operations of the United States Drug Enforcement Administration, ante the House of Representatives Committee on International Relations, 10 October 2002.
- 17 Datos disponibles en: [http://www.transparency.org/policy\\_and\\_research/surveys\\_indices/gcb](http://www.transparency.org/policy_and_research/surveys_indices/gcb)
- 18 Seijo, L and L. Cerecer, 'Destituirán a 1,500 agentes de la PNC'. Prensa Libre, 7 December 2005.
- 19 Declaración de Paul Simons, Acting Assistant Secretary of State for International Narcotics and Law Enforcement Affairs Briefing on the President's 2003 Narcotics Certification Determinations, Washington, DC, January 31, 2003.
- 20 Seijo, L., 'Tres jefes antinarcóticos son apresados en EE.UU.' Prensa Libre, 17 November 2005.
- 21 Declaración de Rogelio E. Guevara, Chief of Operations of the United States Drug Enforcement Administration, ante the House of Representatives Committee on International Relations, 10 October 2002.
- 22 Latinnews.com, Security Update "Guatemala to keep army performing police duties". 12 October 2006.
- 23 Honduras de 2004 CEJA, Belize de CEJA 2004, Guatemala de 2000 CTS, Nicaragua de 1994 ETC, y el resto de 2002 ETC.
- 24 Amnesty International, 'Guatemala: Submission to Param Cumaraswamy, Special Rapporteur of the United Nations Commission on Human Rights and the Independence of Judges and Lawyers'. May 2001.
- 25 Peacock, S. and A. Beltrán, "Hidden Powers, Illegal Armed Groups in Post-Conflict Guatemala and the Forces Behind Them" Washington: D.C.: Washington Office on Latin America, September, 2003.
- 26 LatinNews.com, 'Guatemala: 'Clandestine groups' inquiry fails to take off.' Security and Strategic Review, September 2004.
- 27 Declaración de Rogelio E. Guevara, Chief of Operations of the United States Drug Enforcement Administration, ante House of Representatives Committee on International Relations, 10 October 2002.
- 28 Walmsley, R. 'World Prison Populations List: Sixth Edition' International Centre for Prison Studies, Kings College, London, 2005.
- 29 Walmsley, R., 'Global incarceration and prison trends'. Forum on Crime and Society, Vol 3, No 2, December 2003.
- 30 UNDP, Democracy in Latin America: Statistical Compendium. New York: United Nations, 2004, p.115.
- 31 Pérez, S. and L. Cereser, 'Murieron 30 reos en trifulcas en 4 cárceles'. Prensa Libre, 16 August 2005.
- 32 Rodríguez, L. 'Masacre en correccional'. Prensa Libre, 20 September 2005.
- 33 LatinNews.com
- 34 Machel, G. 'Impact of Armed Conflict on Children'. Report of the expert of the Secretary-General, Ms. Graca Machel, submitted pursuant to General Assembly resolution 48/157, presented to the General Assembly of the United Nations on 26 August 1996, p. 14.
- 35 Monzón, M., 'Back, and Alive: Trial and punishment for instigators and perpetrators of the lynching of Judge Hugo Martínez'. Citado por the International Women's Media Foundation, <http://www.iwmf.org/features/7722>
- 36 Summerfield, D and L. Toser, ' 'Low intensity' war and mental trauma in Nicaragua: A study in a rural community'. Medicine and War, Vol 7 No 2, 1991, pp. 84-99.

- 37 Salgado de Snyder, V., R. Cervantes, A. Padilla, 'Migration and post-traumatic stress disorders: the case of Mexicans and Central Americans in the United States'. *Acta Psiquiátrica y Psicológica de América Latina*, Vol 36, No 3-4, 1990, pp 137-145.
- 38 Sabin, M., B Lopeç Cardozo, L Nackerud, R Kaiser, I. Varese, 'Factors associated with poor mental health among Guatemalan refugees living in Mexico 20 years after civil conflict'. *Journal of the American Medical Association*, Vol 290, No 5, 2003, pp 635-42
- 39 Ancharoff, M., J. Munroe, L. Fisher, 'The legacy of combat trauma: clinical implications of intergenerational transmission'. *International handbook of multigenerational legacies of trauma*, Berlin: Springer, pp. 257-276
- 40 Bourgois, P. 'The power of violence in war and peace: Post-Cold War lessons from El Salvador.' *Ethnography*, Vol 2, No 1, 2001, pp. 5-34. Reprint accessed at the eScholarship Repository, University of California. <http://repositories.cdlib.org/postprints/705>.
- 41 Op cit., p. 9.
- 42 Op cit., p 10.
- 43 Op cit., p. 9.
- 44 <http://hrw.org/campaigns/crp/index.htm>
- 45 Statement of Senator John Kerry to the United States Senate, 19 May 1989, page S5432.
- 46 Arana, A. 'The new battle for Central America.' *Foreign Affairs*, November/December 2001.
- 47 Fuentes, J. "Violent conflict and Human Development in Latin America: The cases of Colombia, El Salvador, and Guatemala". *Human Development Report Occasional Paper No 10 of 2005*, New York: United Nations Development Programme, 2005.
- 48 Guatemalan Commission for Historical Clarification, Guatemala: Memory of Silence. Disponible en: <http://shr.aas.org/guatemala/ceh/report/english/toc.html>, sin número de página.
- 49 Guatemalan Commission for Historical Clarification, Guatemala: Memory of Silence. Disponible en: <http://shr.aas.org/guatemala/ceh/report/english/toc.html>
- 50 LatinNews.com, 'Web of drug violence stretches from Guatemala to Mexico'. *Security Update*, 6 October, 2005.
- 51 LatinNews.com, 'Mexico-Guatemala drug empire spreads its wings'. *Security Update*, 10 November 2005.
- 52 Collier, P., V. Elliott, H. Hegre, A. Hoeffler, M. Reynal-Querol, and N. Sambanis, 'Breaking the conflict trap: Civil war and development policy'. *World Bank Policy Research Report*, Washington, D.C. World Bank, 2003.
- 53 Fuentes, J. "Violent conflict and Human Development in Latin America: The cases of Colombia, El Salvador, and Guatemala". *Human Development Report Occasional Paper No 10 of 2005*, New York: United Nations Development Programme, 2005.
- 54 Machel, G. 'Impact of Armed Conflict on Children'. Report of the expert of the Secretary-General, Ms. Graca Machel, submitted pursuant to General Assembly resolution 48/157, presented to the General Assembly of the United Nations on 26 August 1996, p. 35.
- 55 Garfield R., T. Frieden, and S. Vermund, 'Health related outcomes of war in Nicaragua'. *American Journal of Public Health*, No 77, 1987, pp. 615-618, citado en WHO 2002 op cit, p. 228.
- 56 Ribano, C., L. Sek, M. Sullivan, M. Taft-Morales, and C. Veillette, 'Central America and the Dominican Republic in the Context of the Free Trade Agreement (DR-CAFTA) with the United States'. Washington, D.C: Congressional Research Service, October 2005, p 76.
- 57 Call, C. 'Assessing El Salvador's transition from civil war to peace'. In J. Stedman, D. Rothchild, and E. Cousens, *Ending Civil Wars*, Boulder: Lynne Rienner Press, 2002.
- 58 Ibid, p 565.
- 59 Guatemalan Commission for Historical Clarification, Guatemala: Memory of Silence. Disponible en: <http://shr.aas.org/guatemala/ceh/report/english/toc.html>
- 60 Declaración de Rogelio E. Guevara, Chief of Operations of the United States Drug Enforcement Administration, before the House of Representatives Committee on International Relations, 10 October 2002.
- 61 International Organisation on Migration, *World Migration 2005*. Geneva: IOM, 2005, p. 93.
- 62 CEPAL, *Panorama Social de América Latina 2005*. New York: United Nations, 2005. En varios países de acuerdo a CEPAL, remesas representan cerca del 10% del producto interno bruto (PIB), sugiriendo una gran dependencia de esos flujos del crecimiento de la economía. El porcentaje más alto en Centroamérica sucede en Nicaragua (18%) y El Salvador (16%).
- 63 Guatemalan Commission for Historical Clarification, Guatemala: Memory of Silence.
- 64 LatinNews.com, 'Guatemala'. *Washington Watch*, 14 December 2005.
- 65 Economist Intelligence Unit, 'Guatemala: Country Profile 2005'. Disponible en: <http://www.eiu.com>.
- 66 Ibid.
- 67 La mayoría de los centroamericanos (70%) residiendo en los Estados Unidos en 1990 llegaron durante los 1980s, comparado con total la población hispánica. La mayoría (64%) fueron ciudadanos ilegales, comparados con solo un cuarto del total de la población hispánica. La mayoría (66%) de los hogares centroamericanos no hablaban inglés, comparado con un poco más de la mitad del total de la población hispánica. Una proporción relativamente grande (14%) eran hombres sin esposa, comparado con el 9% de toda la población hispánica. *Ethnic and Hispanic Statistics Branch, 'We, the American Hispanics'*. Washington, D.C.: United States Department of Commerce, Economics and Statistics Division, Bureau of the Census, 1993.
- 68 Lapham, S., P. Montgomery and D. Niner, 'We, the American Foreign Born'. Washington, D.C.: United States Department of Commerce, Economics and Statistics Division, Bureau of the Census, 1993.
- 69 Disponible en: <http://www.oit.or.cr/estad/td/indexe.php>
- 70 Rumbaut, R., R. Gonzales, G. Komaie, and C. Morgan, 'Debunking the Myth of Immigrant Criminality: Imprisonment Among First- and Second-Generation Young Men'. Washington D.C.: Migration Policy Institute, 2006.
- 71 See Smith, S, "Caribbean states want a study on the link between deportation and crime." *Jamaica Gleaner*, 16 December 2005.
- 72 López, O. 'De 2004 a la fecha, 228 mil han sido expulsados de EE.UU.; la mitad pertenece a pandillas' *Prensa Libre*, 4 March 2005.
- 73 UNDP El Salvador, A look at the new 'us': The impact of migration. United Nations Development Programme: San Salvador, 2005.
- 74 Scalia, J. 'Noncitizens in the Federal Criminal Justice System, 1984-1994'. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, August 1996.
- 75 Harrison, P. and A. Beck, 'Prison and Jail Inmates at Midyear 2004'. Washington, D.C.: U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, Bureau of Justice Statistics, April 2005.
- 76 Bureau of Justice Statistics, *Compendium of Federal Justice Statistics 2003*, September 2005.
- 77 El término de felonías agravadas primero apareció en el contexto de inmigración en 1988 en el acta de abuso antidrogas, donde se limitaba a asesinato, tráfico de drogas y tráfico de armas de fuego. Fue después extendido por una ley subsiguiente para incluir un rango más amplio de ofensas incluyendo crimen violento, robo, y ofensas relacionadas con inmigración como perjurio y falsificación de documen-

- tos. El acta de 1996 corrige la definición de felonía agravada por, entre otros aspectos, reducir la multa y las sentencias de muchas ofensas, incluye crímenes mas bajos. Bajo esta ley, deportación criminal ha sido ordenada para crímenes como robos de tiendas y orinar en la vía publica. Vease U.S. Department of Justice Fact Sheet 03/24/97.
- 78 Las estadísticas de la Dirección General de Migración del El Salvador sugieren datos un poco mas bajo para 2004 que los de Homeland Security (1965 "con antecedentes" versus 2698). Véase: <http://www.gobernacion.gob.sv/eGobierno/Secciones Principales/Direcciones/DGME/Estadisticas/deportados/deportados2004.htm>
  - 79 Datos de United States Bureau of Justice Statistics, disponibles en: <http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/reentry/recidivism.htm>
  - 80 Headley, B., M. Gordon, and A. MacIntosh, "Deported Volume 1: Entry and Exit Findings Jamaicans Returned Home from the U.S. Between 1997 and 2003." Jamaica: Bernard Headley, 2005.
  - 81 Headley, B., M. Gordon, and A. MacIntosh, "Deported Volume 1: Entry and Exit Findings Jamaicans Returned Home from the U.S. Between 1997 and 2003." Jamaica: Bernard Headley, 2005.
  - 82 Dougherty, M., D. Wilson, and A. Wu, Annual Report: Immigration Enforcement Actions 2005. Washington, D.C.: United States Department of Homeland Security, November 2006.
  - 83 Esto es basado en analisis de datos de ediciones anuales del Social and Economic Survey of Jamaica from 2002 to 2005.
  - 84 Griffin, C. "Criminal deportation: The unintended impact of US anti-crime and anti-terrorism policy along its third border." Caribbean Studies Vol. 30 No. 2, 2002.
  - 85 CARICOM, Report of the Task Force on Crime and Security, Georgetown: CARICOM, 2002.
  - 86 UNODC, World Drug Report 2005. Vienna: UNODC 2005.
  - 87 ONDCP, 'What America's users spend on illicit drugs'. Washington, D.C.: Executive Office of the President, December 2001, p 3.
  - 88 Declaración de Michael Braun, Chief of Operations, United States Drug Enforcement Agency, before the House International Relations Committee, Subcommittee on the Western Hemisphere, 9 November 2005; National Drug Intelligence Centre, National Drug Threat Assessment 2007. Washington, D.C.: Department of Justice, 2007, p 6.
  - 89 National Drug Intelligence Centre, National Drug Threat Assessment 2007. Washington, D.C.: Department of Justice, 2007.
  - 90 Declaración de James Milford, Acting Deputy Administrator, United States Drug Enforcement Administration, before the Senate Subcommittee on National Security, International Affairs, and Criminal Justice, 17 July 1997.
  - 91 Declaración de Thomas A. Constantine, head of the United States Drug Enforcement Administration, before the House of Representatives Judiciary Committee, Subcommittee on Crime, 3 April 1997.
  - 92 National Drug Intelligence Centre, National Drug Threat Assessment 2001. Washington, D.C.: Department of Justice, 2001.
  - 93 De-classified Joint Intelligence Report, 'Worldwide drug threat assessment'. Washington, DC., April 2000.
  - 94 National Drug Intelligence Centre, National Drug Threat Assessment 2002, Washington, D.C.: Department of Justice, 2002.
  - 95 National Drug Intelligence Centre, National Drug Threat Assessment 2005. Washington, D.C.: Department of Justice, 2005.
  - 96 International Crisis Group, 'Spoiling security in Haiti'. Latin America/Caribbean Report No 13. Brussels: International Crisis Group, 2005.
  - 97 National Drug Intelligence Centre, National Drug Threat Assessment 2006. Washington, D.C.: Department of Justice, 2006.
  - 98 Declaración de Donnie Marshall, Administrator, US Drug Enforcement Administration before the United States Senate Caucus on International Narcotics Control, 15 May 2001.
  - 99 National Drug Intelligence Centre, National Drug Threat Assessment 2006. Washington, D.C.: Department of Justice, 2006.
  - 100 ONDCP, 'Transit zone interdiction operations'. ONDCP Fact Sheet, 2004.
  - 101 National Drug Intelligence Center, 'National Drug Threat Assessment 2006'. Washington, D.C., United States Department of Justice.
  - 102 Según la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas, "por años, cerca de un tercio de la cocaína hacia los Estados Unidos fue traficada a través de las Antillas Mayores hacia la Florida. Aproximadamente 10% de la fuente total de los EUA, fueron manejados por dos organizaciones, una manejada por el Colombiano... Elias Cobos-Muñoz y el segundo dirigido por Melvin Maycock y Pedro Smith. Una investigación de 29 meses de la DEA condujo a la detención de los tres... así como más de 50 de sus colegas en Colombia, Panamá, Jamaica, las Bahamas, los Estados Unidos, y Canadá. Más importante que eso, interrumpió las organizaciones que proveían un 10% estimado de la cocaína importada en los Estados Unidos -aproximadamente 30 toneladas métricas por año. Para comprobar este hecho, que fue amplificada por el despliegue de las fuerzas internacionales que seguían al presidente Jean Bertrand Aristide en Haití, las estimaciones de la inteligencia determinan que hubo una reducción significativa en la cantidad de cocaína que atraviesa el centro y el Caribe del este a los Estados Unidos -aproximadamente un tercio o quizás un 10% del flujo total." Ver, President's National Drug Control Strategy: Disrupting the Market: Attacking the Economic Basis of the Drug Trade, February 2005.
  - 103 Declaración de the Donnie Marshall, Administrator, US Drug Enforcement Administration before the United States Senate Caucus on International Narcotics Control, 15 May 2001. This arrangement has apparently been standing for some time, since the same claim was made by then-DEA Administrator Thomas Constantine before the House Judiciary Committee's subcommittee on crime on 3 April 1997.
  - 104 <http://www.dea.gov/pubs/pressrel/pr051706.html>
  - 105 Declaración de Michael Braun, Chief of Operations, United States Drug Enforcement Agency, before the House International Relations Committee, Subcommittee on the Western Hemisphere, 9 November 2005.
  - 106 Lakshmann, I., 'Cocaine's new route: Drug traffickers turn to Guatemala'. Boston Globe, 30 November 2005; Smyth, F. 'The untouchable narco-state: Guatemala's military defies the DEA'. Texas Observer, 18 November 2005.
  - 107 Declaración de General Bantz J Craddock, Commander of the United States Southern Command, before the United States House of Representatives Armed Services Committee, 16 March 2006.
  - 108 Declaración de Rogelio E. Guevara, Chief of Operations of the United States Drug Enforcement Administration, before the House of Representatives Committee on International Relations, 10 October 2002.
  - 109 LatinNews, 'Drug gangs merge to spread abroad'. Strategy and Security Review, September 2005.
  - 110 UNODC Major Seizures Database
  - 112 Seijo, L., 'Tres jefes antinarcoáticos son apresados en EE.UU.' Prensa Libre, 17 November 2005
  - 113 OAS/CICAD, 'Informe comparativo 7 países, encuestas escolares a nivel nacional: El Salvador, Guatemala,

- Bnicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, y Uruguay 2003'. Washington, D.C.: OAS November 2004.
- 114 Ministerio de Gobernacion, Dirección General de Central Penales, and Comisión Nacional Antidrogas, 'Encuesta de Prevalencia de Consumo de Drogas en Internos de Centros Penales 2005'. San Salvador: Ministerio de Gobernacion, 2005.
- 115 OAS/ CICAD, 'Premier Estudio Nacional sobre Consumo de Drogas en Poblacion General de El Salvador.' San Salvador: OAS/CICAD, June 2006.
- 116 Ortega, C., 'Qualitative Research on Drug Use: Assessing Emerging Drug Trends in the Caribbean'. Washington, DC: OAS, December 2004. The Jamaica authorities report use of this combination as well, under the name of 'season spliff'. UNODC ARQ 2004.
- 117 UNODC ARQ 2005
- 118 Declaración de Donnie Marshall, Deputy Administrator, Drug Enforcement Administration, before the House of Representatives Committee on International Relations, 24 June 1998.
- 119 DEA Press release, 'Colombian Heroin a Major Threat: 62% Seized in the United States Originates in South America'. 3 September 1996.
- 120 National Drug Intelligence Center, National Drug Control Strategy Reports 2004, 2003, 2002; Drug Enforcement Administration, 'Colombian heroin a major threat'. Press release, 3 September 1996.
- 121 UNODC ARQ
- 122 United States Department of State, 'International Narcotics Control Strategy Report 2006'
- 123 National Drug Intelligence Center, National Drug Control Strategy Report 2006, p. 18.
- 124 UNODC ARQ.
- 125 LatinNews.com, 'Guatemalan eradication reveals huge opium poppy expansion'. 7 September 2006.
- 126 Declaración de Rogelio E. Guevara, Chief of Operations of the United States Drug Enforcement Administration, before the House of Representatives Committee on Government Reform, 12 December 2002.
- 127 UNODC Major Seizures Database
- 128 UNODC ARQ 2005
- 129 International Narcotics Control Board, 2006 Report: Precursors and Chemicals Frequently used in the Illicit Manufacture of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances. Vienna: INCB, 2007, p. 13.
- 130 Estas categorías usadas están contenidas en: [http://www.policia.gob.ni/AD\\_tabla2.htm](http://www.policia.gob.ni/AD_tabla2.htm)
- 131 LatinNews.com, 'Anti-crime drives fail to curb El Salvador's rising murder rates'. Security Update, 20 October 2005.
- 132 En el pasado, Interpol realizaba ejercicios similares, pero este programa ha sido interrumpido en 2004. Ambos datos de INTERPOL y ETC están disponibles, pero desacuerdan.
- 133 Swazilandia es un reinado independiente rodeado por tres lados por Sudáfrica, y existe mucha inmigración entre estos dos países. En algún sentido, los dos países representan un solo problema de crimen.
- 134 Por ejemplo, vease Call, C. 'Assessing El Salvador's transition from civil war to peace'. In J. Stedman, D. Rothchild, and E. Cousens, *Ending Civil Wars*, Boulder: Lynne Rienner Press, 2002, p.571.
- 135 PAHO datos de mortalidad disponibles en: <http://www.paho.org/English/SHA/coredata/tabulator/newsqlTabulador.asp>
- 136 <http://www.fgr.gob.sv/boletin/add/eventos/upload/pics/Homicidios%20Enero%20a%20Diciembre%202005.ppt>
- 137 Con respecto al reporte final en seguridad presentado al gabinete por René Figueroa, Ministro de seguridad y justicia. Vease: <http://www.gobernacion.gob.sv/eGobierno/Sec-cionesPrincipales/Eventos/informefinalsobresseguridad.htm>
- 138 Citado por Cruz, J. 'El Salvador'. In Fundación Arias para la Paz, *La cara de la violencia urbana en América Central*. San José: Fundación Arias para la Paz, 2006.
- 139 <http://www.fgr.gob.sv/estadisticas>. Datos de poblacion del PNUD El Salvador Informe de desarrollo humano 2005, pp 469. Tasas y clasificaciones similares son indicadas por datos del FG para el primer cuarto de 2006. Clasificaciones similares han sido observadas en datos de PNUD en 2003 y los primeros tres cuartos de 2004.
- 140 Fundación Arias para la Paz, *La cara de la violencia urbana en América Central*. San José: Fundación Arias para la Paz, 2006.
- 141 Paniagua, I., E. Crespin, A. Guardado, A. Mauricio. 'Wounds Caused by Firearms in El Salvador, 2003-2004: Epidemiological Issues'. *Medicine, Conflict & Survival*, Vol 21, No 3, 2005.
- 142 Godnick, W. and H. Vazquez, 'Small arms control in Central America'. *Latin American Series No 2*, London: International Alert, 2003.
- 143 <http://www.mingob.gob.gt/estadisticas.html>
- 144 Datos estadísticos derivados del PNUD, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005. Guatemala City: UNDP, 2006.
- 145 Ortiz, P., 'Las ciudades mas peligrosas en America Latina'. *Univision.com*, 20 January 2006.
- 146 De acuerdo a estadísticas de la Policía Nacional Civil de Guatemala.
- 147 Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras, 'Estadísticas Vitales: Defunciones 2000-2002'. February 2003.
- 148 LatinNews.com, 'Honduras: Election could hinge on security concerns'. *Latin American Regional Report: Caribbean and Central America*, August 2005.
- 149 PAHO datos de mortalidad disponibles en: <http://www.paho.org/English/SHA/coredata/tabulator/newsqlTabulador.asp>
- 150 Citado en Turner, A. 'Panama', in Fundación Arias para la Paz, *La cara de la violencia urbana en América Central*. San José: Fundación Arias para la Paz, 2006, p. 293.
- 151 Rodgers, D., ' "Disembedding" the city: Crime, insecurity, and spatial organisation in Managua, Nicaragua'. *Environment and Urbanization*, Vol 16, No 2., October 2004, p. 117. Policía Nacional de Nicaragua, 'Actividad Delictiva 2005': [http://www.policia.gob.ni/AD\\_tabla2.htm](http://www.policia.gob.ni/AD_tabla2.htm)
- 152 Policía Nacional de Nicaragua, 'Actividad Delictiva 2005': [http://www.policia.gob.ni/AD\\_tabla2.htm](http://www.policia.gob.ni/AD_tabla2.htm)
- 153 Estos estan encontra de una banda de prisioneros rivals de origen hispanico conocidos como 'Nuestra Familia' (Nortños, asociados comúnmente con el numero 14 por lo de la letra 'N').
- 154 Fundación Arias para la Paz, *La cara de la violencia urbana en América Central*. San José: Fundación Arias para la Paz, 2006, p. 3.
- 155 National Alliance of Gangs Investigators Associations, 'National Gang Threat Assessment 2005'. Washington, D.C.: Bureau for Justice Assistance, 2005, p. ix.
- 156 Jorge Delgado coloca este numero aun más alto, en 40,000. Véase Delgado, Jorge, 'La criminalización de la juventud centralamericana: El predominio de las políticas públicas represivas. Documento enviado a Cartagena de Indias, Colombia, 2005. Citado en Fundación Arias 2006 op cit.
- 157 Hernández, S, 'The phenomenon of criminal youth gangs in Central America and the importance of regional cooperation'. Paper given at the OAS meeting on Transnational Criminal Youth Gangs: Characteristics, Importance and Public Policies, Tapachula, Chiapas, Mexico June 16 and 17, 2005.
- 158 Hernández, S, 'The phenomenon of criminal youth gangs in Central America and the importance of regional cooperation'. Paper given at the OAS meeting on Transnational

- Criminal Youth Gangs: Characteristics, Importance and Public Policies, Tapachula, Chiapas, Mexico June 16 and 17, 2005.
- 159 El Diario de Hoy, 'Aplicación de la ley Combate a las pandillas una mano dura y otra suave', 28 September 2005.
- 160 Fundación Arias, 2006 op cit p. 10.
- 161 LatinNews.com, 'Honduras: Election could hinge on security concerns'. Latin American Regional Report: Caribbean and Central America, September 2005.
- 162 Moser, C. and A. Winton, 'Violence in the Central American Region: Towards an Integrated Framework for Violence Reduction'. Overseas Development Institute Working Paper 171. London: ODI, June 2002.
- 163 Salinas, M., 'La nueva lucha contra las maras: Centroamérica endurece estrategias'. Univision Online, 6 March 2006.
- 164 Cruz, M. 'Armas del fuego y violencia'. San Salvador, United Nations Development Programme, p. 179.
- 165 En el El Salvador, por ejemplo, vease Carranza, M. 'Detention or death: Where the pandillero kids of El Salvador are heading'. In Dowdney, L., Neither War nor Peace. Rio de Janeiro: Viva Rio, 2005, pp. 209-228.
- 166 Lara, J. 'Hipótesis sobre 427 muertes' Prensa Libre, 2 February 2006.
- 167 Datos disponibles solamente hasta fin de noviembre cuando se redactó este informe. <http://www.casalianza.org/docs/2006/2006-12-26-hond-ejec.pdf>
- 168 Todas las estadísticas provienen de la policía de Nicaragua. <http://www.policia.gob.ni/estadisticas.htm>
- 169 Estadísticas otorgadas por The Jamaica Constabulary Force.
- 170 Acevedo, C., Pleitez, W., M. Smutt, and A. Carballido, 'Cuanto cuesta la violencia a El Salvador?' San Salvador: United Nations Development Programme, 2005.
- 171 Según los datos de encuestas de EUA, que está entre los mejores del mundo, cerca de un tercio de los usuarios anuales son también usuarios mensuales. El número de usuarios "crónicos", sin embargo, es alrededor de un tercer más alto que el número de usuarios mensuales, puesto que las estimaciones mensuales se basan en datos de la encuesta sobre hogares, y muchos usuarios crónicos no son alcanzados por encuestas de hogares. El cociente de los usuarios anuales (de la encuestas) a los usuarios crónicos es cerca de dos a uno. Vease The 2004 National Survey on Drug Use and Health and the 2003 National Drug Control Strategy Data Supplement.
- 172 OAS/ CICAD, 'Premier Estudio Nacional sobre Consumo de Drogas en Población General de El Salvador.' San Salvador: OAS/CICAD, June 2006.
- 173 Santacruz, M. and Concha, A, Barrio Adentro: la Solidaridad Violenta de las Pandillas. IUDOP/UCA - OPS/OMS, San Salvador, 2001, p. 61.
- 174 Comunicación personal con Abelardo Díaz-Flores, Coordinador de Fortalecimiento Institucional, Investigación y Comunicación Social, Dirección Ejecutiva Comisión Nacional Antidrogas, San Salvador, 31 January 2007.
- 175 ARQ 2004
- 176 UNODC Major Seizures Database
- 177 Población de residentes de los EUA están basados en proyecciones del censo de 2000.
- 178 Algunas excepciones incluye algunas pandillas de Mara Salvatrucha en Washington D.C., Nueva York, y Los Angeles, que están envueltos en ventas al detalle de cocaína.
- 179 Carranza, M. 'Detention or death: Where the pandillero kids of El Salvador are heading'. In Dowdney, L. Neither war nor peace. Rio de Janeiro: Viva Rio, 2005.
- 180 LatinNews.com, 'El Salvador: Business protests against extortion racket'. 21 September 2006.
- 181 Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, 'Human Trafficking Report 2006' Washington D.C.: United States Department of State, 2006.
- 182 Amnesty International, 'Honduras: Zero Tolerance... for impunity Extrajudicial Executions of Children and Youths since 1998'. London: Amnesty International, 2003; Casa Alianza, Honduras: Ejecuciones sumarias de niños, niñas y adolescentes, Tegucigalpa: Casa Alianza, 2002.
- 183 Goodman-Campbell, G., 'Honduras again validates its banana republic status'. Centre on Hemispheric Affairs Memorandum to the Press, 30 September 2005.
- 184 Manwaring, M., 'Street Gangs: The New Urban Insurgency'. Strategic Studies Institute of the US Army War College, March 2005.
- 185 Datos disponibles solamente hasta fin de noviembre cuando se redactó este informe. <http://www.casalianza.org/docs/2006/2006-12-26-hond-ejec.pdf>
- 186 Latinobarómetro, 'Informe Latinobarómetro 2004' Santiago de Chile, 2005, p. 56.
- 187 Centro de Análisis Sociocultural - Universidad Centroamericana, CEPAL and UNFPA. 'Masculinidad y factores socioculturales asociados al comportamiento de los hombres frente a la paternidad en Centroamérica.' Draft summary; y 'Estudio Masculinidad y factores socioculturales asociados al comportamiento de los hombres frente a la paternidad en Centroamérica: Caso Nicaragua', 2005. Citado en UNFPA, State of the World Population 2005.
- 188 Todos los estudios están al detalle en World Health Organisation, World Report on Violence and Health. Geneva: WHO, 2002, pp.90-96
- 189 Amnesty International, 'Guatemala: No protection, no justice: Killings of women in Guatemala.' London: Amnesty International, June 2005.
- 190 Amnesty International, 'Guatemala: No protection, no justice: Killings of women and girls - Facts and Figures'. Media Briefing AI Index: AMR 34/025/2005 (Public) News Service No: 146 9 June 2005.
- 191 Human Rights Watch, 'El Salvador: Turning a Blind Eye: Hazardous Child Labor in El Salvador's Sugarcane Cultivation'. Vol 16, No 2(B), June 2004.
- 192 Instituto Nacional de Estadística de Honduras, 'Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 2002', February 2003.
- 193 Costa Rica data for 12-14 year olds. Accessed at <http://www.oit.or.cr/estad/td/indexe.php>
- 194 Organización Internacional del Trabajo, Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, El Salvador, 'Trabajo infantil doméstico: una evaluación rápida'. Geneva: ILO/IPEC, February 2002, p. xi., as quoted in UNICEF, State of the World's Children 2006, New York: UNICEF, p. 51
- 195 Organisation of American States, 'Trafficking in women and children: Research findings and follow-up' Item IV c of the Dialogue of the Heads of Delegation, 31st Assembly of Delegates, Punta Cana, Dominican Republic, 27 August 2002, pp. 31-32.
- 196 Inter-American Commission of Women, 'Trafficking of Women and Children for Sexual Exploitation in the Americas'. Washington, D.C.: Organisation States of American, 2001.
- 197 Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, 'Human Trafficking Report 2005' Washington D.C.: United States Department of State, 2005.
- 198 Casa Alianza, 'Guatemala reaches alarming levels of social insensibility'. Press release, 3 April 2006.
- 199 <http://www.iansa.org/regions/americas/americas.htm>
- 200 Small Arms Survey, Small Arms Survey 2003: Development Denied. New York: Oxford University Press, 2003, pp. 88-90.
- 201 Godnick, W., R. Muggah, and C. Waszink, 'Balas perdidas: El Impacto del mal uso de armas pequeñas en Centroamérica.'. London: IANSA.
- 202 Sociedad sin Violencia, 'Armas de Fuego y Violencia'. San Salvador: Sociedad sin Violencia, 2003.

- 203 Godnick, W., R. Muggah, and C. Waszink, 'Balas perdidas: El Impacto del mal uso de armas pequeñas en Centroamérica'. London: IANSA.
- 204 Godnick, W. and H. Vazquez, 'Small arms control in Central America'. Latin American Series No 2, London: International Alert, 2003.
- 205 Ibid.
- 206 Ibid.
- 207 UNDP. 2006. 'San Martín: una experiencia prometedora'. Boletín Sociedad sin Violencia No. 16. San Salvador: UNDP. June 1.
- 208 Disponible en: [http://www.viewswire.com/index.asp?layout=RKArticleVW3&article\\_id=120182797&country\\_id=20000002&channel\\_id=&category\\_id=&refm=rkCtry&page\\_title=Latest+alerts](http://www.viewswire.com/index.asp?layout=RKArticleVW3&article_id=120182797&country_id=20000002&channel_id=&category_id=&refm=rkCtry&page_title=Latest+alerts)
- 209 Riskwire Security Risk Assessments, March 24 2006, Disponible en: [http://www.viewswire.com/index.asp?layout=rkArticleListVw3&country\\_id=560000056&refm=rkCtry&page\\_title=Latest%20alerts](http://www.viewswire.com/index.asp?layout=rkArticleListVw3&country_id=560000056&refm=rkCtry&page_title=Latest%20alerts)
- 210 United Nations Department of Economic and Social Affairs, 'World Economic and Social Survey 2005', p. 105.
- 211 ECLAC (CEPAL), Panorama social de América Latina 2005, New York: United Nations.
- 212 LatinNews.com, 'El Salvador: US and Central America team up to combat mara gangs'. Latin American Regional Report: Caribbean and Central America, September 2005.
- 213 LatinNews.com, 'Statistics'. Latinnews Daily, 15 November 2005.
- 214 Declaración de Michael Braun, Chief of Operations, United States Drug Enforcement Agency, before the House International Relations Committee, Subcommittee on the Western Hemisphere, 9 November 2005.
- 215 Fifteenth Meeting of the Heads of National Drug Law Enforcement Agencies, Latin America and the Caribbean, Santa Marta, Colombia, 18-21 October 2005.
- 216 International Monetary Fund Legal Department, 'Financial Sector Assessment Program: Republic of Panama Detailed Assessment of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism', p. 73, September 2006. Accessed at the Caribbean Financial Action Task Force web site: <http://www.cfatf.org/>
- 217 Datos disponibles en: [http://www.transparency.org/policy\\_and\\_research/surveys\\_indices/gcb](http://www.transparency.org/policy_and_research/surveys_indices/gcb)
- 218 Datos disponibles en: [http://www.transparency.org/policy\\_and\\_research/surveys\\_indices/gcb](http://www.transparency.org/policy_and_research/surveys_indices/gcb)
- 219 Seligson, M., 'The Latin American Public Opinion Project: Corruption victimisation 2004'. In Global Corruption Report 2005. Berlin: Transparency International, 2005, pp 282-284.
- 220 Datos disponibles en: [http://www.transparency.org/policy\\_and\\_research/surveys\\_indices/gcb](http://www.transparency.org/policy_and_research/surveys_indices/gcb)
- 221 <http://www1.worldbank.org/prem/poverty/scapital/>
- 222 Knack, S. and Keefer, P., "Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation" Quarterly Journal of Economics, 1997, Vol. 112, pp. 1251-88.
- 223 Moser, C. and Holland, J., 'Urban Poverty and Violence in Jamaica.' Latin American and Caribbean Studies Series. Washington, D.C.: World Bank. 1997.
- 224 Davis, K and Tebilcock, M. 'What role do legal institutions play in development' Draft prepared for the International Monetary Fund's Conference on Second Generation Reforms. 1999. p 71. Quoting Londono, J., 'Violence, Psyche, and Social Capital.' Paper prepared for the Second Annual World Bank Conference on Development in Latin America and the Caribbean, Bogata, July 1996, p2.
- 225 Waters, H., Rajkotia, Y., Basu, S., Rehwinkel, J., Butchart, A., 'The economic dimensions of interpersonal violence.' Geneva: Department of Injuries and Violence Prevention, World Health Organisation, 2004.
- 226 WHO, 2004, op cit. p. 6.
- 227 Paniagua, I., E. Crespin, A. Guardado, A. Mauricio. 'Wounds Caused by Firearms in El Salvador, 2003-2004: Epidemiological Issues'. Medicine, Conflict & Survival, Vol 21, No 3, 2005.
- 228 Sociedad Sin Violencia and United Nations Development Programme, 'Cuánto cuesta la violencia a El Salvador'
- 229 Balsells Conde, E. El costo económico de la violencia en Guatemala. Guatemala City: United Nations Development Programme Office in Guatemala, 2006.
- 230 Buvinic M. and A. Morrison, 'Violence as an obstacle to development.' Washington, DC, Inter-American Development Bank, 1999, pp. 1-8, as quoted in WHO 2002 op cit, p. 12
- 231 Londoño, J and R. Guerrero, 'Violencia en America Latina: Epidemiología y Costos'. Washington, D.C.: Banco Interamericano Del Desarrollo Working Paper R-375, 1999, Citado por Neto, P., 'Crime, violence, and democracy in Latin America'. Paper given at the Conference on Integration in the Americas, University of New Mexico, 2 April 2002.
- 232 ICVS
- 233 Biehl, L. and A. Morrison (eds), 'Too Close to Home: Domestic Violence in the Americas'. Baltimore: Inter-American Development Bank and Johns Hopkins University Press, 1999.
- 234 Barro, R. and X. Sala-I- Martin, Economic Growth. New York: McGraw-Hill, 1995.
- 235 World Bank, World Development Report 1999/2000. Washington, D.C.: World Bank, p. 38.
- 236 Docquier, F. and A. Marfouk, 'International migration by education attainment, 1999-2000.' In Özden, Ç., and M. Schiff (eds), International Migration, Remittances, and the Brain Drain. Washington, D.C.: World Bank and Palgrave Macmillan, 2006, p. 187.
- 237 Carrington, W. and E. Detragiache, 'How extensive is the brain drain?' Finance and Development: A quarterly magazine of the IMF, Vol 36, No 2, June 1999.
- 238 Organization of American States, 'Creating Jobs To Fight Poverty And Strengthen Democratic Governance' Fourth Summit of the Americas, 'Declaration Of Mar Del Plata', Mar Del Plata, Argentina - November 5, 2005
- 239 Para mas detalles de esta relación, véase: UNODC, Crime and Development in Africa. Vienna, UNODC, 2005.
- 240 World Bank, World Development Report 2005, p 89.
- 241 United States Department of State, 'Investment climate report 2005: Guatemala'. Accessed at: <http://www.state.gov/e/eb/ifa/2005/42040.htm>
- 242 World Bank, 'Guatemala: Investment Climate Assessment: Evidence from the Manufacturing Sector'. Washington, D.C.: World Bank, December 2004
- 243 Foreign Investment Advisory Service (a joint service of the International Finance Corporation and the World Bank), Honduras: The Climate for Foreign Direct Investment and How it can be Improved. September 2001, p. 23.
- 244 LatinNews.com, 'Guatemala: Berger steps up campaign against violent crime.' Latin American Regional Report: Caribbean and Central America, June 2005.
- 245 ECLAC, Foreign Investment in Latin America and the Caribbean. Santiago de Chile: United Nations, 2005, p. 62.
- 246 Ibid, p. 64.
- 247 Declaración de The Honourable Julian R. Hunte, President-Elect, Fifty Eight Session of the United Nations General Assembly to the Forum Of Small States, New York, 4 September 2003.

- 248 CNN, 'Central America even trendier as war memories recede.' <http://www.cnn.com/2006/TRAVEL/DESTINATIONS/03/06/trend.central.america.ap/>
- 249 World Travel and Tourism Council, "2006 Tourism Satellite Accounts Country Report: Belize." Accessed at: <http://www.wttc.org>.
- 250 World Travel and Tourism Council, "2006 Tourism Satellite Accounts Country Report: Costa Rica." Accessed at: <http://www.wttc.org>.
- 251 Latinnews Daily - 27 February 2006
- 252 LatinNews.com, 'Honduras: Election could hinge on security concerns'. Latin American Regional Report: Caribbean and Central America, August 2005.
- 253 Testimonio de Charles S. Shapiro, Principal Deputy Assistant Secretary of State, Bureau of Western Hemisphere Affairs Before the Subcommittee on the Western Hemisphere, Committee on International Relations, U. S. House of Representatives September 28, 2005.
- 254 Latinobarometro, 'Informe Latinobarómetro 2004' Santiago de Chile, 2005, p. 13.
- 255 Serra Vázquez, L. and P. López Ruíz, 'The political culture of democracy in Nicaragua: Public perceptions about the political system'. Latin American Public Opinion Project, Vanderbilt University, 2005.
- 256 Pérez, O. and M. Gandásegul, 'The political culture of democracy in Panama: Public perceptions about the political system'. Latin American Public Opinion Project, Vanderbilt University, 2005.
- 257 Ibid, p. 53.
- 258 Call, C. 'Assessing El Salvador's transition from civil war to peace'. In J. Stedman, D. Rothchild, and E. Cousens, *Ending Civil Wars*, Boulder: Lynne Rienner Press, 2002, p. 572.
- 259 LatinNews.com, 'El Salvador: Government uses army to beef up police'. Latin American Regional Report: Caribbean and Central America, August 2005.
- 260 LatinNews.com, 'Anti-crime drives fail to curb El Salvador's rising murder rates'. Security Update, 20 October 2005.
- 261 Transparency International, *Global Corruption Barometer*, op cit.
- 262 Latinobarometro, op cit.
- 263 Godnick, W. and H. Vazquez, 'Small arms control in Central America'. Latin American Series No 2, London: International Alert, 2003.
- 264 Citado en Silva, J., 'Policía en desventaja ante seguridad privada' *La Prensa*, 3 March 2003.
- 265 Citado en Silva, J., 'Policía en desventaja ante seguridad privada' *La Prensa*, 3 March 2003.
- 266 Mario Vargas Llosa, 'Why does Latin America Fail?' Op cit.
- 267 Latinobarometro, 'Informe Latinobarómetro 2005' Santiago de Chile, 2005, p. 17.
- 268 Gupta, S., Davoodi, H., & Alonso-Terme, R. (1998) 'Does corruption affect income inequality and poverty?' Working Paper of the International Monetary Fund, p. 26 available at [www.imf.org](http://www.imf.org)
- 269 Fajnzylber, P., Lederman, D., & Loayza, N. (2001) 'Inequality and violent crime' in *The Journal of Law and Economics* and available at [www.worldbank.org](http://www.worldbank.org), p. 18.
- 270 Esto es verdad, al menos para evaluar inequidad. Vease Lopez, J., 'Pro-poor growth: a review of what we know (and of what we don't)' *The World Bank (PRMPR)*, September, 2004.
- 271 UNDP, 'Corruption and Good Governance.' UNDP: New York.
- 272 Schneider, F., 'The Size of the Shadow Economies of 145 Countries all over the World: First Results over the Period 1999 to 2003'. IZA Discussion Paper 1431, December 2004.
- 273 Schneider, F., 'Shadow Economies and Corruption all over the World: What do we really know?' Paper presented at the Conference Research on the Informal Economy, Buxton, Derbyshire, 20-22 September, 2006.
- 274 Schneider, F. 'Shadow Economies of 145 Countries all over the World: Estimation Results over the Period 1999 to 2003'. Paper presented at the Annual Meeting of the European Public Choice Society (EPCS), University of Durham, 31 March - 3 April 2005.
- 275 Johnson, S., Kaufmann, D., McMillan, J., and Woodruff, C., 'Why do firms hide? Bribes and unofficial activity after communism.' Paper dated June 22, 1999.
- 276 Para edades de 15 en adelante, datos disponibles en: <http://www.oit.org.pe/estad/td/inserttd.php?v=td11&l=1&p=>
- 277 Economist Intelligence Unit, 'Guatemala: Country Profile 2005'. Disponibles en: [www.eiu.com](http://www.eiu.com).
- 278 <http://www.transparency.org/cpi/2004/cpi2004.en.html>
- 279 Gupta, S., H. Davoodi, and R. Alonso-Terme, *Does Corruption Affect Income Inequality and Poverty?* Washington D.C., International Monetary Fund, 1998.